

 En defensa del
marxismo 

Marzo 2020

En Defensa del Marxismo

po.edefensadelmarxismo@gmail.com

Comisión de educación y propaganda del Comité

Nacional: Juan García, Guillermo Kane,
Guido Lapa, Eduardo Salas

Ediciones Rumbos

www.po.org.ar

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

ISSN 2314-0479

Índice

Presentación	5
Informe internacional al 27º Congreso del Partido Obrero: De la crisis mundial a las guerras y rebeliones Comité Nacional del Partido Obrero	9
Por una Conferencia Latinoamericana de la izquierda y el movimiento obrero Comité Nacional del Partido Obrero	47
Argentina: más cerca de Grecia que del crecimiento Gabriel Solano	57
Chile: del “milagro” al “estallido social” Pablo Giachello	71
Golpe contrarrevolucionario en Bolivia Rafael Santos	89
Un año de gobierno de Bolsonaro Gustavo Montenegro	113
Venezuela en el callejón Juan García	129
Los golpes de Estado en América Latina Andrés Roldán	149
La Ola Verde: la lucha por el aborto legal Vanina Biasi	159
Deuda externa latinoamericana: radiografía de una dinámica perversa Guido Lapa	187
Manifiesto Socialista de Bhaskar Sunkara: ¿Cuáles son las tareas de los revolucionarios en Estados Unidos? Guillermo Kane	203

Presentación

Eduardo Salas

América Latina está atravesando grandes acontecimientos de la lucha de clases: los levantamientos populares recorren Puerto Rico, Haití, Nicaragua, Colombia, Ecuador y Chile. Sin ninguna duda, este último es la expresión más álgida de este fenómeno. El levantamiento del pueblo chileno y la lucha de las masas en Bolivia contra el golpe reaccionario han estremecido a todo el continente.

Este número de *En Defensa del Marxismo* está dedicado a esta “América Latina en tiempos de levantamientos populares”. Presentamos esta revista como una herramienta de acción militante por poner en pie un reagrupamiento de la izquierda, los luchadores y el movimiento obrero combativo, que intervenga activamente para que las rebeliones actuales triunfen y para derrotar los intentos de quebrar a la clase obrera latinoamericana y fortalecer una colonización aún mayor del imperialismo.

El análisis de la situación de Latinoamérica es abordado como una tarea militante y sacar así las conclusiones necesarias para la intervención de los revolucionarios en la lucha por la unidad socialista de América Latina.

Luego del Informe internacional al XXVII Congreso del Partido Obrero (a celebrarse a fines de mayo), que establece la caracteriza-

ción sobre la situación mundial en una evolución de la crisis hacia el aumento de la escalada bélica y de los levantamientos de masas, el lector se encontrará con el llamamiento “Por una Conferencia Latinoamericana de la izquierda y el movimiento obrero”, que el Comité Nacional del Partido Obrero envió a las “organizaciones nucleadas en el FIT-U y a todas las corrientes de la izquierda revolucionaria, como el PSTU de Brasil, y al movimiento obrero combativo”, para convocar “en común a una Conferencia Latinoamericana sobre la base de la defensa de la independencia de clase, la denuncia y delimitación con los frentes y la política de colaboración de clases, y por la victoria de las rebeliones en curso mediante el impulso de la acción directa y la huelga general, así como poner fin a los gobiernos ajustadores y su sustitución por gobiernos surgidos de las masas en lucha. Llamamos a reivindicar y luchar por gobiernos de trabajadores y la unidad socialista de América Latina”. Esa convocatoria está en pleno debate al momento de cerrarse esta edición de *En Defensa del Marxismo*.

Presentamos también un cuadro desituación de algunos de los países de América Latina, en función de los desafíos que tienen para el desarrollo del devenir político en el subcontinente. Encabezamos con un artículo de Gabriel Solano sobre la situación argentina, dominada por la crisis con la deuda y la asunción de un nuevo gobierno que responde al nacionalismo burgués y resultante de una alianza del kirchnerismo con el PJ.

“Chile, del ‘milagro’ al ‘estallido social’. Balance y desafíos de la rebelión popular”, escrito por Pablo Giachello, plantea una actualización de la situación chilena en las vísperas de nuevas irrupciones de masas y de maniobras para desviar el ascenso de características revolucionarias.

La lucha contra el golpe contrarrevolucionario en Bolivia es una tarea vigente, que requiere de una acción del conjunto de los trabajadores. Rafael Santos aborda la situación boliviana en medio del proceso eleccionario convocado por los golpistas y cuyo desenlace está abierto.

Con un artículo de Gustavo Montenegro abordamos la situación de Brasil a un año de la asunción de Bolsonaro, cuya incidencia en el conjunto de la región es más que evidente; y con un artículo de Juan García sobre Venezuela, cuya crisis se ha transformado desde hace varios años en uno de los centros políticos de Latinoamérica, cerramos los informes particulares. En ellos se concentran los problemas que debemos abordar para definir una intervención común de la izquierda.

La crisis en los diversos países de América Latina tiene un denominador común: el peso del endeudamiento externo, que actúa como un condicionante para sus desarrollos y un factor de inestabilidad política, por ello el artículo de Guido Lapa, “Deuda externa latinoamericana: radiografía de una dinámica perversa”, completa el cuadro de situación.

La revista se completa con dos artículos necesarios. El golpe en Bolivia revive la conducta de capitulación política que el nacionalismo burgués en particular ha tenido en su historia frente a los golpes impulsados por el imperialismo y el gran capital. Un artículo de Andrés Roldán hace un *racconto* de las principales experiencias en ese sentido y qué desafíos les presenta a la izquierda revolucionaria.

El artículo de Vanina Biasi, dirigente del Partido Obrero y del Plenario de Trabajadoras, aborda el gran movimiento de lucha por el aborto legal, la llamada “ola verde”, por el cual las mujeres se apoderaron de las calles en una lucha contra el Estado y la Iglesia, provocando una enorme conmoción. La Ola Verde está en plena vigencia y es un factor de enorme gravitación en la lucha de clases.

Para finalizar, en nuestra sección de Crítica de Libros, Guillermo Kane toma el *Manifiesto socialista de Bhaskar Sunkara*. Sunkara es militante de Demócratas Socialista de América (DSA) y es, a su vez, editor de la revista *Jacobin*, que ha estado en el centro de los debates políticos del resurgir izquierdista en Estados Unidos de los últimos años. DSA es parte activa de la campaña de Bernie Sanders como precandidato a presidente por el Partido Demócrata.

Informe internacional al 27° Congreso del Partido Obrero: De la crisis mundial a las guerras y rebeliones

Comité Nacional del Partido Obrero

1. Estamos ingresando en una nueva situación atravesada por grandes levantamientos populares y conflictos bélicos, con alcances internacionales.

El asesinato del general iraní Soleimani y el “plan de paz” de Trump y Netanyahu contra el pueblo palestino representan un salto de los conflictos bélicos en Medio Oriente. La onda expansiva se ha extendido a toda la región e involucra en forma directa a potencias locales y, de un modo general, a las grandes potencias mundiales.

Las sublevaciones recorren el planeta. En Medio Oriente y el norte de Africa, estamos frente a rebeliones en El Líbano, Argelia, Sudán y, un poco antes, en Irán, Jordania y Túnez. Esta onda ascendente tiene sus expresiones, aunque con sus particularidades, en Europa, con el enorme proceso huelguístico desatado en Francia, desafiando al gobierno de Macron, pero también en Asia, como las grandes movilizaciones en Hong Kong que ya se prolongan varios meses. América Latina no se sustrae a esta situación. Más aún, ha pasado a ser uno de los epicentros de este vuelco. El punto culminante han sido Ecuador y Chile, y más recientemente Colombia, que ha estremecido todo el continente y tiene como antecedente las irrupciones de Nicaragua,

Haití, Honduras, Panamá y Puerto Rico. El golpe en Bolivia, a su turno, aunque logró abrirse paso, tropezó con una gran resistencia.

Este escenario es inseparable de la bancarrota capitalista que viene haciendo su trabajo implacable de topo. Por un lado, las tendencias bélicas son acicateadas por el agravamiento de la guerra comercial. Por el otro, los efectos devastadores se hacen sentir sobre las masas, que reaccionan y ganan las calles para enfrentar brutales planes de ajuste y austeridad.

2. ¿En qué estadio se encuentra actualmente la crisis que estalló en 2007/8?

El dato dominante es que la economía mundial avanza a una recesión, que es lo que se pretendió evitar, apelando al rescate del Estado.

Europa y Japón tienen un crecimiento nulo. Estados Unidos ha tenido en el tercer trimestre su registro más bajo desde la época Trump (1,9 por ciento) y ya se habla de que en 2020 se mantendría en esa tónica, en la visión más optimista. La recuperación norteamericana se ha pinchado. La industria ha caído en producción y en empleo. Sin embargo, otros sectores (servicios, comercio, construcción) han mantenido el empleo alto, aunque el ritmo de crecimiento ha ido cayendo. La situación de cuasi-pleno empleo es la que viene explotando Trump y con la cual mantiene vivas las posibilidades de su reelección. El dato más relevante es China, donde la desaceleración es cada vez más pronunciada. Hay quienes hablan de “aterrizaje abrupto” y que las verdaderas cifras de crecimiento son ocultados por el gobierno chino. Esto es clave por el lugar que ocupó China como locomotora de la economía mundial y factor contrarrestante de la crisis.

Los síntomas de una debacle financiera, como la que se precipitó en 2008, están a flor de piel: asistimos, en el año que acaba de finalizar, a tres caídas pronunciadas de las bolsas neoyorquinas cuya onda expansiva se hizo sentir a nivel global. Es cierto que la Bolsa retomó su ciclo ascendente y ha llegado a niveles récord. Pero eso, contradictoriamente, refuerza más el carácter explosivo de la situación, pues pone al descubierto el contraste entre las cotizaciones de las acciones y el magro desempeño de las empresas en el ámbito de la producción y la economía real. Las acciones vienen inflando sus valores como consecuencia de la recompra de las mismas por parte de las propias compañías, empezando por las líderes. Crece la deuda corporativa que ha llegado a la cifra récord de 10 billones de dólares, equivalente a la

mitad del PBI norteamericano y es lo que explica que las tasas que pagan esos bonos corporativos pasen a ser semejantes a las que abonan los países emergentes.

El pobre resultado operativo de los balances se ve neutralizado por las crecientes inversiones financieras. La liquidez no se direcciona a la reinversión productiva sino a la esfera especulativa. De un modo general, asistimos a un auge de la deuda mundial a niveles sin precedentes. Según un reciente Informe del FMI, la deuda global asciende a 230 billones de dólares.

Esta fragilidad es la que provoca un stress permanente al que está sometido el sistema financiero y es el que explica episodios, como el ocurrido el año pasado, que obligó a la intervención de urgencia de la Reserva Federal, en el mercado interbancario, cuyo interés llegó a dispararse hasta el 9%. Recordemos que la crisis de liquidez de la banca yanqui precedió el crack de 2008, que estalló con el hundimiento de Lehman Brothers.

Los países emergentes son los eslabones más débiles de esta cadena, que se ve afectada por la fuga de capitales y el fantasma del default. Los inversores, de un modo general, huyen hacia inversiones con menos riesgo y buscan refugio en colocaciones financieras más seguras en las metrópolis. Esto es lo que está en la base de los rendimientos negativos de una franja creciente de colocaciones financieras (que han superado la friolera de los 15 billones de dólares) y la inversión de la curva de rendimientos, que ha sido, de un modo general, un antecedente en las grandes crisis y depresiones mundiales del pasado.

Como telón de fondo está la crisis de sobreproducción y sobreacumulación de capitales, que se extiende tanto en la producción industrial, incluida las industrias de punta, como en las que producen las materias primas. Las tendencias deflacionarias hoy reinantes traducen la declinación en los niveles de rentabilidad. Esta tendencia en la caída de la tasa de beneficio está en la base de la huelga de inversiones que se encuentra en un punto muy bajo y ni siquiera es suficiente para compensar la depreciación del capital fijo.

La huelga de inversiones ha llevado, contradictoria y paradójicamente, a un aumento del empleo. En lugar de invertir, la burguesía prefiere tomar trabajadores, aunque sobre la base de trabajo flexibilizado, lo que le asegura una fuente de mano de obra barata. La reactivación económica (que ya existía previamente a Trump pero que se reforzó en los primeros años de su mandato) se ha basado en un

gran precarización. Inversamente a lo que sostienen sus apologistas, el capital se transforma en un bloqueo a la incorporación de las mejoras técnicas al proceso productivo y apela a los métodos tradicionales de superexplotación obrera reinantes en la primera etapa del capitalismo, destruyendo conquistas históricas la clase obrera. Estos ataques han dado lugar a movimientos de lucha defensivos, como el que ha des-
envuelto el reclamo de un salario mínimo de 15 dólares la hora. Los avances de estos reclamos de los sectores más bajos de la escala salarial se vinculan a la mejora de los ingresos más bajos, que Trump reivindicó en su discurso del Estado de la Unión, en febrero de este año.

3. La capacidad de hacer frente a la perspectiva de una recesión es sensiblemente inferior a la de diez años atrás. Los recursos de los Estados para rescatar el capital se han ido agotando. Los Estados han sido arrastrados por la bancarrota capitalista. En lugar de ser una vía de solución, son parte del problema, más aún, un factor de su agravamiento.

La Reserva Federal ha dispuesto la tercera reducción de la tasa de interés en el año. Pero eso no logra reactivar la economía y es lo que está en la base de los reproches de Trump, que reclama que se baje a cero, aunque ello no asegura que pueda revertir el desinfe de la economía norteamericano. El Banco Central Europeo (BCE) ha establecido tasas negativas, con nuevos ajustes hacia abajo, pero no logra reanimar la economía europea en virtual recesión. Tanto la Reserva Federal como el BCE han resuelto iniciar su política de expansión monetaria cuantitativa -compra de activos financieros- que habían dado por concluida. La inyección de dinero, sin embargo, ya ha probado sus límites en esta década. Los fondos no son utilizados para una inversión productiva sino que engordan el circuito especulativo, alimentando burbujas que son el prelude de un nuevo estallido. Comparado con el '29, tenemos no sólo burbujas bursátiles, sino también en el mercado de bonos e inmobiliario.

El uso de ese procedimiento va de la mano de una gran emisión monetaria y provoca un creciente debilitamiento de las monedas, empezando por el dólar. Un dólar débil no es una garantía que asegure una mayor competitividad de los productos estadounidenses, pero podría provocar, en cambio, un cataclismo internacional, si se concretara un abandono de la divisa norteamericana, que es el principal medio de pago en las transacciones mundiales. Ya algunos bancos centrales se vienen desprendiendo de sus reservas en dólares y comprando oro, que es lo que explica, entre otras razones, el aumento que viene

teniendo en su precio. El refugio en el oro es una señal clásica e inconfundible en la historia de los momentos excepcionales de la crisis capitalista. Esto implicaría una fractura del comercio y de la economía mundial, y una aceleración, por lo tanto, de la recesión y de las rivalidades intercapitalistas.

Los choques en la implementación de esta política ya se están produciendo y uno de sus focos se registra en la Unión Europea, donde las decisiones del BCE despertaron el rechazo de Alemania, que no quiere utilizar los fondos para rescatar a sus socios más débiles, sino que apuesta a aprovecharse de sus penurias y aprietos financieros para avanzar en un copamiento de sus economías.

Guerra comercial

4. El impasse capitalista es lo que está en la base de la intensificación de las guerras comerciales. El acuerdo reciente entre China y Estados Unidos es superrestringido. Los aranceles siguen en pie. Lo único que Estados Unidos ha suspendido es el aumento del 25 al 30% de los mismos, que entraba en vigencia a finales de 2019. El acuerdo no cubre las acciones de Estados Unidos contra las empresas tecnológicas chinas ni tampoco da una vía de solución a los cuestionamientos principales de Trump, que se centran en su oposición a los subsidios estatales de las empresas chinas y la incursión del gigante asiático en las industrias de alta tecnología, que pone en tela de juicio la hegemonía económica y militar norteamericana. China acordó la compra 50.000 millones de dólares adicionales de productos agrícolas estadounidenses. Aún así, sigue estando por debajo de los niveles previos a que estallara el conflicto comercial. Se comprometió a abrir más su sistema financiero a la operatoria del capital extranjero y reforzar el control de la propiedad intelectual frente a las acusaciones de robo en Estados Unidos. Pero esto no pasa de compromisos anodinos que es lo que ha llevado al *Financial Times* a tildarlo de un acuerdo “cosmético”. No alteran el rumbo principal de los acontecimientos. Si la perspectiva es una nueva recesión, debemos prepararnos para nuevas crisis, rupturas y choques aún de orden superior. Un anticipo es la devaluación del yuan a la que ha apelado China. A la guerra comercial se le ha sumado la guerra monetaria. Estamos entrando en un escenario de devaluaciones competitivas, que ahondarían más las tendencias proteccionistas y conducirían a un dislocamiento de la economía mundial. Esto es lo que explica el fracaso de las devaluaciones ya realizadas en Argentina.

5. El agravamiento de la bancarrota capitalista plantea que la política agresiva y expansionista se intensifique. La guerra político-comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea refleja el propósito de Trump de someter a sus competidores “ex” aliados, trasladándoles los costos de la crisis sobre sus hombros. La decisión del Congreso de Estados Unidos de imponer sanciones a las empresas involucradas en la construcción del gasoducto Nord Stream 2 (que conectaría directamente a Rusia y Alemania a través del Mar Báltico) subraya las divisiones agudas que hay entre las potencias imperialistas. En el pasado, el corte del suministro de energía se consideraba un acto de guerra. Las sanciones de Estados Unidos han paralizado el proyecto casi completado de 10 mil millones de dólares luego del retiro de la firma suiza Allseas, que estaba proporcionando barcos especializados para tender el gasoducto. Las sanciones de Estados Unidos no solo apuntan a Rusia, que depende de los ingresos generados por las exportaciones de gas, sino también a Alemania, que ve el gasoducto como un proyecto estratégico que es esencial para su seguridad energética.

6. Pero el blanco fundamental de la guerra económica emprendida por Trump es China. Más que al desequilibrio en el intercambio comercial, la ofensiva yanqui apunta estratégicamente a colonizar el espacio ocupado por los ex Estados obreros. La intensificación de la guerra comercial no ha logrado, sin embargo, revertir el desequilibrio en la balanza comercial y de la economía norteamericana. Lejos de sus efectos benéficos, lo que ha primado son sus consecuencias negativas: aumentos de los precios al consumidor y de los costos industriales por el encarecimiento de los productos importados y el cierre de mercados, empezando por el agrícola. Esto ha despertado una tensión entre el gobierno y franjas crecientes de la clase capitalista que plantean poner un freno a la guerra comercial. El acuerdo de la Casa Blanca con China tiene que ver con estas presiones.

China

7. En China, a su turno, la devaluación del yuan es un arma de doble filo, pues encarece la deuda nominada en dólares de las empresas locales estatales y privadas, que ya se encuentran en serios aprietos financieros y podría disparar una nueva huida de capitales, como ya ocurrió en 2016, cuando la fuga alcanzó la friolera de 750.000 millones de dólares en un lapso muy corto de tiempo. Estas amenazas son seguidas con preocupación por los jefes chinos y divisiones en sus filas.

Así como en Estados Unidos, la crisis ha acentuado también las tensiones internas en China. Esto se expresa al interior del PCCh (Partido Comunista), pero trasciende ese ámbito y expresa una lucha crucial que envuelve a toda la elite dirigente sobre cuál es el rumbo estratégico que debe tomar el país.

Existen crecientes presiones por acelerar la apertura y la consolidación de leyes de mercado. En este sector está enrolada la clase capitalista nativa, que ha ido abriéndose paso a la sombra del régimen y que pretende afirmarse como clase dirigente. Esta burguesía en formación, o proto-burguesía, si bien conduce empresas que incluso han conquistado una posición destacada, su rol está mediatizado por la burocracia, alrededor del PCCh, que sigue teniendo una presencia determinante a la hora de las decisiones.

Esta tendencia pugna por poner fin al proteccionismo y la regulación que ejerce el Estado, de modo de abrir las puertas a un amplio proceso de privatización y a una consolidación de su liderazgo. Este sector no se priva de utilizar la guerra comercial como un factor de presión para acelerar esta desregulación, aunque no necesariamente sus aspiraciones son las mismas que las del gran capital internacional, que pretende abrir la economía china en su propio provecho, y eso tropieza con los apetitos de la burguesía local. Las relaciones que mantienen las corporaciones extranjeras y locales oscilan en un abanico contradictorio de asociaciones, rivalidades y choques.

8. Este panorama replantea la necesidad de volver sobre la naturaleza y el carácter de China. Hay quienes plantean, en el campo de la izquierda y hasta del trotskismo, que estamos frente a una potencia imperialista. Sin embargo, no se puede obviar la sensible penetración del capital extranjero en estas últimas décadas y el peso que tienen las empresas privadas foráneas en el PBI y la economía chinas. El crecimiento chino ha estado asociado a la importación de capital extranjero que llegó para explotar una mano de obra abundante y barata, y un nuevo mercado para sus productos. La presencia extranjera es directa o disimulada en asociaciones con operadores locales.

Estaríamos frente a una paradoja porque “según el razonamiento mecánico, según el cual, China estaría a la cabeza de los países imperialistas, entonces, también estaría a la cabeza de los países más penetrados por el imperialismo extranjero”. (¿Es China imperialista?”, *Cercle Communiste Free*, 18/1/19).

China aún hoy está a una distancia considerable en la tecnología de punta de las principales potencias, especialmente de Estados Unidos. El gigante asiático sigue siendo una ensambladora de insumos y piezas provenientes de las metrópolis en sectores clave, como telecomunicaciones, informática y otras áreas de alta tecnología. Un iPhone ensamblado en China que cuesta 179 dólares, consta de 172 de componentes importados desde fuera del país.

Una medida de la dependencia tecnológica lo da la decisión de la administración estadounidense de prohibir por siete años la exportación de componentes destinados a la corporación gigante china ZTE, como represalia por ventas de esa firma a Corea del Norte e Irán, países contra los cuales rigen sanciones comerciales por parte de Estados Unidos. El corte de suministros implicaba la virtual paralización de la empresa. Ambos gobiernos llegaron finalmente a un acuerdo para salvar la firma. Otro caso emblemático es el de los celulares Huawei, que ahora es una marca mundial, que es desarrollado no por los propios científicos chinos sino, sobre todo, por 400 científicos japoneses contratados por la empresa. Esto demuestra que China dependía y sigue dependiendo en gran medida de los recursos humanos extranjeros para la investigación y desarrollo. Su tecnología de semiconductores se halla dos o tres generaciones por detrás de la de Estados Unidos. Está tratando de superar este retraso con un aumento de la inversión en investigación y desarrollo, pero si observamos detenidamente el gran número de patentes chinas, en su mayoría aún no corresponden a la alta tecnología, sino a otros sectores. Donde está reduciendo distancias rápidamente es en inteligencia artificial y ésta es un área que a Estados Unidos le preocupa mucho, no solo en términos de competencia económica, sino también militar, donde la inteligencia artificial desempeña un papel cada vez más central. Por otra parte, importa señalar que si nos fijamos en su PBI, China es la segunda economía más grande del mundo. Pero si se mide el PBI per cápita, sigue siendo un país de renta media.

En la actualidad, la mitad de las exportaciones chinas provienen de compañías extranjeras que invierten en China. Este grado de integración a la cadena de productiva global determina que una guerra comercial como la que pretende Trump termine perjudicando a las compañías extranjeras que invierten en China, empezando por las norteamericanas.

Quienes sostienen el carácter imperialista de China vienen llamando la atención sobre la ascendente exportación de capitales del gigan-

te asiático. Pero el defecto es tomar un rasgo en forma segmentada, divorciado de un abordaje de conjunto. Países como Brasil exportan capitales y hay corporaciones que han logrado penetrar en diferentes rincones del planeta, incluidas las metrópolis. En Argentina misma, tenemos empresas como Techint o Arcor, que han logrado instalar filiales en el exterior, incluido el mercado yanqui. Pero eso no es suficiente para caracterizar al país como imperialista. La inversión extranjera directa en China es muy superior a la que el gigante asiático invierte fuera de sus fronteras.

A la hora de caracterizar a China, no es menor la cuestión de Taiwán y Hong Kong. El ascenso de China sigue cargando con su legado colonial. Taiwán sigue siendo un protectorado yanqui y si bien la Casa Blanca reconoce que la isla forma parte de China, no se priva de utilizarla como punta de lanza en su disputa con Pekín. En Hong Kong sigue teniendo un peso fundamental el capital internacional y de las potencias occidentales, y es una plataforma y una cuña para la penetración del capital en China continental y avanzar en su restauración capitalista. La integración de Hong Kong al continente está llamada a tener un carácter convulsivo, como lo demuestra la crisis política y la rebelión popular que hoy sacude dicho enclave.

9. No alcanza con señalar que China no es un país imperialista. Lo que hay que destacar es que el proceso de restauración capitalista está inconcluso. En términos de porcentaje sobre el PBI, inversiones en activo fijo y pago de impuestos, el sector privado ronda hoy el 50 o 60% del total nacional. La burguesía, sin embargo, no se ha afirmado como clase dirigente sino que todavía opera como segundo violín. Esto tiene que ver con las características históricas específicas con que se ha dado este desarrollo. La restauración capitalista no llevó a la desintegración estatal o nacional, a pesar de que el alcance de esta penetración ha sido, en la actual etapa, de una escala infinitamente mayor. En China, después la masacre Plaza de Tiananmen, se instaló un régimen bonapartista. Es la burocracia estalinista en alianza con el imperialismo la que guio el proceso restauracionista.

A diferencia de Yugoslavia y de la Unión Soviética, que sufrieron un proceso de desintegración en el marco de la restauración capitalista (y que, en el último caso, provocó como respuesta el golpe bonapartista de Putin), China se mantuvo como un Estado nacional. En algunos terrenos ha logrado incluso una disputa de igual a igual con el impe-

rialismo (5G), lo que explica la preocupación de Trump por bloquear su desarrollo tecnológico.

Pero el capital que ha crecido bajo el paraguas de la burocracia comunista pretende, ahora, con el desarrollo que ha alcanzado, emanciparse de esa tutela. El papel excepcional del Estado ha permitido, en China, que la restauración capitalista no se convierta en una restauración colonial. La burguesía china en formación alienta la presencia e intervención del Estado en su disputa y rivalidad con el capital foráneo pero busca liberarse de ella y consagrar un régimen de mercado, para afianzarse definitivamente como clase dirigente. Hasta el día de hoy, el Estado sigue conservando un papel determinante en la economía del país y una injerencia muy fuerte, inclusive, en el sector privado, a pesar de que representa la mitad de la economía nacional. De conjunto, impera todavía un proteccionismo financiero e industrial, que el capital quiere perforar. En esto, hay una identidad de intereses entre la burguesía imperialista y la nativa, que apunta a poner fin a la competencia desleal que presuponen los subsidios oficiales, la manipulación de la divisa y, por supuesto, la intervención directa de las empresas y bancos estatales en el mercado. Lo que está en discusión es el desmantelamiento de un Estado que tiene su origen en una revolución social desvirtuada por una burocracia “sui géneris”.

10. El régimen chino dio señales de avanzar hacia una apertura, procurando contemporizar con estas tendencias, sobre todo, cuando su economía viene entrando en un impasse y el rescate estatal se viene haciendo insostenible. La noticia, sin embargo, que tomó estado público un mes atrás, ordenando la incorporación de funcionarios del régimen a cien empresas privadas, incluida Alibaba, indicaría un volantazo. “La medida podría percibirse también como un esfuerzo por controlar un sector no estatal que está ganando influencia como motor principal en la segunda economía del mundo” (*Perfil*, 19/9). La burocracia china mira con recelo a la elite empresarial que está tomando cada vez más vuelo propio. Sus aspiraciones en perspectiva son incompatibles con la permanencia del régimen híbrido burocrático actual, bajo la tutela del Partido Comunista.

No hay que olvidar que el régimen chino no se ha privado de apelar a detenciones y encarcelamiento de empresarios acusados de corrupción. La ley de extradición, alentada por el PCCh, que pretendió imponerse en Hong Kong, iba en esa dirección. Además de

ser un arma de persecución contra la protesta social, apuntaba contra los capitalistas de la isla, que podían quedar expuestos a represalias económicas, incluida la pérdida de su patrimonio, como ya le ocurre a sus pares en el continente. Por otra parte, la autonomía a la que aspira la burguesía de Hong Kong coincide -o, al menos, tiene importantes puntos de contacto- con la que foguea la clase capitalista en China continental.

La presencia de agentes gubernamentales apunta a actuar, asimismo, en forma preventiva y poner un freno, si hiciera falta, a la emergencia de despidos masivos, a medida que las empresas intentan proteger sus beneficios. Un temor fundado que anida en las autoridades chinas es que el parate provoque un retroceso importante del PBI y, junto con esto, una pérdida marcada de puestos de trabajo, lo cual podría conducir a una reacción social incontrolable.

Esto explica los bandazos de Pekín. Este nuevo volantazo da cuenta de las vacilaciones del gobierno. El régimen bonapartista de Xi Jinping, al cual se le han conferido facultades excepcionales al habilitársele la reelección indefinida, está obligado a conciliar la tendencia a la autonomía de sus protocapitalistas con la necesidad de contener la desintegración del Estado. Las ex economías estatizadas han incorporado a sus contradicciones autárquicas las más violentas aún de la economía mundial.

11. La burocracia restauracionista de China y la clase capitalista que se ha desenvuelto con esa restauración no tienen los medios para construir un imperialismo nuevo -“en un solo país”. El gigante asiático enfrenta el estallido de una crisis financiera, que ya tuvo su primera explosión entre 2014 y 2015. Esa crisis sobrevuela como consecuencia de una gigantesca especulación inmobiliaria; su financiamiento por bancos “desregulados” en las sombras, que se encuentran en estado de insolvencia; un exceso de capacidad instalada en industrias saturadas; una inmovilización gigantesca de capital en bonos del Tesoro norteamericano y de otros países.

La tesis que sostiene un sector de la izquierda que se reclama marxista, sobre la transformación de China en imperialista no tiene asidero. No hay margen, bajo la égida del imperialismo, en esta etapa histórica de decadencia y descomposición capitalista, para que un país semicolonial pueda convertirse en un país capitalista avanzado. El avance vendrá de la mano de la revolución social, como un eslabón

de la revolución socialista internacional, no de la contrarrevolución. Una tesis de este tipo, por otra parte, habla de una ilusión infundada sobre la vitalidad que aún conservaría el capitalismo para hacer semejante tránsito, sacando a una nación de su atraso ancestral y, más aún, logrando que se convierta en la nueva potencia hegemónica, en sustitución de Estados Unidos, como ocurrió cuando esta última sustituyó a Gran Bretaña en el liderazgo del mundo.

La existencia de un capitalismo nacional independiente es una hipótesis inconsistente. China no pasa de ser un régimen híbrido, que es lo que estamos viendo en la actualidad, en medio de una transición incompleta que todavía espera un desenlace, que se dirimirá en la arena de la lucha de clases nacional e internacional. El futuro de China oscila entre dos perspectivas enfrentadas: entre llevar hasta el final la restauración capitalista, confinándola a un status subordinado de características semicoloniales o una nueva revolución social, que apunte a una reorganización integral del país y del planeta sobre nuevas bases sociales. China ingresa a una fase más convulsiva de la restauración capitalista, lo que prepara el terreno para una intervención de mayor amplitud de la clase obrera.

La guerra

12. Este escenario de agudización de las disputas interimperialistas y de las ofensivas comerciales es el caldo de cultivo para la intensificación de las escaladas y conflictos bélicos. La expulsión del Estado Islámico, como anticipamos, no trajo la paz en el Medio Oriente, sino que ha dado pie a nuevas y más extendidas guerras.

Turquía viene de invadir territorio sirio y ha anunciado sus intenciones de ingresar en Libia, atravesada por una guerra civil. Rusia anunció lo mismo, pero apoyando al bando contrario de los turcos. Yemen enfrenta también una guerra civil, con la injerencia de Irán, por un lado, y de Arabia Saudita, por el otro. El asesinato del militar iraní se inscribe en una escalada imperialista que viene creciendo en intensidad precedida por las sanciones económicas y provocaciones diplomáticas y militares de Estados Unidos contra Irán, luego de la decisión yanqui de retirarse del pacto nuclear firmado en 2015 con Teherán. El reciente anuncio del “Acuerdo de paz”, por parte de Trump y Netanyahu, representa una nueva escalada contra el pueblo palestino. El proyecto coloca el reconocimiento de un Estado palestino bajo la condición de una rendición total a las demandas del Estado

de Israel, pues establece la cesión de una mayor cantidad de territorios palestinos a manos del sionismo y el desarme de las organizaciones palestinas.

13. El imperialismo yanqui, que supo relevar al Reino Unido como superpotencia global a comienzos del siglo XX, viene sufriendo en las últimas décadas un agudo retroceso. Una de las manifestaciones de esto es su empantanamiento en Afganistán. La expectativa de Trump está puesta en recuperar la iniciativa política y militar en Medio Oriente, que ha perdido en manos de Rusia e Irán, que han afianzado su protagonismo. Los aliados tradicionales de Estados Unidos, como el régimen saudita y el israelí, han perdido terreno, condicionados por la crisis en su frente interno. Esto no impide que articulen estrategias contrarrevolucionarias. La decisión de desescalar las hostilidades, por la que habría optado Trump y el régimen iraní, está lejos de disipar el escenario de guerra en Medio Oriente. Estamos frente a un compromiso prendido con alfileres.

La región sigue siendo un polvorín. Y esta precaria distensión puede ser el preludio de choques mayores. Por lo pronto, Irán abandonó la última de las restricciones al enriquecimiento de uranio, que habían sido fijadas por el acuerdo nuclear de 2015, firmado con Obama. El sentimiento anti-imperialista se afianzó en toda región, y el régimen iraquí, que venía guardando un delicado equilibrio en sus relaciones con Washington, no tuvo más remedio que reclamar el retiro de las tropas estadounidenses del país.

Pero más allá de los avatares más inmediatos, el auge belicista responde a una razón de fondo. Por un lado, hunde sus raíces en las rivalidades y tensiones crecientes interimperialistas, potenciadas ahora por la recesión mundial. Por el otro, la tentativa por superar el impasse capitalista sobre la base de avanzar en una colonización de los Estados obreros y completar en su provecho, el proceso de restauración capitalista. El principal destinatario es el ex espacio soviético y el gigante asiático. La hegemonía política, económica y militar en Medio Oriente es parte del cerco tendido contra ambas naciones. Esto, en el contexto del rearme general de las potencias capitalistas, en primer lugar, la norteamericana. El armamentismo, lejos de atenuarse, ha crecido sensiblemente.

14. ¿Esto significa la inminencia de una guerra mundial? Hay que tratar de evitar las simplificaciones. La Segunda Guerra no fue una copia

de la Primera y el nuevo escenario no va ser una copia de las otras dos. No hay por ahora un realineamiento de fuerzas y bloques constituidos como los que emergieron en las conflagraciones mundiales pasadas. Los regímenes ruso y chino no constituyen un bloque anti-imperialista. En el asesinato del militar iraní, para tomar un ejemplo, lo que ha primado, como lo resalta la prensa internacional, es la cautela y la medida de Putin y Xi Jinping. Ni siquiera hay una alianza entre ellos. En muchos casos actúan en veredas opuestas, en coalición con potencias capitalistas, incluso en forma cambiante. La política de la burocracia en esos países es llegar a un compromiso con el imperialismo, con el fin de proceder de común acuerdo a la restauración capitalista, y no en forma unilateral.

Pero el hecho de que no sea inminente, no desmiente que estemos ante guerras que parecen localizadas pero tienen un hilo conductor de alcance internacional. Esto desmiente la tesis de quienes hablan de la supuesta inviabilidad de la guerra de alcance mundial por el excepcional poder de destrucción de las armas nucleares. En las guerras regionales actuales ya está presente, en perspectiva, la amenaza de la guerra mundial. Finalmente, grandes guerras surgieron de conflictos aparentemente más acotados y se desataron cuando sus principales contendientes buscaron evitarla o cuando incluso esa posibilidad no estaba en sus planes. La guerra no es un accidente del proceso político actual. La guerra, por un lado, y la revolución, por el otro, son dos manifestaciones extremas del estallido de la sociedad capitalista, un síntoma inconfundible del agotamiento y descomposición del régimen vigente, del antagonismo insalvable entre las fuerzas productivas y su apropiación privada.

Esto se constata también en el conflicto con Corea del Norte, que está en una precaria situación. La puja Trump/Kim Jong-un está inscrita en el cerco estratégico que el Pentágono y el imperialismo están impulsando sobre China, para que esta abra su economía a la penetración del capital extranjero. Y, por supuesto, la amenaza latente de una intervención militar en Venezuela.

Giro político

15. En el documento internacional del 26° Congreso del Partido Obrero caracterizamos un escenario de extrema volatilidad. Salimos al cruce del impresionismo de quienes, incluso en el campo de la izquierda, estaban encandilados por un auge de la derecha. “Desde el

punto de vista político, debemos hablar, no de una consolidación de la derecha, sino de una situación de alta volatilidad. El ascenso del ultraderechista Bolsonaro en Brasil va acompañado por el del centroizquierdista López Obrador en México”. Bolsonaro mismo aparece empantanado por el ahondamiento de las divergencias dentro de su coalición de gobierno, que ya tempranamente ha planteado una crisis de gabinete y una erosión progresiva de su base popular de apoyo. Lo que prevalece es una polarización creciente. Las tendencias a la rebelión conviven con los esfuerzos por articular un polo contrarrevolucionario, alentado por el imperialismo y la derecha vernácula.

Los regímenes ultraderechistas y fascistoides tropiezan con las tendencias disolventes de la bancarrota capitalista en curso, la envergadura de la misma los excede, potenciado los desequilibrios acumulados previamente. ‘Obligados’ a continuar el camino de los ‘ajustes’ contra las masas, alimentan el descontento y las tendencias a la movilización popular. Es aleccionador lo que aconteció en Hungría, donde los intentos del gobierno ultraderechista de Viktor Orban, de imponer una reforma laboral antiobrera, eclosionaron una fuerte movilización de los trabajadores. Lo mismo vale para Jair Bolsonaro, que ya desató una rebelión educativa el año pasado: su gobierno ha atravesado sucesivas crisis y oscila entre pretensiones nacionalistas de parte de su base militar y su rol de avanzada del imperialismo yanqui en la región.

La emergencia de regímenes de excepción, de poder personal, ha sido un fenómeno generalizado no sólo en países europeos, sino tanto en Rusia y China como en los países ‘emergentes’: Bolsonaro en Brasil, Erdogan en Turquía. Boris Johnson logró un triunfo contundente que llevó a la implosión del laborismo “izquierdista” de Corbyn. En el centro de este fenómeno se encuentra Estados Unidos, con la tendencia de Trump a potenciarse como un régimen personalista, quien pretendió erigir un Ejecutivo fuerte, por encima de las instituciones republicanas.

16. Está a la vista la endeblez del gobierno Trump, cuya situación es precaria tanto en el plano interno como en el internacional. Un aviso fueron las elecciones de medio término en que Trump perdió la mayoría en Diputados. La recuperación económica se viene pinchando y la guerra comercial, como ya señalamos, ha terminado provocando más perjuicios que ventajas. El magnate tampoco puede exhibir éxitos en la política exterior, en la que Estados Unidos ha tenido que ceder posiciones.

La burguesía norteamericana está profundamente dividida, y sus partidos tradicionales enfrentan una crisis mayúscula, que tiene como componente el desprestigio de todo el régimen político frente a los trabajadores y la juventud.

Trump está en una carrera nerviosa, dirigida a remontar esta pendiente negativa. Su apuesta en el plano económico es que la desaceleración no se transforme en una recesión, tratando de recoger los réditos de la reactivación en los años iniciales de su mandato. Este hecho le permitió al magnate remontar en las encuestas presidenciales -e inclusive dar por cerrado el juicio político en su contra. Trump explota en su favor la imposibilidad del centro del Partido Demócrata por hacer avanzar cualquiera de sus candidatos en la interna demócrata frente a Sanders, exponente del ala izquierda del partido.

El asesinato de Soleimani es una tentativa por recuperar la iniciativa, con la mira puesta en primer lugar en la reelección, aunque los réditos del magnicidio son vidriosos. Pero no hay que olvidar que del otro lado del mostrador, los demócratas tampoco son inmunes a la crisis y al desprestigio que abraza a todo el sistema político yanqui, como se evidenció en la última elección con la reacción adversa que provocó una figura del establishment como Hilary Clinton. En ese momento, el izquierdista Bernie Sanders le pisó los talones. Ahora ninguno de los candidatos del establishment demócrata logra levantar vuelo en las primarias, a pesar de aportes millonarios de grandes capitalistas, el uso de los medios e incluso maniobras fraudulentas, como se vio en las primarias de Iowa. Sanders ha arrancado a la cabeza de las primarias, aunque no logra reunir por ahora una mayoría propia. El senador socialdemócrata es el que ha cosechado holgadamente mayores aportes económicos, que en la actualidad ya totalizan los 5 millones de aportantes (a un promedio de 18 dólares cada uno), lo cual comprueba que la adhesión proviene de la población trabajadora y de los sectores de más bajos ingresos. En estos días, Sanders habría conquistado más adhesiones por su condena a la provocación de Trump contra Irán (en contraste con las declaraciones tibias o el apoyo de sus competidores en el Partido Demócrata), empalmando con las movilizaciones callejeras que se replicaron en todo Estados Unidos en repudio al asesinato. Si se confirmara esta tendencia, las elecciones presidenciales estarían siendo el escenario de una polarización, en cierto modo inédita, expresado en una confrontación entre un candidato de ultraderecha y un representante “izquierdista”, lo que podría disparar un salto en la intervención popular.

17. La crisis política que atraviesa Estados Unidos es patrimonio común de las democracias de Occidente. No hay país en Europa cuyo régimen no esté en terapia intensiva (Gran Bretaña, Francia, Italia España). Tampoco se salva Alemania, donde el gobierno de Merkel se encuentra debilitado. Giros a la derecha, como el reciente triunfo del conservador Boris Johnson en Gran Bretaña, coexisten con la formación de gobiernos de centroizquierda, como la coalición PSOE-Podemos-Izquierda Unida en España o la emergencia del gobierno centroizquierdista en Italia, cerrando el paso al derechista Matteo Salvini (quien, de todos modos, aparece como el mejor posicionado en caso de nuevas elecciones). Ni qué hablar del vuelco en Francia, donde las masas han ganado la iniciativa. La crisis mundial viene haciendo trizas todos los equilibrios y el orden imperialista. La precipitación del Brexit acentúa las tendencias a la desintegración de la Unión Europea, e incluso de los Estados nación europeos, como se ve en el Reino Unido, España e Italia. El divorcio puede tener consecuencias traumáticas y hasta catastróficas de uno y otro lado del mostrador. Por lo pronto, hay quienes señalan el golpe que puede representar para la economía del Reino Unido las restricciones y barreras para su acceso a Europa, a lo que hay que agregar las consecuencias sociales que esto podría deparar. Boris Johnson ha explotado el repudio popular al ajuste de la “troika” de la Unión Europea para consumar el Brexit y llevar el alineamiento internacional del Reino Unido a girar alrededor de Estados Unidos y conformarse como un paraíso fiscal. Lejos de atenuar el ajuste que ya soporta la población inglesa, el Brexit puede terminar incrementándolo, además de provocar el desmembramiento del Reino Unido, con el abandono de Escocia y la reapertura del conflicto histórico en Irlanda del Norte. Las victorias electorales de Sinn Fein (la ex IRA), tanto en el Norte de Irlanda como en la República de Irlanda reavivan la perspectiva de una unificación de la isla, otra perspectiva de extrema polarización y choques. La victoria conservadora podría concluir a lo Pirro.

Lejos de un proceso rectilíneo, las oscilaciones y giros en el tablero político a escala internacional tienen como hilo conductor la crisis del sistema de dominación política tradicional de la burguesía.

Clase obrera, movimientos de masas y rebeliones

18. El Informe internacional, aprobado por el 26° Congreso del Partido Obrero, caracterizaba que “la bancarrota capitalista y su consecuencia en la ruptura profunda de los equilibrios y la estructura polí-

tica mundial abre brechas para la irrupción de las masas y la creación de situaciones revolucionarias”. El informe daba cuenta de rebeliones como los “chalecos amarillos” en Francia, los levantamientos en Centroamérica y el resurgimiento de la Primavera árabe. Y concluía que “estos procesos de la lucha de clases hablan de una inflexión en la tendencia mundial hacia la irrupción de las luchas de masas”. Pero el informe advertía en estas explosiones un gran ausente: la clase obrera. “El proletariado de la gran industria no se moviliza decisivamente como clase (...) Aquí es donde se ve que actúan como un bloqueo las burocracias obreras de los sindicatos y centrales obreras, crecientemente entrelazadas con el Estado...”.

Esta situación está cambiando. La gran huelga de los obreros de General Motors en Estados Unidos, la huelga minera en Perú, la huelga nacional de los trabajadores del Correo en Brasil, y ahora la de los petroleros, indica que la crisis está incentivando la puesta en marcha de los grandes batallones del proletariado mundial. Hay que destacar también la enorme huelga metalúrgica en Turquía y los paros nacionales en Colombia (se prevé un nuevo paro para marzo). Obviamente, el caso más emblemático es la huelga del transporte en Francia, que ha semiparalizado al país a lo largo de 40 días. Por el lugar que ocupa el país galo en el escenario mundial, en el corazón del capitalismo, la irrupción de la clase obrera francesa debe ser tomada como un punto de giro. Ni qué hablar que el resultado de la pulseada en Francia va a ser determinante no solo para Europa, sino a escala global y despeja el terreno para la aparición en escena de la clase obrera en otras naciones. El bloqueo, que aún existe, es, efectivamente, el de las burocracias de los sindicatos propatronales y/o partidarias de la conciliación de clases.

19 Precediendo al alza de la intervención obrera, hay que destacar a algunos movimientos de escala internacional, que si bien tienen un carácter pluriclasista se caracterizan por una dinámica fuertemente combativa, empleando incluso métodos históricos de la clase obrera. El movimiento de lucha de la mujer sigue siendo uno de los más dinámicos dentro del movimiento de masas a escala mundial. En Chile, la movilización del 8 de Marzo de 2019 fue la más grande de toda América Latina y anticipó, en gran medida, el levantamiento popular de octubre. En la rebelión chilena, el movimiento femenino sigue jugando un papel destacado (la performance “el violador eres tú” se ha replicado a escala internacional) y se proyectan dos nuevos paros nacionales de mujeres

para marzo de este año. En los últimos años, el movimiento de mujeres y disidencias se ha destacado como ningún otro, por su confrontación con los gobiernos derechistas, que tienen a la misoginia y la discriminación de las disidencias como una característica en común. Tanto el “Ele Não” contra Bolsonaro como el “Me too” en Estados Unidos protagonizaron movilizaciones de masas. Del mismo modo hay que destacar la enorme lucha librada en la Argentina por el derecho al aborto.

En el último año, la lucha contra la depredación ambiental ha significado un cimbronazo a escala mundial. El movimiento, protagonizado especialmente por la juventud, tiene un fuerte sesgo de denuncia al capitalismo como un régimen social de depredación y destrucción del planeta. La huelga general por el medio ambiente y la rebelión mendocina contra la minería contaminante, por tomar tan sólo dos ejemplos, han demostrado la potencialidad del movimiento, en momentos donde la continuidad de las relaciones de producción capitalista pone en jaque la supervivencia del planeta (incendios de la Amazonia y de Australia).

Así como en el movimiento de lucha de la mujer intervienen partidos y fuerzas del capital, con el objetivo de encuadrar a esos movimientos en los marcos del régimen y perpetuar las relaciones capitalistas de producción -que representan el edificio social sobre el cual se monta la cultura machista y patriarcal-, lo mismo sucede en el movimiento ambientalista. Todo un sector del capital acicatea este movimiento en aras de su propio beneficio (capitalismo verde) y en detrimento de otros sectores del capital. En estas condiciones es más valioso que nunca la intervención de un partido obrero revolucionario, para luchar por la conquista de las direcciones de esos movimientos, dotándolos de un programa de clase. Lo contrario, supone un sectarismo que inhibe al partido revolucionario en su lucha por abrirse paso en el movimiento de masas, lo que, a su turno, lo inhabilita para disputar la dirección política del proletariado.

20. Como parte de este cuadro de alza de la lucha de las masas en todo el mundo, es necesario destacar los procesos desenvueltos en los países árabes. La persistencia en las movilizaciones en Argelia dio lugar a la caída del gobierno despótico de Abdelaziz Bouteflika (FLN). Las movilizaciones continuaron contra el gobierno de transición que lo sucedió. El régimen, dominado por las Fuerzas Armadas, impulsó una salida electoral trucha. Fue boicoteada por el movimiento de protesta (Hirak)

y solo votó el 39% del padrón. El estado actual del proceso es que se ha impuesto un nuevo gobierno, surgido de esos comicios, pero persiste la movilización popular. En Sudán, la rebelión se desató como resultado de la quita de subsidios al pan y a los combustibles, en un contexto de contracción económica. La lucha barrió al gobierno de Omar al Bashir, en el poder desde 1989. Fue relevado por un Consejo Militar de Transición, contra el cual continuaron las movilizaciones. Pero las fuerzas que encabezaban las protestas llegaron a un acuerdo con los militares y se integraron al gobierno. Sin embargo, la carestía y el odio a los militares, que condujeron a la rebelión, siguen presentes. Otros dos puntos relevantes de las rebeliones en Medio Oriente son Líbano e Irak. Allí, los levantamientos populares han puesto en tela de juicio el sistema de reparto de poder entre los distintos grupos confesionales. Los levantamientos no han dejado indemne ni siquiera a Irán, donde el aumento en los combustibles también desató revueltas, que en noviembre incluyeron la quema de bancos por parte de los manifestantes.

21. La crisis de los regímenes políticos y las rebeliones en curso, sin embargo, no pueden hacernos perder de vista la capacidad y los reflejos de la burguesía para articular una estrategia contrarrevolucionaria. Esto incluye ofensivas contra los trabajadores a las que se aferra cuando su situación se encuentra más comprometida. Como había advertido Trotsky en el Tercer Congreso Mundial de la Internacional Comunista en 1921, contra todo economicismo reduccionista y determinismo mecanicista, es precisamente en momentos de peligro mortal para la clase capitalista y la desintegración de la sociedad capitalista que existe también “el florecimiento más elevado de la estrategia contrarrevolucionaria de la burguesía”. Hoy mismo, vemos las maniobras a las que apela la burguesía frente a las rebeliones en curso, para desactivar la lucha, dividir e integrar al Estado a las organizaciones y movimientos de lucha que encabezan dichos procesos. Somos testigos del golpe en Bolivia, que revela la iniciativa y reflejos del imperialismo, quien orquestó junto a Bolsonaro una réplica dirigida a neutralizar y revertir el ciclo de rebeliones que sacuden al continente. En Chile, el gobierno de Piñera, con el concurso de toda la ‘oposición’, puso en pie el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”, como una maniobra institucional reaccionaria, de rescate del régimen y contra la rebelión. Las estrategias contrarrevolucionarias de la burguesía de ningún modo pueden ser subestimadas.

Así como no existe una relación automática entre la bancarrota capitalista y la lucha de clases y la iniciativa de las masas, tampoco hay un automatismo entre esta iniciativa de los trabajadores y la izquierda. Esto depende del lugar en que esté parada la izquierda y la calidad de su política. Una irrupción de masas, lejos de catapultar a la izquierda, puede terminar siendo su acta de defunción, si está atada y es tributaria del régimen cuestionado. O confinarla a la intrascendencia, como ocurre con fracciones de la izquierda que son autorreferenciales y que se refugian en el propagandismo. Estamos enfrentando contradicciones explosivas que afectan severamente el sistema de dominación política de la burguesía pero, al mismo tiempo, coexiste con una enorme crisis de dirección de la clase obrera y una bancarrota política y teórica de la izquierda.

La subjetividad popular modificada por la crisis debe ser desarrollada en un sentido revolucionario. Esto requiere tener en cuenta todos los factores que intervienen en esta evolución subjetiva de los trabajadores, incluidos los bloqueos y diques de contención (que no pueden ser menospreciados, insistimos, y catalogados como simples manotazos de ahogado o tigres de papel), para traducirlo en un programa, consignas y organización que permitan transformar a la clase obrera en alternativa de poder.

América Latina

22. Según los pronósticos de la Cepal y el FMI, el crecimiento de Latinoamérica será del 0,3%. Esto es consecuencia directa de la caída de los precios de las materias primas (soja, petróleo, minerales y otros), que constituye el grueso de las exportaciones latinoamericanas; de la recesión y del freno del comercio mundial, agravado por las guerras económicas entre Estados Unidos y la Unión Europea y China; y las fugas de capitales hacia las metrópolis imperialistas. Y sobre ello, el peso agobiante de las deudas externas, que constituyen un mecanismo de opresión nacional, confiscación popular y de salvataje de la banca mediante intereses usurarios.

Tal cual lo señalamos en el llamamiento “Por una Conferencia latinoamericana de la izquierda y el movimiento obrero”, es claro que “los ajustes de cuño fondomonetaristas, ya sea con el acuerdo formal o no del FMI, no solo han sido llevados adelante por gobiernos que se reclaman derechistas -como los de Piñera en Chile, Duque en Colombia, Macri en Argentina o Bolsonaro en Brasil-, sino también por

los provenientes del campo “nacional y popular” o frentepopulistas, como los de Lenín Moreno en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, el Frente Amplio en Uruguay y el sandinista Daniel Ortega en Nicaragua. Esto habla de las limitaciones insalvables del nacionalismo burgués y del progresismo centroizquierdista para proceder a una emancipación nacional y social de los países latinoamericanos. Sus ataduras de clase los vuelve impotentes para dar una respuesta y una salida frente a las tendencias dislocadoras de la bancarrota capitalista, y terminan cediendo a las presiones y a la extorsión del capital financiero. Esto conduce a una desorganización y descalabro económicos, a penurias inauditas para las masas, y abre paso o pavimenta el camino a la reacción derechista.” Lo mismo vale para el nuevo gobierno de Argentina, encabezado por Alberto Fernández, quien en aras de lograr el acuerdo con el FMI y con los bonistas, ha procedido a la modificación de la movilidad jubilatoria, a eliminar las cláusulas de actualización salarial y a fijar topes para los aumentos paritarios.

23. De la mano de la inestabilidad económica -fruto de la orientación capitalista de los gobiernos latinoamericanos en el marco de la profundización de la crisis mundial- se ha instaurado en el subcontinente un cuadro de enorme inestabilidad política y una profunda crisis social. En América Latina asolan las rebeliones populares, los golpes de Estado, los autogolpes y la disgregación política.

En Nicaragua se desarrolló una rebelión popular a lo largo de un año, desde abril de 2018 hasta abril de 2019, contra los planes antio-breros del gobierno “nacional y popular” de Ortega. Se desarrollaron también, durante 2019, las grandes rebeliones populares de Haití, Honduras, Puerto Rico y la rebelión educativa en Costa Rica. En octubre tuvieron inicio los grandes procesos de Ecuador y Chile, a los que se les sumaron, en noviembre y diciembre, las grandes movilizaciones obreras y juveniles en Colombia. El hilo conductor de todos estos alzamientos es el rechazo a las medidas de austeridad y a las llamadas “reformas estructurales” (reformas laborales, previsionales y educativas) impulsadas por el FMI y los respectivos gobiernos de cada país. Centroamérica es el epicentro de una catástrofe humanitaria, que continúa dando lugar a masivas olas de migraciones desde los países caribeños hacia México y Estados Unidos, así como a países del cono sur. Por el momento, ninguna de estas rebeliones logró forzar la caída de sus respectivos gobiernos ni mucho menos forzar un cambio

de régimen. La excepción fue la gigantesca rebelión popular en Puerto Rico, en las barbas del imperialismo yanqui, que logró la caída del entonces gobernador Ricardo Roselló, constituyéndose en un extraordinario ejemplo para los pueblos latinoamericanos, pero dejando en pie todo un régimen colonial y de sumisión al imperialismo yanqui.

En paralelo a todos estos procesos se desarrolló una ofensiva golpista en Venezuela, con la autoproclamación de Juan Guaidó, con el apoyo de Trump, como presidente de la República Bolivariana. Recientemente, Nicolás Maduro impuso su propio autogolpe, copando la Asamblea Nacional donde tenía mayoría la derecha. En Bolivia se consolidó el golpe reaccionario de Jeanine Añez, perpetrado por la burguesía cruceña, Bolsonaro y el imperialismo yanqui. En Uruguay ganó las elecciones, luego de 15 años de gobierno de la centroizquierda frenteamplista, la coalición derechista liderada por el Partido Nacional, que ha debutado anunciando una fuerte ofensiva capitalista contra conquistas históricas de los trabajadores uruguayos. En El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele acaba de imponer un autogolpe y se perfila para un alineamiento con el imperialismo norteamericano. En Perú, el cuadro de disgregación política y derrumbe de los partidos tradicionales que arrojan las recientes elecciones parlamentarias ofrece un campo de maniobras para el presidente Martín Vizcarra, que había dado su propio autogolpe y viene avanzando contra los convenios colectivos de trabajo.

Las rebeliones populares pusieron a prueba a todas las direcciones de las masas y ponen de manifiesto, agudamente, la falta de una dirección revolucionaria. Tal es así que, en consonancia con numerosos ejemplos históricos, el golpe de Estado en Bolivia despertó una gigantesca resistencia popular que, de no haber sido por el papel capitulador de la dirección del MAS, podría haber derrotado el golpe, dándole un revés extraordinario al imperialismo, a Bolsonaro y a toda la reacción latinoamericana. En Ecuador, los acuerdos entre la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y el gobierno para levantar la rebelión han dado lugar a un descomunal aumento de la represión y persecución política de parte del gobierno de Lenín Moreno contra la oposición popular. Es necesario precisar el estadio concreto de cada proceso, para delinear una orientación política revolucionaria y de esa manera aprovechar las enormes posibilidades abiertas. Sin embargo, en términos generales, la izquierda latinoamericana ha tenido, en lo fundamental, una política de rescate del régimen. Sea

por tener una política tributaria de variantes golpistas o por colocarse como furgón de cola de variantes nacionalistas o frentepopulistas.

24. El hecho de que sea en Chile donde se desarrolla la más profunda rebelión popular de América Latina es emblemático, pues era considerado por la burguesía latinoamericana como el “modelo” a imitar. Chile es donde más lejos fue la economía de mercado, impuesta a partir de la dictadura de Pinochet y profundizada por todos los gobiernos democráticos posteriores. Las privatizaciones se han abierto paso en todas las esferas: desde las jubilaciones, la salud, la educación y los recursos naturales, como el agua y el cobre. Esto fue de la mano de la flexibilización y atomización del movimiento obrero, con los convenios por empresa y la des-sindicalización. Es lo que ha dado lugar a las reivindicaciones motoras de la rebelión popular (“No son 30 pesos, son 30 años”). La crisis mundial impactó en Chile a través de la caída del precio del cobre, que dieron lugar a las tendencias recesivas de la economía nacional y un enorme proceso de endeudamiento externo. La crisis económica agudizó la polarización social, abriendo paso a la rebelión popular. Sin embargo, el levantamiento actual está lejos de ser espontáneo, viene anunciándose por las grandes luchas contra los diferentes gobiernos post-pinochetistas, tanto de centroizquierda como de derecha (manifestaciones de los estudiantes ‘pingüinos’ contra el arancelamiento, por la educación gratuita; gigantescas marchas de las familias trabajadoras contra la jubilación privada, huelgas de mineros, de portuarios, de Walmart, de docentes, movilizaciones mapuches contra las expulsiones de tierras y otras). Rápidamente, la rebelión chilena puso en el tope de sus demandas el reclamo de que se vaya Piñera y se convoque a una Asamblea Constituyente libre y soberana. El “Acuerdo por la Paz Social” no solo fue acompañado por la ex Nueva Mayoría, sino también por el Frente Amplio, la fuerza que surgió como la expresión política de las grandes luchas estudiantiles, y, desde afuera, por el Partido Comunista. El “Acuerdo” deforma un genuino y revolucionario planteo de las masas chilenas -el reclamo de una Constituyente- para utilizarlo como un instrumento de la reacción política. Con el “Acuerdo”, todo el régimen pactó darle impulso a una Constituyente amañada y tutelada por el propio Piñera, con el objetivo de preservar los intereses capitalistas, que las masas han puesto en jaque al levantar su más elemental pliego de reivindicaciones. Sin embargo, un eventual progreso de las maniobras institucionales

emanadas del “Acuerdo por la Paz Social”, como el plebiscito de abril y la Constituyente amañada, no cancelarían el proceso revolucionario abierto en Chile, pues el régimen se muestra incapaz de dar una salida a las reivindicaciones motoras de la rebelión popular. En Chile, el reclamo de la Constituyente mantiene un rol revolucionario siempre y cuando se mantenga acompañado de la consigna “Fuera Piñera” y “Abajo el ‘Acuerdo por la Paz’”, pues solo podrá existir una Constituyente libre y soberana en tanto y en cuanto sea convocada por las organizaciones de las masas en lucha. La función de una Constituyente libre y soberana sería remover y poner fin a la herencia dejada por el último dictador chileno y tomar todas las medidas que apunten a una transformación integral del país sobre nuevas bases sociales. Esta tarea solo puede ser obra de los trabajadores y deberá ser impuesta mediante la huelga y la movilización popular. Esta concepción separa las aguas entre la izquierda adaptada y tributaria del orden burgués y la izquierda revolucionaria.

25. La rebelión popular en Ecuador enfrentó al gobierno de Lenín Moreno -que surgió como la continuidad del gobierno “nacional y popular” de Rafael Correa-, quien al poco tiempo de asumir se orientó como un gobierno de corte “neoliberal” y fondomonetarista. La eliminación de los subsidios a los combustibles, luego de una saga de tarifazos desde la asunción de Lenín Moreno, y el anuncio de las reformas laboral y previsional, desataron una extraordinaria rebelión popular. El paquete de austeridad fue impuesto por el FMI, para que Ecuador llegue al déficit cero y cumpla con sus compromisos de deuda. Tras diez días de paros, movilizaciones, ocupaciones de empresas, barricadas y combates callejeros, la rebelión ecuatoriana logró derogar el decreto que estableció el aumento a la gasolina y al diésel. La magnitud de la rebelión había obligado al gobierno de Lenín Moreno a mudar la capital del país. El levantamiento tuvo como principales protagonistas a los indígenas, que representan el 25% de la población ecuatoriana, agrupados en la Conaie. En forma subordinada, se sumó el movimiento estudiantil y las centrales sindicales. A pesar de que la consigna “Fuera Lenín Moreno” fue una consigna coreada por las masas sublevadas, la Conaie se encargó de circunscribir el pliego de la rebelión a la pelea por la caída del decreto y contra el FMI. Luego de las jornadas de octubre pasado, el gobierno de Lenín Moreno ha desarrollado aún más su política represiva, impulsando causas penales con-

tra dirigentes de la Conaie, persiguiendo a los medios alternativos que lograron romper el cerco mediático en el proceso de la rebelión y al ex presidente Rafael Correa y su partido, a quienes acusa de promover las jornadas de octubre, cuando, en realidad, Correa se circunscribió a pedir elecciones anticipadas. Ocho dirigentes del partido de Correa se encuentran presos y ha comenzado el juicio contra el ex presidente, acusado de ofrecer sobornos bajo su mandato. El operativo apunta impedir que Correa se postule a las elecciones presidenciales de 2021.

Aunque el decreto cayó, toda la orientación fondomonetarista del gobierno de Lenín Moreno sigue en pie, incluida la tentativa de proceder a recortes parciales de subsidios a los combustibles, y de avanzar en las “reformas estructurales”. El cuadro de quebranto del Estado ecuatoriano y la presión del imperialismo y el capital financiero empujan a Lenín Moreno a insistir en las medidas que dieron lugar al estallido de octubre. Este factor, junto a la victoria que las masas se anotaron con la derogación del decreto, deja planteada la posibilidad de nuevos estallidos populares en 2020. La Conaie pareciera haber prolongado la tregua y su dirigente, Jaime Vargas, perfilarse para el proceso electoral. La izquierda ecuatoriana, como el PCML, careció de un planteo de poder en el marco de la rebelión. Un planteo revolucionario para Ecuador debe partir de levantar la consigna “Fuera Lenín Moreno”, así como la necesidad de un congreso obrero, indígena y campesino, que elabore un programa de transformación social de fondo, partiendo de la ruptura con el FMI y el imperialismo, y, sobre esa base, impulsar la lucha por un Asamblea Constituyente libre y soberana. Es necesario un balance crítico de la Constituyente de 2008, que lideró el gobierno de Correa y fue apoyada por la Conaie. En ella se declaró a Ecuador como un Estado plurinacional, pero al estar tutelada por un gobierno capitalista, fue incapaz de dar salida a las grandes reivindicaciones del pueblo ecuatoriano.

26. En Puerto Rico, la movilización popular y la caída de Roselló han replanteado la cuestión del estatus colonial de la isla. Mientras las fuerzas tradicionales impulsan el planteo de la estatidad -o sea, la transformación en el estado 51 de Puerto Rico-, Estados Unidos se niega y mantiene un estatus colonial, cuya expresión es la Junta de Supervisión Fiscal, para el pago de la deuda. La rebelión popular cuestionó con firmeza a esa junta y dejó planteada la consigna del no pago de la deuda y la ruptura con el imperialismo, una consigna que fue

levantada con mucha fuerza por el movimiento de mujeres (“Nosotras contra la deuda”). En la medida que Wanda Vázquez, su actual gobernadora, sigue sometida a la Junta, su política de arbitraje no puede dar respuesta a los reclamos populares urgentes, lo cual replantea un escenario de rebeliones populares. La consigna de la Constituyente también se discute en Puerto Rico. Históricamente, las ilusiones de las masas sobre una integración como Estado a Estados Unidos fueron un gran límite al planteo de una Constituyente soberana, que implicaría partir de una ruptura con la Junta y el imperialismo. Al respecto, la rebelión constituye un nuevo punto de partida, la lucha por los reclamos urgentes de Puerto Rico se conecta indisolublemente con la lucha por la unidad socialista de América Latina y la expulsión del imperialismo. La clase obrera de Puerto Rico, mucha de la cual reside en Estados Unidos, se conecta por esta vía con los trabajadores norteamericanos y con todo el volcán social de Centroamérica.

27. Un escenario privilegiado de la lucha de masas en América Latina es la situación en Bolivia. La reacción de las masas contra el golpe contrastó con la política capituladora del MAS, que pactó la convocatoria a nuevas elecciones y el reconocimiento de Añez. Las nuevas elecciones se darán en un cuadro de represión y amedrentamiento del movimiento popular, marcado por las masacres como las de Sacaba y Senkata, el encarcelamiento de luchadores populares, la persecución a figuras prominentes del MAS, la acusación por sedición contra Evo Morales, la persecución a su apoderada y el intento de Añez de perpetuarse en el poder. La denuncia de la continuidad del golpismo bajo un ropaje electoral es importante, porque las medidas represivas se derrotan con las movilizaciones masivas, una política que el MAS abandonó. El MAS confía en un triunfo electoral, apalancado por la división de la derecha, pero aceptando las condiciones del proceso electoral. Corre el riesgo de terminar como el PT brasileño luego del golpe contra Dilma. Añez, por su lado, mostró su intención de ir a fondo en explotar la nueva relación de fuerzas en función de barrer al MAS y desarrollar la agenda derechista, lo que preanuncia nuevos golpes, incluso contra el proceso electoral si fuera necesario. Los intereses empresariales tras el golpismo son muy fuertes: están en juego el control del litio, las reservas petroleras, el desarrollo minero, etc. La división de la derecha es un resultado de su propia crisis: el sector de Luis Camacho rechaza a los “políticos tradicionales” como Carlos Mesa y Añez, y promueve una división “federalista” de

Bolivia que beneficiaría a Santa Cruz. Añez, por su lado, aparece respaldada por Bolsonaro. Mesa agrupa a la derecha liberal de los partidos tradicionales. Habrá que observar si alguna de las variantes derechistas es capaz de desarrollar una polarización electoral que permita aglutinar al voto antimasista.

Desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores, el principal problema hoy es retomar y organizar la resistencia contra el golpe, defender las libertades democráticas e impulsar todos los reclamos de los trabajadores, campesinos e indígenas, denunciando implacablemente la salida electoral pactada entre los golpistas y el MAS. Esta denuncia no quita la necesidad de mantener una posición principista de rechazo a la persecución contra el MAS y defender el derecho democrático de que Evo Morales y el resto de los funcionarios y dirigentes de su partido puedan regresar a Bolivia con plenos derechos políticos. El reacomodo de la burocracia sindical de la COB con el gobierno de turno y los golpistas replantea la importancia de la lucha por la independencia política de los trabajadores. Como otras experiencias nacionalistas de América Latina, Evo Morales y el MAS prefieren negociar con la oligarquía golpista a impulsar la organización y la movilización de las masas. Temen que un desarrollo independiente del movimiento de masas termine por cuestionar al propio Morales y al MAS. La izquierda que, desorientada, se sumó a la asonada golpista (POR), ha firmado su propia acta de defunción. En Bolivia, al igual que en la revolución del '52", en el proceso del '69 al '71, que dio lugar a la Asamblea Popular, y en la rebelión de 2003, la necesidad de una estructuración independiente de la vanguardia obrera y de los sectores explotados (campesinos, indígenas, etc.) en un partido revolucionario, delimitado del nacionalismo burgués o pequeño-burgués, es la clave para luchar por el gobierno obrero y campesino, que consume una ruptura definitiva con el imperialismo y se proceda a una verdadera emancipación nacional y social.

28. En Venezuela, la conspiración golpista promovida por el imperialismo y la derecha no puede hacer perder de vista el creciente impasse del régimen bolivariano. Quien supo ser la expresión más radical del nacionalismo latinoamericano, arrogándose incluso la bandera del "socialismo del siglo XXI", carga con la encerrona que ha sometido al pueblo venezolano. Las nacionalizaciones pagas y sin control obrero agigantaron una deuda externa incontenible. El régimen cambiario

de administración de divisas, sin nacionalizar la banca, fue una fuente de ganancias para la boliburguesía y terminó en la destrucción de la moneda y la hiperinflación. El chavismo ha pasado de ser un régimen plebiscitario, con gran respaldo de masas, a un régimen de facto, con apoyo económico de Rusia y en menor medida de China. Lejos del “anti-imperialismo”, Rusia persigue nuevos pactos de naturaleza colonial. El régimen de Maduro y el embargo norteamericano han llevado a las masas a una situación crítica. Con el embargo, Estados Unidos busca avanzar en una salida derechista y forzar una recolonización de Venezuela, algo que está planteado también en los numerosos pleitos judiciales que tienen hipotecados los activos venezolanos.

Políticamente, los golpes y autogolpes han conducido al ejército a ser árbitro de la situación política. El golpismo de Guaidó se estrelló contra el apoyo del Ejército a Maduro, un hecho que objetivamente coloca al Ejército como árbitro de la situación. El Ejército podría, bajo la presión existente, eventualmente soltarle la mano a Maduro, para procesar un recambio. Mientras, la debilidad de Guaidó le dio espaldas a Maduro para llevar adelante el último golpe contra el Parlamento, buscando quebrar a la oposición parlamentaria para obtener el aval para su política privatista, en sociedad con Rusia.

La izquierda venezolana, que se integró masivamente al chavismo, hoy está en crisis, arrastrada por la crisis del régimen. En general, no ha hecho un balance de su intervención. Otro sector de la izquierda levanta la consigna “Fuera Maduro”, y aunque denuncia a Guaidó y al imperialismo, niega la existencia de un golpe de Estado y pone el centro de su política en el derrocamiento del gobierno.

Denunciamos y nos movilizamos contra el embargo norteamericano y el golpe sin ningún apoyo político a Maduro. Defendemos la necesidad de una intervención del movimiento obrero en la crisis con sus propias banderas: la necesidad de reconstruir los salarios, las jubilaciones y las condiciones de vida de las masas. Llamamos a movilizarnos por la libertad de los presos políticos. Reclamamos el control obrero de la industria nacionalizada y la nacionalización de la banca, bajo control obrero. Denunciamos la política privatista de Rusia/Rosneft, en consonancia con el gobierno de Maduro.

29. Brasil se encuentra asediado por la magnitud de su deuda pública. Esta, junto a su déficit fiscal y la “inestabilidad política” de la región, derivó en una devaluación del real, que ha llegado a su mayor depre-

ciación desde 1994. Al gigante latinoamericano se le estrechan sus fuentes de financiamiento, lo cual, a su turno, abre las puertas para un salto en la fuga de capitales. En este escenario, el ministro de Economía, el ultraliberal Paulo Guedes, ha emprendido un masivo plan de privatizaciones (Electrobras, sectores de Petrobras) que tiene en carpeta, incluso al Instituto Nacional de Propiedad Industrial (responsable de avalar pedidos de marcas y patentes). Pero este plan está desatando la resistencia de los trabajadores. Más de 20.000 obreros petroleros de Brasil llevan catorce días realizando una extraordinaria huelga general contra el cierre de una fábrica de fertilizantes controlada por la estatal Petrobras, que amenaza con dejar a mil trabajadores en la calle. Al mismo tiempo, los empleados de Dataprev, la tecnológica estatal que está en la mira de los privatizadores, lograron detener temporalmente 500 despidos con una reciente huelga. Los trabajadores del Correo, que fueron a la huelga en septiembre pasado, han convocado a nuevas medidas de fuerza para marzo. Durante 2019 se desarrollaron gigantescas movilizaciones contra la política educativa del gobierno, donde la consigna “Fuera Bolsonaro” fue ampliamente coreada por la juventud. A la crisis económica, potenciada por la guerra comercial que atraviesa todos los poros de la vida del país y las tendencias a una recesión mundial, se agrega la sombra de la rebelión popular. En diciembre de 2019, el ex capitán del Ejército Bolsonaro ya había admitido su decisión de posponer algunos ajustes por el temor a un efecto contagio de la convulsión reinante en el continente. La suerte que corra el gobierno brasileño es fundamental porque, como lo revela el golpe en Bolivia, constituye uno de los baluartes de la reacción y una amenaza para todos los pueblos de América Latina.

El cuadro de reanimamiento del movimiento obrero brasileño, por un lado, y la ofensiva privatizadora y antiobrera de Bolsonaro-Guedes, por el otro, ponen en el orden del día la necesidad de un Congreso de delegados de base de todas las centrales obreras y sindicatos de Brasil para impulsar un plan de lucha hasta derrotar al gobierno y sus planes. El impulso de esta política está en las antípodas de la orientación de la dirección de la CUT y, más en general, del PT. Ambos dejaron pasar sin lucha la reforma previsional de Bolsonaro. Va a contramano también del PSOL y de la izquierda que lo integra, que no ha pasado de ser una colectora del Partido de los Trabajadores. En Brasil, la izquierda revolucionaria se debe estructurar impulsando una orientación de conjunto para el movimiento obrero (Congreso de bases,

Fuera Bolsonaro-Guedes y su plan de guerra). Esa estructuración se debe desarrollar en forma delimitada del frente popular, responsable de pavimentar el camino al poder de Bolsonaro y contenedor de la lucha de los trabajadores.

Consignas y programa en América Latina

30. Esta nueva etapa en Latinoamérica coloca en el orden del día la consigna que venimos impulsando en Argentina: que la crisis capitalista la paguen los capitalistas. Esto plantea derrotar y poner fin a estos regímenes responsables de este calvario y abrir paso a una salida política, en la que los explotados sean los protagonistas: la lucha por gobiernos de trabajadores.

La batalla contra los gobiernos ajustadores debe ir unida a un programa integral de salida de la crisis: salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, una jubilación equivalente y atada al salario del trabajador en actividad, poniendo fin a las reformas laborales y jubilatorias ya impuestas o en carpeta; derecho y vigencia de los convenios colectivos de trabajo; por el reparto de las horas de trabajo sin reducción salarial; ruptura con el FMI y no pago de la deuda, nacionalización de las empresas de servicios públicos y de las que generan las riquezas nacionales (petróleo, gas, minas, etc.); rechazo de las devaluaciones y la fuga de capitales, nacionalización de la banca y del comercio exterior.

La defensa de las jubilaciones es un aspecto crucial. En los últimos años han habido procesos de lucha en Argentina, Paraguay, Brasil, Costa Rica, Nicaragua, Francia y Rusia contra reformas previsionales reaccionarias.

El programa debe integrar una respuesta a la cuestión indígena, agraria y ambiental, que se ha vuelto más candente que nunca. El atropello, la violencia y la saña contra las comunidades indígenas refleja el odio y prejuicios ancestrales de las clases acomodadas contra los sectores más humildes y postergados. Pero el racismo actual tiene un contenido específico y está asociado a la concentración de la tierra y la expulsión de los campesinos y las poblaciones aborígenes que la habitan, al servicio de una depredación sin precedentes. Detrás del golpe de Bolivia están los sojeros de la Medialuna occidental, fuertemente entrelazados económicamente con los hacendados brasileños que vienen llevando adelante el desmonte y la deforestación de la región a niveles récord. Por la defensa del Amazonas brasileño, boliviano y venezolano, la Patagonia y los Andes de la depredación capitalista: defensa de los derechos de las

comunidades indígenas, control obrero-popular de los emprendimientos mineros, petroleros y agropecuarios. Apoyo a las luchas campesinas contra la expulsión por parte de los latifundistas y el capital financiero. Por la expropiación del gran capital agrario y la nacionalización de la tierra, y su cesión y gestión a los trabajadores del campo, respetando los derechos de los campesinos pobres, pueblos originarios y pequeños chacareros. Bolivia desnuda como nunca al clericalismo, en sus diversas variantes (católico como evangélico), bastión de la reacción y enemigo número uno de los derechos de la mujer, encabezando en todos los rincones del continente las cruzadas contra el derecho al aborto, la educación sexual y cualquier otra reivindicación democrática. Frente a este escenario, llamamos a impulsar la movilización por la separación de la Iglesia del Estado; por el derecho a la educación sexual integral, la anticoncepción gratuita y la legalización del aborto; por el derecho a la maternidad, subsidios a la mujer embarazada hasta el tercer año de crianza; por la organización independiente de la mujer para luchar contra la violencia social y estatal.

No se nos puede escapar que los acontecimientos en desarrollo van a tener incidencia en los planes de militarización en marcha. Bolivia es el laboratorio de una escalada que va dirigida contra Venezuela, Nicaragua y Cuba. Un desenlace favorable de la pulseada que se viene dando entre las masas y los gobiernos responsables de los ajustes constituiría un golpe, en primer lugar contra Bolsonaro y sus ambiciones de armar un régimen fascista. Y sería también un golpe a todas las tendencias a la bolsonarización que existen al interior de los Estados latinoamericanos y, más de conjunto, al reforzamiento del aparato represivo y la criminalización de la protesta social que se viene constataando en el continente. Ante este escenario, planteamos: frente único de las organizaciones de trabajadores para luchar contra el fascismo y el desarme de los ‘grupos de tareas’ y ‘escuadrones de la muerte’, mediante la acción directa y la organización; juicio y castigo a todos los responsables políticos y materiales de los asesinatos de luchadores en Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia y Brasil; fuera las bases militares extranjeras de América Latina; abajo la militarización de la lucha contra el narcotráfico; derogación de todas las leyes represivas; fuera el ejército de Río de Janeiro y las favelas, así como de La Paz y de Bogotá; disolución de los escuadrones de la muerte y parapoliciales, esclarecimiento del asesinato de Marielle Franco. Rechazamos la proscripción de Lula y Evo Morales. Absolución de Daniel Ruiz y César Arakaki,

luchadores obreros y militantes de la izquierda revolucionaria, enjuiciados por luchar contra la reforma jubilatoria en Argentina.

Los revolucionarios deben dar la pelea en todos los terrenos, inclusive el electoral, para desenvolver allí su programa y agotar las expectativas democráticas de las masas. Los revolucionarios no renuncian tampoco a la intervención en el Parlamento burgués, para levantar una tribuna de denuncia del régimen y ponerla al servicio de la lucha y organización de los trabajadores.

Otro capítulo es la integración latinoamericana, que tenía como abanderados al nacionalismo y progresismo latinoamericano, que ha terminado en un fracaso. El Mercosur no pasó de ser una integración de los monopolios radicados en la región, con intereses e inversiones en los países miembros. Hoy asistimos a su desmoronamiento, con tensiones comerciales y monetarias cada vez más intensas, y hasta la amenaza de su ruptura, en momentos en que se abren paso las tratativas por tratados de libre comercio con Estados Unidos y Europa. A los crecientes enfrentamientos y rivalidades entre las naciones latinoamericanas, le oponemos una acción común entre los pueblos del continente contra el imperialismo y sus agentes locales, la lucha por gobiernos de trabajadores y la unidad socialista de América Latina, para proceder a una reorganización integral de la región sobre nuevas bases sociales.

A la consigna de la Constituyente no puede dársele un valor universal, sino que es necesario ver su oportunidad y pertinencia en cada caso. Las tesis programáticas que aprobamos en el Congreso de 2004, donde conformamos la Coordinadora por la Refundación de la Cuarta Internacional, desarrolla un apartado donde valora positivamente la agitación de la Asamblea Constituyente para casos donde una crisis de poder aparece bajo la forma de una “crisis de representación política”. En ese sentido es una consigna democrática que plantea el derrocamiento del gobierno y un puente hacia al gobierno obrero. Su repetición mecánica para cualquier situación, haya o no crisis de poder, en nombre de la preparación de situaciones futuras, es un planteo democratizante: implica sustituir la pelea estratégica por un gobierno de trabajadores por una salida democrática, en el marco del orden social vigente.

Métodos de acción, dirección y partido

31. Un aspecto fundamental que pone al rojo vivo las grandes rebeliones en curso es la cuestión decisiva de la dirección del movimiento

obrero. Muchas de las rebeliones que han tenido lugar en el último período no han logrado extenderse más por la acción de bloqueo de las burocracias sindicales, entrelazadas con las patronales y los gobiernos. Como lo venimos reflejando en las páginas de *Prensa Obrera*, la CGT y otras centrales sindicales francesas vienen dosificando a cuentagotas el lanzamiento de medidas de fuerza nacionales cuando las circunstancias ponen en el orden del día la cuestión de la huelga general, lo que podría provocar un vuelco definitorio de la lucha que viene protagonizando el sector de transporte. Hay un esfuerzo por salvar la gobernabilidad, con la conciencia que una derrota de Macron podría llevárselo puesto y abrir una crisis revolucionaria. El esfuerzo de contención está bien presente también en nuestro continente. La CGT argentina contuvo a nuestro combativo movimiento obrero para que no derrotara la política ajustadora del macrismo. La CUT brasilera ha dejado pasar casi sin batalla las reformas laboral y previsual de Bolsonaro. Otro tanto ha ocurrido con la CUT chilena, dirigida por el estalinismo y la sindical Mesa de la Unidad Social.

32. La lucha por la recuperación de los sindicatos y las organizaciones de masas, expulsando a las burocracias colaboracionistas, reviste un carácter estratégico. El impulso de todo tipo de organismos (comités de huelga y otras) para coordinar las luchas y llevarlas al triunfo, es una tarea central en el propio curso de las irrupciones populares. Es altamente instructiva la experiencia francesa. Los obreros ferroviarios y del subte parisino sostuvieron una huelga indefnida durante 40 días, gracias al celo de la base de ambos gremios por tomar la huelga en sus manos, socavando el margen de maniobra de la burocracia. El activismo es el gran pilar de la lucha, que viene desafiando el chaleco de fuerza que representa la dirigencia sindical y apunta a romper el aislamiento, reclamando el lanzamiento de la huelga general de todo el movimiento obrero. Esto pone al rojo vivo la cuestión de reforzar aún más la articulación del activismo, impulsar coordinadoras, alentar la intervención activa de los trabajadores, la juventud y otros sectores que simpatizan con la lucha en curso. Un ejemplo que es necesario seguir con atención es el de los chilenos, con la aparición en escena de las asambleas territoriales, que nacen como iniciativa desde abajo y se estructuran como representación de la población en lucha. Esto no debe confundirse con los cabildos abiertos, que vienen articulados desde arriba y tienen como antecedente los órganos creados en su mo-

mento por el gobierno de Michelle Bachelet, para debatir las reformas impulsadas por el Ejecutivo. Las asambleas territoriales han ganado en extensión e incluso hay una tendencia a coordinarse regionalmente, y han sido una de las fuerzas motoras de las movilizaciones populares, en contraste con la contención que llevan adelante la oposición y las direcciones sindicales.

33. En el caso de Latinoamérica, el escenario convulsivo reinante le otorga especial vigencia a la lucha por Congresos de delegados de base de los sindicatos y de las masas que luchan, lo que va unido a la batalla por una nueva dirección clasista en el movimiento obrero. El Congreso de bases es una de las expresiones organizadas del frente único obrero, apunta a la construcción de un polo político, que puede revestir un carácter semisoviético, de modo tal que la clase obrera emerja como un factor independiente en la crisis y se catapulte como alternativa de poder. Esta orientación no debe confundirse con los planteos “sovietistas” o “basistas” que levantan numerosas fuerzas de izquierda e incluso partidos que se reclaman del trotskismo. El “basismo” (el famoso “que las bases decidan” del morenismo) pretende ser camuflado detrás del respeto de las resoluciones tomadas por las asambleas o congresos de trabajadores. Se confunde el respeto por la soberanía de las bases obreras con la orientación que debe ofrecer una fuerza que pretende erigirse como dirección política. Quienes desprecian el papel de la dirección revolucionaria en los órganos de auto-organización de la clase obrera y las masas, se declaran incompetentes en ayudar a las masas a superar los obstáculos que se le presentan en el desarrollo de la lucha contra el régimen y, a su turno, llevar una revolución a la victoria. Los órganos de auto-organización de las masas, que suelen emerger en todo proceso revolucionario, no aseguran de antemano la orientación revolucionaria del movimiento de lucha. Sin una dirección política revolucionaria, en determinado momento, los órganos de frente único de las masas pueden dejar de ser un factor de impulso de la lucha para pasar a ser un factor de freno. El partido revolucionario debe impulsar todos los procesos de auto-organización de las masas e intervenir en ellos siempre con una política independiente, para que el movimiento avance en un sentido revolucionario.

La lucha por esta orientación es inseparable de la lucha por la independencia política de los trabajadores y plantea agudamente romper y superar la tutela histórica de los partidos patronales -o sea, la cuestión

estratégica de la construcción de partidos obreros revolucionarios y una internacional, la Cuarta Internacional. Porque en esos momentos es donde es más importante la experiencia y la orientación de una vanguardia obrera y de la izquierda para sortear los impresionantes problemas que se plantean y llevar al poder a los trabajadores. Al retorno que pregonan el nacionalismo burgués y la centroizquierda a un equilibrio y conciliaciones imposibles entre los intereses del capital y los acreedores de la deuda y los trabajadores, le oponemos una salida anticapitalista y llamamos a luchar por gobiernos de trabajadores y la unidad socialista de América Latina.

Conferencia Latinoamericana

34. Tomado de conjunto, en el escenario político latinoamericano distinguimos dos grandes bloques políticos. Por un lado, la ofensiva recolonizadora y derechista de Trump y Bolsonaro, que tiene como eje de reagrupamiento político el Grupo de Lima. Este actúa (en tándem con la OEA) para imponer planes de ataque a cualquier tipo de resistencia nacional o popular. Fue constituido para tirar abajo al régimen de Maduro en Venezuela. Mike Pompeo ha declarado la disposición yanqui de intervenir y apoyar a los gobiernos latinoamericanos atenuados por las rebeliones populares.

Por el otro, el Grupo de Puebla, que se presenta como un polo “nacional y popular”, de cierta autonomía frente a la ofensiva imperialista. Pero se ha debilitado considerablemente y su oposición es bastante pusilánime. Está encabezado por el México de López Obrador, quien actúa muy tímidamente, porque ha puesto el grueso de sus cartas en el tratado de libre comercio con Estados Unidos de Trump y Canadá (UMSCA, en inglés) y se ha visto debilitado por la renuncia de Evo Morales frente al golpe en Bolivia. El ascenso electoral de Alberto Fernández no ha dado nuevos bríos a este reagrupamiento internacional, incluso se evidenció en la pobreza de las delegaciones internacionales que acudieron al acto de asunción. Y también en lo estrecho de su política ‘soberanista’: no rompe con el Grupo de Lima, mantiene a Hezbollah dentro del listado de organizaciones terroristas, cediendo a la presión del sionismo, hace buena letra con Trump para gestionar los acuerdos con el FMI, etc. Y ahora se agrega su condena a Maduro (aunque evitó sumarse a la declaración común del Grupo Lima) y la ausencia de una denuncia o condena frente al asesinato del general iraní.

35. Lo que está ausente es un polo anti-imperialista de la izquierda, de los trabajadores, campesinos, indígenas, estudiantes y demás sectores explotados del continente. Pero la convulsión social y política que se está desarrollando plantea no solo esta necesidad, sino la oportunidad de ese tercer bloque. En esto se basa nuestro llamado a la realización de una Conferencia Latinoamericana de la izquierda y el movimiento obrero combativo, partiendo de la urgencia de establecer un reagrupamiento alternativo a la derecha, pero también al nacionalismo y el progresismo, que se interponen como un escollo para llevar a la victoria las luchas planteadas.

Los esfuerzos del Grupo de Puebla no están centrados en abrir un curso independiente -ni siquiera en retomar la experiencia chavista o del Foro de San Pablo-, sino en postularse como los socios más fiables para el imperialismo, en un contexto de gran volatilidad. El fracaso de la experiencia golpista de Guaidó en Venezuela, los límites para institucionalizar el golpe en Bolivia y los problemas crecientes de los derechistas Bolsonaro y Duque, sumados a las rebeliones en curso, alienta la expectativa en sus promotores de que un sector más pragmático de la burguesía y del imperialismo empiece a considerar el “plan B”: gobiernos que garanticen tanto una contención de las crecientes tendencias a rebeliones populares como los compromisos comerciales y de la deuda. Pero esa apuesta, por ahora, se mueve en un terreno arenoso. Todavía deben demostrar que pueden, efectivamente, imponer el orden en la región. El intento de proyección regional de Fernández y López Obrador ya está siendo acompañado de un relato posibilista y de mal menor, con el único fin de maniatar a los trabajadores y arrastrarlos, una vez más, detrás de las burguesías nacionales. Pero, como nunca, está corrido a la derecha.

36. Tal cual lo señalamos en el texto de convocatoria a la Conferencia Latinoamericana, “La política de colaboración de clases se ha revelado como un escollo central para conducir la lucha de los trabajadores y las masas a una victoria. La izquierda latinoamericana mayoritariamente ha terminado siendo arrastrada como furgón de cola de esta política. Ha hecho un seguidismo al PT brasileño, como es el caso del PSOL, al nacionalismo bolivariano o terminado haciendo causa común con la derecha en nombre de la democracia. Se ha venido dando aliento al movimientismo, promoviendo alianzas y nucleamientos con fronteras de clase amorfas y difusas, en lugar de la construcción

de partidos obreros revolucionarios. Una de las pocas excepciones es la experiencia recorrida por el Frente de Izquierda en Argentina. Rescatamos al FIT, y ahora al FIT-U, como un campo de independencia de clase que contrasta con el escenario reinante. El punto de partida y la base de desarrollo del FIT ha sido una demarcación con el nacionalismo burgués y los partidos patronales, en especial con la gestión kirchnerista. No se nos escapan, sin embargo, las contradicciones y los límites del mismo: se ha circunscripto, prácticamente, a una intervención meramente electoral. Nuestro esfuerzo y nuestra política están dirigidos a ampliar el horizonte de acción del FIT-U a todos los terrenos de la lucha de clases”.

La nueva situación que atravesamos en América Latina y en el mundo vuelve más actual que nunca la cuestión de la estrategia de la izquierda.

Por una Conferencia Latinoamericana de la izquierda y el movimiento obrero

Llamamiento al FIT-U, a la izquierda y al movimiento obrero combativo

Comité Nacional del Partido Obrero

A continuación publicamos el llamamiento que el Comité Central de Partido Obrero envió el pasado 27 de noviembre a los partidos del FIT-U, a la izquierda y al movimiento obrero combativo con el propósito de “convocaren común de una Conferencia Latinoamericana, sobre la base de la defensa de la independencia de clase; la denuncia y delimitación con los frentes y la política de colaboración de clases y por la victoria de las rebeliones en curso mediante el impulso de la acción directa y la huelga general, y poner fin a los gobiernos ajustadores y su sustitución por gobiernos surgidos de las masas en lucha”.

Estamos ingresando en un nuevo escenario mundial, signado por la irrupción de grandes levantamientos populares. Esta onda ascendente tiene sus expresiones, con sus particularidades, en Medio Oriente, en Europa y en Asia. América Latina, por su parte, ha pasado a ser uno de los epicentros de este proceso. Chile es, sin dudas, la expresión más álgida de este fenómeno, al que se han sumado también los trabajadores y el pueblo colombiano. Y la lucha de las masas en Bolivia contra el golpe reaccionario ha estremecido a todo el continente.

Estos levantamientos son inseparables de la bancarrota capitalista, que viene haciendo su trabajo implacable de topo y cuyos efectos de-

vastadores se hacen sentir sobre las masas, que reaccionan y ganan las calles para enfrentar brutales planes de ajuste y austeridad.

La economía mundial avanza a una recesión, que es lo que se pretendió evitar apelando al rescate de los Estados. Los síntomas de una debacle financiera, como la que se precipitó en 2008, están a flor de piel. Como telón de fondo, está la crisis de sobreproducción y sobreacumulación de capitales que se extiende tanto a la producción industrial, incluida las industrias de punta, como a la que produce las materias primas. Las tendencias deflacionarias hoy reinantes traducen la declinación en los niveles de rentabilidad, que está en la base de la huelga de inversiones.

La capacidad de hacer frente a la perspectiva de una recesión es sensiblemente inferior a la de diez años atrás. Los recursos de los Estados para rescatar el capital se han ido agotando. El impasse capitalista es lo que está en la base de la intensificación de las guerras comerciales Y, a su turno, es el caldo de cultivo para la intensificación de las escalladas y conflictos bélicos -o sea, de la guerra misma.

Desde el punto de vista político estamos frente un escenario de extrema volatilidad. Desde el Partido Obrero salimos tempranamente al cruce del impresionismo de quienes, incluso en el campo de la izquierda, estaban encandilados por un auge de la derecha. Asistimos a una creciente polarización surcada por rebeliones, crisis políticas, guerras y golpes de Estado, donde la confrontación entre revolución y contrarrevolución se está abriendo paso.

América Latina

La bancarrota capitalista ha golpeado de lleno a América Latina. Esto es consecuencia directa de la caída de los precios de las materias primas que constituye el grueso de las exportaciones latinoamericanas; de la recesión y del freno del comercio mundial, agravado por las guerras económicas entre Estados Unidos y la Unión Europea y China; del encarecimiento del crédito y las fugas de capitales hacia las metrópolis imperialistas. Y sobre ello, el peso agobiante de las deudas externas, que constituyen un mecanismo de opresión nacional y confiscación popular.

Brasil se encuentra asediado por la magnitud de su deuda pública. Esta, junto a su déficit fiscal y la “inestabilidad política” de la región derivó en una devaluación del real, que ha llegado a su mayor depreciación desde 1994. Al gigante latinoamericano se le estrechan sus fuentes de financiamiento y se profundiza la fuga de capitales. Esto

conspira contra los planes de Bolsonaro de consolidar un régimen fascista. La suerte que corra el gobierno brasilero es fundamental porque, como lo revela el golpe en Bolivia, constituye uno de los baluartes de la reacción y una amenaza para todos los pueblos de América Latina.

Chile, considerado “un oasis” y como el “modelo” a imitar no ha escapado tampoco a los coletazos de la crisis mundial: la caída de los precios del cobre, desaceleración de su economía, el fenomenal peso del pago de los intereses de la deuda externa. El gobierno del colombiano Duque, en pos de apuntalar la tasa de beneficio empresarial, ha intentado asentarse en el poder por medio de un plan de reformas ajustadoras: una reforma laboral que instituye la contratación por horas, la elevación de la edad jubilatoria, la formación de un holding financiero con empresas estatales, la privatización de Ecopetrol y la regimentación de la protesta social.

De conjunto, los acontecimientos en América Latina ponen de relieve la incompatibilidad entre el sometimiento del FMI y la satisfacción de las necesidades populares. La expectativa que abriga el nuevo gobierno de Fernández en la Argentina de llevar adelante una reestructuración de deuda en la cual el FMI aceptaría extender plazos de pagos sin poner condiciones draconianas, se ha revelado infundada. Su discurso, basado en repetir la experiencia de Néstor Kirchner de 2003, carece de una base “realista”, porque la situación de la economía mundial y en particular su impacto en los países periféricos es diametralmente diferente.

Las rebeliones en curso son una bocanada de aire fresco para derrotar los ajustes en curso y ponen al rojo vivo la necesidad de una reorganización integral de la región sobre nuevas bases sociales. La lucha por la expulsión del FMI -para que la crisis la paguen los capitalistas, por el no pago de las deudas externas; por la nacionalización del sistema bancario y el comercio exterior, sin indemnización y bajo control obrero, para terminar con las devaluaciones y la fuga de capitales y poner los recursos al servicio de un plan de industrialización y la satisfacción de las necesidades apremiante del pueblo- tiene vigencia en toda América Latina. Esta tarea está reservada a los trabajadores, que la deberán tomar en sus manos como parte de una transformación social de sus países bajo su conducción política.

Importa señalar que los ajustes de cuño fondomonetaristas, ya sea con el acuerdo formal o no del FMI, no solo han sido llevados adelante por gobiernos que se reclaman derechistas -como los de Piñera en Chile,

Duque en Colombia, Macri en Argentina o Bolsonaro en Brasil- sino también por los “nacionales y populares” y frente populistas, como los de Lenín Moreno en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, el Frente Amplio en Uruguay y el sandinista Ortega en Nicaragua. Esto habla de las limitaciones insalvables del nacionalismo burgués y del progresismo centroizquierdista para proceder a una emancipación nacional y social de los países latinoamericanos. Sus ataduras de clase los vuelven impotentes para dar una respuesta y una salida frente a las tendencias dislocadoras de la bancarrota capitalista, y terminan cediendo a las presiones y a la extorsión del capital financiero. Esto conduce a una desorganización y descalabro económicos, a penurias inauditas para las masas y abre paso o pavimenta el camino a la reacción derechista.

El carácter reaccionario y proimperialista de la ofensiva golpista en Venezuela, emprendida por la oposición de los Guaidó y el imperialismo yanqui, no exime a los revolucionarios de balancear la experiencia chavista. Quien supo ser la expresión más radical del nacionalismo latinoamericano, arrojándose incluso la bandera del “socialismo del siglo XXI”, carga con sus propias responsabilidades por la crisis venezolana. Con el derrumbe de los precios de las materias primas, el estatismo capitalista mostró todas sus limitaciones, y el régimen chavista trocó de un régimen plebiscitario a un régimen de facto, lo que terminó por acicatear la ofensiva de la reacción política.

La integración latinoamericana, que tenía como abanderados al nacionalismo y progresismo latinoamericano ha terminado en un fracaso. Ni qué hablar de los proyectos más ambiciosos, como el Unasur. El Mercosur no pasó de ser una integración de los monopolios radicados en la región, con intereses e inversiones en los países miembros. Hoy asistimos a su desmoronamiento, con tensiones comerciales y monetarias cada vez más elevadas y hasta la amenaza de su ruptura, en momentos en que se abren paso las tratativas por tratados de libre comercio con Estados Unidos y Europa. A los crecientes enfrentamientos y rivalidades entre las naciones latinoamericanas le oponemos una acción común entre los pueblos del continente contra el imperialismo y sus agentes locales, la lucha por gobiernos de trabajadores y la unidad socialista de América Latina.

Derrotar al golpe en Bolivia. Por el triunfo de las rebeliones populares

En medio del fragor de la lucha, estamos asistiendo a un operativo por desactivar la rebelión latinoamericana en curso. La “salida” consensuada por el MAS con el nuevo gobierno golpista está en contradicción

con la heroica resistencia popular que trata de abrirse paso para enfrentarlo. Evo Morales ya anticipó esa línea de acción al decidir renunciar sin promover una rebelión, en nombre de evitar un “derramamiento de sangre”. Lejos de evitarlo, como lo han demostrado otras experiencias en el pasado, ha dado pie a que se desarrollara con más saña. La reunión del Grupo Puebla, realizada en Buenos Aires hace solo unos días, se limitó a emitir comunicados de lamento, sin llamar nunca a las masas a la acción. Para estos políticos, el golpismo oligárquico es un mal menor en relación con el mal mayor que representa la acción histórica independiente de las masas explotadas.

El “Acuerdo por la Paz” en Chile, rubricado por toda la oposición, apunta a un salvataje del gobierno de Piñera y a sacar a las masas de la calle. Denunciamos la reforma constitucional que se está cocinando y la Asamblea Constituyente amañada, emanada de ese pacto. Llamamos a reforzar la lucha para que se vaya Piñera mediante el impulso de una huelga general indefinida y la convocatoria, por parte de las organizaciones de las masas en lucha, de una Asamblea Constituyente libre y soberana, que discuta y tome en sus manos la reorganización integral del país sobre nuevas bases sociales. En la misma línea de rescate se anota la “mesa de diálogo” que impulsa Iván Duque en Colombia. En oposición a esta trampa, se hace necesaria la formación de asambleas populares y la profundización de las medidas de lucha hacia la huelga general que derrote al gobierno ajustador y proimperialista.

Los resultados que arrojen los combates que se libran en las calles de La Paz, en Santiago, en Bogotá serán determinantes para la situación de toda América Latina. Va a ser determinante para derrotar las reformas laborales y previsionales que se están implementando y las que están en carpeta. Estamos en presencia de una ofensiva estratégica, pues la clase capitalista pretende imponer un retroceso histórico en las condiciones de vida de las masas.

En oposición a estos planes, planteamos la lucha por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar; una jubilación equivalente al 82% del salario del trabajador en actividad; derecho al convenio colectivo de trabajo; control obrero de los procesos de trabajo; fin de la desocupación, por el reparto de las horas de trabajo sin reducción salarial.

América Latina es también el escenario de una pelea de buitres por adueñarse de las grandes riquezas. Tras del golpe boliviano, está la disputa por quién se queda con el litio, del cual el país del Alt-

plano posee el 70 por ciento de las reservas. Del mismo modo, está en juego quién se queda con el petróleo, el gas y los minerales. La guerra comercial entre Estados Unidos y China ha desembarcado con fuerza en nuestro continente. Rechazamos esta competencia ruinosa que refuerza la condición neocolonial de la región, y le oponemos la nacionalización sin indemnización del petróleo y el gas, el conjunto de la actividad minera y de los recursos naturales, bajo control obrero, para colocarlos al servicio de un desarrollo independiente y de las necesidades populares.

El atropello, la violencia y la saña contra las comunidades indígenas refleja el odio y prejuicios de clase ancestral de las clases acomodadas contra los sectores más humildes y postergados. Pero el racismo actual, asimismo, tiene un contenido específico y está asociado a la concentración de la tierra y la expulsión de los campesinos y las poblaciones aborígenes que la habitan al servicio de una depredación sin precedentes. Detrás del golpe de Bolivia están los sojeros de la Media-luna occidental, fuertemente entrelazados económicamente con los hacendados brasileños, que vienen llevando adelante el desmonte y la deforestación de la región a niveles récord. Por la defensa del Amazonas brasileño, boliviano y venezolano, la Patagonia y los Andes de la depredación capitalista: defensa de los derechos de las comunidades indígenas, control obrero-popular de los emprendimientos mineros, petroleros y agropecuarios. Apoyo a las luchas campesinas contra la expulsión por los latifundistas y el capital financiero. Por la expropiación del capital agrario y la nacionalización de la tierra, y su cesión a los trabajadores del campo y a los pequeños productores para que la trabajen.

Derrotar el golpe en Bolivia significa también un golpe a las iglesias, tanto católicas como evangélicas, que vienen jugando un papel activo en los preparativos y en el sostenimiento del golpe. Al igual que los viejos conquistadores, los golpistas han consumado esta conspiración enarbolando la biblia y la cruz. Bolivia desnuda, como nunca, al clericalismo, en sus diversas variantes, como un bastión de la reacción, del mismo que los tiene como enemigos número uno de los derechos de la mujer, encabezando en todos los rincones del continente las cruzadas contra el derecho al aborto, la educación sexual y cualquier otra reivindicación democrática. Frente a este escenario, llamamos a impulsar la movilización por la separación de la Iglesia del Estado; por el derecho a la educación sexual integral, la anticoncepción gratuita y

la legalización del aborto; por el derecho a la maternidad, subsidios a la mujer embarazada hasta el tercer año de crianza; por la organización independiente de la mujer para luchar contra la violencia social y estatal.

No se nos puede escapar que los acontecimientos en desarrollo van a tener incidencia en los planes de militarización en marcha. Bolivia es el laboratorio de una escalada que va dirigida contra Venezuela, Nicaragua y Cuba. La derrota del golpe sería un mazazo, en primer lugar contra Bolsonaro y sus ambiciones de armar un régimen fascista, aunque cada vez se encuentra más en aprietos para avanzar en sus proyectos. Y sería también un golpe a todas las tendencias a la bolsonarización que existen al interior de los Estados latinoamericanos y, más de conjunto, al reforzamiento del aparato represivo y la criminalización de la protesta social que se viene constatando en el continente. Ante este escenario, planteamos: frente único de las organizaciones de trabajadores para luchar contra el fascismo y el desarme de los ‘grupos de tareas’ y ‘escuadrones de la muerte’, mediante la acción directa y la organización; juicio y castigo a todos los responsables políticos y materiales de los asesinatos de luchadores en Chile, Bolivia, Ecuador y Colombia; fuera las bases militares extranjeras de América Latina; abajo la militarización de la lucha contra el narcotráfico; derogación de todas las leyes represivas; fuera el ejército de Río de Janeiro y las favelas, de La Paz y de Bogotá; disolución de los escuadrones de la muerte y parapoliciales, esclarecimiento del asesinato de Marielle Franco; absolución de Daniel Ruiz y César Arakaki, luchadores obreros y militantes de la izquierda revolucionaria, enjuiciados por luchar contra la reforma jubilatoria en Argentina.

Por la defensa de la independencia de clase

La política de colaboración de clases se ha revelado como un escollo central para conducir la lucha de los trabajadores y las masas a una victoria. La izquierda latinoamericana mayoritariamente ha terminado siendo arrastrada como furgón de cola de esta política. Ha hecho un seguidismo al PT brasileiro, como es el caso del PSOL, al nacionalismo bolivariano o terminado haciendo causa común con la derecha en nombre de la democracia. Se ha venido dando aliento al movimientismo promoviendo alianzas y nucleamientos con fronteras de clase amorfas y difusas, en lugar de la construcción de partidos obreros revolucionarios.

Una de las pocas excepciones es la experiencia recorrida por el Frente de Izquierda en Argentina. Rescatamos al FIT, y ahora al FIT-U, como un campo de independencia de clase que contrasta con el escenario reinante. El punto de partida y la base de desarrollo del FIT ha sido una demarcación con el nacionalismo burgués y los partidos patronales, y en especial con la gestión kirchnerista. No se nos escapan, sin embargo, las contradicciones y los límites del mismo: se ha circunscripto, prácticamente, a una intervención meramente electoral. Nuestro esfuerzo y nuestra política están dirigidos a ampliar el horizonte de acción del FIT-U a todos los terrenos de la lucha de clases.

En oposición a la política funesta de colaboración de clases, al sacrificio de la lucha revolucionaria en pos de la obtención de escaños parlamentarios y al movimientismo, reivindicamos el método de la lucha de clases y, sobre esta base, llamamos a la izquierda que se reivindica clasista y al movimiento obrero combativo a convocar una Conferencia Latinoamericana con la finalidad de forjar un polo de independencia política a escala de todo el continente.

Este llamado está dirigido en especial a los partidos que integran el FIT-U, a quienes les proponemos que tomemos resueltamente la iniciativa.

El reagrupamiento de fuerzas que proponemos está al servicio de impulsar las rebeliones actuales para llevarlas a la victoria, cuya suerte está más que nunca atada a la independencia política que logren conquistar los movimientos de lucha que están al frente de este proceso. El reagrupamiento de fuerzas que planteamos apunta a colaborar con el esfuerzo que vienen realizando los trabajadores que están desafiando la contención y los pactos que se están cocinando a sus espaldas.

Ante el complot de los gobiernos de la región en favor del golpe en Bolivia, es necesario oponerle la acción coordinada de los trabajadores, los campesinos y la juventud de América Latina. Llamamos a impulsar la lucha por una acción huelguística unificada de la CGT de la Argentina, la CUT de Brasil, la PIT-CNT de Uruguay, la CUT de Chile y el resto de las centrales obreras y organizaciones populares de América Latina.

Un aspecto fundamental que pone al rojo vivo las grandes rebeliones en curso es la cuestión decisiva de la dirección del movimiento obrero.

La batalla por recuperar las organizaciones de masas, en primer lugar los sindicatos, expulsando a las burocracias entreguistas, revis-

te un carácter estratégico. Esto plantea alentar en el propio curso de las irrupciones populares todo tipo de organismos (comités de huelga y otros) que permitan coordinar las luchas y llevarlas al triunfo. El escenario convulsivo de Latinoamérica le otorga especial vigencia al llamado a congresos de delegados de base de los sindicatos y de las masas que luchan, lo que va unido a la batalla por una nueva dirección clasista en el movimiento obrero. El Congreso de bases apunta a que la clase obrera emerja como un factor independiente en la crisis y se catapulte como alternativa de poder. El equilibrio y la conciliación de intereses entre el capital y los trabajadores, que pregona el nacionalismo burgués y el centroizquierda, no es más que una utopía reaccionaria, que apunta a entrapar a los trabajadores como furgón de cola de la burguesía. En oposición a esto, planteamos la lucha por una salida anticapitalista y una transformación integral del continente bajo la dirección de la clase obrera.

Resumiendo, hacemos un llamado a las organizaciones nucleadas en el FIT-U y a todas las corrientes de la izquierda revolucionaria, como el PSTU de Brasil, y al movimiento obrero combativo, a la convocatoria en común de una Conferencia Latinoamericana sobre la base de la defensa de la independencia de clase; la denuncia y delimitación con los frentes y la política de colaboración de clases, y por la victoria de las rebeliones en curso mediante el impulso de la acción directa y la huelga general, así como poner fin a los gobiernos ajustadores y su sustitución por gobiernos surgidos de las masas en lucha. Llamamos a reivindicar y luchar por gobiernos de trabajadores y por la unidad socialista de América Latina.

La lucha contra el golpe de Estado en Bolivia y por la victoria de las rebeliones en América Latina plantea el desafío de derrotar al ajuste y a los ajustadores capitalistas y sus gobiernos en cada uno de nuestros países. La derrota de ellos es la mejor forma de contribuir a la lucha que tenemos planteada.

Argentina: más cerca de Grecia que del crecimiento

Gabriel Solano

Aunque el tiempo transcurrido pueda parecer aún muy reducido, lo cierto es que las señales dadas por el gobierno de Alberto Fernández permiten sacar una conclusión clara de cuáles son los objetivos y la orientación social de su presidencia. No se puede pasar por alto, por ejemplo, que haya elegido como su primer destino al extranjero a Israel, para participar de un evento montado por el sionismo y entrevistarse de modo amistoso con Benjamín Netanyahu. El club de amigos de Irán, que milita al interior del gobierno, no abrió la boca ante este hecho, ignorando incluso que las alabanzas al sionismo se realizaron en momentos que éste se apresta a aplicar junto con Donald Trump un plan de pillaje territorial contra el pueblo palestino de proporciones inauditas. El silencio de estos amigos de Irán se explicaría por una información que difundieron ampliamente los medios de comunicación: la autora ideológica del viaje a Israel fue Cristina Fernández de Kirchner. Tampoco puede ignorarse el sentido de la gira europea realizada luego de finalizado el periplo prosionista. En un mensaje de cuño macrista, Alberto Fernández fue a buscar fotos con los jefes de Estado más importantes de la imperialista Unión Europea, para afirmar luego de que “el mundo nos apoya”. Su visita al Vaticano estuvo lejos de reducirse a un evento simbólico o espiritual, pues fue la oportunidad para buscar un acercamiento directo al

FMI, bendecido personalmente por el Papa. Tampoco las alabanzas a los jefes de Estado de la Unión Europea cuidaron ni las formas más elementales. A Emmanuel Macron le regaló un “pensamos igual”, sin importarle que en Francia está en marcha un levantamiento obrero y popular contra la reforma jubilatoria de su “nuevo amigo” y que éste, desde hace más de un año para aquí, recurre a represiones contra los trabajadores con detenciones masivas y procesamientos judiciales. Por último, el poco tiempo transcurrido alcanzó y sobró para aprobar un paquete de ajuste en el Congreso, denominado hipócritamente “ley de solidaridad”, que anuló la movilidad jubilatoria e impuso un impuestazo contra los trabajadores, y luego una ley reclamada por los acreedores internacionales para reestructurar la deuda. El apoyo dado por el macrismo a esta iniciativa debiera alcanzar para despejar toda duda sobre su naturaleza antinacional.

“Es la deuda, estúpido”

El propósito explícito de estas giras y las primeras leyes enviadas y aprobadas por el Congreso es muy claro: llevar adelante el proceso de reestructuración de la deuda pública argentina, que está en un virtual default. Todas las medidas del gobierno han quedado subordinadas a este objetivo. La prueba más clara de ello es lo que sucede con el Presupuesto 2020, que ha quedado postergado hasta nuevo aviso. La decisión adoptada ha sido que su elaboración se realizará solo luego de que haya concluido el proceso de reestructuración de la deuda. La decisión fue fundamentada en que no se puede determinar los gastos del Estado en materia de salud, educación, jubilaciones y coparticipación federal, entre otras erogaciones, si antes no se establece junto con los acreedores y el FMI, cuánto va a insumir el gasto público en materia de deuda, sean intereses o capital. El sentido proimperialista de esta decisión salta a la vista. Es una confesión indisimulada de que todos los gastos del Estado quedarán subordinados a la deuda y que la decisión final quedará en manos de los acreedores y del FMI. El Congreso, que tiene la facultad de votar el Presupuesto, quedará reducido a la nada. Los opositores macristas tampoco han protestado, por verse reducidos a una escribanía de los pactos acordados por los acreedores y el gobierno. Es más, asumen gustosos esa función. Elisa Carrió fue la más enfática en defender un acto antirrepublicano cuando pidió en la sesión que aprobó la autorización para reestructurar la deuda que debía votarse rápido, antes de que cerrara la ronda de Wall Street,

y que convenía no hacer discursos, porque luego las palabras de los diputados podrían ser usadas por los abogados de los fondos buitres en juicios contra el país. Nadie se indignó ante pedido semejante, siendo que equivalía a admitir una autocensura del Congreso Nacional, colocado en estado de vigilancia por los fondos de inversión. La ley de reestructuración de deuda votada por peronistas, kirchneristas y macristas delega al Poder Ejecutivo los arreglos referidos a la reestructuración en todo lo que importa -o sea, determinar el capital, los plazos y la tasa de interés. Lo que sí precisaron fue la autorización para prorrogar la jurisdicción de los tribunales extranjeros de los bonos que vayan a emitirse, un requisito innegociable del capital financiero internacional. Pero la falta de elaboración del Presupuesto 2020 no solo equivale a un acto de entrega de la soberanía nacional, sino que revela también la pretensión de gobernar arbitrariamente, sin control alguno del Parlamento y, lo que es más importante, ahorrándose el costo de pasar por un debate público sobre cuál debe ser el sentido del gasto del Estado. En ausencia de una ley de Presupuesto o al menos de un proyecto del gobierno, nadie sabe a ciencia cierta cuáles son los fondos que se destinan para salud, educación, etc.; tampoco si éstos cubren o no la inflación del período y cuál es la relación entre el Estado nacional y las provincias.

La promesa de que esta ausencia se subsanaría rápidamente, dado que el gobierno puso como fecha límite para la reestructuración de deuda el 31 de marzo, es por completo inverosímil. Como lo han probado los reveses de Kicillof para reestructurar la deuda de la provincia de Buenos Aires, y el fracaso de Guzmán con el vencimiento de 100.000 millones de pesos del Bono Dual en febrero, la renegociación de la deuda debe ser caracterizada como un proceso de crisis y choques en el que intervienen intereses enfrentados de distintos sectores capitalistas a nivel local e internacional. Con una deuda que se acerca al 90% del PBI y que está nominada mayormente en moneda extranjera, la posibilidad de una reestructuración en un plazo muy breve suena a ilusión. Esto porque requiere de una quita significativa, que enfrentará con seguridad la resistencia de al menos un sector de los bonistas. Este sector está representado por los que adquirieron los bonos al momento de la emisión. Para estos, una quita conlleva admitir pérdidas importantes, que quieren evitar o al menos reducir. En cambio, para quienes adquirieron los bonos en el mercado secundario a la cotización actual, que ronda un 45% de su valor de emisión, una

quita, por ejemplo, del 20% representaría beneficios cercanos al 90%. Una quita importante, sin embargo, plantea otro tipo de problemas, pues podría llevar a que los actuales tenedores vendan los bonos para hacerse rápidamente de dinero. Los compradores podrían ser los fondos buitres, cuyo negocio consiste en comprar a precio de remate, no admitir quitas y litigar para cobrar el valor original. Según varios cronistas, esto ya estaría sucediendo, al menos desde el derrumbe de la cotización de los títulos de deuda que se operó con la derrota de Mauricio Macri en las Paso. De ser así, al gobierno se le hará cuesta arriba reunir el piso mínimo del 75% para llevar adelante la reestructuración. Pero como ese piso se aplica a cada bono en particular y no a la totalidad de la deuda, puede crearse un escenario de default parcial, en el cual el gobierno logre arreglar algunos bonos y otros no. Esto estiraría el default en el tiempo y hasta abriría la posibilidad de que los bonistas hagan uso del derecho a reclamar la aceleración de los pagos, una cláusula que habilita a los acreedores a reclamar la devolución de la totalidad de la deuda ante un incumplimiento parcial.

El peso de la deuda alcanza también a la emitida en moneda nacional y a la que tienen las provincias y las corporaciones capitalistas. En relación con la primera, solo en el primer semestre se acumulan vencimientos del Estado nacional del orden de los 500.000 millones de pesos. Originalmente se afirmaba que esa deuda no era preocupante, porque se la podía renovar con facilidad o en su defecto recurrir a la emisión para cancelar los vencimientos. Sin embargo, una emisión de esa magnitud provocaría mayores desequilibrios, empezando por su impacto en la inflación y en los tipos de cambio paralelos. La renovación, por otro lado, reclama ofrecer una tasa de interés superior, lo que tiene su impacto sobre el nivel de actividad, agudizando las tendencias recesivas preexistentes. En relación con las provincias, las deudas acumuladas superan los 20.000 millones de dólares, de los cuales 4.000 deben pagarse en 2020 y 4.100 en 2021. Como casi el 90% de los vencimientos son en dólares, el peso de la devaluación representó un salto enorme en relación con los presupuestos provinciales que dependen de una recaudación en pesos. Por esto mismo, las deudas provinciales se entrelazan con la deuda del Estado nacional, porque aún en el caso de que los gobiernos locales logren reunir los pesos necesarios para pagar los vencimientos, los dólares deberán obtenerlos del Banco Central, cuyas reservas deben actuar como garantía de la totalidad de la deuda, sea del Estado nacional o de las provincias. Bien visto, sucede algo similar con las corporaciones capitalistas, cuyas deudas también

requieren la utilización de esas reservas del Banco Central. La deuda corporativa se ha puesto sobre el tapete por la situación de Vicentin, una de las grandes agroexportadoras del país, que se ha presentado en concurso de acreedores porque no puede enfrentar sus vencimientos, que rondan los 1.300 millones de dólares. Si esta situación alcanza a Vicentin, es de esperar que otras empresas sigan un camino similar.

El FMI

A la luz de lo expuesto, queda claro que la renegociación de la deuda se asoma como un *vía crucis* para el gobierno. La presión de los acreedores y el peso general de la deuda puede llevarlo al default, que es su escenario más temido. Ante esto, su decisión original de negociar con los acreedores privados primero, dejando al FMI en segundo plano, parece haber quedado en el olvido, para pasar sin estación intermedia a la búsqueda casi desesperada de un pacto con el Fondo y con los países imperialistas, que son sus principales mandantes. La nueva hoja de ruta coloca al FMI en primer lugar, buscando un apoyo no solo para refinanciar los vencimientos que superan los 40.000 millones de dólares, que deben ser cancelados con el organismo en los próximos años, sino por sobre todas las cosas queriendo tenerlo como aliado para imponerle a los bonistas una quita de la deuda privada. Como ya dijimos más arriba, la visita presidencial al Vaticano formó parte de este operativo político, cuya expresión mediática siguió la tónica macrista de hablar de un “nuevo FMI”, distinto al del pasado, que imponía ajustes.

Así las cosas, el gobierno está jugando su futuro a un pacto con el FMI para poder llevar adelante la reestructuración de la deuda en virtual default. Pero colocar al FMI como una carta clave para enfrentar a los bonistas es una expectativa infundada. En la actualidad, hay un choque entre el Fondo y los bonistas. Dicho organismo internacional viene reclamando una quita que entra en colisión con las pretensiones de los acreedores privados de la deuda, pero esas contradicciones no nos pueden hacer perder de vista que el FMI es un representante de las grandes metrópolis imperialistas y, como tal, privilegia, por sobre todas las cosas, a sus propios capitales, que son justamente los poseedores de la deuda pública de nuestro país. Estamos lejos de un arbitraje neutral. Pero, lo más importante es que, más allá de las diferencias, ambos coinciden en la necesidad de un ajuste en regla de Argentina que asegure un superávit fiscal, de modo de reunir los recursos ne-

cesarios para hacer frente a sus compromisos. En ese plano, por más tensiones que hayan, los bonistas reconocen y delegan en el FMI un rol estratégico como auditor de las cuentas de la Argentina y garante, en última instancia, para el repago de la deuda.

Es cierto que en la negociación de la deuda el gobierno tiene a favor una de las manifestaciones de la crisis mundial, que es la baja tasa de interés internacional. Para sectores amplios del capital financiero, reciclar la deuda argentina podría ser un negocio jugoso si se lo compara con las tasas de interés del 1% que rige en los países centrales- ¡hay unos 15 billones de dólares invertidos en tasas negativas! Incluso con una rebaja de la tasa actual, los rendimientos ofrecidos por Argentina podrían representar beneficios superiores del 700% o más de lo que pagan los principales Estados. Este hecho a favor se ve contrarrestado por otras manifestaciones directas de la crisis mundial, empezando por la guerra comercial y las manifestaciones muy claras de que estamos ingresando en una fase recesiva internacional. Esto afecta los precios de las materias primas que Argentina exporta, empezando por la soja, y también bloquea un aumento de las exportaciones por cantidad. La cuestión de las exportaciones ocupa un lugar importante en el análisis, porque la posibilidad de repago de la deuda depende en buena medida de la relación que existe entre las ventas externas y los pasivos del país. Incluso esta relación es más adecuada que la medición de deuda vs. PBI, ya que la primera es un stock en divisas y el segundo es un flujo en pesos, cuya conversión en dólares puede estar inflada en momentos de atraso cambiario. En este punto debe subrayarse que el superávit comercial obtenido bajo el gobierno macrista en su última fase es por completo parasitario, pues se basa en una caída de las importaciones como resultado de la devaluación y, sobre todas las cosas, de la recesión. Una reactivación económica, aún leve, reduciría o anularía ese superávit comercial, porque implicaría una salida en dólares en la compra de insumos, maquinaria o tecnología que se paga en dólares, cerrando la única fuente de dólares que tiene la Argentina ante la ausencia de inversiones externas significativas o acceso al mercado de créditos internacional.

Contradicciones explosivas

Esta tendencia al default de la deuda argentina, tanto del Estado nacional como de las provincias e incluso de una parte de la deuda corporativa, opera en una realidad signada por contradicciones ex-

plosivas. Las medidas tomadas por Alberto Fernández en sus primeras semanas implican postergar la resolución de esas contradicciones, a la espera de que una reestructuración de la deuda podría ofrecer mejores condiciones para buscar una salida. En ese sentido juegan el congelamiento de las tarifas, del transporte, de los combustibles y también del tipo de cambio oficial. Es imposible que estos congelamientos decretados por seis meses se extiendan en el tiempo, dado el alto costo que imponen para la economía. Sucede que la contraparte de esos congelamientos es el crecimiento de los subsidios a las empresas privatizadas y del transporte público. Solo para estas últimas, el gobierno dispuso recientemente 1.500 millones de pesos de subsidios para compensar el congelamiento tarifario. Con un estado con déficit fiscal, esos subsidios solo pueden financiarse con más emisión o con nueva deuda. Una mayor emisión, como ya señalamos, choca con la inflación y con la política de reducción de la tasa de interés. Otra de las consecuencias del congelamiento tarifario es la falta de inversiones, como lo vimos de modo muy claro en los últimos años. Los subsidios tampoco alcanzan a convencer a los capitalistas para invertir, dado que parten de la comprensión de que la permanencia de los mismos está supeditada a la capacidad fiscal del Estado. Las consecuencias de la falta de inversión son los cortes de suministro y, en determinado momento, la necesidad de recurrir a importaciones para compensar la falta de producción interna. Bajo el gobierno kirchnerista una de las principales causas de crisis de divisas fue la caída de la producción hidrocarburífera, que requirió ser compensada con importaciones de gas y petróleo, que insumían miles de millones de dólares por año. Los monopolios petroleros exigen para realizar inversiones una dolarización de los precios internos, la habilitación para la exportación y la libre disponibilidad de las divisas para girarlas al exterior, todo esto sumado a mayores concesiones en materia laboral y fiscal. El gobierno había hecho un eje especial en la campaña con Vaca Muerta, colocándola como la salida a la crisis permanente de divisas del país, pero la ley especial que iba a regir su exploración ha quedado cajoneada. Al interior de las filas del gobierno existe una disputa de fondo entre distintos sectores. Las petroleras que no tienen posiciones en Vaca Muerta reclaman que los beneficios se extiendan a toda la industria y no queden reducidos solo a la cuenca neuquina. Dentro de esas disputas opera también la burocracia sindical. Sergio Massa, que ha sido financiado largamente por la familia Bulgheroni, que acapara el

petróleo de Chubut junto con British Petroleum, encabeza este lobby que tiene en la vereda de enfrente a Guillermo Nielsen.

De más está decir que mientras la parálisis del gobierno en todos los terrenos se agudiza a la espera de un arreglo de la deuda, la inflación sigue estando en niveles muy altos a pesar del congelamiento de varios precios relativos clave de la economía. Si el gobierno debiera prontamente autorizar aumentos, la inflación entonces cobraría niveles aún mayores. Ni qué decir que una emisión monetaria para hacer frente a la deuda en pesos podría incluso derivar en una hiperinflación. Este cuadro choca directamente con el congelamiento virtual del dólar comercial, que se desvaloriza a la par del aumento de la tasa de inflación. Ya existe una fuerte presión de grupos exportadores para proceder a una nueva devaluación, para contrarrestar esta apreciación del peso y para reducir de hecho las retenciones medidas en moneda local. Ahora bien, una nueva devaluación tendría impacto directo sobre los precios, ya que en Argentina la principal causa de inflación son los saltos en el tipo de cambio que se traducen de inmediato en los precios internos.

Todas estas contradicciones de fondo plantean la necesidad de una reorganización general de la economía sobre nuevas bases sociales. La nacionalización de toda la industria hidrocarburífera sería necesaria para desarrollar la producción de petróleo y gas de modo compatible con el ambiente y a precios dictados por los costos internos. La nacionalización debería abarcar a la producción, transporte y distribución del gas y la electricidad, para evitar los tarifazos y las huelgas de inversiones. El transporte también debería pasar a manos públicas, para ser reorganizado bajo un plan único y centralizado. Y la administración de las divisas y del tipo de cambio debería estar garantizada por una banca única, que evite la fuga de capitales y la especulación con la moneda nacional. Se trata de medidas que no están en el radar del actual gobierno, ya que son incompatibles con su base capitalista. Pero resulta fundamental que las confrontemos con la demagogia “nacional y popular” en cada fase y oportunidad de la lucha política, porque contribuyen a nuestro desarrollo como alternativa política.

¿Reactivación?

Durante la campaña electoral, Alberto Fernández basó su discurso en la necesidad de poner plata en el bolsillo de la población e impulsar una reactivación de la economía que tenga al consumo como uno de

sus pilares fundamentales. Sin embargo, a poco de asumir ha decidido en sentido contrario. La anulación de la movilidad jubilatoria y la eliminación de la cláusula gatillo en las paritarias, en un cuadro inflacionario que no cede, resentirán el consumo y con ello agravarán la recesión económica. En varios de sus discursos, Cristina Kirchner defendió una tesis de una suerte de capitalismo popular que, según ella, es el verdadero capitalismo. Palabras más, palabras menos, señaló que aumentar el consumo es el verdadero capitalismo, porque permite vender mercancías a los empresarios y con ello obtener ganancias. Claro que se le pasó por alto que el capital obtiene ganancias en tanto esa venta de mercancías se haga a un precio que asegure una determinada tasa de beneficio. Pero esos precios chocan con la capacidad de consumo de la población, que se ve condicionado por salarios que están lejos de una canasta familiar. El capital requiere reducir los salarios, porque la única fuente de beneficio es la explotación de la fuerza de trabajo. Cristina Kirchner debiera saberlo por experiencia propia ya que, bajo su presidencia de ocho años, la mitad de los trabajadores tenían salarios por debajo de la línea de pobreza, y quienes superaban esa línea se veían afectados por el impuesto a las “ganancias”, un mecanismo expropiatorio que se suma al que se desarrolla de modo directo en la relación obrero-capital.

Argentina enfrenta un estancamiento económico prolongado que lleva al menos ocho años. Desde el segundo mandato de Cristina Kirchner y bajo el gobierno de Macri, el país no creció e incluso retrocedió. Esto queda patente en la medición del PBI per cápita, que no está estancado sino en franco retroceso. Alberto Fernández, que conoce perfectamente esta realidad, cita como modelo al gobierno de Néstor Kirchner, en el que se operó un crecimiento económico. Pero se trató de un proceso endeble, apoyado en la devaluación de la moneda del 300% y en la utilización de una capacidad instalada ociosa que permitía crecer sin nuevas inversiones. Por último y más importante, por el salto operado en los precios de las materias primas. Con los gastos del Estado desvalorizados por la devaluación y el cambio favorable en los términos de intercambio, el gobierno logró superávit fiscal y comercial, ayudados además por la suspensión transitoria del pago de la deuda. La realidad ahora es de otro tipo. La capacidad ociosa es también altísima, pero venimos de un proceso devaluatorio. El cuadro internacional está signado por una tendencia pronunciada a la recesión, que se expresa en las tasas negativas y el aumento del precio

del oro. La tendencia es generalizada y alcanza también a China, a diferencia de lo sucedido en las últimas recesiones internacionales. La guerra comercial, consecuencia directa de la sobreproducción de capitales y mercancías, inhibe una salida por el lado de las exportaciones. El precio de las materias primas no despega; la soja, por ejemplo, está casi en un 50% de su cotización máxima en 2008-2012. El crecimiento vía la inversión está fuera de toda posibilidad, porque choca con las tendencias recesivas ya señaladas. Alberto Fernández anticipó que buscaría focalizar la inversión en los hidrocarburos, especialmente en Vaca Muerta, pero eso reclama, antes que nada, tarifazos en los precios internos en los combustibles y libre acceso a las divisas, ambos puntos que chocan con la necesidad de superávit fiscal y comercial. La posibilidad de un crecimiento por el aumento del gasto público, por ejemplo mediante un plan de obras públicas de gran alcance, choca con la quiebra del Estado y el compromiso de utilizar el remanente para pagar la deuda. Por el lado del consumo, el deterioro es manifiesto, y los pronósticos para un futuro inmediato son negativos, como lo anticipa la eliminación de la movilidad jubilatoria y de la cláusula gatillo en las paritarias.

Esta descripción anticipa que incluso si el gobierno de Alberto Fernández lograra sortear la variante más catastrófica de un default y una hiperinflación, el escenario que debe esperarse es de un estancamiento prolongado con su correlato en aumento de la pobreza y la indigencia. El ejemplo de Grecia, donde una reestructuración de deuda condenó al país a una recesión económica muy prolongada, es un espejo adecuado para que se mire a un gobierno rehén del capital financiero y de la clase capitalista local.

Mendoza y Chubut

La presión de los fondos de inversión y de la banca acreedora no es la única que sufre el gobierno. La necesidad de avanzar contra las jubilaciones y los salarios, o de ceder al reclamo de los grupos mineros para avanzar en el saqueo de la Cordillera de los Andes, presenta de modo abierto la posibilidad cierta de desatar una rebelión popular. Fue lo que sucedió en Mendoza ante la decisión del gobierno provincial y de la Legislatura, con apoyo kirchnerista, de autorizar la megaminería contaminante. A pesar del apoyo que le había dado a la ley la burocracia sindical, se desató una rebelión popular de enorme magnitud, que obligó al gobierno a retroceder en chancletas y archivar sus com-

promisos asumidos con Barrick Gold. La rebelión mendocina pareció inspirada en la chilena. Con una participación protagónica de la juventud, adoptó el método de la lucha callejera e incluso de choques con las fuerzas de seguridad, que se propagaron durante varios días hasta que el gobierno reculó. La derrota golpeó a radicales y peronistas por igual, constituyendo un golpe a todo el régimen político.

Lo sucedido en Mendoza llevó a que el gobernador de Chubut desista de tratar en la Legislatura provincial su propia ley para autorizar la megaminería contaminante. Bastó que se convocara una movilización con bloqueo al edificio legislativo para que Mariano Arcioni desista de sus planes. Buscó curarse en salud ante un cuadro provincial que muestra grandes confrontaciones con los trabajadores por el ajuste que se viene llevando adelante desde hace meses. Durante ese período, los trabajadores han mostrado una gran disposición de lucha, realizando en determinados momentos una virtual huelga general, que obligó incluso a la Ctera a convocar a paros nacionales. Se trataron de medidas aisladas, hechas para zafar y ocultar que la burocracia sindical le daba la espalda a la Chubut obrera y popular.

Tomada la realidad nacional de conjunto, esta tendencia a la rebelión está contenida por un pacto político entre el gobierno, la clase capitalista y la burocracia sindical, y por una cooptación al funcionariado del Estado de innumerables y hasta ignotos grupos y fracciones entre los que se encuentran sectores de la izquierda. La Iglesia aporta su parte a esta contención, apoyando a un gobierno que a la vez ha cooptado a un sector considerable del movimiento de la mujer. Es probable que el oficialismo haya decidido aceptar el reclamo masivo de la legalización del aborto, ante el temor que una negativa provocaría una rebelión en el campo de la mujer y perjudicaría su política de cooptación. A la Iglesia, en este caso, se le ofrecería una “compensación”, brindándole un protagonismo político general y el compromiso a no afectar los beneficios económicos cuantiosos que recibe del Estado. Pero incluso en este cuadro, la movilización masiva por la conquista del aborto legal deberá desarrollarse con gran energía para que la conquista sea irrestricta frente a los condicionamientos clericales y porque nada quitará que será un triunfo popular inconfundible.

La política de la burocracia sindical en todas sus variantes es el apoyo al gobierno, aunque el gobierno se apoya centralmente dentro de este conglomerado en su ala derecha, encabezada por los “gordos”. La centroizquierda y todas las patas de la semidisuelta CTA, al igual

que las organizaciones sociales del Trío Vaticano, también han pasado a integrarse al gobierno y reclaman más que nadie la formación del Consejo Económico y Social, prometido en la campaña por Alberto Fernández. Su formación, de concretarse, sería un salto en la estatización de las organizaciones obreras y la puesta en marcha de un gobierno de tipo corporativo -según los dichos del propio Presidente, el Consejo tendría autoridades que no coincidirían temporalmente con las elecciones presidenciales ni de medio término, todo esto en nombre de defender “políticas de Estado”. La denuncia de este tipo de iniciativas debe hacerse sin concesiones, reclamando la independencia política de las organizaciones obreras y populares, así como la soberanía de las decisiones de sus afiliados por medio de asambleas y congresos de bases.

La importancia del planteo de la independencia política de los sindicatos y de todas las organizaciones populares ocupa un lugar central, en tanto rechaza la política de cooptación que necesariamente va acompañada de la consolidación de una burocracia, sea sindical, piquetera, feminista o estudiantil. El punto de partida de la independencia política es defensivo, referido a la soberanía democrática de las decisiones a tomar, pero va más allá porque se conecta con un programa integral de transformación política y social que parta del no pago de la deuda, la ruptura con el FMI, la nacionalización de la banca, el comercio exterior y la industria hidrocarburífera, y el control obrero general en toda la economía. Es un programa que solo puede ser concretado por un gobierno de los trabajadores.

Las tareas del Frente de Izquierda

La cooptación alevosa de toda la centroizquierda y de parte de la izquierda, y los pactos urgentes con la burocracia sindical y piquetera, plantean un campo de acción enorme para el Frente de Izquierda. Quien quiera ocultar o ignorar el contraste entre la izquierda asimilada a la coalición de gobierno bajo distintos grados y formas de cooptación y el Frente de Izquierda, estará tapando el sol con la mano. Aunque el punto de partida puede presentar un escenario de mayor aislamiento, lo cierto es que éste se ve compensado por la posibilidad de desarrollar una delimitación política nítida, que postule al Frente de Izquierda como alternativa obrera y popular ante un gobierno de ajuste. A esto debe sumarse que el kirchnerismo tiene metidos los pies en el plato al punto que ya no los puede sacar sin pagar su propio

costo político. Los choques en torno de la política de seguridad en la provincia de Buenos Aires lo han colocado incluso a la derecha de otras fracciones del peronismo. La polémica por la existencia o no de presos políticos encubre una disputa por el control del Poder Judicial, que en el caso del kirchnerismo es de tipo defensiva ante la posibilidad de que una crisis política derive en un relanzamiento de los procesos judiciales en su contra. Finalmente, en Ecuador, el acuerdo del gobierno de Lenín Moreno con el FMI condujo al encarcelamiento de su vice, puesto por Correa -o sea, de los kirchneristas de Centroamérica.

El escenario latinoamericano se caracteriza por la irrupción de rebeliones populares y de contragolpes derechistas que anticipan una intensificación de los combates entre las clases. El trabajo de topo de la crisis mundial, socavando los cimientos de los distintos regímenes políticos, sean de derecha o “nacionales y populares”, está en marcha y nadie lo detendrá. La jactancia de Alberto Fernández de que el peronismo es el instrumento que evitará que Argentina se convierta en Chile o Bolivia carece de fundamentos. Ya en los '70, el peronismo no pudo evitar que Argentina se transforme en Chile y al golpe de Augusto Pinochet le siguió el de Rafael Videla, con el apoyo del 90% del pejetismo de la época.

Nuestro pronóstico parte de caracterizar un agravamiento de la crisis mundial y de su impacto en una Argentina afectada por contradicciones explosivas. El partido ya se está jugando y cada clase social deberá mostrar su capacidad para derrotar por medio de la lucha a su adversario. La tarea del Frente de Izquierda en este cuadro es oponerle a esta cooptación al Estado, un planteo de independencia de clase y un programa obrero y socialista para que la crisis la paguen los capitalistas. En estos enfrentamientos de clase que están por venir deberá recorrerse una experiencia, en la que la izquierda que se reclama revolucionaria está llamada a jugar un papel protagónico. Deberá para ello participar de todas las luchas por las reivindicaciones populares, sea la batalla jubilatoria, las paritarias, la lucha por el aborto legal o por las libertades democráticas, jugarse por su triunfo e ir sacando las conclusiones que permitan superar a las actuales direcciones. La participación en esas luchas deberá realizarse junto con una crítica implacable a la política del gobierno y de la oposición de derecha, que acompañará al oficialismo en todas sus entregadas y agachadas. La realización de una Conferencia Latinoamericana de la izquierda revolucionaria y del movimiento obrero combativo convocada desde el FIT será también

un aporte importante, porque ampliará notablemente el área de la acción de lucha de los que defendemos el socialismo y el gobierno de los trabajadores.

Chile: del “milagro” al “estallido social”

Balance y desafíos de la rebelión popular

Pablo Giachello

Por su masividad y combatividad, por su extensión en el tiempo, por su desarrollo a escala nacional y por su virtud de cuestionar al conjunto del régimen imperante, la rebelión popular chilena se ha instalado en América Latina como el proceso de características revolucionarias más importante de todo el último período. Todas las medidas improvisadas por el gobierno de Sebastián Piñera durante las primeras semanas, luego de desatada la rebelión, desde el reforzamiento de la política represiva del Estado hasta la concesión absolutamente parcial e insuficiente de reivindicaciones mínimas de las masas, han fracasado en su objetivo de desactivar el estallido social. En respuesta al ‘salvajismo’ y la ira popular, todos los partidos del Parlamento chileno, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, suscribieron o tributaron al “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” pergeñado por Piñera y colaboraron en la aprobación en el Parlamento de una batería de leyes represivas. Por su parte, el imperialismo yanqui y todos los gobiernos regionales, desde los derechistas hasta los ‘nacionales y populares’, cerraron filas detrás del objetivo estratégico de sostener en el poder al gobierno asesino.

En adelante, las maniobras institucionales montadas por los partidos del sistema, que apuntan a encorsetar la rebelión en un proceso

Constituyente amañado, chocarán con la incapacidad del régimen para satisfacer las reivindicaciones motoras del pueblo rebelado. La rebelión chilena está muy lejos de haber dado su última palabra. Los choques de las masas con el régimen, las crisis políticas y económicas, y las crisis de poder seguirán siendo noticia durante todo 2020.

Transcurridos más de cuatro meses de desatada la rebelión es necesario balancear su desarrollo y trazar las perspectivas que se abren, con el objetivo de delinear una política revolucionaria y colaborar con la lucha, para que el proceso abierto concluya con una victoria de las masas sublevadas. Asimismo, el análisis y el estudio del proceso chileno será un insumo fundamental para los revolucionarios de América Latina y del mundo.

Dinámica de la rebelión

El estallido de la rebelión popular estuvo precedido por la irrupción del movimiento secundario, que desde el 7 de octubre inició la evasión masiva de molinetes en protesta contra el tarifazo al metro. Las acciones de los jóvenes secundarios fueron masificándose y ganando la adhesión del conjunto de la población. Lo que comenzó como una rebelión juvenil contra el tarifazo al metro derivó en una rebelión popular, que el 18 de octubre se expresó con movilizaciones de masas en todo el país, cacerolazos y combates contra las fuerzas represivas. La respuesta de Piñera al estallido revolucionario fue decretar, el mismo viernes 18 por la noche, el estado de emergencia, suprimiendo las libertades civiles y el derecho de reunión; y el sábado 19, luego de declarar que “el país está en guerra”, el toque de queda en las ciudades de Santiago, Chacabuco y diferentes comunas. A la ofensiva represiva, que en el curso de una semana dejó como saldo 18 manifestantes muertos, 600 heridos y más de 2.000 detenidos, las masas respondieron con marchas y combates cotidianos, con un paro general de 48 horas y con una movilización de más de dos millones de personas en todo Chile, el 25 de octubre, que le asestó el golpe de gracia al toque de queda. Como fruto del proceso de radicalización política, las burocracias de la CUT y de los sindicatos agrupados en la Unidad Social, se vieron empujados a convocar a cuatro paros generales desde el estallido de la rebelión. Y si el primer hito de la rebelión chilena fueron los millones de movilizados el 25 de octubre, visto en perspectiva, es claro que el estallido social tuvo su segundo hito el 12 de noviembre, cuando la rebelión popular empalmó con un paro general

activo que, por primera vez en décadas, logró paralizar completamente al país. El importante protagonismo de la Unión Portuaria, el sector más combativo del proletariado chileno, y de los obreros mineros, que participaron de numerosos piquetes, le dieron el toque distintivo a la jornada del 12 de noviembre. El año 2020 comenzó con un extendido proceso de ocupación de escuelas por parte de los jóvenes nucleados en la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, que se levantaron contra la restrictiva Prueba de Selección Universitaria (PSU), por el fin de la educación privada y haciendo propio el conjunto de las demandas de la rebelión popular.

Desde el estallido de la rebelión, la lucha contra la represión y las denuncias por los crímenes cometidos por los carabineros han sido sistemáticas. Al despertar del pueblo chileno (#ChileDespertó), las fuerzas de seguridad respondieron con disparos a los ojos, dejando a centenares de manifestantes tuertos o con traumas oculares graves. Confirmando todas las denuncias realizadas por los manifestantes; el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), presentaron informes denunciando la violación sistemática de derechos humanos por parte de las fuerzas represivas chilenas, las que han hecho uso y abuso de armamento letal, y han torturado y abusado sexualmente de manifestantes. La aparición de cada uno de estos informes suscitó nuevas jornadas de ira popular y ataques a comisarías.

El profundo carácter político de la rebelión se expresa en el lema que rápidamente patentizaron como propio las masas sublevadas: "*No son 30 pesos, son 30 años*". De esa manera, se subraya que la lucha no se limita al simple rechazo de un tarifazo, sino que encierra un profundo hartazgo popular, que cuestiona a todo un régimen social, económico y político. Todas las iniciativas adoptadas por el gobierno de Piñera en la primera semana, con el objetivo de desactivar la irrupción popular -empezando por la profundización de la represión, siguiendo por la anulación del tarifazo al metro y el aumento irrisorio de jubilaciones y salarios, y llegando a la renuncia de todo el gabinete presidencial y al levantamiento del toque de queda- fracasaron. Sabiamente, el pueblo chileno incrementó su movilización, perfeccionó y radicalizó sus métodos de lucha, y puso en pie asambleas populares y territoriales. Colocó el "Fuera Piñera" como su consigna de mando, acompañán-

dolacon la exigencia de que una Asamblea Constituyente avance en la elaboración de una nueva constitución, con el objetivo de proceder a una transformación de fondo que dé respuesta a los reclamos urgentes de las masas.

Sus características

La rebelión chilena se caracteriza por no circunscribirse a las principales ciudades del país, sino por tener una extensión verdaderamente nacional. En todo Chile, las movilizaciones, los piquetes y los enfrentamientos con las fuerzas represivas son prácticamente cotidianos. Se destacan las barricadas y la acción defensiva de la llamada “primera línea” -la vanguardia combativa de la juventud estudiantil y trabajadora- que, enfrentando a un aparato represivo completamente criminal, permite la manifestación de las masas en las plazas de todo el país y en los centros del poder político. En forma conjunta se han puesto en pie brigadas de salud, compuestas por trabajadores hospitalarios y estudiantes de medicina, y establecido puntos de atención en edificios ocupados en el proceso de la rebelión, para atender a los sectores de la “primera línea” y a los manifestantes heridos por la represión.

El surgimiento de embrionarios órganos de auto-organización de las masas es otro de los elementos más importantes del proceso chileno. En Santiago y en las comunas aledañas se avanza en la coordinación de diversas asambleas populares y territoriales, lo que ha dado lugar a la Coordinadora de Asambleas Territoriales Autoconvocadas (CAT) y a un primer encuentro que agrupó a mil luchadores y luchadoras el 18 de enero; en Valparaíso se ha constituido un cordón de cabildos, que es la denominación que adoptó la coordinación de las asambleas populares independientes del poder oficial y los partidos del régimen; en Concepción se ha conformado una asamblea popular provincial, que aglutina a las numerosas asambleas territoriales y movimientos sociales que actúan en la capital provincial, en Talcahuano y alrededores; y fenómenos similares se desarrollan en el resto del país. Estos organismos tienen el gran valor de ser un canal de organización de la juventud y los sectores medios, y también de algunos sectores de clase obrera, que no encuentra un canal de intervención a través de sus organizaciones tradicionales. Un extendido proceso de ocupación de terrenos de alcance nacional da cuentas de la participación de las familias trabajadoras en los procesos de auto-organización de las masas.

El movimiento de lucha de la mujer se instaló como otro de los actores centrales de la rebelión. La performance realizada por miles de

mujeres en la Plaza Dignidad¹, denunciando al Estado como el violador, recobró repercusión internacional y fue replicado en numerosas ciudades y países. Por su parte, el movimiento artístico y cultural ha dado innumerables muestras de apoyo a la rebelión. Roger Waters, Patti Smith, Mon Laferte (que denunció la represión al pueblo chileno en la entrega de los Grammy) y Wos, entre otros, se hicieron eco de la lucha librada por el pueblo chileno. El seleccionado de fútbol también expresó su solidaridad con el pueblo en lucha, llegando a forzar la suspensión del amistoso contra la selección de Perú. En la misma línea hay que anotar la participación y confraternización de las hinchadas del principal clásico del fútbol chileno en las concentraciones de los viernes en la Plaza Dignidad. Como se puede apreciar, es claro que la rebelión chilena ha penetrado por todos los poros de la vida social.

Sus antecedentes

Esta gigantesca y extraordinaria rebelión popular es el resultado de un largo proceso de preparación y de la profunda experiencia recorrida por diversos movimientos de lucha. Sería erróneo encasillar al estallido social como un fenómeno de características meramente espontáneas. Grandes gestas, a lo largo de los últimos catorce años, fueron forjando la combatividad de la actual rebelión y su impronta política. Es indudable que el proceso de recomposición del movimiento de masas data de 2006 cuando, bajo el gobierno de Michelle Bachelet, los pingüinos² se rebelaron contra la ley educativa heredada del pinochetismo. Cinco años después, en 2011, los estudiantes universitarios protagonizaron otra enorme gesta contra la privatización educativa, en esta oportunidad contra el mismísimo Piñera. Los cabros³, la nueva generación, vinieron a superar la experiencia frustrada de las generaciones revolucionarias de los '60 y los '70, que vieron en el fracaso y en la caída de la experiencia reformista y de colaboración de clases de la Unidad Popular la caída de su propio gobierno. La nueva generación, despojada de las derrotas, los fracasos y las traiciones del pasado, y de los temores al terror pinochetista, vino a retomar un hilo histórico, devolviéndole al pueblo chileno su carácter contestatario, combativo y solidario.

La emergencia, en 2016, de un enorme movimiento de lucha contra el sistema de privatización de las pensiones, las AFP, planteó la entrada en acción de un amplio sector del movimiento obrero. Fue el principio de un proceso de reanimamiento del movimiento sindical,

fuertemente golpeado por una enorme atomización. Este proceso se evidenció en un incipiente avance de la sindicalización, en la huelga de los mineros del gran yacimiento La Escondida en 2017 y en la huelga minera en junio de 2019 en el desierto de Atacama, en la de los obreros portuarios en Valparaíso a fines de 2018 y en la importantísima huelga de los profesores en junio y julio de 2019, que recibió el apoyo de mineros, portuarios, trabajadores de comercio, además del movimiento estudiantil y pobladores de las diferentes comunas.

Como parte de este proceso de recomposición del movimiento de masas, en Chile hay que anotar especialmente al movimiento mujeres y disidencias, en sintonía con lo ocurrido en gran parte del mundo. La lucha contra la violencia y los femicidios, con el surgimiento del movimiento #NiUnaMenos en 2016; las tomas de dieciocho universidades en todo Chile, en 2018, contra los abusos sexuales protagonizados por un profesor ex integrante del Tribunal Constitucional; y la enorme movilización del 8 de Marzo de 2019, en el día internacional de la mujer trabajadora, marcan el desarrollo ascendente del movimiento de lucha de la mujer. Asimismo, en todos estos años se dieron fuertes acciones de lucha del pueblo mapuche contra la expulsión de sus tierras. En 2018, las fuerzas represivas del gobierno de Piñera se cobraron la vida del joven Camilo Catrillanca, que se ha transformado, junto con la bandera mapuche, en un símbolo de la rebelión. Más atrás, en 2017, el gobierno de Bachelet, junto al de Mauricio Macri, había reeditado una suerte de Plan Cóndor, es decir una operación conjunta de ambos Estados con el objetivo de criminalizar la lucha del pueblo mapuche y en defensa de la burguesía terrateniente.

Todos estos procesos, que se desarrollaron de manera más o menos atomizada, han ido preparando y jalonando el actual estallido social, que significó la unificación de todos ellos en un gran movimiento de lucha, de características políticas, y que encarna el cuestionamiento a todo un régimen.

El derrumbe del “milagro chileno”

El llamado “milagro chileno” tuvo su base en la derrota histórica del movimiento obrero y popular, infligida por la dictadura pinochetista. Las reformas laboral, previsional y minera -pergeñadas por José Piñera, el hermano del actual presidente-; la privatización del agua y las reformas educativa y sanitaria fueron pilares de aquella ofensiva capitalista que pusieron fin a grandes conquistas de la clase obrera.

En el mundo del trabajo se implementó el Plan Laboral, el que luego adoptó la forma de Código del Trabajo, que eliminó los convenios colectivos por rama de actividad y limitó el derecho a huelga y a sindicalización, avanzando en la negociación de convenios por empresa y en la consecuente generalización de la flexibilización laboral. Con la reforma previsional se crearon las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que derivó en la completa privatización del sistema de seguridad social. La ley minera, por su parte, habilitó la plena enajenación del cobre por parte de grandes monopolios internacionales, que fueron resguardados ante la eventualidad de cualquier tentativa expropiatoria. Ya en la década de los '90, el sistema de concesión a privados, introducido por la ley minera, se extendió al desarrollo de la obra pública, privatizando la construcción de autopistas, aeropuertos y puertos. Tanto el sistema sanitario como el educativo fueron municipalizados por la dictadura pinochetista. Y el desfinanciamiento de la salud y la educación por parte del Estado nacional fue el principio de un acelerado y profundo proceso de privatización. Finalmente, en sintonía con esta avanzada del capital, se desarrolló un proceso de copamiento del suelo urbano y rural, que encareció hasta niveles exorbitantes el valor de la tierra. Todos los pilares económicos pergeñados por los "Chicago boy", que dieron lugar a lo que Milton Friedman llamó "el milagro chileno", lejos de haber sido cuestionados durante los gobiernos de la transición democrática, se consolidaron y profundizaron. A la par, se les garantizó la impunidad a los militares responsables de los crímenes de la dictadura. Quedó en evidencia el hilo de continuidad existente entre la dictadura militar y la república democrática, determinado por la orientación social capitalista del Estado.

La ofensiva capitalista, con sus 'reformas estructurales', sentó las bases para el progreso de una profunda polarización social. La burguesía, a través de los voceros oficiales y de los grandes medios de comunicación, pretende presentar el cuadro recesivo en el que ha ingresado Chile en 2019 como una consecuencia del estallido social. *Pero la crisis económica precede al estallido.* En junio de 2019, el Banco Central bajó en 50 puntos básicos la tasa de política monetaria ante las proyecciones de un menor crecimiento económico. A la economía chilena la afecta la caída de las exportaciones y del precio de su principal producto de exportación: el cobre. La caída internacional del precio del metal rojo -que data desde 2013 pero que solo en 2019 cayó un 8% con respecto de 2018, como consecuencia de la guerra comercial

entre Estados Unidos y China- no es más que un reflejo del desarrollo de la bancarrota capitalista internacional. El derrumbe del precio y de las exportaciones de cobre agudizó las tendencias recesivas, llevaron a un achicamiento de las arcas del Estado chileno y a una aceleración de su endeudamiento internacional. La deuda pública ha crecido ininterrumpidamente desde 2008 y la deuda externa chilena asciende a los 195 mil millones de dólares, lo que equivale al 71% del PBI. Sólo en 2020 habrá vencimientos en el orden de los 64 mil millones. La tentativa del Estado de pilotear su propia crisis y de la clase capitalista de apuntalar su tasa de beneficio ha terminado por extremar a fondo el proceso de polarización social. Así lo refleja el hecho de que la mitad de la población se reparta el 2,1% de los ingresos, mientras que el 1% más rico concentra el 26,5% de los mismos. En la Chile ‘milagrosa’, la mitad de los trabajadores cobra menos de 560 dólares (400 mil pesos chilenos), cuando el costo de la canasta familiar asciende a los 1.100 dólares (840 mil pesos). Los jubilados apenas reciben un tercio del ingreso promedio de su vida laboral, con pensiones que promedian los 200 dólares, y todo lo restante es expropiado por las AFP. Más del 26% de los chilenos, por hacer frente a los sistemas de educación y salud privados, se encuentran endeudados con los bancos o con el propio Estado. Coronando este cuadro social catastrófico, las patronales han despedido desde el comienzo del “estallido social” a 165 mil trabajadores.

Como se puede apreciar, es claro que las “reformas estructurales”, que fueron la base del llamado “milagro chileno”, son las que han dado lugar a las *reivindicaciones motoras* de la rebelión popular. A saber: poner fin a los salarios de miseria y al régimen de las AFP; poner fin al negocio privado de la salud y la educación y proceder a su gratuidad; acabar con la especulación inmobiliaria y garantizar el acceso universal a la vivienda. Todas estas reivindicaciones mínimas constituyen una parte fundamental de un programa transicional en Chile, pues su simple formulación plantea un choque de fondo con todo el régimen imperante y la necesidad de la lucha por un gobierno de trabajadores. La conexión de la crisis chilena con la bancarrota capitalista internacional plantea, asimismo, la necesidad de medidas económicas de fondo. La nacionalización sin indemnización de todo el sistema bancario y el comercio exterior, la investigación y el cese del pago de la deuda externa usuraria, acabar con la enajenación capitalista de los recursos naturales procediendo a su nacionalización sin pago ofrecen

la posibilidad de volcar el ahorro nacional y los recursos estratégicos a la reactivación económica del país bajo la dirección política de la clase obrera. De esta manera, quedan formulados los trazos gruesos del programa que una Asamblea Constituyente libre y soberana está llamada a realizar y por el que deberán pelear en ella las fuerzas revolucionarias.

Estrategia contrarrevolucionaria

Si, como ya señalamos más arriba, es claro que el paro general activo del 12 de noviembre marcó un segundo hito de la rebelión chilena, también lo es que aquella jornada forzó al Presidente, a la burguesía y al conjunto del régimen a elaborar una maniobra de largo aliento. La tentativa inicial de Piñera, de declarar un nuevo estado de sitio el mismo 12 por la noche, fue descartada. Los militares pidieron *carta blanca*, es decir, contar con la impunidad necesaria para cometer todos los crímenes que fueran necesarios con el objetivo de cumplir su misión de poner fin a la rebelión popular. Pero el fracaso del estado de emergencia y el toque de queda durante la primera semana del estallido cuestionaba la efectividad de un nuevo toque de queda por más carta blanca que se les garantizara a las fuerzas represivas. Se optó, por ende, por el armado de una *salida institucional reaccionaria*, la que, para funcionar, debía aparecer como una respuesta de fondo al reclamo de las masas y, al mismo tiempo, contar con el apoyo de la totalidad del arco político nacional. Fue así que nació, en la madrugada del 15 de noviembre, el *Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución*, que contó con las firmas de Chile Vamos, la coalición oficial; los partidos de la ex Nueva Mayoría, el principal bloque opositor; y el Frente Amplio, la coalición centroizquierdista surgida en 2011.

El "Acuerdo por la Paz Social" logró colocar a la reforma constitucional, tan aclamada por las masas en lucha, como el mascarón de proa de una estrategia contrarrevolucionaria. Sucede que la Convención Constituyente pactada entre oficialistas y 'opositores' parte de colocar el restablecimiento del 'orden público' -entiéndase la continuidad de Piñera- como el condicionante para que se lleve adelante cualquier reforma. Es decir, habilita una eventual reforma constitucional siempre y cuando esté tutelada por el Presidente, jaqueado por la movilización popular. Pero incluso se reserva la posibilidad de que ni siquiera se llegue a realizar esa Constituyente tutelada, ya que establece la realización de un plebiscito para abril de 2020, encargado de definir si se procede o no a la reforma. En ese plebiscito se definiría, a su vez, si

los representantes de la Convención Constituyente serán electos en su totalidad o si la mitad de ellos serán los actuales parlamentarios. Y de imponerse en el plebiscito de abril el sí a la reforma, la convención recién comenzaría a sesionar en octubre de 2020 y se desarrollaría a lo largo de nueve meses, con la posibilidad de tres meses más de extensión. Además, en esta Constituyente amañada se le ha reservado a la derecha el derecho a veto, estableciendo que el quórum y cualquier modificación de fondo debe contar con el aval de dos tercios de la Convención. Y como si todos estos artilugios no alcanzaran para asegurarse que la Constituyente no sea una expresión de soberanía popular, las reformas que surjan de la convención serán sometidas primero a un referéndum ratificatorio y luego al actual Parlamento. Es decir, los partidos del régimen se reservan la posibilidad de vetar las reformas eventualmente progresivas que emanen del proceso constituyente.

Luego de la firma del “Acuerdo”, los partidos de Chile Vamos y de la ex Nueva Mayoría -que con la firma del Frente Amplio se creyeron estar custodiados por izquierda- en vano se entusiasmaron con haber puesto fin a la rebelión. Las masas respondieron, ese mismo viernes 15 de noviembre, con concentraciones y movilizaciones de masas en todo el país, denunciando una nueva “cocina parlamentaria” a espaldas del pueblo. Para el Frente Amplio, la firma de la “paz social” representó su desprestigio definitivo frente a la vanguardia del movimiento de lucha. Al instante comenzó a padecer una sangría por izquierda, con la ruptura abierta de todas las organizaciones sociales que integraban la coalición. El día después de sellado el pacto, la ex candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, fue funada⁴ por manifestantes en las calles de Santiago. Desde el punto de vista de la vanguardia del estallido social, la firma del “Acuerdo por la Paz” representó el fin de una experiencia que emergió como la expresión política de la rebelión estudiantil de 2011 y que se presentó como la alternativa por izquierda a las dos grandes coaliciones que se alternaron en el poder desde el inicio de la llamada “transición democrática” a esta parte. Quienes nacieron presentándose como una alternativa a lo que denominaron “el régimen del duopolio”, terminaron integrados a él. La rebelión chilena puso las cosas en su lugar: escindió a la casta pequeño-burguesa que se hizo de la dirección del Frente Amplio -imprimiéndole a este un programa conservador en algunos aspectos y directamente reaccionario en otros- de las bases populares que supieron acompañarlo, e incluso integrarlo, con la expectativa de desenvolver una alternativa al “duopolio neoliberal”.

Por su parte, el Partido Comunista, que cuenta con una banca parlamentaria, no firmó el "Acuerdo por la Paz Social". Pero su presidente y diputado nacional, Guillermo Teillier, el mismo 15 de noviembre se encargó de aclarar que lo convalidaban. El PC criticó que, en la Constituyente emanada del "Acuerdo por la Paz Social", no se contemplaba la paridad de género, un cupo de representación para los pueblos originarios y otro para los sectores independientes. Fue así que, a fines de diciembre, la Cámara de Diputados accedió a los reclamos del PC. Y probablemente también el Senado convalide la propuesta. Sucede que, de conjunto, las reformas planteadas por el PC son medidas cosméticas que sólo apuntan a barnizar de democrática una Constituyente que nace amañada y regimentada por las instituciones y partidos del régimen. El PC, al no firmar el "Acuerdo por la Paz Social", aunque convalidándolo desde afuera, pretende evitar un mayor desprestigio ante las masas, ya que carga con el descrédito de haber sido parte del gobierno de la Nueva Mayoría, encabezado por Bachelet. Así, el PC busca colocarse como la carta última de la burguesía contra la rebelión popular. Pero el rol del PC dentro del Parlamento ha sido complementado con el rol que jugó fuera de él. Sucede que como dirección de la Central Unica de Trabajadores (CUT), que integra a su vez la Unidad Social, se ha encargado de evitar la consigna "Fuera Piñera" y la organización de la huelga general indefinida, que sería el método más efectivo para conquistar todos los reclamos de las masas y para forzar la salida del gobierno. Esta orientación, contraria al clamor popular, fue camuflada con la presentación, por parte del PC, de un proyecto de acusación constitucional (juicio político) contra Piñera, en un acto de cretinismo parlamentario nada inocente. Como era de esperarse, la iniciativa se reveló estéril para acabar con el gobierno y no fue más que una maniobra para llevar la lucha de las masas al callejón parlamentario. La Unidad Social, que logró reagrupar, luego del estallido social, a centenares de organizaciones sindicales, sociales y estudiantiles, estuvo muy lejos de funcionar como un verdadero frente único de lucha. Como tempranamente lo denunciaron los jóvenes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces) y más tarde la Coordinadora feminista 8 de Marzo, la burocracia del Bloque Sindical de la Unidad Social monopolizó todas las decisiones y, luego del último paro nacional del 26 de noviembre, empezó un proceso de negociaciones con el gobierno de Piñera y una virtual tregua. Bien mirado, el gobierno de Piñera solo ha logrado sostenerse por el papel

colaboracionista de la burocracia del Bloque Sindical, que de esa manera se constituyó en un sostén fundamental del régimen.

Como no podía ser de otra manera, la llamada “paz social” tenía al garrote como su complemento fundamental. El famoso “Acuerdo” le otorgó a Piñera el consenso político necesario para avanzar contra “las expresiones anarquizantes” inherentes a toda la rebelión popular, con el objetivo de reestablecer el “orden público”. Fue así que Piñera envió un paquete de leyes represivas al Parlamento y, denominando a una de ellas como “ley antisaqueos”, apuntó a meter una cuña al interior del movimiento de masas. Pero la ley, claramente, apunta a criminalizar la protesta social, ya que prohíbe el derecho a huelga en los llamados “servicios de primera necesidad”; prohíbe la “ocupación de edificios industriales, comerciales o agrícolas”, en un claro ataque a las ocupaciones de tierras y a cualquier tentativa de ocupación de fábricas; y penaliza la realización de piquetes. Entre el 4 y 5 de diciembre se aprobó la ley. El Frente Amplio aportó algunos votos positivos y, junto al PC, otras abstenciones. La ‘izquierda’ parlamentaria volvió a dar señales inequívocas de fidelidad al régimen. En Chile hay más de dos mil presos políticos, encarcelados por participar de alguna de las infinitas movilizaciones y acciones que se desarrollaron en todo el país desde el comienzo de la rebelión.

Tácticas y estrategia revolucionarias

Como ya hemos señalado más arriba, el proceso chileno está muy lejos de haber concluido. Aunque el cuadro general de movilización no se equipare a los niveles máximos alcanzados en el primer mes, es evidente e innegable la vitalidad de la rebelión. Todo el régimen se ha aferrado al calendario del “Acuerdo por la Paz Social” como su tabla de salvación. Pero como se evidenció con la concentración de masas en la Plaza Dignidad, el 31 de diciembre por la noche para recibir el año nuevo; en la rutilante lucha librada por los estudiantes secundarios contra la PSU en pleno enero, y con la puesta en pie de coordinadoras de asambleas populares y territoriales a tres meses de desatado el estallido social, el proceso está abierto. Las masas reconocen en su propio despertar un cambio histórico y un punto de no retorno. El gobierno, antes de celebrar la realización del plebiscito del 26 abril, *deberá atravesar a salvo un verano que arrancó caliente y que tenderá a recalentarse en marzo, cuando se conmemore el día internacional de la Mujer trabajadora y los secundarios retornen a las escuelas.* En un

escenario alternativo, en donde el régimen logre viabilizar el plebiscito de abril y la Constituyente amañada, *las reivindicaciones motoras* de la rebelión popular seguirán jugando un papel clave, planteando el choque objetivo de las masas con el conjunto del régimen. La agitación revolucionaria deberá insistir en remarcar la incompatibilidad de la satisfacción de esas reivindicaciones con el dominio del capital y sus partidos. Se revelará rápidamente el carácter estéril, desde el punto de vista de los intereses de las masas, de una Constituyente amañada y tutelada por Piñera y sus cómplices.

Pero al momento, *la gran tarea planteada es el impulso de un Encuentro Nacional de asambleas y organizaciones populares*. Un Encuentro nacional, que logre reagrupar a todas las fuerzas vivas de la rebelión popular, sería clave para preparar las grandes jornadas de lucha que se vislumbran para marzo, para darle continuidad y para definir una táctica común frente al plebiscito de abril. Debería proclamar abiertamente que *su tarea fundamental es liderar la lucha por el "Fuera Piñera", contra el "Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución", por una Asamblea Constituyente libre y soberana, por el conjunto de las reivindicaciones de las masas y para derrotar en forma organizada y colectiva la represión estatal*. Se erigirá, de esta manera, como la dirección del movimiento de masas y como un potencial órgano de poder alternativo, ante la vacante dejada por la Unidad Social, fruto del papel colaboracionista de su dirección, el Bloque Sindical. Debería impulsar un plan de lucha unificado a escala nacional, en la perspectiva de la huelga general indefinida, hasta que caigan el gobierno y el "Acuerdo", ya que *sólo existirá una Asamblea Constituyente realmente libre y soberana en tanto esta sea convocada por las organizaciones de las masas en lucha*.

La Coordinadora de Asambleas Territoriales de Santiago (CAT), en su manifiesto fundacional, plantea la lucha por una Asamblea Popular Constituyente, es decir, por una Constituyente verdaderamente libre y soberana protagonizada por las masas. Pero *para que esta perspectiva sea posible es necesario derrotar primero al gobierno y al Estado capitalista*, de otra manera, sólo existirá una Constituyente amañada. Por eso es clave que los Encuentros zonales, comunales o regionales de asambleas populares que ya están teniendo lugar -ni hablar de un eventual Encuentro nacional- no se circunscriban al intercambio de experiencias y a la unificación de programas y pliegos reivindicativos, sino que avancen en la unificación de los planes de lucha. No se trata de plasmar en un calendario las agendas propias de cada asamblea popular, sino la proyección

de movilizaciones o manifestaciones de masas lideradas por los órganos de coordinación de las asambleas populares.

Otro de los aspectos fundamentales de una estrategia revolucionaria es dotarse de una política para interesar al movimiento obrero en la realización de un Encuentro nacional, para que se pliegue con sus propias demandas y con sus propias organizaciones. Al interior del movimiento obrero se procesa una enorme efervescencia que es necesario seguir de cerca y explotar revolucionariamente. Recientemente, un congreso de la CUT votó por cambiar el método de elección de la dirección de la Central, pasando del voto indirecto, por parte de los dirigentes de los distintos sindicatos que integran al organismo, al voto directo de todos los afiliados. Una intervención en el movimiento sindical plantea desenvolver una agitación por un Congreso de delegados de base de todas las organizaciones sindicales, en oposición a la burocracia del Bloque Sindical, para promover la deliberación del movimiento obrero y la preparación de la huelga general. Del mismo modo, es necesario interesar a las organizaciones de mujeres y a las organizaciones estudiantiles en la necesidad de que se sumen a la pelea por un Encuentro nacional de asambleas y organizaciones populares.

Por un partido revolucionario

La lucha por esta estrategia, que no es otra que la de la lucha por un gobierno de trabajadores, pone en el orden del día la necesidad de estructurar un partido revolucionario de la clase obrera. Pues lo que hace falta es una organización política que trabaje metódica y sistemáticamente por estas iniciativas políticas y objetivos estratégicos por medio de la agitación, la propaganda y la organización de la vanguardia y las amplias masas. La ausencia de una organización de este tipo quedó claramente expuesta en el curso de la rebelión, en la misma medida en que se evidenció la magnitud del estallido social y sus características revolucionarias. Sucede que las diversas organizaciones o partidos de la izquierda que se reclaman revolucionarias en Chile mantienen posiciones frentepopulistas y foquistas, movimientistas y autonomistas, electoralistas, o combinaciones entre ellas.

Muchas organizaciones revolucionarias de Chile hablan del inicio de una “revolución democrática”. Confunden la llamada “crisis de representatividad” -es decir, la impugnación de las masas al conjunto de los partidos e instituciones del régimen y la lucha por una democracia superadora- con el inicio de una “revolución democrática”. Pero desde

el punto de vista de las categorías de análisis clásicas del marxismo, hablar de una "revolución democrática" equivale a hablar de una "revolución burguesa", lo que de ningún modo encaja con el proceso chileno. Las revoluciones de 1848, primero, y la revolución rusa de 1905, después, dieron por concluida la etapa histórica en la que la burguesía podía jugar un papel revolucionario. A su turno, la revolución de Octubre de 1917 resolvió, con la instauración de la dictadura proletaria, las tareas democrático-burguesas no realizadas, combinándolas con tareas socialistas. Se materializó, de esa forma, la tesis permanentista formulada por León Trotsky en 1906. Un siglo después, lo que está cuestionado son los antagonismos sociales emanados de la dominación del capital y su régimen de dominación política. Es lo que determina que en Chile no esté planteada la lucha por una revolución democrático-burguesa sino la lucha por una revolución socialista. La llamada "crisis de representación" no es más que una consecuencia de la incapacidad de la democracia burguesa, en la era de la declinación histórica del capitalismo, de dar una salida a las reivindicaciones más elementales de los explotados. Detrás de la "crisis de representación" subyace, en definitiva, la crisis del sistema capitalista. La democracia capitalista solo encuentra su superación histórica en la dictadura del proletariado, es decir, en el gobierno de trabajadores.

En Chile existe una plétora de organizaciones que se reclaman de filiación mirista (en referencia al MIR -Movimiento de Izquierda Revolucionaria) o del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Con independencia del heroísmo y la honestidad revolucionaria de la militancia de aquellas organizaciones, una estrategia revolucionaria para Chile reclama un balance crítico de aquellas experiencias. Pues la política del MIR se basaba en el pronóstico de que la ofensiva burguesa empujaría al ala izquierda de la Unidad Popular (UP), la izquierda del PS y al Movimiento de Acción Popular Unitaria (Mapu), al campo revolucionario. Sin embargo, la izquierda de la UP avaló toda la orientación de Allende de 'diálogo' con la Democracia Cristiana y los sucesivos gabinetes con las Fuerzas Armadas. El MIR, bajo el gobierno de Salvador Allende, se privó de desarrollar una crítica implacable al gobierno de colaboración de clases encarnado en la UP, con el objetivo de que los trabajadores superaran políticamente esa experiencia. Muy por el contrario, detrás de la lógica del giro revolucionario del ala izquierda de la UP, su política redundaba, en concreto, en presionar por izquierda al gobierno para que radicalice sus medidas, sin denunciar

su carácter de clase. Como consejero izquierdista del gobierno frente-populista, el MIR quedaba inhabilitado para proyectar a los cordones industriales y comunales como potenciales órganos de doble poder de la clase obrera y para proyectarse a sí mismo como la dirección política de esos órganos. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez, por su parte, nace como el brazo armado del Partido Comunista. El PC chileno, el partido comunista más proletario de América Latina en aquel entonces, intentaba dar respuesta de esta manera a los cuestionamientos de su propia base, resolviendo por medios militares un problema de pura estrategia política. Pues la derrota de 1973 no era el fruto de la debilidad organizativa o militar del proletariado chileno, sino de su entrapamiento político detrás del frente popular de colaboración de clases, que había tenido al PC como su más acérrimo defensor.

La ausencia de un balance crítico de fondo de la experiencia de la Unión Popular y de los partidos de la izquierda de aquel entonces es lo que ha empujado a todo un sector de la vanguardia a confundir el rechazo a la estrategia levantada por esas organizaciones con el rechazo a los partidos en general y a la necesidad de una dirección política revolucionaria. Han procedido a refugiarse en el movimientismo o en el autonomismo, elevando a los órganos de democracia directa o de auto-organización de las masas a condición suprema, con independencia de sus direcciones políticas. Pero incluso esos órganos, como lo pueden ser las asambleas populares o los soviets, pueden ser inhibidos por los sectores centristas y vacilantes para evitar que se proyecten como órganos de lucha y, a su turno, de poder alternativo; o directamente ser utilizados por la reacción para engañar a la vanguardia y encarrillarlos en un sentido contrarrevolucionario. El Partido Obrero ha sostenido importantes polémicas en torno de este problema, no solo con las corrientes autonomistas pequeño-burguesas surgidas luego de la rebelión popular de 2001 en Argentina. También con partidos de izquierda, en especial con el PTS, que revisando la tradición bolchevique ha hecho propio un planteo "sovietista". Lenin fue contundente sobre esta cuestión, cuando luego de las jornadas de julio de 1917 reconsideró la actualidad de la consigna "todo el poder a los soviets", ante el papel contrarrevolucionario de los mencheviques y los eseristas al frente de esos organismos, para considerar que los órganos del poder obrero podrían llegar a ser los comités de fábrica. Los bolcheviques retomaron la agitación de la consigna "todo el poder a los soviets" en septiembre, una vez que ganaron la mayoría en el soviet de

Petrogrado. El PTR de Chile, que tiene al PTS como su 'partido madre', no sólo ha "heredado" el "democratismo soviético" sino también el electoralismo. El PTR fue sorprendido por el estallido social con una caracterización completamente conservadora, que fue fijada en su Conferencia Nacional veinte días antes de que se desate la rebelión popular. En esa conferencia, el PTR estipuló que en Chile primaba una "estabilidad relativa" y que el escenario electoral tomaba "cada vez más peso, no solo hacia las municipales de 2020, sino también sobre las figuras presidenciales de 2021". Sobre esa base, colocaban la intervención electoral como su principal tarea. El PTR reproducía así la orientación del PTS, que ha reducido su intervención en el movimiento de masas de la Argentina a la propagandización de sus figuras electorales.

En una palabra, la lucha por la puesta en pie de un partido revolucionario en Chile sigue planteada. De este problema político fundamental han tomado nota numerosos activistas y núcleos revolucionarios. Por eso mismo, el Frente Anticapitalista de Concepción, el Comité por un partido de trabajadores de Santiago, la organización Alternativa Socialista de Valparaíso y el Partido Obrero de Argentina han fundado la *Fuerza 18 de Octubre*, que cuenta además con relaciones en Temuco, Pucón, Chiloé y Arica, en pos de avanzar en la estructuración de un partido revolucionario. El concurso del Partido Obrero en este proceso es consecuencia, por un lado, del pedido expreso realizado por el Frente Anticapitalista de Concepción, que cuenta con una extendida intervención política y social, y que reconoce en el PO una coherencia revolucionaria y una gran capacidad organizativa. Y del otro lado, del internacionalismo del propio Partido Obrero, que envió más de una decena de brigadas militantes a apoyar la rebelión, a aprender de ella y a colaborar con la puesta en pie de una organización revolucionaria.

El método político para poner en pie este Comité de Enlace ha sido el único método posible para encarar una tentativa de este tipo: la elaboración de un documento político-programático. Es decir, un documento que traza una caracterización de conjunto y establece las principales líneas tácticas y estratégicas para intervenir en la rebelión chilena. El documento no será, simplemente, el inicio de un "proceso de militancia común" entre las organizaciones firmantes del mismo. Será también un factor de reclutamiento, con el objetivo de reagrupar a los centenares de activistas y luchadores que se han destacado en todo el país como organizadores de la rebelión y que han roto con los

partidos patronales, particularmente con el Frente Amplio. Existen enormes condiciones para avanzar en esta dirección. Es, justamente, el desafío planteado.

Notas

1. Plaza Dignidad: es el nombre que popularmente adoptó la Plaza Italia de Santiago de Chile, haciendo referencia a la pelea del pueblo por dignidad.
2. Los pingüinos: así denominaron a los jóvenes estudiantes secundarios movilizados, por el color de su vestimenta.
3. Los cabros: es la denominación popular que recibe la juventud en Chile.
4. Funada: escrachada.

Golpe contrarrevolucionario en Bolivia

Impotencia del MAS y de la izquierda

Rafael Santos

En Bolivia se produjo un golpe reaccionario, apalancado por el imperialismo yanqui con la complicidad y colaboración del presidente brasileño, Bolsonaro, y del gobierno de Macri. A la cabeza del golpe estuvo la derecha boliviana, concentrada en Santa Cruz de la Sierra, que sumó al Ejército y la Policía para imponer la renuncia de Evo Morales y todo su gobierno, así como de las principales figuras del masismo. El golpe tuvo el visto bueno de los dirigentes de la Central Obrera Boliviana e incluso de partidos de la izquierda.

El golpe obedeció a una combinación de hechos. Por un lado, el deterioro de la situación económica de Bolivia, como expresión de la propia crisis capitalista, y la necesidad de trasladar los costos de la misma a las masas bolivianas. Por otro, a avanzar en un control mayor por parte de los capitales internacionales de la actividad minera, fundamentalmente el litio, sin la necesidad de depender de un acuerdo con la burguesía “chola”. También imperó la necesidad del imperialismo y la burguesía de los países de Latinoamérica de quebrar la seguidilla de rebeliones populares que se fueron desarrollando en la región (y que están aún activas), desde Puerto Rico a Chile, pasando por Haití, Nicaragua, Ecuador y Colombia. Para el gobierno de Trump es fundamental controlar su “patio trasero” en el marco de la guerra comercial con China y, en particular avanzar en el

desplazamiento de Maduro, sobre todo, luego del fracaso que está padeciendo la “vía Guaidó”.

Un golpe en Bolivia allana ese camino, por ello, la golpista presidenta Añez decretó, como medidas de “emergencia”, la ruptura de relaciones con Cuba y Venezuela, el reconocimiento diplomático del Estado sionista de Israel y otras, lo cual fue respondido por Trump, entregando una modificación presupuestaria al Parlamento yanqui para levantar el boicot al suministro de asistencia al gobierno boliviano, considerándolo “vital para los intereses nacionales de Estados Unidos”.

La conciencia de que Evo Morales no iba a ganar las elecciones con un resultado plebiscitario dio comienzo al operativo golpista en los meses previos, y un papel fundamental lo jugaron los llamados “Comités Cívicos”. Los Comités Cívicos de Bolivia son instituciones policlasistas regionales, una especie de multisectoriales, controladas por los partidos burgueses y los grupos capitalistas de cada zona. En un clima semiasambleario se debaten problemas regionales, predominando los intereses de los grupos capitalistas, con reclamos contra el gobierno nacional. De estos comités surgieron los Camacho y Pumarí, entre otros, figuras destacadas en el golpe.

El golpe ha tenido características sangrientas, reaccionarias, de profunda discriminación de la población indígena, y debió enfrentar una extraordinaria resistencia del pueblo boliviano oprimido, sobre todo del campesinado, que ha escrito una de las páginas más encomiables de su historia de lucha.

La lucha por derrotar al golpe, de retomar la resistencia contra el mismo es la tarea principal de las masas bolivianas y de toda Latinoamérica; ello implica superar la política del MAS y de Evo Morales, que se han entregado al golpismo llevando la resistencia popular a un impasse. El presente artículo profundiza acerca de las razones del golpe, la conducta del MAS y de la izquierda, en la necesidad de estructurar una salida independiente de los explotados y una dirección revolucionaria de los trabajadores bolivianos.

Bolivia, un episodio de la crisis capitalista mundial

De la misma manera que Chile era mostrado internacionalmente como modelo exitoso de desarrollo económico, usando los principios del llamado neoliberalismo, el régimen de Evo Morales en Bolivia fue tomado como ejemplo por las corrientes nacionalistas burguesas del continente.

El Chile pospinochetista mostraba tasas de crecimiento económico

sostenidas año tras año, aunque a un costo social elevado (arancelización de la educación, privatización del sistema jubilatorio, pensiones paupérrimas, etc.).

La Bolivia del MAS se jactaba de haber vencido al liberalismo con su economía de capitalismo (o socialismo) andino. “El país que más crece en América Latina”, decían los propagandistas para explicar la estabilidad política que vivía el país del Altiplano.

Pero en los dos casos irrumpió la crisis capitalista mundial. En Chile, provocando un estallido revolucionario en curso. En Bolivia, la impasse y crisis del gobierno de Evo Morales y el estallido de un golpe reaccionario.

Algunos analistas afirman que Bolivia vivía un “milagro económico”, que comenzó a tener dificultades a partir de la inestabilidad política producida por el golpe que destituyó al gobierno de Evo. Pero el Producto Bruto Interno (PBI) boliviano venía retrocediendo, creciendo a menor velocidad. En 2013 creció un 6,83% y en 2019 -según la Cepal- bajó a 3,9%.

La causa de esta ralentización económica hay que buscarla en el parate económico mundial, que lleva a una menor demanda de materias primas de los países atrasados. Bolivia es exportadora de hidrocarburos, minerales y soja. El precio del zinc, una de las principales explotaciones bolivianas, y el del estaño cayeron más de 20%, meses antes de las elecciones de octubre. La causa directa de la caída de precios de estos dos minerales estrella de la exportación boliviana reside, en primer lugar, en el freno al crecimiento económico en China, que demanda menos materias primas para sus industrias, y en el crecimiento de la oferta, que suma nuevos productores (Australia y otros). Los hidrocarburos, que eran hasta hace poco la principal fuente de riqueza por la exportación, han venido retrocediendo no solo en los precios sino también en volúmenes exportables. Argentina y Brasil compran menos gas a Bolivia, no solo por las recesiones que han estado atravesando, sino también a que trabajan por su autoabastecimiento (Presal, Vaca Muerta). El 80% de las exportaciones bolivianas son minerales e hidrocarburos. La relación entre estos dos tipos de productos era, en 2012, 40% minerales, 60% hidrocarburos. Hoy es al revés, pero en un marco de retroceso de conjunto. El crecimiento de la minería en el PBI de 2018 fue 1,87%, que contrasta con el aumento general del PBI, que fue del 4,2%.

Esto ha llevado a un aumento del endeudamiento externo, que pasó del 38% del PBI en 2014 al 53% en 2019 (30% de aumento), producto directo del fuerte deterioro de la balanza comercial. Por quinto año con-

secutivo Bolivia tiene déficit comercial. Las reservas monetarias del Banco Central cayeron de 15.100 millones en 2014 a 8.000 millones de dólares actuales, según el Banco Mundial.

A esto hay que sumarle el déficit fiscal del Estado boliviano: es el más alto de América Latina, con la cifra récord de ¡8,9% del PBI! La aparente “estabilidad” macroeconómica está succionando los ahorros del Banco Central e incrementando el endeudamiento del país.

Frente a este panorama, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) venía exigiendo al gobierno la implementación de medidas de “ajuste” para fomentar la actividad industrial manufacturera y enfrentar la desaceleración económica y la inseguridad jurídica.

El crecimiento del PBI, que se logró entre julio 2018 y junio 2019 (3,38%), no alcanzó para que se pague el segundo aguinaldo (una conquista conseguida bajo el gobierno de Evo, que planteaba que si el PBI crecía un 4,5%, los trabajadores cobrarían doble aguinaldo).

La explicación del gobierno de Evo para el no pago del segundo aguinaldo era por la caída del precio de los hidrocarburos, del 20,11%, uno de los principales sustentos de la economía boliviana.

El gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, afirmó en ese momento que “no tener que pagar el doble aguinaldo este año viene a ser un alivio para el sector empresarial”. En Bolivia, también, la crisis significa ajuste para los trabajadores.

Ya el FMI, en octubre de 2018, planteaba que, si bien Bolivia seguía siendo una de las economías que crecían en América Latina, “es necesario un cambio en la orientación de las políticas para restaurar el equilibrio externo, reducir los déficits fiscales y de cuenta corriente, y mejorar la competitividad”. Por lo tanto, no es que la “inestabilidad” política (como llaman al golpe) fuera la causa de la entrada de Bolivia en el campo de las crisis económicas, sino al revés, esta perspectiva de empantanamiento y crisis económica es la que explica por qué sectores de las clases patronales le iban soltando la mano a Evo Morales, reclamando “ajustes” diversos (devaluación monetaria y otras).

Desde el punto de vista social también estamos frente a un empantanamiento y retroceso. A pesar de que se habla de que, gracias a una política redistribucionista de Evo, se ha reducido notablemente la pobreza, Bolivia sigue siendo el país más pobre de Sudamérica. Si bien la desocupación disminuyó, el ¡70%! del trabajo es en negro, “independiente” o precarizado: es decir, mal pago. La salud pública solo cubre poco menos que del 50% de la población.

El fracaso del planteamiento estratégico del MAS

Kirchner subió al poder, en 2003, no como protagonista del Argentinazo -en el cual no tuvo ningún papel- sino como recurso político del nacionalismo burgués para encauzar la crisis de 2001/2 y su irrupción de masas. En cambio, Evo Morales y el MAS fueron partícipes directos en los levantamientos campesinos-indígenas (la guerra del gas y otras). El MAS se estructuró como un movimiento nacionalista pequeño-burgués, con base principal en el campesinado indígena. Su reivindicación nacional central fue la nacionalización de los hidrocarburos, una medida anti-imperialista para utilizar la renta petrolera como impulsor del desarrollo económico nacional. Pero fue una “nacionalización” hartamente limitada, que incrementó el ingreso de impuestos y regalías, y siguió dejando en manos de las transnacionales el negocio de la exportación. Catorce años después de su ascenso, tenemos que casi el 90% de la exportación de este rubro está en manos de capitales imperialistas. El dinero que entró durante el auge de precios de las materias primas no fue utilizado para avanzar en un plan de industrialización del país. Una parte se redistribuyó bajo la forma de planes sociales (como en Brasil con el plan Hambre Cero o los planes Trabajar en Argentina) para mitigar la desocupación y la miseria. Otra fue a parar a obras públicas, una parte de ellas faraónicas, pero todas acusadas de altos índices de corrupción (algo común en todos los gobiernos latinoamericanos, sean nacionales y populares o neoliberales: Odebrecht y otros). El MAS propugnaba una alianza de clases nacional para trabajar junto al capital imperialista en planes de desarrollo nacional. Lógicamente, como el resto de los movimientos nacionalistas burgueses, su intención declarada era fortalecer la constitución una burguesía nacional incorporando a sectores indígenas. Algunas capas indígenas se enlazaron en sectores como el comercio, el transporte, las obras públicas y el agro (coca y otros). Pero la industrialización no avanzó y la base económica de Bolivia sigue siendo rentística, basada, esencialmente, en el extractivismo y la exportación de minerales e hidrocarburos. Las palancas centrales económicas están en manos imperialistas. La mina más importante de Bolivia, San Cristóbal, es propiedad de la japonesa Sumitomo. La riqueza minera de Bolivia ha sido históricamente saqueada por el capital imperialista. El descubrimiento de grandes yacimientos de litio, el nuevo mineral estrella -utilizado para celulares, autos eléctricos, etc.- encontró al gobierno de Evo Morales, en su caída, firmando contratos de entrega con capitales alemanes. (El gobierno de Añez ha abierto discusiones con la empresa germana ACI Systems para renegociar los mismos.)

Como variante pequeño-burguesa de los movimientos nacionalistas burgueses, el ascenso del MAS está por detrás de lo que fue el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) en la mitad del siglo pasado, que expropió la minería y derribó al gobierno oligárquico valiéndose de la insurrección realizada por los trabajadores mineros en 1952. En cambio, Evo indemnizó a los monopolios petroleros y estableció una asociación con ellos, pactó con la derecha reaccionaria de Santa Cruz. El cierre del ciclo del MNR, que devino directamente, 50 años después, en gobiernos derechistas represores, entregados al capital extranjero, dio lugar al sucedáneo pequeño-burgués nacionalista con base en la masa indígena excluida de la vida política boliviana.

Como todo movimiento nacionalista burgués de un país atrasado oprimido por el imperialismo, el de Evo asumió formas de gobierno bonapartistas. Subió al poder apoyado en fuertes referéndums y votaciones plebiscitarias, sostenido fundamentalmente en las masas indígenas del campo y la ciudad. Parte importante de los trabajadores precarizados de las ciudades son de origen aymara. Evo fue el primer presidente aymara de la historia boliviana. Para sostenerse contra la derecha reaccionaria fuertemente racista anti-indígena y el imperialismo, el MAS buscó el apoyo popular pero a través de la regimentación de las organizaciones de masas. Lo que significó la represión y la cooptación sobre las tendencias independientes dentro de los trabajadores y sobre la oposición. Tratando de arbitrar entre las clases, fue abandonando crecientemente los postulados declarados al subir al poder. En lugar de defender al medioambiente (la Pachamama tierra) se convirtió cada vez más en extractivista, reprimiendo comunidades que se negaban a la minería contaminante a cielo abierto. Apoyando la extensión de la frontera agropecuaria de la oligarquía ganadera y sojera, haciendo la vista gorda ante la quema de bosques (Chiquitanía) o la fuerte resistencia indígena a la deforestación para construir una carretera en el Tipnis, etc.

También enfrentó las luchas obreras. Emblemática fue la de los obreros textiles de Enotex, que ocuparon la fábrica y se movilizaron contra su cierre y el despido de 800 trabajadores, siendo fuertemente reprimidos; también la de los mineros y otros. A principios de 2018 triunfó una huelga de 50 días de profesionales médicos contra reformas punitivas del Código Penal que -fuertemente reprimida- canalizó el apoyo de sectores de la clase media (camioneros, estudiantes, etc.). La huelga expuso a la luz el desastre de la salud pública que se intentaba ocultar, tomando como chivos expiatorios al personal médico y sanitario.

La situación del pueblo indígena tampoco se modificó sustancialmente. Obtuvo mayores libertades democráticas, ganadas con sus fuertes movilizaciones contra la burguesía oligárquica blanca y racista de la Media Luna de Santa Cruz, que Evo terminó frenando para pactar con ella un acuerdo de gobernabilidad sobre la base del respeto a sus posiciones sociales terratenientes. En forma más amplia, muchos funcionarios de la burocracia estatal surgieron de las filas indígenas -a veces como parte de un proceso de cooptación política- en detrimento relativo de la tradicional burocracia “blanca”. Socialmente, ya hemos planteado, que una política distributiva con subsidios y el reanimamiento económico disminuyó la desocupación y los niveles de pobreza, pero aumentó drásticamente la informalidad, la precarización y la superexplotación de los trabajadores. El gran problema del país latinoamericano con mayor proporción de población indígena autóctona es el de la tierra. En ese sentido, las reformas agrarias que llevó adelante fueron marginales, distribuyendo sobrantes de tierras fiscales, pero sin tocar las ricas posesiones de los terratenientes oligárquicos.

Este cuadro económico-social fue produciendo un desgaste político creciente del gobierno bonapartista regimentador de Evo Morales. Lo que se evidenció en que sus triunfos electorales plebiscitarios fueron siendo cada vez por menor margen.

21F y crisis política

“¿Usted está de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que la presidenta o presidente y la vicepresidenta o vicepresidente del Estado puedan ser reelectas o reelectos dos veces de manera continua?”

Bajo estos términos, Evo Morales convocó a un referéndum para que el pueblo lo habilitara a una nueva reelección. El referéndum fue convocado para el 21 de febrero de 2017: tres años antes que venciera el mandato de Evo, el 22 de enero de 2020.

¿Por qué tanto adelanto? Porque el propio Evo preveía las nubes negras que se estaban dibujando -producto de la crisis capitalista mundial en curso- sobre el futuro económico de Bolivia.

El resultado le fue negativo: 51% votó por el No a la reelección y 49% a favor.

Esto originó una crisis política fogueada directamente por la iniciativa del MAS de convocar a referéndum y perderlo.

¿No le bastaban catorce años continuos de gobierno? ¿Era fundamental

que siguiera como presidente -si triunfaba tres años después en otra elección- hasta 2026? ¿No podía elegir otros dirigentes del MAS que eventualmente continuaran a su gobierno?

Una de las características de un régimen bonapartista nacionalista burgués de un país atrasado es que su gobierno gira -sometido a las grandes presiones que recibe, tanto del capital financiero, por un lado, como de las masas en lucha, por el otro- en torno del arbitraje que ejerce un líder carismático, que funde su vigencia en una supuesta (o real) voluntad popular. La agudeza de la lucha de clases impide gobernar con métodos democráticos parlamentarios -aunque a veces haya conseguido incluso mayorías parlamentarias. Las clases dominantes resignan su poder directo y están dispuestas a tolerar la dominación semiarbitraria-autoritaria para ahuyentar el fantasma de la insurrección popular y la creación de nuevas situaciones revolucionarias. El bonapartismo se presenta como un “régimen personal” que parece elevarse por encima de la sociedad, conciliando entre diversas clases, aunque siempre, protegiendo los intereses de la clase económicamente dominante.

No es fácil transmitir la autoridad política del líder bonapartista al frente del gobierno y menos cuando van asomando signos de crisis e inestabilidad. Por eso, Evo no pudo elegir un sucesor y se tiró a la piletta del referéndum. Su salida acelerada por el golpe puede acelerar un proceso de divisiones y dispersión del movimiento sobre el que llegó al poder. Ahí tenemos la experiencia del nacionalista burgués Rafael Correa en Ecuador, que “transfirió” su apoyo electoral a Lenín Moreno y cuando este asumió llevó adelante una política abiertamente ajustadora, “apretado” por las condiciones de crisis económicas, “independizándose” de su mentor-antecesor.

Para prevenir esto es que Evo intentó obtener la reelección que la Constitución prohibía, y el referendo del 21F volvió a negarle, acelerando su desgaste y crisis política.

Contrariado por el cuadro creado, Evo forzó una declaración del Tribunal Constitucional (manejado por su régimen bonapartista) habilitándolo -en defensa del “derecho humano” de elegir y ser elegido- a presentarse en las elecciones del 20 de octubre de 2019, anulando, por lo tanto, la prohibición votada en el referéndum del 21F.

La posición del gran capital

El MAS en el poder evidenció su capacidad para encauzar el formidable ascenso revolucionario, iniciado con “la guerra del agua”, primero, con “la

guerra del gas” después, y con las masivas y combativas movilizaciones en torno de la Constituyente contra los intentos golpistas-secesionistas de la oligarquía santacruceña.

Al mismo tiempo, estableció un *modus vivendi* tanto con la oligarquía terrateniente y capitalista de la Media Luna dirigida por Santa Cruz como con el gran capital. Se fueron armando los “negocios” en términos crecientemente favorables para el capital extranjero (privatizaciones y otras). Asimismo, las fuerzas de la derecha estaban divididas y atomizadas.

Esto llevó a que se “aceptara” el fallo del Tribunal Constitucional, que autorizaba la nueva postulación de Evo Morales. Luis Almagro, secretario general de la OEA, viajó especialmente a Bolivia y ungió la presentación electoral de Evo Morales, lo cual provocó fuerte escozor y hasta repudio en sectores de la derecha, pero que no pasaron de la protesta verbal. La OEA hablaba en nombre del imperialismo yanqui y la corte de gobiernos latinoamericanos.

Pero el avance creciente de la crisis capitalista y el desgaste del gobierno (incluso con fuertes movilizaciones como la de la huelga de los médicos) llevó a pensar que esta vez Evo no iba ganar o, por lo menos, no lo haría en forma plebiscitaria.

Hace once años que no hay embajadores entre Bolivia y Estados Unidos. Aún así, el movimiento comercial ha seguido desarrollándose y creciendo. Alineado el MAS con el ala chavista en política continental, su intervención pública se ha venido raleando. La polarización política y social en Latinoamérica, evidenciada en los estallidos de masas en Chile, Ecuador, Colombia y otras, y la derrota electoral de Macri, uno de los puntales de Trump en América Latina, han llevado a que éste, Bolsonaro y, hasta que se fue, Macri hayan alentado la organización de la derecha boliviana y una eventual perspectiva golpista. De acuerdo con encuestas previas, Evo ganaba las elecciones de 2019 por un margen reducido. La usina desestabilizadora giró en torno de que el masismo iba a realizar fraude electoral para dar ganador a Evo.

Fraude o triunfo electoral de Evo

Oficialmente, el resultado electoral de los comicios del 20 de octubre de 2019 dieron ganador al MAS de Evo Morales con el 47,08% de los votos, contra su oponente inmediato, el derechista, expresidente que había presentado su renuncia en la época de la guerra del gas, Carlos Mesa, que sumó 36,51%. La noche del escrutinio se cortó la información varias horas, lo que alimentó la agitación de la derecha de estar ante un fraude.

Nadie pone en cuestión que el MAS fue el partido más votado, pero se hizo correr la versión que habría “fraudeado” unos pocos miles de votos para descartar una segunda vuelta de elección presidencial. La Constitución boliviana plantea que se gana las elecciones en primera vuelta si se saca el 50,1% de los votantes o bien más del 40%, pero con una diferencia de más de 10 puntos respecto al segundo candidato. Y la diferencia -en el escrutinio oficial- era de 10,57, apenas unas décimas por arriba de las necesarias.

El ganador neto fue el MAS, con gran diferencia frente al segundo candidato. Pero un artificio constitucional obliga a ir a un balotaje para forzar la formación de una mayoría: una medida no democrática.

Según numerosos informes que se fueron conociendo, la agitación derechista fue siendo preparada hace tiempo -por una política aventurera de Trump y Bolsonaro (con el apoyo diplomático-logístico de Macri)- para debilitar electoralmente a Evo y forzar, de ser necesario, a la segunda vuelta. En una segunda vuelta, los partidos de derecha que fueron divididos en varias listas podrían llegar a unirse para derrotar al MAS, lo que sería burlar la voluntad popular mayoritaria en materia de elección presidencial, para crear una mayoría amañada y comprada.

Pusilanimidad

Frente a la campaña de la derecha, que se lanzó a organizar protestas callejeras, Evo planteó la intervención de la OEA para que auditara y certificara la corrección de los guarismos electorales con los que habría triunfado en la primera vuelta. Confió en que el apoyo preelectoral de la OEA a la presentación de su candidatura (por encima de la Constitución y del resultado del referéndum 21F) y el temor de la burguesía a que se abriera una nueva situación de inestabilidad y la amenaza de nuevas crisis revolucionarias, volvieran a manifestarse con un aval al escrutinio oficial. La OEA pidió, para aceptar, que su laudo fuera vinculante, de acatamiento obligatorio para los actores electorales. Evo, sin titubear, aceptó.

A tal punto la confianza de Evo era una posibilidad real, que los partidos de derecha al principio aceptaron la auditoria de la OEA. Pero casi inmediatamente -al ver que su protesta contra el “fraude” crecía- lo rechazaron en forma abierta, pidiendo, primero, la segunda vuelta electoral definitiva y, más tarde, la renuncia directa de Evo Morales y el gobierno del MAS.

Desde el Partido Obrero denunciamos la pusilanimidad de Evo de confiar en el papel imparcial de lo que el Che Guevara había llamado en

su época “el ministerio de colonias del imperialismo yanqui”. La OEA iba a seguir -en definitiva- lo que dictaminara el Departamento de Estado norteamericano. Esto ya se había manifestado en declaraciones preliminares, donde Almagro, secretario de la OEA, planteaba que cualquiera fuera el veredicto final de la auditoría, el gobierno debería adelantarse y convocar a la segunda vuelta para “pacificar” y distender la situación.

El dictamen final de la OEA -que recién se daría a conocer después de que Evo fuera volteado- denunció algunas anomalías (menores incluso que las de un escrutinio “normal”) que, de todas formas, no alteraban el nítido triunfo del MAS.

La reacción “democrática” de la derecha

Mientras la derecha se lanzó a una agitación callejera contra el fraude y por la destitución del gobierno masista, Evo movilizó tímidamente a sus bases. Se sentó a esperar el fallo de la OEA, como si fuera un problema de auditorías y no de movilización y lucha en las calles. La derecha no estaba dispuesta a reconocer ningún fallo en favor de Evo, aunque ya la OEA estaba cambiando. La parálisis de Evo fue envalentonando cada vez más a la derecha, cuya propaganda iba prendiendo en sectores de clase media bajo consignas de la lucha por la “democracia”, contra el fraude, el autoritarismo y la “corrupción”.

La “corrupción” es intrínseca al sistema capitalista de producción, donde existe una competencia permanente entre los diversos capitalistas por conquistar los principales negocios. Apelan especialmente a la corrupción (y a la presión diplomática, guerras, etc.) para conseguirlos. La bandera contra la corrupción ha sido levantada por el imperialismo y las derechas burguesas contra los regímenes nacionalistas burgueses (Lula, Cristina, Correa, Evo, etc.) para desplazar a sectores de la burguesía nacional de importantes negocios (especialmente en la obra pública) y favorecer la penetración “honesta” del capital financiero imperialista. Odebrecht y su relación con diversos gobiernos latinoamericanos (Brasil, Argentina, Perú, etc.) es evidencia de esto. En la Argentina, la derecha macrista en el poder, apoyada por el imperialismo, ha hecho una cruzada contra la corrupción (en gran medida cierta) del gobierno kirchnerista, tratando de convertirla en una causa popular entre amplios sectores de clase media. Lógicamente, tapando su propia corrupción y negociados, muchas veces enlazados con las camarillas K. El ataque político a la corrupción de los gobiernos nacionalistas burgueses va acompañado y asimilado a la crítica a toda medida de intervención estatal sobre la economía, particularmente cuando

esta establece alguna protección a los trabajadores o de limitado control al accionar depredador del capital, dando vía libre al accionar del capital financiero y los monopolios y sus latrocinios de “mercado”.

Sobre el MAS hay suficientes denuncias (obras faraónicas, con sobreprecios, etc.) de corrupción, tanto como con cualquier otro gobierno capitalista. Para eliminar la corrupción hay que terminar con el capitalismo e instaurar un gobierno obrero y campesino. Como transición, abrir los libros de los capitalistas y establecer el control obrero.

Algunas burocracias sindicales participan en los Comités Cívicos, buscando un denominador común con los grupos capitalistas locales. En lugar de impulsar la constitución de organizaciones autoconvocadas independientes de los trabajadores -tomando el ejemplo de las Asambleas Populares de la década del '70 y otras, dirigidas por el movimiento obrero, que agrupan a todos los explotados de la zona (campesinos, indígenas, estudiantes, etc.) en defensa de sus intereses contra la explotación capitalista-, subordinan a las masas tras reclamos comunes con la burguesía. Algunos partidos de izquierda (el más importante es el Partido Obrero Revolucionario, POR) quisieron ver en estas instituciones un germen democrático movilizador de masas, que se podían transformar en especies de soviets, canales de movilización de los explotados. Tomar en cuenta que en estos Comités Cívicos no solo había trabajadores que confiaban políticamente en los partidos burgueses, sino políticos burgueses directamente, sin ningún límite a la derecha. En el caso de Santa Cruz, se nominó como presidente del Comité Cívico, a Luis Camacho, un fascista-bolsonarista redomado, clerical y racista. Estos Comités Cívicos fueron la base organizativa para movilizar a la derecha y sectores de la clase media ciudadana “contra la corrupción y por la democracia”, para derrocar a Evo Morales.

No fue una “insurrección democrática”, fue golpe reaccionario

Envalentonada por el apoyo imperialista y la pasividad del gobierno de Evo, la derecha comenzó a lanzar grupos de choque para atacar a funcionarios y a sectores de las comunidades indígenas. Luis Camacho fue la figura relevante de esta ofensiva derechista, que amenazaba con linchar a los funcionarios gubernamentales si no renunciaban (se divulgaron, a través de las redes, videos mostrando cómo una patota arrastró varios kilómetros por el fango a una alcaldesa del MAS, etc.). Llamando a ganar las calles para imponer la segunda vuelta electoral contra el “fraude” primero y, luego, directamente por el derrocamiento del gobierno del MAS. Camacho reconoció, ahora, públicamente que envió emisarios que se entrevistaron

con las cúpulas policiales y lograron el compromiso de no reprimir las movilizaciones contra el gobierno ni los ataques fascistas contra las masas que quisieran resistir. Evo Morales intentó romper este cerco golpista convocando a nuevas elecciones, con nuevo Tribunal Electoral. Esto fue desechado por la derecha que reclamaba, ahora directamente, su renuncia. El dirigente del Comité Cívico de Potosí, Antonio Pumari, pidió al Ejército “que salgan de una vez por todas y, si no tienen la capacidad de hacerlo, que nos den las armas a nosotros”. Con el pacto con la cúpula policial armado, Camacho viajó a La Paz a pedir públicamente la renuncia de Evo Morales, colocándose como líder público de la asonada golpista que estaba en marcha. El diario argentino *La Nación* publicó: “Camacho reconoció que pactó y coordinó las protestas con la policía y el ejército para forzar la salida de Morales del poder... el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz explicó en un video que fue su padre, José Luis Camacho Parada, quien ‘cerró’, con la mediación del ahora ministro de Defensa, Fernando López, un pacto con policías y militares”.

Es en este cuadro que el alto mando militar planteó públicamente a Evo Morales que renuncie para “pacificar” el país. La Policía y el Ejército ya estaban en las calles protegiendo el accionar de las bandas derechistas y manifestaciones antigubernamentales, reprimiendo las marchas y bloqueos que empezaban a desarrollarse en defensa del gobierno.

Acatando el ultimátum militar, presentan su renuncia Evo Morales, su vicepresidente García Linera, su gabinete de ministros y toda la línea de dirigentes del MAS que encarnaban la sucesión constitucional. El diario *Página Siete* (Bolivia) acaba de publicar declaraciones de la senadora Adriana Salvatierra, que es la que constitucionalmente debía asumir la presidencia de Bolivia y que también presentó su renuncia, provocando una situación de acefalía: “Mi renuncia verbal a la presidencia de la Cámara de Senadores no se debió a motivos personales sino a razones políticas. Esta decisión fue asumida de manera conjunta con el presidente Evo Morales y con el vicepresidente, García Linera”.

La renuncia de Evo Morales y su séquito de funcionarios de primer nivel no fue solo un acto de cobardía política, sino que fue pautado con las Fuerzas Armadas, de manera de crear un “vacío constitucional de poder” y permitir la imposición directa de la senadora Jeanine Añez, quinta en la lista del orden constitucional, como presidenta interina.

Está claro que no estamos ante una insurrección de masas, sino ante un golpe cívico-militar, impuesto en forma cruenta.

Entrega del MAS e irrupción de las masas

Ante el avance de la derecha, la dirección burocrática y masista de la Central Obrera Boliviana (COB) sacó una declaración pidiéndole al “hermano Evo” que renunciara. Juan Carlos Huarachi, dirigente de la COB, llamó públicamente al “compañero presidente” a reflexionar y asumir la “responsabilidad de renunciar si es necesario para pacificar el pueblo boliviano”.

Esta declaración pública de la COB fue la garantía de que las direcciones burocráticas del MAS no iban a impulsar la movilización de las masas organizadas en las centrales obreras y campesinas contra el golpe. Eso fue lo que decidió intervenir al Ejército en forma abierta. Hasta ese momento había vacilado, intentando presentarse con una posición de supuesta neutralidad, por temor a que una irrupción de masas -como ha sucedido en otros procesos históricos de Bolivia- hiciera fracasar la tentativa golpista y dividiera al Ejército. “Luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia”, afirma el comunicado leído por el comandante Williams Kaliman.

Evo Morales y la plana mayor de su gobierno presentaron de inmediato sus renuncias, anunciaron -poco después- que se iban del país y llamaron a “pacificar”, es decir a que las masas que habían iniciado un fuerte proceso de movilización no enfrentaran el golpe. La actitud facho-racista de Camacho con la Biblia en la mano, quemando la wiphala (bandera de unión de las comunidades indígenas) enervó y radicalizó más la reacción antigolpista de las masas indígenas del campo y las ciudades. Con eje en la ciudad de El Alto, contigua a La Paz, se desarrollaron fuertísimas movilizaciones y choques. Bajando multitudinariamente decenas de miles de manifestantes. Al tiempo que en numerosas zonas (Cochabamba y otras), masas campesinas indígenas bloqueaban las rutas y cercaban a las ciudades impidiendo todo movimiento, incluido el abastecimiento de las mismas. Los choques fueron creciendo y la represión muy fuerte. Se informa más de 40 muertos, miles de heridos y centenares de presos. A pesar de la militarización represiva del país (se sacó un decreto extraordinario autorizando todo tipo de excesos en la represión), los choques hicieron más de una vez retroceder a las fuerzas policiales-militares y los grupos fascistoides. La prensa progolpe -que era la única que tenía “libertad de prensa”- acusaba a los manifestantes de “bandas terroristas”, “hordas del masismo”, llamando a imponer “el orden”. Las masacres represivas de Senkata en El Alto y de

Sacaba en Cochabamba son de las más fuertes y conocidas.

En grandísima medida, las movilizaciones de masas contra el golpe se desarrollaron sobrepasando a las direcciones del MAS y desoyendo sus llamados a la “pacificación”. A pesar de estas masacres represivas, la COB no convocó a la huelga general ni siquiera a un plenario de las direcciones sindicales burocráticas.

La dirección burocrática de la COB evidenciaba así su fuerte tendencia a la integración al Estado. No es una burocracia que apoyaba a Evo Morales solo por afinidad política-ideológica, sino porque rechaza un accionar sindical independiente y no concibe su existencia sin la búsqueda de una política de colaboración de clases y de integracionismo estatal. Bajo el gobierno de Evo, uno de los dirigentes de la COB estaba al frente de Ministerio de Trabajo. Ahora, bajo el gobierno golpista de Añez, otro dirigente de la COB fue nominado viceministro de Trabajo.

Sin embargo, no fue la represión la que hizo refluir a las masas. Falta de una dirección estratégica, las masas fueron recontrapresionadas por Evo Morales y las dirigencias del MAS para abandonar la calle y aceptar la “pacificación”.

Los diputados y senadores del MAS, con mayoría en las dos cámaras parlamentarias, habilitaron la instalación del gobierno golpista de Jeanine Añez. Se ha establecido un acuerdo de cogobierno *sui generis* -con fuertes cooptaciones del golpismo- que permite el libre accionar de Añez, bajo la promesa de convocar a elecciones el 3 de mayo próximo.

La institucionalización del golpe

Una tendencia estratégica del imperialismo no es tratar de imponer dictaduras militares, sino desplazar a los regímenes nacionalistas burgueses en crisis por gobiernos derechistas más declaradamente sumisos a abrir las economías nacionales al capital financiero y alinearse internacionalmente con él. Con los golpes destituyentes pretende cambiar la correlación de fuerzas para imponer, con elecciones amañadas -con proscripciones: Lula, Evo Morales, etc., represión y persecución política, campañas mediáticas financiadas por el imperialismo y sus instituciones “democráticas”, etc.-, equipos derechistas. Esa ha sido la experiencia contemporánea de los triunfantes golpes de Estado en Honduras, Paraguay, Brasil y ahora en ejecución en Bolivia (no logrado en Venezuela). Romper el orden institucional para crear un “nuevo orden institucional”, alineado directamente con la política guerrerrista de Trump. La dictadura militar abierta (a lo Pinochet o Videla) queda como último recurso ante un fuerte avance re-

volucionario de masas. La burguesía prefiere manejar su Estado con el ropaje democrático-parlamentario, que le permite cooptar, maniobrar y eventualmente desplazar, a través de procesos pseudoconstitucionales y electorales, a gobiernos que no respondan más directamente a la realidad y a sus orientaciones del momento. En Bolivia tampoco están dadas las condiciones para instalar una dictadura cívico-militar, dado que las masas no han sufrido una derrota histórica y mantienen un alto grado de belicoidad. Un intento de avanzar en ese sentido volcaría seguramente, a sectores de la clase media que apoyaron el golpe, hacia la oposición al mismo.

El saludo de Mike Pompeo, secretario de Estado de Trump, a la colaboración entre el Parlamento dirigido por los masistas y el Poder Ejecutivo golpista evidencia que ninguno de estos golpes hubiera podido triunfar sin la complicidad de sectores del destituido gobierno nacionalista burgués. La destitución golpista parlamentaria de Dilma Rousseff como presidenta en Brasil, por su vicepresidente Temer, contó con la parálisis cómplice del PT, la Central Obrera (CUT) y demás organizaciones de masas dirigidas por el lulismo. Y lo mismo pasó en Paraguay con la destitución de Lugo. Y ahora en Bolivia.

La izquierda no fue (es) alternativa

La izquierda boliviana no un tuvo papel protagónico durante el desarrollo de la crisis boliviana. Una parte de ella fue cooptada y/o tiene políticas seguidistas, justificadas en un supuesto anti-imperialismo de Evo y el MAS.

La otra tuvo un rol lamentablemente más nefasto, haciendo causa común con el golpe derechista. Gran parte de este sector considera al día de hoy que no ha sido un golpe sino una “revolución” popular contra la tiranía de Morales, contra “el sátrapa en el poder”. Afirman que fue una insurrección popular usurpada por la derecha.

Confunden movilización de masas con revolución. No analizan el carácter de clase de las movilizaciones. El de Evo Morales era un gobierno nacionalista burgués. Pretendía desarrollar una burguesía “chola” en alianza con oligarquías tradicionales y sectores imperialistas. Como todo movimiento nacionalista burgués se empeñó en cooptar y regimentar las organizaciones de masas. Reprimió las tendencias de lucha obrera-popular.

Frente a estas circunstancias, la izquierda revolucionaria debe combatir la política regimentadora y represiva del gobierno nacionalista burgués, denunciar el abandono de banderas anti-imperialistas con las que coque-teó en el pasado para recibir apoyo de masas y llegar al poder y constituir

una oposición obrera, anti-imperialista, por un gobierno obrero-campesino.

Si una derecha fascistoide, abiertamente proimperialista, intenta un golpe de Estado usando banderas de democracia política formal, no hay que dejarse engañar. El triunfo de un golpe de ese tipo significa un reforzamiento de las medidas represivas, no una mayor democratización; un mayor alineamiento con el imperialismo, no un avance por la “liberación nacional”. Se trata de aplastar ese golpe. Sin apoyar al gobierno nacionalista burgués, criticándolo por sus inconsecuencias y capitulación que alientan a la derecha. Reclamando y organizando las masas para derrotarlo (milicias obreras, huelga general, etc.). Denunciando la pusilanimidad del nacionalismo burgués, que no moviliza por temor a una irrupción de masas que abra un cauce revolucionario.

Es la táctica elemental a aplicar en estas circunstancias, particularmente en los países atrasados. El Partido Obrero Revolucionario (POR) no fue neutral en este choque, sino que estuvo abiertamente del lado de la derecha. ¡Y de qué manera!

La lucha contra el golpe derechista es la táctica que llevó, en 1917, el partido bolchevique en Rusia cuando estalló el golpe de Kornilov. A pesar de que el gobierno Kerensky había puesto presos a sus dirigentes y los perseguía ferozmente en esos momentos, los bolcheviques llamaron a luchar contra el golpe; a realizar un frente común de lucha, sin dar ningún apoyo político al gobierno kerenskista. Estuvieron en primera fila de la lucha antigolpista, ganaron la confianza de las masas que seguían a los sostenedores políticos de Kerensky (mencheviques y socialrevolucionarios) y crecieron organizativa y políticamente. Derrotaron al ala derecha de la reacción burguesa y criticaron al gobierno impotente que no se animó a enfrentar consecuentemente el golpe, por temor a abrir paso a la insurrección obrera.

El centro del POR, en cambio, estaba colocado en la posición de derribar al gobierno del MAS, sin analizar procesos en marcha, lo que los llevó a buscar el frente con derechistas de todo pelaje. Luchar por el poder, por el derrocamiento de un gobierno burgués y por la instauración de un gobierno obrero y campesino es imperativo para un marxista revolucionario. Pero es necesario analizar, a quién favorece concretamente, en cada momento, ese derrocamiento: ¿abre el camino a un gobierno obrero y campesino o a la culminación de un golpe derechista reaccionario?

El POR tomó los Comités Cívicos, con predominancia de fuerzas burguesas (no proletarias), como un terreno del frente único, donde

hipotéticamente podía dar batalla para convertirse en dirección de una insurrección contra el gobierno del MAS. En su caracterización, las masas habían superado las ilusiones en el parlamentarismo burgués y en el MAS, evidenciando una clara tendencia insurreccional. El POR adoptó una posición de cretinismo anti-electoral y antiparlamentaria. Pronosticó un récord de ausentismo y votó en blanco, lo que sería la evidencia de la evolución de la conciencia política las masas, abandonando sus ilusiones democráticas y su abrazo al programa socialista revolucionario. Pero sucedió lo contrario: ¡la cantidad de votantes fue récord comparada con elecciones anteriores! Y el MAS obtuvo alrededor del 47% de los votos (casi la mitad del electorado), a gran distancia del derechista Mesa. El ultrismo abstencionista del POR lo marginó más aún, bloqueó una lucha por conquistar a obreros y campesinos para un voto a la izquierda revolucionaria, entregándolos a la demagogia de los partidos burgueses.

Inmediatamente después de las elecciones del 20 de octubre, la postura antielectoralista del POR se transformó en una histérica campaña contra “el fraude electoral”, en beneficio del respeto al voto, a la democracia abstracta, que ayudó el acceso antidemocrático de la derecha al poder. Se sumó plenamente a la agitación y movilización de la derecha. Según cuenta el propio POR, infantilmente pensaba que en la lucha “contra el fraude” y la “tiranía” se podía producir una revolución que llevara al POR a encabezar la lucha por el poder.

En los inicios de las manifestaciones “contra el fraude”, la derecha pedía que se realizará la segunda vuelta, pero el POR más “consecuente” reclamaba el derrocamiento de Evo. “Todo el pueblo a las calles hasta expulsar a Evo ahora y no en la segunda vuelta” llamaba una declaración del POR, 48 horas después de las elecciones y cuando aún no se sabía el resultado del escrutinio. Sí, el POR fue vanguardia en la lucha por el golpe.

Con escasa fuerza en el movimiento obrero, por la presencia dominante del MAS, el POR se inclinó hacia los Comités Cívicos donde intervenían sectores de las capas medias. Se esforzó por organizar la marcha de los Comités Cívicos sobre La Paz para derrocar a Evo. Incluso criticó a sectores fachos de estos comités (Camacho) por cortarse solos y romper la unidad de acción. Todavía el POR está rumiando un balance. Pero dice el refrán: “Dios ciega a quien quiere perder”. Ha sacado centenares de páginas explicando que el proceso revolucionario estaba en marcha pero que a la cita faltó el proletariado, que se quedó en su casa, neutral, o apoyando a Evo. La caravana de los Comités Cívicos del sur, que el POR se adjudica haber organizado, tuvo que retroceder por el enfrentamiento

con trabajadores y campesinos que bloqueaban las rutas. Y por el sabotaje de Camacho, que no salía desde Santa Cruz, y se cortaba solo viajando a La Paz a pedir la renuncia de Evo.

El POR denigró las movilizaciones de protesta al golpe: “terroristas”, “hordas del MAS”, etc. En cambio, el amotinamiento policial, de neto carácter golpista, lo considera parte del proceso insurreccional. El POR no estaba con las masas movilizadas de El Alto ni con la resistencia al golpe, porque consideraba que no era un golpe.

Esta posición no fue -en el campo de la izquierda- solo del POR. Fuerza Revolucionaria Socialista Antiimperialista -hermanada con Izquierda Socialista (IS) de la Argentina en la UIT-CI- también consideró que estábamos frente a un levantamiento popular y no un golpe. Aunque IS, sí denunció y se movilizó contra el golpe en Argentina.

El Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) de Bolivia tiene una posición similar a la del POR. Considera que “las masas obreras, campesinas, indígenas y populares utilizaron a los Comités Cívicos para expresar su protesta”, aunque reconoce que “las direcciones policlasistas llamaron a fortalecer a los Comités Cívicos, lo que produjo una representación mezclada: Camacho, de Santa Cruz, y Pumarí, de Potosí” (esta es ahora la fórmula fachista para las elecciones). Plantea que los ataques terroristas del MAS llevaron a que “la población pidiera ayuda a los militares que salgan a las calles”. La represión militar no sería producto de su represión golpista, sino una medida de defensa del pueblo contra el “terror” del bandidaje.

Para esta corriente, “el gobierno de Añez surge de una insurrección que generó un prolongado vacío de poder (...) es kerenkista, es decir, extremadamente débil”. Tenemos así un extremo de la política del POR, una corriente que defiende a Añez, surgida de una insurrección contra la derecha. Por eso su consigna es: “¡Fuera Camacho, Mesa y todos los liberales!”, y no Añez. Como salvaguarda, el MST plantea: “no podemos tenerle ninguna confianza a Añez, es necesario preparar lo más pronto la alternativa de poder obrero, campesino y popular, con la COB a la cabeza”.

¿Está acabado el MAS?

El MAS ha demostrado sus límites, después de catorce años en el poder y de su capitulación frente al golpe. Ha perdido progresividad y se ofrece como parte del andamiaje del orden capitalista.

El POR y estos grupos de izquierda han caído en el replay de la ex-

perencia “democrática” de 1946, cuando una movilización con eje en la clase media, usando banderas “democráticas”, derrocó al presidente Gualberto Villarroel, un nacionalista burgués, y lo ahorcó en la Plaza central de Murillo.

El POR fue entonces, también, “vanguardia” de este levantamiento golpista que llevó a la oligárquica “rosca” al poder. En Cochabamba, un miembro de la dirección del POR formaba parte del “Comité Tripartito” golpista: “fue el primero que salió al balcón de la prefectura para hablar en nombre del Comité Tripartito” (*El trotskismo boliviano*, Sandor John). En La Paz, el secretario general del POR fue integrante activo del movimiento golpista. En una respuesta “a las calumnias” del PIR (PC boliviano que participó activa y conscientemente en las jornadas contrarrevolucionarias de 1946) se defendía “que el POR estuvo presente en la lucha contra el nazifascismo”, que los militantes del POR estuvieron “en las barricadas, arma al brazo, dirigiendo la acción popular” durante el levantamiento del 21 de julio, a diferencia “de los ‘revolucionarios del 22 de julio’ que llegaron al otro día para buscar puestos”. El POR sacó un manifiesto que saludaba el derrocamiento del nazifascismo encarnado en el régimen de Villarroel y el MNR.

El POR se dejó arrastrar por la presión de la pequeño-burguesía democratizante, que era masa de maniobra de la derecha oligárquica proimperialista. El cuco del nazifascismo y la defensa de las libertades.

En la Argentina, hubo una situación similar un año antes: el PC integró la Unión Democrática junto al embajador yanqui y la derecha oligárquica, contra el llamado nazifascismo del movimiento nacionalista burgués en gestación en torno de Perón. El “golpe” que llevó a Perón a la cárcel de Martín García fue deshecho por la movilización política de la masa obrera del 17 de octubre. Parte de la izquierda argentina acompañó la alianza derechista oligárquica-yanqui bajo la bandera de la defensa de las libertades.

Los de Oruro fueron los únicos dentro del POR que se salvaron en la Bolivia del '46 de la debacle política que significó el apoyo a la asonada golpista contra Villarroel. Ligados al trabajo político sobre los mineros -que repudiaban el sangriento golpe contra Villarroel-, adoptaron una posición de neutralidad. El trabajo obrero salvó al POR, una autocrítica por el papel asumido en el golpe lo llevó a producir un giro y centrar a fondo su actividad sobre el proletariado minero, jugando un papel histórico (Tesis de Pulacayo, bloque parlamentario minero, etc.).

El POR, con 73 años de diferencia, vuelve a repetir los “errores”. ¿Sa-

cará ahora una autocrítica que lo rescate para la acción revolucionaria? Parece difícil: el primero fue un error ultrista de juventud, ahora es el signo de una orientación ultrista-oportunista senil cristalizada.

Tanto el POR como estas sectas de izquierda proclaman que ahora sí el MAS está liquidado y que se trata de organizar su sepultura.

Otro error sectario ultrista: el agotamiento histórico del MAS no significa su desaparición política automática. Guillermo Lora, dirigente del POR, analizó lo que llamó “el mito de Villarroel” (*Contribución a la Historia Política de Bolivia*, tomo II, pág. 56). El derrocamiento del agotado gobierno de Villarroel por un levantamiento de derecha en lugar de hundirlo, lo revitalizó. A diferencia de lo que esperaban entonces los poristas, en lugar de suplantar el POR a los nacionalistas burgueses en la dirección política de las masas trabajadoras, fueron desplazados por el MNR. El ataque del gobierno golpista a las conquistas y condiciones de vida de las masas trabajadoras recrea, en estas, ilusiones sobre el papel defensivo y progresivo de los derrocados. Lora explica: “Los obreros mineros, primero, y después los explotados de las ciudades, se aglutinaron instintivamente para defender sus conquistas sociales (...) frente a la inminente amenaza de la política antiobrera de la rosca en el poder. En este proceso levantaron como su propio estandarte al presidente colgado (...) Las masas parecían recordar únicamente la prédica antiimperialista y obrerista del nacionalismo y no que en la práctica tal prédica fue olvidada y traicionada...”.

Contribuyó a esto, sin duda, que no tuvieron alternativa política frente al golpe rosquero. El POR no fue vanguardia de la lucha contra el golpe, sino parte del golpe derechista.

Lora analiza que “30 años después, en 1976, volveremos a chocar con un fenómeno similar. No bien se conoció el asesinato del general Torres, que fue cabeza de un gobierno débil y dubitativo, los opositores y los obreros, en general, lo levantaron como su insignia de combate...”.

No se trata de un cadáver insepulto. Para sepultar políticamente al nacionalismo burgués, su enterrador -el proletariado- debe ser ganado por el partido marxista revolucionario a una posición de independencia política, a la organización de su propio partido. Para ello debe no solo denunciar al nacionalismo burgués, sino competir con él a través de una fuerte lucha política.

Al villarroelismo le siguió el MNR, luego el nacionalismo militar y después Lechín, hasta que la corriente nacionalista se transmutó en el MAS, un movimiento de base indigenista.

El MAS no está liquidado políticamente y todo hace perfilar que vol-

verá a estar en el centro de la lucha política, recreando ilusiones en las masas. Pero a diferencia de su ascenso combativo en 2003/6, montado sobre una irrupción revolucionaria de masas, ahora se esforzará fuertemente por aparecer como un factor de “pacificación” para hacerse potable frente al imperialismo.

Las recientes declaraciones de Evo Morales en Argentina de impulsar la formación de milicias populares -de las cuales se rectificó inmediatamente ante el llamado de atención del imperialismo y del gobierno de Fernández- indican las maniobras que desarrollará. No olvidemos la experiencia de Perón en Argentina, cuando apoyó a la organización guerrillera Montoneros para presionar y negociar con la dictadura, y apenas llegó al poder la persiguió como parte de la represión general que desató contra las luchas de masas.

Evo que durante catorce años en el poder no distribuyó armas entre los obreros y campesinos, sino que se dedicó a fortalecer al Ejército -que terminó ejecutando el golpe que lo destituyó-, no lo va a hacer ahora. Su política es “pacificar”, contener la lucha de clases, no impulsarla.

Elecciones

La convocatoria a elecciones para el 3 de mayo es parte del reclamo del propio imperialismo. El secretario de Estado yanqui, Mike Pompeo, viene de alabar al gobierno golpista de Añez por armar la salida electoral, no solo contra Evo sino también contra aquellos que pretendían colocar un régimen abiertamente fascizante. Un comunicado vertido en la reciente cumbre latinoamericana contra el terrorismo, realizada en Bogotá, subrayó “el fuerte apoyo del gobierno de Estados Unidos a elecciones libres, justas, transparentes e inclusivas y destacó las áreas de cooperación internacional para apoyar las elecciones de Bolivia”. Pompeo elogió la colaboración del “gobierno de transición” con la Asamblea Legislativa de Bolivia -donde el MAS liderado por Morales es mayoría- para establecer un nuevo tribunal electoral.

Es decir, que las elecciones no vienen a desarmar el golpe sino a hacerlo efectivo. Y ello se revela por varios hechos. Primero, se darán en un marco de represión al movimiento popular, con masacres incluidas, como las de Sacaba y Senkata, que dejaron más de 36 muertes y decenas de heridos, además de la militarización de zonas del Chapare; es decir, el establecimiento de un clima de terror pero, además, se encarcela a luchadores populares y se persigue a figuras prominentes del MAS; la candidatura de Evo Morales a senador no está aún autorizada, lo que revela que las elec-

ciones, de darse, no serán libres, sino que estarán maniatadas para lograr el objetivo de afirmar a la derecha en el gobierno.

La continuidad del golpe a través de la convocatoria a elecciones es lo primero que debe ser denunciado, y es lo que Evo Morales y el MAS no están haciendo. La denuncia del carácter regimentado del proceso electoral debe ser un impulso a la intervención popular para derrotar al golpe.

El MAS confía en que la división de la derecha entre varios candidatos es la garantía de un triunfo electoral, por ello se adapta a los condicionamientos de todo el proceso y llama a “acuerdos de paz”. Pero la derecha no dio un golpe para luego perderlo en las elecciones, de ser así hubiera aceptado el resultado electoral de octubre. La persistencia de llegar a un acuerdo también se ve plasmada en la fórmula elegida por Evo para encabezar la campaña. El nombramiento de Luis Arce, su exministro de Economía, es una señal dirigida a los monopolios con los que este viene trabajando desde hace más de una década. Atrás del golpe está el interés por el litio, por las reservas petroleras, etc. La división de la derecha no responde a una “disonancia” con esos intereses sino al mejor aprovechamiento para cada fracción de la situación. Añez aparece respaldada por Bolsonaro y Pompeo. Camacho estaría anunciando el levantamiento de su candidatura para “unificar” detrás de Añez. Mesa agrupa a la derecha liberal de los partidos tradicionales. La división de la derecha condiciona la propia convocatoria a elecciones, tanto en su realización como en las formas, pero lo que está claro para todos ellos es que el MAS no debe volver al gobierno. Por ello, la salida electoral que el MAS pactó con los masistas, como alaba Pompeo, debe ser denunciada sin mediaciones.

La tarea central es organizar la lucha contra el golpe, defender las libertades públicas, hoy cercenadas, así como todas las reivindicaciones del pueblo explotado boliviano, de sus campesinos, de sus trabajadores, de los indígenas.

Sobre estas tareas será altamente progresivo y revolucionario que la vanguardia obrera y de la izquierda del Altiplano, haciendo un balance político de su intervención en la lucha de clases, llegué a las conclusiones de cómo superar la debacle histórica del nacionalismo burgués, colocándose en la primera línea contra el golpe. La experiencia histórica indica la necesidad de la formación de un partido obrero socialista revolucionario. Hay que desarrollar las políticas de intervención en la lucha política y de clases para lograrlo.

Las crisis revolucionarias pueden llevar períodos prolongados con matizados ascensos y reflujos en la lucha de clases. Las probables elecciones

del 3 de mayo próximo no van a cerrar la crisis boliviana. En el marco de las rebeliones latinoamericanas, va a incentivar la lucha de clases. Preparémonos para eso.

Organización de los trabajadores bolivianos residentes en Argentina

La numerosa comunidad boliviana en Argentina, mayoría de trabajadores, se movilizó activamente contra el golpe. El Partido Obrero y el Polo Obrero se empeñaron en esta tarea. Asambleas en las villas y barriadas, actos, marchas y otros, los tuvieron como elemento organizador. Delimitados del MAS, a quien se criticó fuertemente por su renuncia frente al golpe, propusieron una política de frente único para enfrentar al golpismo contrarrevolucionario. Esto ha culminado poniendo en pie una organización militante.

bolivanosdelpo@gmail.com Tel. 11 4090 3537

Un año de gobierno de Bolsonaro

Gustavo Montenegro

El triunfo de Jair Bolsonaro, hace poco más de un año, encendió todas las alarmas acerca de un posible desarrollo del fascismo en Brasil. Abierto defensor de la dictadura militar, el ex capitán de navío llevó a cabo una campaña electoral en que planteó “barrer con los rojos” y formó un gabinete poblado de militares, evangelistas y toda clase de figuras reaccionarias. Esto en total consonancia con una trayectoria personal de agravios contra la población afrodescendiente, indígena, LGTBI y contra las mujeres.

A un año, el régimen Bolsonaro expresa una tentativa de régimen bonapartista de ataque a las masas, pero con un desarrollo condicionado por la lucha de clases, por un lado, y la bancarrota capitalista mundial, del otro.

Bolsonaro cosechó en las elecciones presidenciales de octubre de 2018 casi 50 millones de votos y le sacó una distancia de 17 puntos al candidato del PT, Fernando Haddad, que reemplazó al proscrito líder Luis Inacio Lula da Silva. En cuarto lugar quedó Geraldo Alckmin, del PSDB, que era, al comienzo de la campaña, uno de los favoritos del establishment económico, con menos del 5%. Posteriormente, en el balotaje, el ex militar se impuso cómodamente.

¿Cómo logró un abierto defensor de la dictadura militar, que no contaba ni siquiera con una fuerza política sólida, tan alta performan-

ce electoral? Para responderlo, es necesario indagar en el pasado político inmediato de Brasil. El triunfo del ex capitán de navío es inexplicable si se lo escinde del creciente rol de las Fuerzas Armadas en la vida política y del fracaso de los gobiernos del golpista Michel Temer y Dilma Rousseff.

Los militares contribuyeron, en consonancia con la burguesía brasileña, a que se consumara el golpe de Estado contra Rousseff, en 2016, que se ejecutó bajo el ropaje parlamentario de un *impeachment*. Pero la experiencia golpista resultó un fiasco.

En medio de una fuerte crisis económica, Temer (hombre del MDB, que asume la presidencia porque era el vice de Dilma) llevó a cabo un congelamiento del gasto público y una agenda de privatizaciones masivas que incluyó puertos, aeropuertos, hidroeléctricas y petróleo (se eliminó la obligatoriedad de que la estatal Petrobras participe en la explotación de todos los yacimientos del pre-sal).

Impuso también una reforma laboral que habilita las jornadas laborales de hasta 12 horas, amplía la tercerización, fracciona las vacaciones e instituye la jornada intermitente (pago por hora o jornada, y no por mes). Pero fracasó en el tratamiento en el Congreso de la reforma jubilatoria, un punto clave de la agenda de ajuste.

Lejos de reactivar la economía a través de nuevas inversiones, este plan de guerra contra las masas, agravó la crisis. El desempleo trepó al 13% y en el primer año de gobierno sumó dos millones de pobres. El ajuste no logró estabilizar las cuentas públicas, la deuda externa creció y el déficit fiscal cayó pero quedó en el orden del 7% del PBI.

En pleno desarrollo de su mandato, apareció un video, difundido por un empresario de la carne, en que el presidente avalaba el pago de sobornos. Esto hundió aún más su imagen, que llegó a concentrar el rechazo de más del 90% de la población. Para darse una idea de la impopularidad de su gobierno, señalemos que el candidato del MDB en las elecciones de octubre de 2018, el ministro de Economía, Henrique Meirelles, obtuvo apenas el 1% de los votos.

La crisis que tiene como emergente a Bolsonaro se venía incubando desde el gobierno de Rousseff, quien asume su primer mandato en 2011, en un período marcado por una crisis económica. El PBI pasó de crecer un 7,5% en 2010 a caer al 2,7% al año siguiente y al 0,9% en 2012. En 2013 se desarrollan multitudinarias protestas contra el gobierno, que tienen como desencadenante el aumento en los precios del transporte público.

Un año más tarde hay protestas contra la corrupción en los gastos del mundial de fútbol. Rousseff designa, en 2014, como ministro de Economía al “Chicago boy” Joaquim Levy, también conocido como “manos de tijera”, por su afición ajustadora. Brasil se sumerge en una brutal recesión, que algunos califican como la peor en 80 años. Con esta designación, Rousseff intentó encarnar desde el propio PT la agenda de ajuste de la burguesía, que reclamaba las reformas laborales, recortes fiscales y reformas jubilatorias, que luego llevaron adelante Temer y ahora Bolsonaro.

El PT fue golpeado por el destape de sus pactos corruptos con la “patria contratista” brasileña. Ya en los primeros años de gobierno de Lula, el “Mensalão” reveló un esquema de sobornos de diputados opositores. En 2014, esos hechos quedaron empujados frente al *Lava Jato*, operativo encabezado por el actual ministro de Justicia, Sergio Moro, que desechó una red de sobornos y sobrefacturación en la obra pública que afectó a figuras importantes del partido de gobierno y de toda la oposición. El imperialismo yanqui lo fogueó para desplazar a las contratistas brasileñas (OAS, Odebrecht y otras) en la región y ganar posiciones para los capitales norteamericanos.

Dirigido de manera absolutamente discrecional y corrupta, ese *Lava Jato* sería usado también como herramienta de persecución política, al punto de servir de coartada para la proscripción política de Lula en las elecciones de 2018. El *Lava Jato* fue un terremoto político y potenció la crisis económica.

La deriva del PT impulsó el cambio de frente en la burguesía brasileña y en el imperialismo, que se habían apoyado en dos períodos en Lula y uno en Dilma. Alentaron el golpe contra Rousseff, la que termina, asimismo, sus días como presidenta con una tasa de popularidad casi tan baja como la de Temer (en octubre, quedó fuera del Senado al ocupar el cuarto lugar en Minas Gerais). La agenda de los golpistas fue muy clara: ajuste fiscal, rebaja de las jubilaciones, reforma laboral, liberalización económica y copamiento de los negociados de las empresas contratistas beneficiadas por Lula en favor de sectores del imperialismo.

Pero, como dijimos, esta agenda ajustadora golpeó todavía más fuertemente al pueblo brasileño. El fracaso del gobierno de Rousseff y del golpe pavimentaron el camino de Bolsonaro. En un convulsivo contexto que combina una debacle económica, una crisis del régimen político y un salto en la criminalidad (60 mil homicidios anuales), Bolsonaro se

presenta a sí mismo como un salvador con un planteo de mano dura contra el crimen, inflexibilidad contra la corrupción (asociando a ella a la izquierda y el PT) y recuperación de los “valores morales”.

La candidatura de Bolsonaro

Desde que en 1991 ingresó por primera vez al Parlamento como diputado por Río de Janeiro, Bolsonaro pasó por numerosos partidos, siendo siempre una especie de “outsider”. Desde allí realizó algunas de sus más conocidas provocaciones, como cuando le dijo a una diputada que no la violaba porque no lo merecía. Un año antes de las elecciones se integró al pequeño Partido Social Liberal (PSL), que usó como plataforma de campaña, y que se rompió con él ya en el poder.

Bolsonaro empleó como eslogan de campaña “Brasil por encima de todo. Dios por encima de todos”, con el que logró atraer al poderoso sector evangélico. En el mismo sentido, atacó la educación sexual y el “adoctrinamiento” en las escuelas, un anticipo del plan “escuela sin partido” que lanzaría al llegar al gobierno.

Frente a la inseguridad, planteó el reforzamiento de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, la flexibilización de la venta de armas y el amparo legal de la brutalidad policial y del “gatillo fácil”, al estilo de la doctrina Chocobar de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en Argentina. Bolsonaro se posicionó además como un acérrimo defensor de los terratenientes, cuestionando las tomas y planteando “tipificar como terrorismo las protestas de sindicatos o trabajadores agrarios sin tierra si son en terrenos privados” (*El País*, 29/10/18).

Con esta batería de planteos seducía a los sectores de la poderosa bancada BBB (Buey, Bala y Biblia), que agrupa al lobby ganadero, armamentístico y evangelista.

El ataque a la izquierda y a los movimientos de lucha, que eligió personificar en el PT dado que era su adversario principal de campaña, fue una constante. En marzo justificó la agresión a balazos contra una caravana de Lula. Llamó luego a “barrer a los rojos”, “fusilar a los petistas de Acre”, etc. Esta línea se profundizó tras el atentado que el mandatario sufrió durante un acto de campaña, cuando el jefe de su partido llama a la “guerra”. Su candidato a vice, Hamilton Mourão, responsabilizó falsamente por el ataque al PT y amenazó con que “si quieren usar la violencia, los profesionales de la violencia somos nosotros”. No fue pura retórica: el triunfo de Bolsonaro en primera vuelta dio paso a una multitud de agresiones fascistas. El músico de capoeira, Moa do Katendê, murió luego de ser apuñalado por un seguidor del ex militar,

tras reconocerse como votante de Haddad (se puede consultar “Ataques fascistas en Brasil tras el triunfo de Bolsonaro, en *Prensa Obrera online*, 12/10/18). Al ganar el balotaje, Bolsonaro declaró que “no podemos seguir coqueteando con el socialismo, con el comunismo, el populismo o el extremismo de izquierda” (*El País*, 29/10/18).

En el plano económico y de la política exterior, Bolsonaro postuló un alineamiento total con Estados Unidos, en detrimento de China, que se convirtió durante el gobierno del PT en el principal socio comercial del país. El ex militar acusó al país asiático de querer comprarse el país e incluso visitó Taiwán, la isla que Beijing reclama como parte de su territorio. Como veremos, el vínculo con China sería fuente de disputas al interior del flamante gobierno y Bolsonaro terminaría desandando sus pasos.

Como señal a los mercados, Bolsonaro reclutó como asesor y futuro ministro de Economía al ultraliberal Paulo Guedes. Prometió eliminar el déficit fiscal para el segundo año de su mandato y bajar la inflación, así como un agresivo plan de privatizaciones.

La candidatura de Bolsonaro fue apoyada por Trump, pero despertó recelos entre los demócratas y la Unión Europea. También de Beijing, que fijó posición en un áspero artículo en el *China Daily*, ligado al PCCh. Allí lo bautizó como un “Trump tropical” y advirtió los grandes negocios que estaban en juego (“China es el mercado de exportación más grande de su país y la fuente número uno de excedentes comerciales”).

Al apoyo inicial de grupos de latifundistas y religiosos, Bolsonaro fue sumando -a medida que crecía en las encuestas- el apoyo de otros grupos empresarios, incluyendo una parte de la federación industrial de San Pablo (Fiesp). Su titular, Paulo Skaf, que fue candidato a gobernador del MDB, expresó su adhesión al ex militar para el balotaje. “Los empresarios que antes se apartaban [de Bolsonaro] por encontrarle chabacano y vulgar, han decidido cruzar la línea animados por el gobierno liberal y las bajadas de impuestos que promete. Los mercados también le hicieron campaña: la Bolsa de São Paulo subía a cada sondeo ganador” (“Vida y ascenso del capitán Bolsonaro”, *El País*, 21/10/18).

La proscripción de Lula

Si el ascenso de Bolsonaro fue uno de los datos sobresalientes de la elección brasileña, el otro fue la proscripción de Lula. En marzo de 2016 fue acusado de aceptar refacciones en un departamento que fre-

cuentaba en Guarujá (San Pablo) a cambio de facilitar contratos para la constructora OAS. El proceso estuvo impulsado por el entonces juez Sergio Moro.

En julio de 2017 es condenado en primera instancia a nueve años de prisión. En las vísperas de la campaña electoral de 2018 se aumenta su condena en segunda instancia a doce años de cárcel. Lula interpone un hábeas corpus ante el Tribunal Supremo de Justicia para evitar ir tras las rejas, pero éste es rechazado. En los primeros días de abril queda preso.

El escándalo del *Lava Jato* puso de relieve una red de sobornos en los contratos de obra pública, que salpicaba a las grandes contratistas y a referentes de todos los partidos. Pero ese proceso fue conducido de manera absolutamente irregular y discrecional, por medios como la “delación premiada”, que direccionaban arbitrariamente las investigaciones. El trasfondo, como ya hemos señalado, era el propósito del capital yanqui de ganar terreno en la región a expensas de la burguesía local.

En el caso de Lula, la irregularidad más notable fue la abierta injerencia de las Fuerzas Armadas en el proceso, impulsando su encarcelamiento.

Por todo esto, sin negar la existencia de una red de negociados que involucraba a altas figuras del gobierno petista y de otros partidos, el PO repudió la condena de Lula “como parte de una manipulación y proscripción política” y llamó a “derrotar esta tentativa reaccionaria” (ver comunicado publicado en *Prensa Obrera*, 24/1/18).

Lula logró su libertad provisional en noviembre de 2019, en un fallo dividido de la Corte brasileña, pero aún sigue en curso el proceso, en tanto que también recibió una condena en otra causa semejante.

Un gobierno dividido

Bolsonaro gana las elecciones con más del 55% de los votos, pero debe recurrir a todo tipo de sostenes políticos ante la falta de una fuerza política de peso. El núcleo político más íntimo del mandatario está integrado por sus hijos (Flavio -senador-, Eduardo -diputado- y Carlos -concejala en Río de Janeiro, influidos por el “gurú” Olavo de Carvalho, intelectual de derecha, conocido por sus ataques al “marxismo cultural”) y el canciller Ernesto Araújo, llamado “trumpista y antiglobalista” por los medios. Este sector pujaba por un alineamiento total con Estados Unidos, incluyendo la cruzada de Trump contra

Venezuela. Araújo fue clave para el rápido reconocimiento del auto-proclamado Juan Guaidó como presidente.

Un elemento de peso del gobierno es el ultraliberal Paulo Guedes, a cargo de un “superministerio” que concentra Hacienda, Planificación, Industria y Comercio Exterior. Los llamados “antiglobalistas” le entregaron el Ministerio de Hacienda a un liberal aperturista a ultranza. Guedes es partidario de una liberalización total de la economía, de una agenda de privatizaciones masivas y de la búsqueda de acuerdos de libre comercio. Además, claro, de las llamadas “reformas estructurales” y el ajuste contra las masas. Para darse una idea de su drasticidad, en ocasión del envío al Congreso del plan de recorte del gasto público le dijo al *Financial Times*: “Dejamos de dar aumentos. No hay aumento salarial, no hay ascensos, se congela el gasto salarial durante dos años. Así que ninguna crisis fiscal durará más de un año y medio en Brasil a partir de ahora” (reproducido por *El Cronista*, 12/11/19).

Bolsonaro integró como ministro a Sergio Moro, que encabezó la operación *Lava Jato*. Moro ha tenido choques con el Supremo Tribunal Federal por este operativo y por la liberación de Lula. Una investigación reciente del portal The Intercept Brasil, del periodista norteamericano Glenn Greenwald, mostró, a partir de escuchas telefónicas, el carácter discrecional y corrupto del operativo. Como represalia, se le ha iniciado una investigación al periodista vía el Ministerio Público Fiscal. Moro ha protagonizado varios chispazos con Bolsonaro. Los rumores de un despedamiento de su ministerio lo llevaron a amenazar con su renuncia. Al mismo tiempo, tiene también aspiraciones presidenciales.

El operativo *Lava Jato* fue respaldado por el imperialismo norteamericano, que lo vio como una posibilidad de desplazar a contratistas locales. En el marco de aquel proceso, terminaron presos directivos de Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez y OAS. Recientemente, el anuncio de Guedes en el Foro de Davos de que el país se pliega a un Acuerdo de Compras Gubernamentales (GPA, por sus siglas en inglés), que implica la apertura total de las licitaciones públicas al capital extranjero y elimina las preferencias para los grupos locales, fue calificado por algunos portales como el golpe de gracia para las contratistas locales. Guedes hizo expresas referencias al *Lava Jato* para justificar su decisión, lo que confirma la trama de negocios y disputas económicas que se esconden detrás del escándalo.

Finalmente, están los ministros y funcionarios que provienen de las Fuerzas Armadas. Hay quienes opinan que Bolsonaro ha tenido

que recurrir a ellos ante la ausencia de un verdadero partido propio. En primer lugar, aparece el vicepresidente Hamilton Mourão, que en cuestiones importantísimas (Venezuela, China) ha jugado como contrapeso de Bolsonaro. Luego están los ministros, empezando por el de Seguridad Institucional, Augusto Heleno (comandó las fuerzas de ocupación en Haití; tiene, entre otras cosas, el control de los servicios de inteligencia). También poseen el Ministerio de Defensa, el de Ciencia y Técnica, y el de Minas y Energía.

En total, cuentan con 11 de 21 ministros y son quizás el factor de poder más importante del país. Mourão emerge como pieza de relevo ante un fracaso de Bolsonaro, caso en el que el gobierno quedaría virtualmente en manos de las Fuerzas Armadas.

En el año y monedas de gobierno de Bolsonaro, se han producido todo tipo de disputas palaciegas y peleas intestinas en el gobierno. Es una coalición caracterizada por violentos choques.

El caso más notable es el de las relaciones comerciales con China. El ala militar incidió para evitar un choque con el país asiático. Después de sus diatribas de campaña contra el gigante asiático, Bolsonaro visitó Beijing en octubre y expresó su disposición a aumentar las exportaciones agrarias y a recibir inversiones en el sector de infraestructura. Asimismo, planteó la apertura a China en lo que hace a la privatización de las empresas públicas. China se ha quedado recientemente con algunas licitaciones petroleras. El ministro Guedes, incluso, no descartó un posible acuerdo de libre comercio.

Los vínculos entre Brasil y China se acrecentaron durante los gobiernos del PT. Brasil exporta fundamentalmente materias primas (soja, petróleo, mineral de hierro) e importa bienes industriales, lo que implica una amenazante competencia para el sector industrial nativo. Si bien el saldo comercial resulta favorable a Brasil, es un vínculo que induce a una primarización de la producción.

Entre 2007 y 2018, las inversiones chinas alcanzaron los 100 mil millones de dólares. Además, “Brasil es el segundo país con más préstamos chinos de la región después de Venezuela (...) recibió once créditos por un monto total de 28.900 millones de dólares entre 2007 y 2017” (*Foreign Affairs Latin*, 25/11/19).

América Latina es un escenario de la guerra comercial y las disputas entre Estados Unidos y China. Bolsonaro, en estas condiciones, no pudo llevar su alineamiento indudable con Trump a una crisis con China y oscila en un equilibrio precario.

Pero además de las luchas de poder y de orientaciones al interior del gabinete, debemos tener presente la debilidad de Bolsonaro en el Parlamento. El partido con el que compitió, el PSL, ganó cuatro senadores (en una cámara con 54) y 51 diputados (en una cámara sobre 513).

Pero ni siquiera todos estos son hombres propios, puesto que en medio de una puja con su directiva partidaria, el año pasado, Bolsonaro decidió abandonarlo y crear una nueva formación, la Alianza para Brasil (APB), que sería el vehículo para competir en las elecciones municipales de este año. La extrema fragmentación del Parlamento brasileño es un indicio de la crisis del régimen político brasileño. En el Senado hay más de 20 fuerzas (la primera minoría es el MDB, con doce escaños). Un escenario similar se da en Diputados (la primera minoría es el PT, con 56 legisladores).

Con esta debilidad, una gran prueba de fuerza para Bolsonaro fue la aprobación de la reforma previsional. La debilidad de Bolsonaro en el Parlamento lo hacía depender de la colaboración de otras fuerzas políticas, empezando por la poderosa bancada BBB ya mencionada. La reforma, que no había logrado aprobar Temer, incluye una baja generalizada en las jubilaciones y un aumento de la edad jubilatoria. La versión final aprobada no logró incluir el régimen de capitalización privada contenido inicialmente ni la reforma de los regímenes de los estados y municipios. Sin embargo, se trata de un golpe muy duro a los trabajadores. La CUT, luego de la huelga general del 14 de junio, en la cual la clase obrera se movilizó masivamente, descomprimió la movilización, con lo que allanó el terreno para la reforma.

El gobierno delegó su tratamiento parlamentario en el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia (MDB), quien redactó el proyecto final y negoció las enmiendas con la oposición, utilizando masivamente los fondos estatales para consolidar el apoyo de los diputados, estado por estado. De esta forma, la reforma, un punto central, reforzó un arbitraje de la Cámara de Diputados más que un régimen personal de Bolsonaro, mostrando los límites de su proyecto bonapartista.

Contradicciones económicas

El núcleo de la política económica de Bolsonaro-Guedes pasa por un plan de guerra contra las masas, basado en el ataque a los salarios y las condiciones laborales, así como en el recorte del déficit fiscal y un plan

de privatizaciones masivas en función del pago de la deuda externa.

Este eje definido es el que hace que la mayor parte de la burguesía acompañe al gobierno, especialmente los bancos, que han obtenido ganancias récord. Sin embargo, pese a este eje articulador de la coalición oficial, hay todo tipo de cortocircuitos y la política económica carece de coherencia.

Un ejemplo es el del Mercosur. Cuando asumió en su cargo, el ministro Guedes señaló que el bloque dejaba de ser una prioridad para Brasil y que, en cambio, se orientaría hacia acuerdos de libre comercio. Bajo el mismo espíritu “liberalizador”, planteó a fines de 2019 una reducción del arancel externo común del bloque en un 50%. Con Bolsonaro y Macri se negoció el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que beneficia fundamentalmente la exportación agropecuaria latinoamericana, incrementando la primarización económica.

Estos planteos despertaron alarmas en sectores de la burguesía industrial brasileña y argentina. La Confederación Nacional de la Industria (CNI) emitió un comunicado en 2018 en que señala que “Brasil precisa fortalecer su posición en los mercados del Mercosur (...) Argentina, en particular, es uno de los mercados más importantes para las exportaciones e inversiones brasileñas en el exterior, en especial para las pequeñas y medianas empresas”. En relación con la reducción de aranceles, la CNI advierte incluso que “el único ganador será China, que ya viene tomando el mercado brasileño en toda la América del Sur” (*Letra P*, 31/10/18).

Bolsonaro ha conseguido, sin embargo, el apoyo entusiasta de Paulo Skaf, el titular de la Federación de Industrias del Estado de San Pablo (Fiesp), a su gobierno. En un artículo en el que defiende al Mercosur, éste aclaraba que “[la Fiesp] durante años abogó por una mayor apertura de la economía brasileña, negociada en acuerdos de libre comercio, siempre que esté acompañada de reformas internas que garanticen a las empresas brasileñas las mismas condiciones de competitividad de otros países” (*La Nación*, 20/11/19). Lo que quiere decir, de manera eufemística, con “reformas internas”, es una mayor explotación de la fuerza de trabajo local que posibilite esa competencia. Sin embargo, en la propia Fiesp hay resistencias: un sector acusa al presidente y a Skaf de promover una “muerte anunciada” de la industria.

Una semana después del pacto Mercosur-Unión Europea, Bolsonaro prometió un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Algunos creen que el planteo recoge la presión y preocupación nor-

teamericana ante un potencial avance europeo en el país. Si a todo esto añadimos los vaivenes en la relación con China, queda claro que Bolsonaro hace equilibrio entre enormes presiones, producto de la guerra comercial.

Las privatizaciones y la reforma previsional han sido una fuente importante de recursos para el gobierno. Con la reforma jubilatoria, el ahorro previsto sería de 200.000 millones de dólares. Aún así, el déficit fiscal se mantiene -cuando se computa el pago de deuda- casi en el 6% del PBI y recién se lograría -ajuste brutal del gasto público mediante- un superávit primario para 2022. La deuda externa cayó levemente, sigue siendo una hipoteca: alcanza 1,4 billones de dólares. El peso de la deuda y su impacto presupuestario fueron conduciendo a una creciente devaluación del real, que alcanzó el punto más alto desde que fue creado, 4,20 reales por dólar.

También, recientemente, el gobierno fracasó en atraer a las grandes petroleras a una megalicitación de cuatro bloques del presal (reservas de crudo y gas en aguas profundas), pese a las enormes concesiones oficiales. En dos casos la licitación quedó desierta y en otros dos quedó para Petrobras, en un caso asociada a las chinas CNODC y CNOOC. El capital internacional en la industria petrolera reclama nuevas modificaciones al régimen de explotación petrolera para ingresar masivamente a las concesiones en el presal.

En este escenario, Brasil no logra salir de la crisis. En 2019, el crecimiento fue prácticamente nulo. A su vez, las proyecciones para 2020, que prevén un leve despegue económico, se dan en un contexto internacional signado por una fuerte desaceleración de la demanda china y por la guerra comercial.

Por lo demás, la política económica agrava las penurias populares: hubo una pequeña caída de la desocupación, pero crece la informalidad laboral (41,1% de la población ocupada) y los ingresos de los trabajadores en 2019 quedaron por debajo de la inflación. “En promedio, un brasileño ganó 2.330 reales mensuales en 2019, un 0,4% más que en 2018” (ídem).

La lucha de las masas

Las masas han tenido, frente al ascenso de Bolsonaro, una saludable actitud de lucha. La primera reacción fue “Ele Não”, la formidable y masiva reacción protagonizada por el movimiento de mujeres contra el ex capitán de navío, durante la campaña electoral. A fines de sep-

tiembre de 2018, cientos de miles de brasileñas marcharon en todo el país. Las protestas continuaron durante octubre.

Ya con Bolsonaro en el poder, una de las grandes pulseadas se dio a raíz del intento del gobierno de recortar los fondos de mantenimiento de las universidades en un 30%. El 15 de mayo de 2019, más de un millón de personas se movilizaron en las principales ciudades. Quince días más tarde, cientos de miles volvían a las calles (150 mil en San Pablo, 100 mil en Río de Janeiro, 70 mil en Pernambuco, 50 mil en Minas Gerais), con un protagonismo del movimiento estudiantil universitario y de la docencia del nivel superior, aunque con la participación también de trabajadores metalúrgicos, del subte y estatales (“Segunda ola de la marea educativa en Brasil”, *Prensa Obrera online*, 1/6/19).

Aquellas jornadas actuaron también como un factor de repudio a proyectos fascizantes como el de “escuela sin partido”, que impulsa la prohibición de la enseñanza de la educación sexual y el “adoctrinamiento ideológico”, y que postula un sistema de denuncias anónimas contra los docentes. Ese proyecto debió ser archivado, aunque el gobierno podría intentar volver a la carga.

Frente a estos movimientos de masas, el bolsonarismo impulsó convocatorias propias, que en ambos casos estuvieron muy por detrás de las movilizaciones críticas.

Las marchas en defensa de la educación rechazaron también la reforma previsional, cuyo tratamiento empezó en el Parlamento unas semanas más tarde. El 14 de junio se produjo, por esta razón, el primer paro general contra el gobierno. La medida fue convocada por las doce centrales sindicales y la jornada se destacó por una gran cantidad de piquetes, actos y movilizaciones. El paro resultó masivo en el transporte, en algunas fábricas del ABC paulista -como Mercedes Benz y Volkswagen-, en el sector petrolero y en la docencia (“Brasil: millones paran contra la reforma previsional”, *Prensa Obrera online*, 14/6/19).

El gobierno logró imponer la reforma previsional, en lo que constituye su logro más importante. Se consideraba a esta reforma como la madre de todas las batallas. Impuso un aumento de la edad jubilatoria, el congelamiento de la jubilación hasta 2024 y aumentó los años de contribución para poder jubilarse. Sin embargo, el gobierno debió suavizar el proyecto para conseguir su aprobación: tuvo que eliminar la posibilidad de crear un régimen de capitalización y quedaron fuera los estados provinciales y municipios. De entrada, además, quedaban fuera de la reforma los militares.

Si la reforma previsional logró abrirse paso no fue por una falta de energías entre las masas sino por la política de las direcciones sindicales mayoritarias, que evitaron el desarrollo de un plan de paros progresivos hasta la huelga general.

Entusiasmado por la aprobación de la reforma, el ministro Paulo Guedes anunció un plan de privatización de doce empresas estatales importantes, entre ellas Eletrobras (energía), Telebras (teléfonos) y la Casa de la Moneda, con el propósito de recaudar 20 mil millones de dólares. Los trabajadores del Correo iniciaron el 11 de septiembre pasado una huelga general contra los despidos, el ataque a las condiciones salariales y laborales, y la privatización. Por otro lado, la política de privatización en Petrobras (entrega de empresas subsidiarias) ha desatado paros y luchas en el sector petrolero.

En febrero de este año, los petroleros entraron en huelga general ante el anuncio de cierre de una fábrica de fertilizantes controlada por Petrobras, que amenaza con dejar mil trabajadores en la calle. Se trata de una pulseada clave contra las políticas privatistas. En su 13ª jornada, la medida abarcaba a 20 mil trabajadores, en 100 unidades de 13 estados diferentes. A instancias del gobierno, la Justicia impuso multas al sindicato convocante y ordenó el mantenimiento del 90% de las tareas, en un escandaloso desconocimiento del derecho a huelga.

La CUT y el PT han jugado, frente a la movilización contra el gobierno derechista, un papel de contención, que no se plantea derrotar al gobierno en las calles sino encauzar las energías detrás de una salida electoral. El PT pone todas sus fichas en las elecciones municipales de 2020 y las presidenciales de 2022, lo que recuerda el operativo “Hay 2019” del kirchnerismo para tratar de abortar la lucha de los trabajadores en las calles contra el gobierno macrista. Aspira a seducir a sectores de la burguesía golpeados por la liberalización extrema de Guedes, y en nombre de la lucha contra Bolsonaro, pretenderá hacer pasar todo tipo de acuerdos políticos y electorales con fuerzas reaccionarias. En los estados que gobierna viene aplicando todo tipo de políticas antipopulares.

Finalmente, señalemos también que la homofobia de Bolsonaro encontró una respuesta en la organización y movilización del colectivo LGTBI. Durante la campaña electoral, seguidores del ahora presidente asesinaron a puñaladas a una mujer trans al grito de “Bolsonaro sí” en San Pablo. La Marcha del Orgullo de 2019 se transformó en un escenario de lucha contra el gobierno, con tres millones de personas marchando en el centro paulista.

La movilización democrática ha pasado a jugar un rol muy importante en la lucha política en Brasil en estos años. En marzo de este año fueron detenidos los presuntos autores materiales del crimen de Marielle Franco, concejala del Psol (Partido Socialismo y Libertad) en Río de Janeiro, asesinada el 14 de marzo de 2018. Marielle enfrentaba la intervención militar en Río y era una destacada luchadora contra el racismo y la homofobia. Pocos meses después se descubrieron conexiones del clan Bolsonaro (incluyendo al Presidente) con los acusados del homicidio. La sospechosa muerte de uno de los responsables del asesinato, Adriano Magalhães da Nóbrega (líder de la milicia Oficina del Crimen), durante un operativo de la policía estadual de Bahía en febrero de 2020, despertó sospechas sobre un posible abatimiento para borrar pruebas.

Brasil fue, en 2017, el país que encabezó el listado de activistas ambientales asesinados, que elabora la ONG Global Witness. Sólo ese año hubo 57 crímenes registrados. El 90% de los casos, según el informe, se vinculan con la depredación del Amazonas y la apropiación de tierras por parte de empresarios. “En uno de los ataques más brutales, indígenas Gamela fueron atacados con machetes y rifles por agricultores brasileños, dejando 22 heridos graves; algunos con las manos cortadas” (“Más de 200 activistas ambientales fueron asesinados en 2017”, *Prensa Obrera online*, 30/7/18). Bolsonaro ha entregado el Ministerio de Agricultura a una de las exponentes de los hacendados y prometió eliminar las tierras indígenas protegidas.

En este contexto cobran valor las movilizaciones a raíz de los incendios en el Amazonas, que tuvieron un impacto global. La depredación ambiental (que tiene otro ejemplo en el derrumbe de una presa en Brumadinho) es un punto de movilización popular.

La política de amparo al “gatillo fácil” de las fuerzas represivas aplicada por Bolsonaro ha tenido estos resultados: “en Río, el 30% de los asesinatos son perpetrados por los operativos policiales, los cuales se realizan principalmente en las favelas y en los barrios pobres” (“Bolsonaro: ‘tolerancia cero’ y licencia para matar”, *Prensa Obrera online*, 26/12/19). En el primer semestre de 2019, la policía de esa ciudad mató a una persona cada cinco horas (881 casos).

Bolsonaro otorgó un “indulto navideño” para integrantes de las fuerzas represivas condenados por homicidios e impulsó un endurecimiento del Código Penal, que aumenta las condenas y da mayor impunidad a las fuerzas de seguridad. Esa normativa recogió 400 votos a

favor en la Cámara de Diputados, entre ellos diputados del PT y tres del Psol, que lo acompañaron argumentando que se logró limar los aspectos más brutales del proyecto original.

La izquierda

El Psol, que realizará su 7° congreso este semestre, ha publicado en su sitio un pequeño texto que resume las deliberaciones de la reunión de su Directorio Nacional, en el que plantea la “enorme responsabilidad de representar el proyecto de una nueva izquierda en las elecciones [municipales de 2020], enfrentado a la extrema derecha y los viejos partidos de la derecha golpista” y que llama a “aumentar la presencia del Psol en las cámaras legislativas”. No hay ninguna referencia crítica al PT. El Psol, que comenzó queriendo reeditar la experiencia del PT de sus orígenes, está muy por detrás de la misma, donde confluían corrientes de izquierda y el movimiento obrero de Brasil. Se trata de un partido totalmente integrado al régimen, que orbita fundamentalmente en torno del PT. Y que actúa más como una federación de tendencias y figuras políticas que como un partido.

En él revisten la mayoría de las corrientes de la izquierda local, como el MES, la CST (afín a Izquierda Socialista de Argentina) y el Mais (un desprendimiento del PSTU).

El MRT (ligado al PTS argentino) votó, en su I Congreso de 2015, una campaña para ingresar al Psol. Y llamó, en 2018, a un voto crítico por él. Presentó candidatos “anticapitalistas” en sus listas y reivindica la posibilidad de haberlo realizado con libertad de crítica. En una declaración, el MRT sostuvo que es un partido que “oficialmente se posicionó contra el golpe institucional, contra la prisión arbitraria de Lula y contra el veto a su candidatura, al mismo tiempo que desde el punto de vista electoral se mantuvo separado del PT”. Sin embargo, el mismo MRT denuncia que el Psol no levanta la consigna del no pago de la deuda y, firmando manifiestos como “unidad para reconstruir Brasil”, se ofreció para terminar siendo “base parlamentaria de un gobierno del PT” (*La Izquierda Diario*, 5/10/2018).

El PSTU, en tanto, ha rechazado su integración a ese armado, pero se ha caracterizado por una política profundamente sectaria. En medio del golpe contra Rousseff, desestima las denuncias de golpe como “análisis superestructurales” (“El significado del impeachment contra Dilma”, sitio del PSTU, 31/8/16), señalando que “por abajo” hay un proceso de rechazo a Rousseff y al gobierno, y llega a titular

un artículo “Fuera Dilma, fuera Temer, fuera todos ellos” (25/4/16), reclamando nuevas elecciones. El planteo “Fuera Dilma”, en medio de la ofensiva golpista de la derecha y los militares, era obviamente funcional al golpe.

Esto le granjeó la ruptura de una parte importante de su dirección y numerosos militantes, que adopta el nombre de Movimiento por una Alternativa Independiente y Socialista (Mais) y que posteriormente se integra al Psol. El Mais señala que “después de que la mayoría de la burguesía se unificó en torno de la propuesta de *impeachment*, a partir de febrero de 2016, defendimos internamente que era vital luchar contra esta maniobra parlamentaria, sin que eso significara, evidentemente, dar ningún apoyo político a Dilma. Porque evaluábamos que la caída del gobierno del PT solo tendría un sentido progresivo si era realizada por las manos de la clase trabajadora, por medio de sus propias organizaciones. Al contrario, si era liderada por la oposición de derecha, la caída de Dilma sería una salida reaccionaria a la crisis política”.

Conclusiones

El gobierno de Bolsonaro ha sufrido un desgaste acelerado al frente del palacio de gobierno, que se verifica en la caída de su imagen. Esto tiene que ver con los fuertes condicionamientos bajo los que opera: la crisis económica (una deuda externa exorbitante), la división interna y la respuesta popular. Posee una agenda oscurantista y ajustadora de gran alcance (ataque a los derechos democráticos, a la educación, privatizaciones masivas, despidos y congelamiento salarial, reforma tributaria, etc.), que solo ha podido dar sus primeros pasos (reforma previsional). Para abrirse camino deberá pasar por grandes convulsiones políticas y sociales.

Para la derrota de los planes reaccionarios de Bolsonaro resulta clave un congreso de bases del movimiento obrero que discuta un plan de lucha. Para enfrentar las privatizaciones, las reformas antiobreras, el asesinato de luchadores sociales, el ataque a la educación. Para la derrota de las provocaciones fascistas se impone el frente único de las organizaciones obreras, estudiantiles, ambientales, de la mujer y la diversidad.

La derrota de Bolsonaro es clave para los explotados de toda la región. Por eso, la caracterización de su gobierno y la elaboración de una política para vencerlo deben ser parte de una Conferencia Latinoamericana como la que ha propuesto el Partido Obrero.

Venezuela en el callejón

Juan García

La crisis en Venezuela se ha transformado, desde hace varios años, en uno de los centros políticos de Latinoamérica.

El imperialismo buscó, con el golpe encabezado por Juan Guaidó, desbancar a Nicolás Maduro y encabezar una recolonización económica de Venezuela, utilizando, además, esta pretendida victoria para ir por Cuba y reforzar todas sus posiciones en América Latina.

Por su parte, China, pero especialmente Rusia, han potenciado su política de colonización económica en Venezuela. La crisis venezolana está metida de lleno en la guerra comercial que sacude las relaciones internacionales. Venezuela se ha transformado en un botín codiciado en una disputa de alcance mundial.

El fracaso temporal del golphismo de Guaidó no implica ningún aspecto progresivo del régimen de Maduro. El régimen ha llevado a las masas de Venezuela a una situación desesperante.

Luego de representar, bajo el chavismo, el modelo para la izquierda nacionalista latinoamericana, la crisis y el posterior colapso económico venezolano pasaron a ser el caballito de batalla de la derecha continental contra los regímenes nacionalistas. La izquierda y el na-

cionalismo, que durante años se alinearon con el chavismo, guardan un vergonzoso silencio sobre la situación en Venezuela.

En la Argentina, el gobierno de Alberto Fernández se distanció rápidamente de Maduro, criticando el golpe parlamentario por medio del cual el régimen impuso a Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional en enero de 2020. El gobierno de Fernández no abandonó el llamado “Grupo de Lima”, de los países que promueven una salida de Maduro. Dentro del mismo se ubica como partidario de una “negociación” para normalizar la política venezolana. El chavismo como tendencia continental fue enterrado por la crisis venezolana.

Mientras tanto, el movimiento obrero y popular de Venezuela se ha dividido entre el campo nacionalista y el apoyo al golpismo proimperialista, sin desarrollar una posición política independiente. Sin embargo, el escenario de rebeliones en Latinoamérica y la crisis de la oposición derechista encarnada por Guaidó, sumado al impasse político del gobierno de Maduro para encontrar una salida a la crítica situación social que vive el país, abre un campo para desarrollar una perspectiva independiente de la izquierda.

Para la izquierda latinoamericana, el desarrollo de una izquierda independiente en Venezuela sería un aporte fundamental, porque implica una delimitación a fondo de la debacle a la que ha conducido la experiencia nacionalista más audaz del continente en los últimos veinte años, por un lado, y una denuncia fundamental del rol del imperialismo en el país y, por lo tanto, en el continente, por el otro. La izquierda venezolana no ha pasado, por el momento, la prueba de los hechos que le impuso la férrea división del país entre el oficialismo y la oposición golpista. Ha oscilado y tendido a dividirse en el seguimiento a los dos campos patronales, en una expresión de las enormes presiones políticas que dividen al país.

La crisis y sus orígenes

La economía venezolana se encuentra prácticamente paralizada. Con una hiperinflación que ya lleva más de dos años y medio, en 2019 el aumento de precios alcanzó la suma sideral de 7.343%, mientras que en 2018 fue de 1.000.000%. El salario mínimo de 450.000 bolívares alcanza los 6,7 dólares. Venezuela, potencia energética, se ha transformado en importador de combustibles y se destaca por sus apagones generalizados. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), los migrantes venezolanos alcanzan ya

los 4 millones, poblando el conjunto de Latinoamérica. La migración alcanza a profesionales, técnicos y trabajadores calificados, significando un retroceso fenomenal para el país. La desnutrición y la destrucción de las condiciones de vida del pueblo venezolano avanzan. Se calcula que un 80 por ciento de la población está bajo la línea de pobreza.

La recesión económica comenzó en 2014, incluso antes de la caída de los precios petroleros de ese año. La reducción de los índices de crecimiento se remonta a 2013, cuando la economía creció solamente un 1,3%. En 2014, el hundimiento de los precios petroleros arrastró a la economía venezolana. De un barril de petróleo del orden de los 100 dólares en el período precedente, el crudo se hundió a precios del orden de los 30 a 40 dólares. La recesión económica se profundizó en el período 2014, 2015 y 2016, durante el cual la economía retrocedió un 9%, 14,1% y 23,7% anual. Dentro de este cuadro ya catastrófico, 2017 representó un nuevo salto, porque las sanciones económicas impuestas por la administración de Donald Trump, en agosto de ese año, golpearon nuevamente a la economía venezolana en la capacidad ya limitadísima de refinanciación de deudas. Las sanciones financieras fueron un golpe de gracia para la crítica situación de PDVSA y empujaron a la economía venezolana a la hiperinflación. La política de sanciones norteamericanas se fue profundizando en 2018 y pegó un nuevo salto en 2019, cuando, reconociendo a Guaidó como presidente, Estados Unidos directamente aplicó un bloqueo a Venezuela, en la posibilidad vital de exportar petróleo y luego congeló el uso de todos los activos estatales y de empresas vinculadas con el Estado venezolano en Estados Unidos.

Los orígenes de la crisis están directamente vinculados con la política del chavismo en materia petrolera y de endeudamiento. El chavismo utilizó a fondo la caja de PDVSA para financiar programas de viviendas y asistencia social para el pueblo venezolano. Para lograrlo, Hugo Chávez debió intervenir la empresa, lo cual estuvo en el centro del lock-out petrolero de 2002 y 2003, y del intento de golpe, derrotado por la movilización popular el 11 de abril de 2002. La derrota del paro petrolero contra Chávez otorgó al chavismo el control completo de la empresa, que utilizó además para extender el control estatal de la producción petrolera a través de una política de nacionalizaciones y redistribución de la renta petrolera contra el capital privado.

Esta redistribución de la renta petrolera, en un período de alza de los precios del petróleo a nivel mundial, permitió poner en pie el

sistema de “misiones” chavistas, que aportaron al desarrollo de la alfabetización, la salud pública y especialmente la vivienda. Las misiones fueron una forma de movilizar políticamente el apoyo popular del chavismo, pero dejando intacto el viejo aparato de Estado “formal”, con el que convivieron.

En materia de vivienda, el chavismo construyó más de un millón de viviendas estatales. Recientemente, Maduro sostuvo haber alcanzado la entrega de dos millones de viviendas a través de la Gran Misión Vivienda.

Paralelamente a la expansión de la construcción de viviendas estatales, el chavismo fue llevando adelante una política de nacionalizaciones. Las nacionalizaciones fueron extensas y en prácticamente todos los casos fueron pagadas por los fondos públicos venezolanos. En ciertos casos, las nacionalizaciones tuvieron el objetivo de intervenir para mediar frente a reclamos sindicales: fue, por ejemplo, el caso de la nacionalización de Sidor, del grupo argentino Techint. Abarcaron áreas industriales y también una gran cantidad de tierras que fueron puestas a disposición de cooperativas o pequeños productores agrarios.

Las nacionalizaciones no solamente se destacaron por haber sido pagadas. Además, y como lo muestra especialmente el caso de Sidor, donde Chávez nacionalizó la empresa como respuesta a una lucha obrera, el régimen impidió cuidadosamente la gestión obrera, desarrollando una gestión burocrática que pronto llevó a las empresas nacionalizadas a la crisis y, finalmente, en muchos casos, a la parálisis. La gestión estatal no se propuso la industrialización ni la superación de la dependencia petrolera, sino una redistribución de la renta arbitrada por el Estado. La intervención estatal y las nacionalizaciones, lejos de alimentar la organización independiente del movimiento obrero, fueron un factor de regimentación de las masas por parte del Estado.

La redistribución de la renta petrolera, la construcción de viviendas y la expansión de la inversión estatal, sin ningún tipo de control obrero y en manos del régimen, dio lugar al crecimiento de una capa empresarial vinculada con el régimen, la llamada “boliburguesía”, por vivir de los negocios montados por la “revolución bolivariana”. Esta boliburguesía tuvo un alcance internacional, involucrando sectores vinculados con los gobiernos nacionalistas de América Latina. Los negocios de los Antonini Wilson (que fue descubierto en el aeropuerto de Ezeiza con una valija con 750.000 dólares), despuntaron a la sombra de la intervención estatal chavista.

La boliburguesía utilizó todas las palancas provistas por la burocracia

cia estatal en función de una acumulación de capital, en desmedro del pueblo de Venezuela. Las nacionalizaciones, incluso, fueron pagadas a precio de Bolsa (como en el caso de Verizon, de telecomunicaciones), por encima de su valor real. En el caso de Sidor, dejó a cargo del gobierno venezolano los pasivos ocultos de Techint. El doble régimen cambiario, con un cambio oficial muy por debajo del oficial, fue otra fuente de ganancias extraordinarias mediante la sobrefacturación de importaciones pagadas al precio oficial y otras mil maniobras.

Como resultado de esta política, pesando el endeudamiento para exportaciones, los negociados a costa del Estado y la necesidad de pagar las nacionalizaciones, Venezuela fue acumulando una deuda externa muy importante y, además, costosa. En 2013, luego de la muerte de Chávez, Venezuela tenía una deuda externa de 112.100 millones de dólares, cuyos intereses alcanzaban el 19,4% de los ingresos por exportaciones, cuando todavía los precios del crudo orillaban los 100 dólares el barril¹. El peso de los intereses de la deuda, a partir de 2013, llevó al régimen a recortar importaciones, recortando la venta de divisas y la provisión para las mismas. Sin embargo, la redistribución de la renta petrolera en ningún momento había significado una transformación de la estructura económica venezolana, caracterizada prácticamente por la monoproducción petrolera. La dependencia de la producción, especialmente de la producción industrial, de insumos importados, y la dependencia del país en general de la importación de bienes de consumo fundamentales para la población, como medicamentos y alimentos, hicieron que la restricción de importaciones tuviera un efecto duro y recesivo sobre el funcionamiento económico sobre las condiciones de vida de la población. Esta restricción tuvo además un efecto recesivo sobre el funcionamiento económico. En 2013, el valor de las importaciones se redujo un 13%. En 2014, la economía comenzó a entrar en recesión, inclusive con precios altos del petróleo. Ese año, los precios del petróleo en el primer semestre superaron los 100 dólares el barril. El desplome posterior llevó el precio a 50 dólares, y la caída y depresión de precios se prolongaron por varios años.

El desplome de los precios petroleros sumió a Venezuela en una primera fuerte recesión, disparando la relación entre la deuda y los ingresos por exportaciones. La relación entre los intereses de la deuda y las ex-

1. Leonardo Vera: “¿Cómo explicar la catástrofe económica venezolana?”, en *Nueva Sociedad*, marzo y abril de 2018.

portaciones pasó del 19,4% en 2013 al 54% en 2015, hundiendo la capacidad de importar y llevando, bajo un mercado de cambios regulado, a la necesidad de recortar importaciones que, a su vez, se desplomaron de 57.300 millones en 2013 a 16.400 en 2016 (ver cuadro). Esta caída provocó un golpe brutal, no solamente a las condiciones de vida de las masas, sino además y fundamentalmente a la producción industrial y de combustibles, dependiente en gran medida de insumos importados. La prioridad de Maduro de pagar la deuda a costa del ajuste masivo contra el pueblo de Venezuela tuvo consecuencias catastróficas crecientes.

Bajo el peso de la crisis petrolera, el costo de la refinanciación del capital de la deuda fue creciendo. Las tasas de interés pagadas por el Estado fueron crecientemente en aumento, poniendo en crisis la orientación de pago a rajatabla de la deuda externa. Poco a poco, el crédito externo de Venezuela se fue reduciendo a su mínima expresión, agravando la necesidad de realizar pagos en efectivo para cumplir con los compromisos externos. Por ejemplo, en el canje de 2016, de bonos de PDVSA por bonos con vencimiento en 2020, la empresa asumió un 21% de interés en dólares, por bonos respaldados por las acciones de la petrolera venezolana Citgo, con sede en Estados Unidos². Maduro llegó a anunciar la formación de una comisión de reestructuración de la deuda en 2017, luego de las sanciones norteamericanas. Sin embargo, tampoco entró totalmente en default, sino en un default selectivo, en el cual los intereses de muchos de los bonos se siguen pagando y especialmente se pagan los vinculados con los negocios con Rusia y China.

La crisis puso al rojo vivo los límites insalvables del nacionalismo chavista, que llevó adelante una política de nacionalizaciones pagadas que hundieron las finanzas públicas. El pago a rajatabla de la deuda, en base a postergar las necesidades populares más urgentes, llevó al pueblo venezolano a una situación crítica y solamente pudo imponerse sobre la base de la estatización de las organizaciones obreras y la represión pura y dura, no solo contra la oposición proimperialista sino, además, contra los reclamos populares.

El impacto criminal de las sanciones

Bajo estas condiciones, la oposición triunfó en los comicios para la Asamblea Nacional de 2015, lo cual implicó un viraje político al qui-

2. https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2019/05/impact-of-the-2017-sanctions-on-venezuela_final.pdf

Cuadro
Venezuela: principales variables macroeconómicas, 2011-2017

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
Exportaciones de bienes FOB (en millones de us\$)	92.800	97.300	88.800	74.700	36.800	28.105	25.400
Importaciones de bienes FOB (en millones de us\$)	52.575	66.000	57.200	47.300	33.300	16.400	12.300
Balance comercial (en millones de us\$)	41.172	31.300	31.600	27.400	3.500	11.705	13.100
Balance en cuenta corriente (en millones de us\$)	16.342	2.600	4.600	4.900	(16.100)	(3.900)	7.000
Deuda pública externa (en millones de us\$)	103.100	113.100	112.100	117.200	120.200	138.800	137.500
Servicio de deuda externa (en millones de us\$)	15.500	13.300	17.250	19.975	19.650	12.500	11.032
Servicio de deuda/ exportaciones (en %)	16,7	13,7	19,4	26,7	53,4	44,5	43,4
Déficit fiscal del sector público/FMB (en %)	-11,6	-17,0	-15,3	-9,0	-14,1	-23,7	-21,2
Tasa de crecimiento del FMB real (en %)	4,2	5,6	1,3	-3,9	-6,2	-16,5	-12,9
Tasa de inflación anual (en %)	26,1	20,1	40,6	62,2	121,7	299,4	738
Crecimiento de la base monetaria (en %)	50,6	55,3	65,8	70,4	111,2	236,0	1.638,4
Tipo de cambio en el mercado negro (Bs/us\$)	9,1	13,0	36,3	95,3	550,6	1.452,8	27.962,4
Variación del tipo de cambio paralelo (en %)	17,5	43,3	179,5	162,2	478,0	163,9	1.824,7
Reservas internacionales operativas (en millones de us\$)	9.900	9.900	6.000	7.300	6.300	4.200	2.300

* Cifras estimadas.

Fuente: BCV, Credit Suisse-Emerging Markets Quarterly, Torino Capital LLC-Venezuela Red Book, Dólar Today.

tar al Parlamento del control gubernamental. La Mesa de Unidad Democrática obtuvo 95 escaños sobre 165. El triunfo en las elecciones parlamentarias, en un cuadro de crisis económica y con el respaldo del imperialismo, alimentó las perspectivas opositoras de un rápido recambio político.

Es que el control de la Asamblea Nacional dio a la oposición atribuciones importantes. Por ejemplo, desde el punto de vista constitucional, la renegociación de la deuda pública debía pasar por el Parlamento. Maduro respondió a esta pérdida de atribuciones incrementando las tendencias bonapartistas ya presentes desde la última fase del gobierno de Chávez. El Tribunal Superior de Justicia prácticamente colocó a la Asamblea Nacional fuera de la ley, sancionando la presencia de cuatro diputados, a quienes se denunciaba por haber sido electos en forma fraudulenta. Contando con el apoyo de las Fuerzas Armadas, en 2017 convocó una Asamblea Constituyente, con el objetivo de concentrar atribuciones políticas. Bajo estas condiciones, la oposición lanzó una ofensiva de protestas callejeras que instalaron el reclamo de un cambio de gobierno.

En este contexto, y teniendo como un motor central el reclamo de la oposición venezolana, la administración de Trump produjo un cambio de política en relación con Venezuela. Ocurre que, aunque la oposición venezolana había recurrido crónicamente al golpismo, boicoteando elecciones, recurriendo, en 2002 a un golpe de Estado y tratando de forzar un recambio político, Estados Unidos no había recurrido a sanciones económicas ni financieras. Hasta 2015, el centro de la política de la administración Obama en la zona fue el arbitraje en relación con el conflicto entre Colombia y las FARC, para integrar a estas últimas al régimen político democrático y desactivar la lucha armada. Un impulso abierto, mediante sanciones, a la oposición golpista en Venezuela, podría haber alterado esta ruta, que el gobierno norteamericano consideraba central. Por otro lado, en la medida que el gobierno venezolano aseguraba el pago de la deuda externa, una parte del abastecimiento petrolero al mercado norteamericano y, lo más importante, la convivencia en la explotación entre PDVSA y el capital privado que había quedado como socio minoritario en la explotación, el gobierno norteamericano no llevaba sus críticas al punto de imponer sanciones.

Este equilibrio se quebró en 2017, cuando el gobierno de Trump impuso un embargo financiero a Venezuela, el primer paso de una política de sanciones que se fue profundizando³. La política de sanciones terminó de empujar a Venezuela hacia el abismo. La producción petrolera en 2018 se derrumbó, pasando de cerca de 2 millones de barriles diarios a 1,2 millones, un retroceso de cerca del 30%, y las exportacio-

3. <http://cepr.net/images/stories/reports/venezuela-sanctions-2019-05-spn.pdf>

nes disminuyeron en 6.000 millones de dólares. La inflación elevada que existía hasta el momento se transformó en hiperinflación. Se disparó la migración generalizada. La crisis humanitaria se potenció.

Aunque la oposición aspira a discutir que las sanciones hayan sido el desencadenante del colapso económico, la realidad no puede ser tapada con la mano. La oposición sostiene que un desencadenante del colapso petrolero de 2018 fue el recambio en la cúpula de PDVSA, a cuyo mando fue colocado el militar Manuel Quevedo. Sin embargo, está claro que, a una economía altamente internacionalizada como la venezolana, la presión norteamericana la golpeó fuertemente.

Las sanciones se profundizaron en 2019 con la autodesignación como presidente de Guaidó, y su reconocimiento por el gobierno norteamericano. Estados Unidos dejó de comprar los 500.000 barriles diarios de petróleo venezolano, trabó un embargo comercial a Venezuela impidiendo cualquier tipo de compras al sector público y sus empresas vinculadas, y comenzó a amenazar a naciones extranjeras que podían comprar el petróleo venezolano. Como resultado de este golpe, la producción de petróleo venezolano potenció su derrumbe, llegando al piso de 750.000 barriles diarios, menos de la mitad de lo que se extraía antes de las sanciones y la cuarta parte de lo que extraía Venezuela antes del crash petrolero de 2014.

Bajo esta situación ya muy grave, el gobierno norteamericano incrementó la presión en agosto de 2019, decretando un bloqueo total de las propiedades pertenecientes al gobierno de Venezuela o a empresas estatales en Estados Unidos. Este bloqueo implica que dichas propiedades no pueden ser utilizadas, transferidas, vendidas ni utilizadas de ninguna forma por Venezuela⁴. En el caso de Citgo, la petrolera que PDVSA controla en Norteamérica, el gobierno norteamericano reconoció como administradores a los designados por Guaidó.

De esta forma, el gobierno norteamericano busca, mediante sanciones que golpean especialmente al pueblo venezolano, ahogar al régimen y apalancar el recambio político encarnado por Guaidó. La oposición venezolana reclama y avala estas sanciones criminales, negando la realidad obvia de que ellas golpean a la propia población venezolana. Con este discurso, solamente busca encubrir su responsabilidad criminal en la situación crítica que viven las masas venezolanas.

La excepción a este cerco internacional es significativa: se trata de las autorizaciones, renovadas cada tres meses, a petroleras yanquis o

4. <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/13884.pdf>

asociadas para operar en Venezuela. Por ejemplo, Chevron, Halliburton Schlumberger tienen licencias que se van renovando para operar en Venezuela. Esto tiene que ver con el hecho de que, frente a la presencia del capital ruso y chino, Estados Unidos no quiere abandonar posiciones que podrían resultarle favorables, especialmente en el caso de que tuvieran éxito las maniobras golpistas. El gobierno venezolano, por otro lado, se cuida muy bien de no provocar la caída de estos acuerdos petroleros, que le sirven, por un lado, para ganar un mínimo de respiro económico y, por otro, para alimentar la idea de una salida concertada con el imperialismo, que permita terminar con las sanciones.

Desguace económico y privatizaciones

De la mano del default de la deuda y, al mismo tiempo, como resultado de las demandas internacionales contra las nacionalizaciones chavistas, en los casos en los que no hubo acuerdo con las empresas nacionalizadas, se produjo una catarata de juicios contra Venezuela, que pone de manifiesto una política de desguace económico. El gobierno de Maduro, en relación con este desguace, tuvo en muchos casos la política de dejar correr, porque las privatizaciones de activos fueron utilizadas para el pago de deudas o juicios.

Indudablemente, el caso más importante es el de Citgo. El 50,1 por ciento de las acciones de Citgo fue puesto en garantía de los bonos PDVSA 2020, que el gobierno venezolano ha defaultado; el otro 49,9 está en garantía por un préstamo de 1,5 mil millones de dólares de Rusia a Venezuela. Por lo tanto, existe un pedido, en la Justicia, de ejecución del 50,1 por ciento de las acciones de Citgo que pertenecen a PDVSA para pagar dichos bonos. La empresa está valorizada entre 8 y 10 mil millones de dólares, pero figura en garantía por préstamos por menor cuantía, con lo cual podría ser embargada a precio vil.

La falta de pago de Guaidó de los intereses de los bonos PDVSA 2020, a fin de 2019, y los litigios consecuentes, dieron origen a una medida extraordinaria del gobierno norteamericano, impidiendo el embargo de la empresa, en un intento por darle aire a la oposición venezolana. Dicha medida se renovó por tres meses en enero de 2020. El argumento del gobierno norteamericano fue que la emisión de dichos bonos, respaldados en las acciones de Citgo, fue ilegal, puesto que no fueron aprobados por la Asamblea Nacional.

Por otro lado, existe una orden de embargo anterior de Citgo, de

2018, del Juzgado Federal de la Corte de Delaware, producto de la sentencia por un fallo en el Ciadi contra Venezuela, debido al juicio iniciado por Cristallex, una minera canadiense que fuera nacionalizada por Chávez en 2009. Esta orden de embargo también está paralizada por la medida interpuesta por el gobierno norteamericano.

La empresa, por otro lado, ya venía en un proceso de desguace antes de estos intentos de embargo. Durante su período de gobierno, Chávez recurrió a la privatización de refinerías y venta de activos. Luego, en 2015, el gobierno de Venezuela recurrió a la venta de una refinería en Chalmette, Luisiana, por 322 millones de dólares, para el pago de una sentencia, producto del litigio iniciado por Exxon Mobile a PDVSA.

En 2016, Citgo perdió la refinería Merey Seeney, en Texas, producto de los juicios iniciados por Conoco Phillips, por la quita de la concesión petrolera a la empresa por parte de Chávez. En el marco de los mismos juicios, la empresa obtiene un embargo por 2.040 millones de dólares en la Cámara de Comercio Internacional, una suma que fue luego convalidada por el Banco Mundial y que dio origen a juicios con embargos sobre activos de Venezuela. En 2018, Venezuela llegó a un acuerdo para el pago de 500 millones de dólares a la empresa.

Como resultado de este desguace impuesto por el imperialismo y de la política de privatizaciones del chavismo, Citgo pasó de ocho refinerías en 2006 en Estados Unidos a tres en 2019.

El desguace y las privatizaciones no se limitan a Citgo, sino que involucran a todos los activos del amplio sector público venezolano. Recientemente, por ejemplo, se ha denunciado la situación de CVG Aluasa, la empresa de aluminio que Venezuela posee en Costa Rica y que se abastecía del producto de las minas de bauxita venezolana. La empresa está paralizada hace al menos un año por falta de materia prima. Los pasivos que se acumulan, en primer lugar, salariales, son enormes y la situación de la empresa y los trabajadores es crítica. En este marco, en marzo de 2019, la empresa reactivó su producción con un embarque de aluminio llegado desde Venezuela. Sin embargo, ya no lo hizo enteramente como empresa pública, sino en el marco de un acuerdo comercial con Metallik LTD, vinculada con empresarios del sector. Se ha denunciado que, en este marco, la reactivación implica una privatización encubierta de la empresa⁵.

5. "Raspar la olla del aluminio venezolano también es negocio", en Armando.info, 5/1/2020.

Desguace a la rusa

El marco impuesto por las sanciones y la crisis habilitó el ingreso de la petrolera rusa Rosneft en la industria petrolera venezolana. Rosneft y Rusia operan como prestamistas para el gobierno venezolano, poniendo como garantía la producción y los activos petroleros del país. Así, el gobierno de Maduro se entrega a una política de privatizaciones y desguace en manos del capital ruso y, en menor medida, chino. Ya hemos mencionado la garantía leonina del 49,9% de las acciones de Citgo por un préstamo de 1.500 millones de dólares. A esto se suma, por ejemplo, el ingreso de la petrolera rusa a la explotación de campos petroleros en Venezuela, en forma directa. Rosneft adquirió parte de la propiedad de varios campos de crudo venezolanos: Petromonagas (40%), Petromiranda (32%), Petroperejía (40%), Boquerón (26,6%), Petrovictoria (40%) y Junín 6 (más del 30%). Y en medio de una asfixia financiera, Venezuela le otorgó la licencia para la explotación del 100% de dos campos gasíferos, Mejillones y Patao, hace poco más de un año⁶.

De acuerdo con versiones, fue la presión de Rusia la que forzó a Maduro a realizar el golpe, imponiendo en la Asamblea Nacional a Parra, contra Guaidó, para lo cual necesitó impedir por la fuerza el ingreso de los diputados opositores al recinto de la Asamblea, y sesionar sin quórum. Ocurre que las concesiones y créditos otorgados por el gobierno venezolano son puestos en duda judicialmente, por haber sido dispuestos sin autorización parlamentaria. La inestabilidad consecuente, que el imperalismo norteamericano está dispuesto a hacer valer hasta el final, preocupa al régimen de Putin, que apunta a una colonización económica de la industria petrolera venezolana. La situación de desguace de Venezuela en los tribunales internacionales, las sanciones y, fundamentalmente la crisis institucional, son un bloqueo para el desarrollo de una política a fondo de privatizaciones, dado que no existen garantías legales para que las concesiones o ventas no sean luego embargadas o desconocidas.

En cuanto a China, también ha jugado un papel en el sostén del régimen de Maduro. Sin embargo, la asociación con el capital chino fue más golpeada por las sanciones. La petrolera estatal china anunció, en septiembre, el final de sus operaciones en Venezuela, acatando el embargo impuesto por Estados Unidos. Asimismo, en agosto de 2019, China suspendió los embarques de crudo provenientes de Venezuela, también producto del bloqueo. China actúa bajo la presión de la guerra comercial, y aunque el retiro de la petrolera estatal de la producción en Venezuela

6. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-47135808>

no implica un cese total de operaciones en común, ha sido un golpe al gobierno de Maduro.

La asociación con el capital ruso es uno de los factores que estaría impulsando una limitada recuperación de la producción de crudo venezolano, que no alcanza aún, en enero de 2020, a un millón de barriles diarios. Pero la aproximación con Rusia y China está lejos de dar una salida a la situación desesperante del país. El hecho de que Rusia y China tomen el control, en lugar del imperialismo norteamericano, no desmiente el carácter confiscatorio y opresivo del operativo. No hay una defensa del patrimonio nacional, sino que es la convalidación de una política de privatizaciones y entrega.

El apoyo de las burocracias restauracionistas rusa y china tiene límites muy precisos; los intereses petroleros y económicos que tienen Putin y Xi Jinping en Venezuela son prenda de canje y negociación en la disputa que Moscú y Pekín mantienen con Washington.

El régimen de Maduro y sectores nacionalistas caracterizan la presencia de Rusia y China como un contrapeso a la penetración imperialista, e incluso, como un factor de impulso a las luchas antiimperialistas. Se trata de una confusión brutal, por un lado, porque las relaciones que se desarrollan son de tipo colonial, con venta masiva de activos por debajo de su valor, contrapartes leoninas y tasas de interés usurarias. Por otro lado, no se puede ignorar el carácter restauracionista y contrarrevolucionario de la burocracia china y del Kremlin a la hora de evaluar su papel en América Latina.

La boliburguesía sigue facturando

Este cuadro de desguace económico, como se ve, no se restringe al imperialismo norteamericano. La presencia rusa también aporta su cuota en el mismo. El vehículo central, sin embargo, sigue siendo el propio gobierno venezolano. Incluso angostándose mucho en sus negocios en el marco del colapso económico, las camarillas empresariales vinculadas con el régimen chavista siguen teniendo una injerencia determinante en aspectos fundamentales de la vida de Venezuela.

Es lo que ocurre, por ejemplo, con las cajas CLAP, que son las cajas de alimentos que reparte el gobierno y que alcanzan al menos a 2,9 millones de familias (el gobierno de Maduro sostiene que llegan a 6 millones). Las cajas CLAP vienen devaluando su contenido alimentario en el marco de la crisis, pasando de 19 a 10 kg de alimentos, una baja muy grave en el marco de la crisis alimentaria venezolana. Análisis científicos muestran, en

tanto, que se estira incluso la leche en polvo que se reparte, disminuyendo su contenido nutricional, especialmente de calcio⁷.

La distribución de cajas CLAP es un negocio a cargo de empresarios históricamente vinculados con el chavismo: Alex Saab y Alvaro Pulido Vargas. Ambos, actualmente en la mira del Departamento de Estado norteamericano, armaron una red de provisión de alimentos sobre la base de triangular con empresas en Hong Kong, Turquía y otros países.

La importación de las cajas CLAP se realiza en los buques de la empresa náutica estatal venezolana, Venevega. Las empresas de Saab y Pulido están enjuiciadas en México, Colombia, Italia y otros países por la sobrefacturación en los programas de exportación de alimentos y productos de primera necesidad a Venezuela, y por lavado de activos. Bajo la presión judicial, los empresarios fueron mutando la fachada empresarial, abriendo nuevas empresas en nuevos destinos, por ejemplo, Emiratos Arabes Unidos⁸.

En el caso de Uruguay, se han denunciado los sobrepuestos en las entregas de arroz por parte de empresarios vinculados con el gobierno del Frente Amplio, Damboriarena y Ecosteguy, uno de los proveedores centrales de arroz a Venezuela que siguen operando en la actualidad⁹.

El peso de esta boliburguesía es importante en la política venezolana. Hasta tal punto, que Saab y Pulido han sido una pieza central en la ruptura de la oposición en la Asamblea Nacional, que dio origen a la fracción de Parra, al que Maduro encumbró en el golpe parlamentario de enero. En efecto, Parra y su grupo de diputados debutaron como fracción enviando notas a diferentes países donde Saab y Pulido están siendo investigados por la Justicia, utilizando su rol como diputados opositores para “blanquear” a los empresarios. Estos pretendidos certificados de buena conducta fueron denunciados antes de la asamblea de enero y dieron origen a la ruptura de los bloques parlamentarios vinculados con Guaidó, golpeando a la oposición proimperialista en su conjunto.

El Ejército, la clave de la situación

La ruptura de la oposición agrupada en torno de Maduro fue un eslabón más de la crisis de esta oposición, producto del fracaso de la tentativa golpista durante 2019. Desde la autoproclamación de Maduro en la

7. “La mala leche de los CLAP”, Armando.info, 18/2/2019.

8. “Así mutan los negocios de Saab y Pulido para evitar las sanciones”, Armando.info, 24/11/2019.

9. “Los arroceros que nunca se fueron de la fiesta revolucionaria”, Armando.info, 22/12/2019.

Asamblea Nacional, el 5 de enero, el respaldo internacional a la intentona golpista, el reconocimiento de Estados Unidos y el endurecimiento de las sanciones contra Maduro hasta el operativo por el cual Guaidó ingresó a Venezuela auxiliado por paramilitares colombianos y luego el intento de golpe del 30 de abril, el imperialismo y la oposición se jugaron a fondo en derrocar a Maduro.

La “resistencia” del régimen no tuvo nada que ver con una movilización popular, que el gobierno venezolano no tiene ninguna condición para promover, pagando salarios de 6,7 dólares al mes. Por el contrario, el arbitraje clave en la situación fue el del Ejército. Con Maduro, el Ejército maneja el principal presupuesto del país, el de PDVSA. El general de la Guardia Nacional Bolivariana, Manuel Quevedo, maneja los destinos de la empresa desde 2017. Asimismo, la posición del Ejército en puestos de mando clave en la administración civil y en las empresas estatales es muy destacada. El copamiento del gobierno de Maduro por parte de los militares refleja la transición en el equilibrio político del país. El respaldo activo de las masas que otrora caracterizó al chavismo se fue desdibujando hasta desaparecer. El encorsetamiento de las organizaciones populares por parte del Estado ahogó su iniciativa autónoma. El férreo control de la economía y la sociedad por una burocracia estatal vinculada con la boliburguesía excluyó cualquier participación popular en el régimen. El Ejército, que siempre fue fundamental en el desarrollo del chavismo, fue ganando espacio, de la mano de la dependencia del régimen respecto de los militares.

El régimen democrático en Venezuela está quebrado, bajo la presión de la iniciativa golpista opositora y los autogolpes oficialistas. Existen una Asamblea Constituyente funcionando junto a dos asambleas nacionales, dos presidentes, dos fiscales generales del Estado (una de ellas en el exilio). El golpe de Maduro contra la Asamblea Nacional, decretando a Parra como presidente, es solamente el último escalón, por el momento, de esta situación. Bajo estas presiones también se han quebrado las libertades democráticas básicas, aplastadas por el peso de la represión gubernamental estatal y paraestatal, las detenciones arbitrarias y otras. Este quiebre del régimen democrático alimenta en todos los planos el arbitraje del Ejército en la vida política nacional.

El apoyo del Ejército a Maduro quebró la iniciativa golpista. A su vez, el golpe parlamentario obliga a barajar y dar de nuevo. El liderazgo opositor de Guaidó está cuestionado, objetivamente, y se apoya crecientemente en el reconocimiento internacional, quebrado su frente interno. Un sector minoritario de la oposición ha ingresado en un “diálogo” con Maduro,

sin demasiadas perspectivas de prosperar, mientras que otro promueve una intervención militar que, por el momento, está fuera del radar del imperialismo.

Del lado del régimen, la apuesta es adelantar las elecciones a la Asamblea Nacional, concurriendo a elecciones amañadas, de manera tal que permita presentar un triunfo que cierre totalmente la iniciativa golpista. Esto permitiría allanar las condiciones para perpetuar en el poder a Maduro, especialmente si el Ejército continúa su respaldo. A partir de allí es previsible que Maduro apueste a rearmar un diálogo con el imperialismo, sobre la base de privatizaciones masivas como prenda de cambio, un escenario que viene anticipado por lo que está ocurriendo hoy con Rusia. Cualquier intento, sin embargo, estará condicionado por un escenario internacional de convulsiones, guerra comercial y enormes choques internacionales.

El papel del Ejército, que fue clave hasta el momento para sostener al chavismo, puede transformarse de un momento a otro en quien defina un recambio político. La lealtad del Ejército es con el Estado y con la clase social que dicho Estado representa. Colocar la resistencia antigolpista en manos de un puñado de generales, sin apelar a las masas, es darle, a término, un pasaporte al poder a los golpistas.

De la regimentación a la represión generalizada

El cuadro descripto muestra la descomposición de un régimen nacionalista. El chavismo surgió bajo un fuerte impulso de la movilización popular, abierta en la etapa posterior al Caracazo contra la IV República. Esta movilización tuvo un fuerte impulso con la respuesta popular contra el golpe de 2002 y el paro patronal impulsado ese año contra el gobierno de Chávez. Frente a este proceso, el chavismo hizo lo posible e imposible por estatizar y regimentar a las organizaciones obreras y populares. En este proceso tuvo un rol central, junto al control de las organizaciones sindicales, la creación del PSUV, como partido único del chavismo, con el objetivo de regimentar a las organizaciones populares que apoyaban al régimen.

Bajo el gobierno de Maduro, y con la evolución de la crisis económica, las condiciones de vida de las masas se fueron deteriorando y la represión se fue volviendo masiva, no solamente contra la oposición derechista sino también contra el movimiento obrero que lucha por sus reclamos. Mediante el Memorándum 2792, el régimen eliminó los convenios colectivos, dándole atribuciones laborales enormes a las patronales privadas. La liquidación del salario, en el marco de una política de privatizaciones, es

obviamente un bocado de cardenales para ofrecer al capital privado por parte del régimen.

La miseria social generalizada, sostenida por una asistencia estatal totalmente insuficiente, es también un mecanismo firme de regimentación de las masas. La entrega de millones de cajas CLAP, mientras se destruyen los salarios y las fuentes de trabajo, coloca al régimen como el árbitro entre quién come y quién no en las barriadas populares. En ausencia de organizaciones populares independientes que controlen la entrega de alimentos, se organiza la asistencia estatal con la finalidad de garantizar el apoyo al gobierno.

La represión gubernamental contra la oposición es brutal e involucra a los trabajadores. En el país hay 400 presos políticos. La ONU denunció la existencia de 7.000 muertos en represión estatal y paraestatal en el país en los últimos años. Mientras Guaidó, el responsable número uno del golpismo y la sedición, se desplaza libremente por el país, se instala un clima de persecución política y amedrentamiento que busca golpear fundamentalmente a los trabajadores.

Un ejemplo es la persecución a José Bodas, dirigente de la Federación de Petroleros, por sus posiciones opositoras a la burocracia sindical. O, en el día del maestro de 2020, la agresión de una patota oficialista contra los docentes que llevaban adelante un reclamo en defensa de sus salarios y de las condiciones de la educación. Las movilizaciones docentes han sido fuertemente perseguidas desde el Estado. También se denunció la prisión y persecución contra Rodney Alvarez, dirigente obrero de la estatal Ferrominera, acusado de un crimen para encubrir que fue realizado por un militante del PSUV.

La persecución contra trabajadores y activistas es una muestra de la descomposición del régimen. En una situación de emergencia, la movilización de masas para encarar la resolución de los problemas que atraviesa Venezuela es absolutamente imprescindible. Durante los grandes apagones, el gobierno no se propuso ni fue capaz de movilizar a los trabajadores para poner en pie una solución a la crisis energética. Ni hablar de enfrentar la amenaza golpista. La historia muestra que la vía para derrotar los golpes de Estado es la movilización de las masas. El gobierno, sin condiciones políticas ni apoyo para recurrir a ella, recurre a la represión y al amedrentamiento contra los trabajadores, atando su supervivencia a la camarilla militar y los pactos con los sectores capitalistas que perviven por fuera del bloqueo. La vieja base que sostuvo al chavismo mediante la movilización está desmoralizada. La descomposición del régimen nacionalista se pone

de manifiesto especialmente en su relación con los trabajadores.

La defensa del derecho de organización, de movilización y de huelga es fundamental. Esto implica, además, levantar el reclamo del cese de todo tipo de persecución y la libertad de los presos políticos de la clase trabajadora. Una deliberación obrera independiente para poner en pie una salida propia a la crisis, comenzando por el reclamo de la reconstitución de los salarios y jubilaciones, sería un gran paso adelante. El planteo de un congreso de delegados de base del movimiento obrero, para discutir un programa y un plan de acción, tiene una vigencia enorme en la situación política venezolana.

La izquierda

Las variantes principales de la izquierda venezolana han tendido al seguimiento a las variantes patronales en pugna. En el caso del PSL, vinculado con la UIT-CI (en la Argentina, Izquierda Socialista), impulsa la consigna “Fuera Maduro”, orientando todos sus cañones contra el régimen. Fundamentan esto en la caracterización de que la autodesignación de Guaidó como presidente no fue un golpe de Estado. Caracterizan las movilizaciones contra el régimen como progresivas, incluso cuando son acaudilladas por variantes del imperialismo. Por lo tanto, se coloca, objetivamente, en un campo común con la oposición patronal al gobierno, más allá de la delimitación verbal que realiza de Guaidó y de la acción del imperialismo.

Pero en un cuadro en el cual Guaidó formó un gobierno paralelo con el apoyo del imperialismo, la idea de que “no hay un golpe” en marcha no tiene sustento. La denuncia del golpe de Estado, del bloqueo y del embargo no implica ninguna solidaridad con Maduro. Pero una salida de fuerza en favor del imperialismo sería una vía para una confiscación en regla del patrimonio de Venezuela, a precios de remate por la crisis actual. En un choque entre el imperialismo y una nación oprimida, el respaldo directo o indirecto al imperialismo es contrarrevolucionario. La delimitación y la denuncia del gobierno nacionalista deben poner de manifiesto su inconsistencia para enfrentar la ofensiva imperialista.

En el caso de Marea Popular, el grupo vinculado con el MST argentino, tuvo una larga evolución dentro del chavismo. Marea Popular caracteriza la degeneración y clausura de la revolución bolivariana por parte de Maduro. Pero está totalmente ausente un balance de la experiencia chavista y las posiciones de Marea Popular en ella¹⁰, ni qué hablar de una reflexión sobre los aspectos de la experiencia de Chávez que originaron

10. “Marea socialista en una nueva etapa”, en MST.org.ar 5/4/2019.

la situación actual en Venezuela: la regimentación de las organizaciones populares, el carácter del pago de las nacionalizaciones, el control burocrático de las mismas, el sostén del viejo aparato de Estado.

Integrantes de Marea Socialista participaron de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, una agrupación que impulsaba un referéndum consultivo para “evitar una guerra civil” en Venezuela, y que con ese objetivo se reunió con Guaidó y reclamó reunirse con el gobierno de Maduro. Posteriormente, Marea Socialista denunció que ese espacio fue copado por variantes derechistas. El carácter democratizante y de conciliación con variantes patronales del planteo original, sin embargo, es inocultable.

Otros sectores de la izquierda han sido arrastrados a un campo común con Maduro. En el caso de Opción Obrera, de Venezuela, desarrolla una posición de apoyo vergonzante al régimen, sosteniendo que “no se puede ser neutral entre los dos campos burgueses en lucha”. La posición de Opción Obrera ignora cualquier delimitación con el gobierno de Maduro y la responsabilidad del gobierno en la situación crítica de los trabajadores de Venezuela.

Las posiciones de la izquierda en Venezuela son, en parte, el resultado de la falta de consistencia política y teórica de sus planteos y, por supuesto, reflejan la enorme presión, producto de la situación política. La tarea de crear un campo independiente, una oposición de clase al régimen descompuesto de Maduro y al imperialismo, es una tarea pendiente.

Un planteo

A la luz de lo anteriormente expuesto, quedan claros los intereses en juego. El imperialismo disputa con Rusia y el régimen una reorganización general de la producción petrolera, que tiene como precondition el desguace de PDVSA y de todas las empresas públicas venezolanas. A la luz de la crisis, Rusia interviene en una perspectiva similar, aunque sobre la base de la alianza con el régimen. Maduro, apoyado en el Ejército, viabiliza el ingreso del capital ruso y chino y habilita los recursos estatales para ganar aire políticamente. La base de apoyo popular del régimen se ha reducido a su mínima expresión, y el sostén pasa por el Ejército y los sectores remanentes de la boliburguesía, que siguen parasitando la caja del Estado.

El rechazo al golpe de Guaidó es una precondition para una política revolucionaria en Venezuela, porque ninguna salida progresiva puede partir del imperialismo y los responsables del bloqueo. El fin del bloqueo y los embargos contra Venezuela, el retiro de todas las demandas de las

empresas buitres, avaladas por el Ciadi y la Cámara de Comercio Internacional, el desconocimiento de los fallos, son otra consigna necesaria. El inviable pago de la deuda externa debe ser rechazado, la deuda debe ser investigada y repudiada por su carácter confiscatorio y fraudulento.

Este programa anti-imperialista es incompatible con un gobierno como el de Maduro. La reconstrucción económica de Venezuela requiere, en primer lugar, de una deliberación popular, de carácter político, y, luego, del control obrero de la producción y la distribución, un planteo que choca de frente, tanto con el control de la boliburguesía de sectores clave de la economía como con la burocracia estatal y, sobre todo, el Ejército. Es necesario un congreso de delegados de base del movimiento obrero y promover la discusión para desarrollar una posición independiente de los bloques patronales en pugna. La consigna del control obrero de la industria petrolera es fundamentalmente una consigna contra el control de la misma por la camarilla de oficiales que aseguran el control del Ejército por parte de Maduro.

Por supuesto que estos planteos van de la mano con la denuncia de la persecución por parte del gobierno a los activistas obreros, la liberación de los presos políticos, la libertad de organización sindical y la lucha por una nueva dirección en el movimiento obrero, contra la burocracia colaboracionista.

La confianza en el Ejército es suicida, por un lado, porque entrega el país al alto mando, y por otro, porque la oposición derechista pretende conquistarlo y, tarde o temprano, el Ejército tenderá a sacarse de encima al régimen de Maduro.

La aceptación de condiciones leoninas del capital ruso y chino debe ser denunciada como una nueva confiscación contra el pueblo de Venezuela. La política de privatizaciones no conducirá a un relanzamiento económico del país sino a un nuevo sometimiento colonial.

Las rebeliones populares que recorren Latinoamérica, tarde o temprano, van a sacudir a la clase obrera venezolana. La tarea de la izquierda en toda América Latina es levantar este programa de independencia de clase y denuncia del imperialismo, así como sacar un balance de los límites insalvables del nacionalismo chavista para contribuir a poner en pie una alternativa independiente.

Los golpes de Estado en América Latina

Un desafío para la izquierda revolucionaria

Andrés Roldán

La actitud a asumir ante los golpes de Estado en América Latina es un importante tema a clarificar entre las corrientes que se reclaman izquierda y revolucionarias. No solo es una cuestión de caracterización y de postura ante los acontecimientos. También, como lo pone en evidencia la experiencia histórica, es una importante oportunidad de intervenir frente a un curso político que potencialmente pone en riesgo la cohesión y fortaleza del Estado y, por lo tanto, abre la posibilidad eventual de una intervención (movilización) de masas revolucionaria. En el reciente llamamiento a la Conferencia Latinoamericana señalamos la importancia de derrotar el golpe en Bolivia como una cuestión crucial, no solo para la izquierda boliviana sino para la izquierda latinoamericana en su conjunto.

Esta clarificación requiere, por un lado, caracterizar el rol de estos golpes, tan frecuentes en nuestro continente como también las distintas políticas seguidas, tanto por las corrientes nacionalistas y centroizquierdistas, habitualmente las víctimas inmediatas de estos golpes como de la izquierda.

América Latina: regímenes inestables y golpes de Estado

Partimos de una constatación. Los regímenes políticos en América Latina no lograron desarrollar un régimen democrático burgués estable desde

la época de las independencias formales en el siglo XIX. La presencia de las potencias europeas y de Estados Unidos desde los albores de la independencia condicionó los regímenes políticos de nuestro continente. El resultado, en general, fueron regímenes políticos oligárquicos, agentes de los imperialismos foráneos y/o caudillismos militares. El crecimiento industrial a fines del siglo XIX y comienzos del XX tuvo varias consecuencias y dio lugar a un conjunto de fenómenos. Por un lado, se formó una ascendente burguesía nativa, en particular orientada al mercado interno, pero también se constituyó un creciente proletariado, mayoritariamente empleado en empresas extranjeras radicadas en nuestros países. Estos fenómenos dieron paso a una mayor intervención política de las burguesías criollas, pero con un margen de maniobra muy estrecho, atezadas como se encontraban entre el imperialismo, de un lado, y el proletariado, del otro. Estas generaron alternativas de regímenes políticos que oscilaron entre el bonapartismo y el semibonapartismo, según el tipo de arbitraje que lograran armar entre las clases.

La inestabilidad de los regímenes políticos en América Latina convirtió a los golpes de Estado en un componente estructural de su desenvolvimiento político. Y esto abarca a un amplio y diverso espectro, tanto en relación con sus características jurídico-políticas (golpes militares, golpes parlamentarios, autogolpes, etc.) como a sus actores sociales y políticos. En la mayoría de los casos, los golpes respondían a los intereses reaccionarios que pretendían recuperar su hegemonía frente a direcciones nacionalistas, pequeño burguesas y centroizquierdistas, que, contando con apoyo popular, pretendían algún tipo de autonomía respecto del imperialismo y las oligarquías locales. Pero también, aunque en menor proporción, algunos de esos golpes fueron impulsados por corrientes “nacionalistas”. La izquierda revolucionaria tiene que intervenir frente a los distintos tipos de golpe con una caracterización de los intereses de clase que están en juego y no dejarse llevar por la cobertura que esos intereses buscan presentar. Así como denunciaremos los golpes derechistas y reaccionarios por sus intereses de clase, tenemos que defender los golpes “nacionalistas” en la medida que sean atacados por el imperialismo y sus agentes locales, que se escudan detrás de una cobertura “democratizante”.

Los golpes reaccionarios constituyen, además, una prueba de fuego para las corrientes que tuvieron que soportarlos, pues pusieron a prueba su capacidad de resistir efectivamente al imperialismo y la reacción.

Trataremos de concentrar nuestra atención en la segunda mitad del siglo pasado y lo que va del actual siglo XXI, pues entendemos que son

muchas e importantes las experiencias que podemos extraer de esos acontecimientos. En relación con este tema de los golpes de Estado, la segunda mitad del siglo XX fue una escuela insustituible para las masas y para la izquierda.

Pero antes de entrar en este período de nuestra historia, queremos señalar algunas conclusiones de tres experiencias europeas de las primeras décadas del siglo pasado, pues nos marcan actitudes y posturas que, de uno u otro modo, serán recogidas por las distintas corrientes sociales y políticas, dado que tuvieron un efecto relevante en la experiencia política general.

La experiencia europea: Rusia, Alemania, España

El primer caso es el golpe de Kornilov en agosto de 1917 en la Rusia revolucionaria. Kornilov era un general derechista, quien contando inicialmente con la complicidad del gobierno conciliador de Kerensky, se juega a desplazarlo mediante un golpe de Estado militar para imponer, de ese modo, el programa derechista (liquidar los soviets, continuar la guerra, acabar con el peso de los revolucionarios en el Ejército y mantener el dominio terrateniente sobre el campo). El planteo de Lenin para los bolcheviques, que habían sido reprimidos por el gobierno de Kerensky, fue luchar junto a Kerensky contra Kornilov, pero no dar ningún apoyo al gobierno de Kerensky. Es conocida su fórmula de apoyar el fusil en el hombro de Kerensky para derrotar a Kornilov. En la lucha contra el golpe de Kornilov, los bolcheviques jugaron un rol protagónico, que los va a afianzar como dirección de las masas y abrirá el camino hacia la revolución de octubre de ese año, que llevará a los bolcheviques al poder.

El segundo caso se dio en Alemania en marzo de 1920 y es conocido como el “putsch” de Kapp. Este era un político derechista que actuó de mascarón de un golpe militar, que buscaba con retórica nacionalista, acabar con el gobierno de la socialdemocracia de derecha de Ebert-Noske (la que había reprimido a los comunistas y asesinado a sus dirigentes, Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht) con el propósito de liquidar las expresiones de protagonismo obrero que se mantenían desde la revolución de noviembre de 1918 e imponer una dictadura militar. El golpe arranca el 13 de marzo y aprovecha la conducta pasiva del gobierno frente al golpe, que parecía imponerse. Pero la reacción obrera, canalizada por un sector de la socialdemocracia de derecha y por los Socialistas Independientes (centristas), una parte de los comunistas junto a las direcciones sindicales, van a llevar a una impresionante huelga general que va a aplastar al golpe.

La conducta del joven Partido Comunista alemán frente a este golpe no fue el que tuvieron los bolcheviques durante el golpe de Kornilov. Por el contrario, cuando se declaró el golpe, la dirección se manifestó prescindente, y solo en algunas provincias y centros obreros los comunistas actuaron protagónicamente en la lucha contra el golpe, por la huelga general y la formación de comités obreros. Con el correr de las horas, la orientación se fue adecuando a estas iniciativas, pero el partido actuó desorganizadamente y con fuerte presencia de sus tendencias ultraizquierdistas, que ya habían mostrado sus límites y defectos durante las jornadas de enero de 1919. El balance de esta conducta fue ampliamente debatido no solo en el congreso del Partido Comunista alemán de abril de 1920 sino en toda la III Internacional. Algunas de las consecuencias de estos acontecimientos fue la ruptura del ala ultraizquierdista del partido a principios de abril de 1920, formando un partido aparte y más adelante la incorporación al Partido Comunista de una mayoría a la izquierda de los socialistas independientes, justamente la que había tenido un rol protagónico en el aplastamiento del golpe.

La tercera experiencia es la España en 1936. El Frente Popular triunfó en las elecciones de febrero de 1936 y a los pocos meses se fue gestando un golpe derechista encabezado por Franco. Si bien el golpe triunfó en una gran parte de España, fue derrotado en las grandes ciudades por una activa participación obrera y campesina, que se sobrepusieron a la pasividad demostrada por el gobierno frentepopulista. Fue significativo que en aquellas ciudades y provincias donde el gobierno logró imponer la orientación de confiar en los militares “leales”, el golpe triunfó a pesar del extraordinario vigor de la resistencia popular (como en Sevilla), mientras que allí donde la iniciativa estuvo en manos de los obreros y campesinos el golpe fue derrotado. Esto dio comienzo a la revolución española, a la formación de comités obreros y campesinos y a un principio de armamento popular. La labor desmoralizadora del gobierno del Frente Popular y sus acciones contra la organización independiente obrera y campesina, por el desarme de las milicias, pavimentó el camino a la victoria después de tres años de guerra civil por los golpistas apoyados, además, por la Alemania nazi y la Italia fascista.

La experiencia española es particularmente importante por los profundos lazos sociales y políticos con Hispanoamérica, incluyendo los miles de exiliados que llegaron a nuestro continente, especialmente a Méjico y en menor medida a Argentina. La experiencia española mostró el rol potencialmente revolucionario que puede tener una derrota de un golpe por la intervención revolucionaria de las masas, así como el límite que esta

intervención tuvo por la carencia de una dirección revolucionaria de ese movimiento. Pero también la experiencia española tuvo influencia seguramente en la conducta de las corrientes nacionalistas y centroizquierdistas, temerosas de que la derrota de un golpe pudiera dar lugar a la emergencia de una revolución, como había ocurrido en julio de 1936 en España.

América Latina: Bolivia, Argentina, Chile, Venezuela y Bolivia nuevamente

Retomando la experiencia de la segunda mitad del siglo pasado en América Latina, tomaremos algunos casos emblemáticos. El primero es la experiencia boliviana de 1952. Luego de un “sexenio” gobernado por una alianza similar a la de la Unión Democrática argentina del ’46, con el liderazgo de la “Rosca” oligárquica y proimperialista, apoyada por el partido estalinista del Altiplano, se convoca a elecciones presidenciales. El movimiento nacionalista (MNR) proclama la fórmula Paz Estenssoro-Siles Suazo. “El MNR ganó las elecciones, pero el gobierno de la ‘Rosca’ se niega a entregarle el poder y arma un autogolpe. El MNR entonces promueve un golpe militar palaciego que fracasa, pero las masas lo toman como punto de partida para su propia intervención independiente. El 9 de abril de 1952, las milicias obreras, con fuerte protagonismo minero, derrotan a las fuerzas del Ejército que se desmoronan. La revolución había comenzado” (*Prensa Obrera* N° 1.522, 4/10/2018, “La revolución boliviana irrumpe en América Latina y en la IV Internacional”).

Es decir, el golpe gorila fue enfrentado tímidamente por la dirección nacionalista que fracasa y es la intervención independiente de las masas obreras la que inclina la balanza, derrota el golpe gorila y abre el curso a la revolución boliviana, el armamento obrero y popular, y la conformación de la Central Obrera Boliviana (COB), que centraliza la intervención obrera y se convierte embrionariamente en un potencial organismo soviético.

No es nuestra intención en esta nota desarrollar las condiciones que llevaron a esta revolución a su frustración y liquidación en manos de las corrientes nacionalistas que desarmaron las milicias mineras y obreras y prepararon las condiciones del triunfo de un futuro golpe contrarrevolucionario, pero sí marcar las condiciones revolucionarias que se vivieron en abril de 1952 en Bolivia y que iban a marcar la conducta de las clases y sus expresiones políticas en los años siguientes.

Queremos referirnos en particular a la experiencia del golpe gorila en la Argentina de 1955, que abatió al gobierno de Perón. A pesar de vuelco

derechista de Perón en su segundo gobierno a partir de 1953 (Congreso de la Productividad, acuerdo con Standard Oil, visita del hermano del presidente yanqui, etc.), el imperialismo y sus socios nacionales, con el apoyo activo de la Iglesia, comenzaron a complotar abiertamente para desplazar a Perón. En junio de 1955, un intento de golpe iniciado por la Marina no logra desenvolverse, pero muestra a un gobierno que no toma ninguna medida para depurar a los golpistas ni de movilizar a las masas para derrotarlo. Esta es la evidencia contundente de una conducta que veremos repetida en otros casos. Golpes que se anticipan, que no triunfan pero que tampoco generan de parte de los afectados ninguna intervención para depurar a los golpistas y sus ramificaciones.

Cuando finalmente el golpe estalla, el 16 de setiembre de ese mismo año 1955, Perón se niega a movilizar a sus tropas (que eran numéricamente mayoritarias) y mucho menos movilizar a los trabajadores que habían votado en numerosas empresas y sindicatos el reclamo de armas para derrotar al golpe. Por el contrario, el 21 de setiembre, Perón decidió renunciar, exiliarse primeramente en Paraguay, gobernado por el dictador Stroessner, y luego de un paso por la Cuba de Batista, recalar en la España de Franco.

Es muy probable que las experiencias de España en la década del '30 y la más reciente de Bolivia en 1952 llevaran a Perón a no arriesgar una lucha militar que hasta le podía haber sido favorable, pero que abría las compuertas para una intervención obrera y popular, que se sabe cómo comienza pero no cómo sigue.

El temor a que la crisis abierta por el golpe pudiera dar lugar a un principio de armamento popular aterrorizaba a Perón, quien declaró que renunciaba para “no derramar sangre de argentinos”. Como es sabido, la sangre se derramó y afectó a quienes resistieron a la dictadura después que Perón ya se había exiliado.

Volvemos nuevamente a Bolivia. Después de más de diez años de gobierno, al MNR le pasaba algo similar al peronismo de 1955. A pesar de su orientación capituladora, la derecha impulsó un golpe protagonizado por el general Barrientos en 1964, que llevó adelante una serie de represiones, especialmente en las minas, y enfrentó en 1967 a la guerrilla del Che, a quien derrotó y asesinó. En 1969 murió en un confuso accidente de aviación y fue reemplazado por el general Ovando, que inició una apertura nacionalista que al año siguiente fue ampliada y profundizada por el general Torres, quien asumió el 7 de octubre de 1970, denunciando un golpe derechista que quería derrocar a Ovando.

Torres acentuó la política nacionalista de su predecesor, basada según él, en cuatro pilares (trabajadores, campesinos, universitarios y los militares leales). Ya en enero de 1971, un golpe intentó derribarlo pero fue derrotado, y hubo una importante movilización obrera y popular que dio lugar a la conformación de la Asamblea Popular, con base en la COB y las centrales estudiantiles. Pero un nuevo golpe en agosto de ese mismo año de 1971, liderado por el general Hugo Banzer, lo derrocó y lanzó una feroz represión que derrotó al movimiento obrero y popular.

Casi simultáneamente con el ascenso de Torres en Bolivia, ocurrido en octubre de 1970, asume en Chile Salvador Allende como presidente en noviembre de 1970. Allende encabezaba la Unidad Popular, un frente popular que agrupaba al Partido Socialista, al Partido Comunista, a partidos burgueses minoritarios como el radical, y contaba con el apoyo del castrismo y de las corrientes foquista como el MIR (vinculado con el ERP argentino).

Su política fue la de encarar nacionalizaciones, como la de la minería (especialmente el cobre), que afectaron intereses norteamericanos pero evitó quebrar el régimen estatal. Fidel Castro hizo una extensa visita a Chile a finales de 1971, mostrando su apoyo a la “vía chilena” al socialismo, como se decía entonces. Incluso Fidel insistió en la necesidad de no quebrar el “régimen democrático”, lo que implicaba la preservación del Estado burgués.

El imperialismo y la derecha conspiraban abiertamente, promoviendo el mercado negro y huelgas, como la de los camioneros, que amenazaban el abastecimiento. En junio de 1973, un golpe apresurado, conocido como el “tancozo”, pues fue protagonizado por una compañía de tanques, alertaba sobre el clima que se venía. El general Prats, conocido por sus posiciones “profesionales”, fue presionado para renunciar en agosto y Allende nombró en su lugar a Augusto Pinochet. Cuando numerosos marineros de baja graduación denunciaron en ese mismo agosto los preparativos golpistas, el gobierno toleró que los reprimieran y los dieran de baja. En los sectores obreros más concentrados, el de Santiago en especial, se comenzaron a organizar los “cordones”, coordinadoras de trabajadores, un embrión de organización soviética que reclamaron armas y, en algunos casos, comenzaron a conseguirlas por su cuenta. A fines de agosto, el gobierno autorizó a las Fuerzas Armadas a desarmar a los trabajadores y a requisar a todos los civiles.

Cuando finalmente el golpe encabezado por Pinochet se desencadena, el 11 de septiembre de 1973, la resistencia está completamente desorgani-

zada y es reprimida. El propio Allende se inmola en el Palacio de Gobierno, resistiendo en soledad a las tropas que lo atacan, pero esto no puede ocultar que la política del frente popular fue desorganizar y desmoralizar toda resistencia y adaptarse a todas las presiones reaccionarias. El castrismo y el foquismo defendieron al frente popular y su política.

El golpe de Pinochet, producido después del de Banzer en Bolivia, formó parte de la seguidilla de golpes que se descargaron sobre nuestra región y que se completaron con el golpe militar en Brasil, en Uruguay y, finalmente, en nuestro país en 1976.

El nuevo siglo nos ha traído nuevas experiencias en relación con los golpes de Estado. Tomaremos inicialmente dos de ellas, pues son bastante significativas. En abril de 2002, un golpe de Estado motorizado por militares pero con el liderazgo del presidente de la federación patronal, desplaza a Hugo Chávez de la presidencia de Venezuela. Tuvo el auspicio de la Embajada norteamericana y contó con el apoyo de un sector de las direcciones sindicales burocráticas. Durante unas horas se dio a Chávez por renunciado y a un nuevo gobierno instalado, pero esto no duró más que unos días, desde el 11 de abril, hasta que el 14 Chávez reasume la presidencia con el apoyo de la mayoría de las Fuerzas Armadas y con una manifestación popular. El golpe fue derrotado, sobre todo por la resolución interna dentro de las Fuerzas Armadas. Los trabajadores y la población fueron, en todo caso, un complemento, pero no jugaron un rol autónomo.

Al año siguiente, en 2003, comenzó un proceso de movilizaciones en Bolivia que va a culminar a fines de 2005 con la elección de Evo Morales para la presidencia. Sánchez de Lozada asumió, en agosto de 2002, por segunda vez la presidencia de Bolivia como líder de un decadente MNR, que hacía rato había abandonado sus banderas de la década del '40 y '50. A principios de 2003 aplicó un "impuestazo" al salario que provocó movilizaciones populares, incluida la policía. En septiembre y octubre, ante denuncias de que se pretendía exportar gas a través de puertos chilenos comenzaron fuertes movilizaciones, impulsadas por la COB y los campesinos. Sánchez de Lozada ordena a las Fuerzas Armadas la represión, que deja más de 60 muertos y centenares de heridos. La COB y la Confederación de sindicatos campesinos declaran la huelga general indefinida y Sánchez de Lozada renuncia en octubre de 2003, dejándole el gobierno a su vice, Carlos Mesa.

Mesa tampoco pudo concluir su mandato aunque intentó acomodarse a los reclamos populares con un referéndum sobre el gas. Pero las

elecciones municipales de 2004 mostraban el ascenso del MAS (el partido de Evo Morales) y la quiebra de los viejos partidos. En marzo de 2005 se retomaron las movilizaciones y, en mayo, la COB declaró nuevamente una huelga general indefinida, que llevó a la renuncia de Mesa, la asunción del presidente de la Corte y finalmente el triunfo en las elecciones presidenciales de Evo Morales por más del 50% de los votos, asumiendo en enero de 2006.

Desde entonces, hemos presenciado una reiteración de golpes pseudo-“parlamentarios”, como los llevados a cabo en Honduras, Paraguay y, más recientemente, en el caso de la destitución fraudulenta de Dilma Rousseff de la presidencia de Brasil. El más reciente golpe en Bolivia, por el cual destituyeron fraudulenta y violentamente a Evo Morales, se inscribe en la característica más tradicional de los golpes de Estado.

Conclusiones

Hay conclusiones que surgen de la experiencia histórica que es muy importante tener presente. La inestabilidad de los regímenes de nuestro continente, agravada por las condiciones de la actual crisis mundial, que empeoran las condiciones económico-sociales del continente, establecen los golpes de Estado como una posibilidad a tener en cuenta y obligan a fijar una clara postura frente a ellos.

En primer lugar, es necesario ver la oportunidad de intervención política independiente que ofrecen para las masas, en la medida que la tensión generada por el golpe puede abrir canales de intervención en condiciones de una relativa fragmentación del aparato represor del Estado. Los golpes, tanto los reaccionarios como los nacionalistas, son una expresión de la incapacidad de los regímenes políticos y de las propias instituciones del Estado de contener las tensiones de la lucha de clases.

Para aprovechar esa oportunidad es imprescindible que la izquierda revolucionaria tenga una posición independiente y haya logrado insertarse en el movimiento de masas en forma diferenciada de las corrientes nacionalistas, frentepopulistas o centroizquierdistas, que tienden a capitular ante la presión de la reacción por temor a abrir una brecha en la cohesión del Estado burgués del cual son tributarios. Por eso es habitual que reclamen “defender la democracia”, “no asustar a la derecha” y otras capitulaciones semejantes.

Pero, además, es necesaria una intervención audaz, una vez caracterizadas correctamente las fuerzas en pugna. Incluso en caso de golpes de tipo nacionalistas, los choques que pueden abrir son una oportunidad para

la intervención revolucionaria. Recordemos lo señalado con la situación boliviana de 1970-71, después del golpe que colocó a Torres en el poder.

La posición revolucionaria no puede limitarse a una caracterización pasiva de las fuerzas actuantes, sino guiar a las masas contra la reacción, en una política de frente único contra el golpe reaccionario con todas las fuerzas nacionalistas o democráticas que luchan efectivamente contra el golpe, naturalmente que sin avalar ni comprometer su independencia política en esa intervención. Por eso apelamos a la experiencia del joven Partido Comunista alemán en el “putsch” de Kapp en 1920, que fue ampliamente debatido en las filas de la III Internacional. Su pasividad le quitó protagonismo en jornadas decisivas para la penetración del partido entre las masas. De este balance surgió con un perfil más definido la política de frente único, que en la lucha contra los golpes reaccionarios es fundamental. En nuestro país lo vivimos con las posiciones del foquismo que, frente al golpe de Videla, adoptaron una posición pasiva con el argumento de que así la reacción se quitaba la careta “democrática” y se abrían más abiertamente las condiciones de una guerra civil.

Naturalmente que esta intervención de frente único de lucha contra el golpe significa también estar alertas ante la posibilidad de que ante el temor por la intervención de las masas, las corrientes burguesas o pequeño-burguesas abandonen la lucha contra el golpe y se pasen al bando de la reacción. Es que las burguesías de los países atrasados oscilan entre la búsqueda de una cierta autonomía frente al imperialismo, en cuyo caso pueden impulsar limitada y regimentadamente una movilización popular, al temor a que esa movilización popular pueda amenazar su dominio y se vuelcan a la reacción.

Debemos tener presente, además, las circunstancias históricas de cada período. La oleada de golpes militares contrarrevolucionarios de la década del '70 no es la política actual del imperialismo, que prefiere mantener los regímenes con un barniz “democrático” en la medida en que no saquen los pies del plato. Por eso, en los últimos años se han producido golpes “parlamentarios”, autogolpes y otras variantes que pretenden mantener la ficción institucional. Esto no debe ocultar sus características de clase y sus objetivos reaccionarios (caso Brasil, con la destitución de Dilma, por ejemplo). Incluso en un golpe más nítido, como el boliviano, hay un intento de mantener una ficción institucional, de la cual el propio MAS es cómplice.

La Conferencia Latinoamericana que promovemos puede y debe ser un escenario muy auspicioso para llevar este debate adelante.

La Ola Verde: la lucha por el aborto legal

Las calles son de las mujeres en lucha

Vanina Biasi

La marea verde que recorrió el país, que se hermanó bajo el reclamo de aborto legal, -que sacudió las bases de un Estado construido en un profundo entrelazamiento con la Iglesia católica, y de forma cada vez más creciente con algunas ramas de la evangélica-, tiene un auspicioso futuro de lucha y de victorias por delante.

El ascenso del movimiento de mujeres en Argentina durante 2018 fue la expresión más alta de un fenómeno social que, desde 2015, se desarrolló con grandes manifestaciones y una experiencia política sumamente enriquecedora. El despliegue de este movimiento permitió la elaboración y difusión de un programa concentrado en la cuestión de la opresión específica que sufre la mujer bajo el capitalismo.

El movimiento de mujeres, que durante 2018 estuvo en las calles luchando por el aborto legal, por la educación sexual científica y laica y por la separación de la Iglesia del Estado, es un movimiento con pasado y con futuro. Fue cimentado por la acción de militantes que desde la década del '80 levantaron las banderas del aborto legal, que han juntado millones de firmas y hecho todo tipo de campañas, y por la conformación, en 2005, de la propia Campaña Nacional por el Derecho al Aborto.

Este movimiento se abrió paso en un país en el que existe una izquierda que no abandonó el reclamo bajo ningún gobierno, que

movilizó contra los intereses de gobiernos e iglesias en todos los escenarios y que llevó siempre en su programa la lucha por el aborto legal y por la separación de la Iglesia del Estado. El reagrupamiento más importante de la izquierda argentina, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, coloca la demanda por el aborto legal en los espacios cedidos por el Estado a los partidos políticos en las campañas electorales desde 2011 -fecha de su conformación.

Esta firmeza en el sostenimiento político del reclamo de aborto legal es un patrimonio político que colaboró para crear la mayoría social que, en 2018, se lanzó a las calles con enorme masividad y es un indicador de la importancia que tiene que reforzar al Partido Obrero y al FIT como alternativa política de las y los trabajadores. La gran Ola Verde es también hija de Encuentros de Mujeres que se suceden de manera ininterrumpida desde 1986, en los que, a pesar de los intentos contrarios de parte de corrientes maoístas y peronistas, se afianzó un rechazo a las alianzas con el clero.

Estos factores explican, en parte, el crecimiento de la demanda en nuestro país y es una de las razones por las que su fortaleza logró irradiar a mujeres de toda América. Las consignas ligadas a las demandas de las mujeres, centradas en la denuncia al Estado capitalista -impulsadas dentro del movimiento por las integrantes del Plenario de Trabajadoras-PO-, llegaron a impactar sobre un sector del feminismo norteamericano. Cinzia Arruzza, una catedrática italiana radicada en Estados Unidos, afirmó, en febrero de 2017: “Al plantear un feminismo para el 99%, nos inspiramos en la coalición argentina Ni Una Menos” -así se identificaba a todo el movimiento-, señalan en el texto y explican qué es lo que las acercó al movimiento en nuestro país: ‘la violencia contra las mujeres, como ellas la definen, tiene muchas facetas: es doméstica, pero también del mercado, de las relaciones de propiedad capitalista, y del Estado’”. Mencionamos esta lucha por la orientación de un movimiento -no como un vicio autoproclamatorio sino porque la batalla política librada en nuestro país para emparentar la violencia contra las mujeres como consecuencia del régimen social capitalista, y no como el efecto de la naturaleza masculina o de una primacía cultural abstraída de las relaciones de clase y de poder-, porque fue muy aguda, en particular con otras corrientes de izquierda.

Por entonces, en Estados Unidos se había protagonizado una marcha de más de dos millones de personas contra el recién asumido Donald Trump. Cinzia Arruzza, junto a Nancy Frazer, la ex dirigente del

PC de Estados Unidos, Angela Davis y Tithi Bhattacharya, entre otras académicas, escribieron su texto como reflexión al respecto de aquellas jornadas y del ascenso del movimiento de mujeres, y en particular su identificación con el feminismo en el mundo.

Estado abortista

La mayoría de quienes luchan por este derecho afirman que el aborto es una cuestión de salud y que no hacerlo es negarle a las mujeres el acceso integral a la atención en salud, lo cual es claramente cierto. En realidad, las mujeres trabajadoras no acceden al derecho a la salud en varios aspectos, no exclusivamente en lo relativo al acceso al aborto o la anticoncepción. La clandestinidad del aborto tiene un alcance que va más allá de la habilitación por parte del Estado a realizarse una práctica sencilla, segura y de bajo costo para el sistema de salud. El costo que hoy asume el sistema público por mantener el aborto en la clandestinidad es mucho mayor al que debería afrontar si se legalizara, máxime si el Estado decidiera producir las drogas necesarias para la práctica de un aborto quirúrgico. En épocas en que el achicamiento del Estado es palabra santa, los dueños de la santidad buscan impedir una práctica que evitaría la muerte y mutilación de mujeres, y cuyo correcto abordaje permitiría evitar el ingreso de entre 50 mil y 80 mil mujeres al año con complicaciones por abortos clandestinos, lo cual implica para el sistema de salud costosas intervenciones para evitar las muertes.

Legalizar el aborto es una cuestión de salud, claro, pero su prohibición tiene una razón de ser político y religiosa. El aborto clandestino es un recurso del capital, porque la finalidad de someter a una mayoría social está puesta al servicio de la defensa de la tasa de beneficio capitalista y de sus intereses. Es una imposición sobre la capacidad reproductiva que tiene la clase trabajadora de esa sociedad, al servicio de la necesidad del capital y su demanda de reproducción de la fuerza de trabajo o al servicio de la necesidad de los requerimientos de la institución católica, como ideología oficial de los Estados capitalistas de la región.

El aborto clandestino es un recurso político, mediante el cual se establecen los principios de la familia cristiana fundada en el sometimiento material y emocional, el vínculo de tutelaje de las mujeres con el Estado y estableciendo desde allí el pulso que tendrán el conjunto de las relaciones en esas sociedades. Es también un enorme negocio, del que se llenan los bolsillos clínicas, laboratorios y profesionales, muchos de los cuales se presentan como enemigos de aborto.

Las principales causas de aborto están vinculadas con la acción directamaterial del capital o a su función ideológica de control social de los sectores populares. El fomento de relaciones sexuales basadas en el sometimiento hacia las mujeres y los niños, la ausencia de métodos anticonceptivos o su carencia en amplios sectores, el trabajo precario y no registrado, que en la Argentina supera el 40% de la población activa, son todos factores que impiden el desarrollo del libre derecho tanto a la maternidad como el derecho al goce sexual sin fines reproductivos.

Bajo el capitalismo no hay derecho a ser madres ni a no serlo. Lo que hay es una maternidad puesta al servicio de intereses enajenados. Una maternidad sin recursos, forzada, o una maternidad que es el fruto de otras carencias humanas, es la que se impulsa bajo este régimen social. La lucha por el aborto legal constituye otra cara de la misma lucha por el derecho a una maternidad plena, sin sufrimientos ni penurias sociales.

El 70% de las personas que viven en extrema pobreza en el mundo son mujeres. Estas realizan el 66% del trabajo en el mundo, producen el 50% de los alimentos y escasamente reciben el 10% de los ingresos. En nuestro país, donde la pobreza sobrepasa el 35,6% de la población, aunque aún no se han desagregado los datos correspondientes, podemos afirmar que entre el quintil más bajo de la población, en el que se concentran la pobreza y la indigencia, el 70% son mujeres. Entre las jóvenes de hasta 29 años se concentra la tasa de desocupación más alta del país. Casi diez nenas por día menores de 14 años paren niños que son el fruto de haber sido obligadas a llevar adelante una gestación que es el fruto de una violación. Entre 50 y 80 mil mujeres son internadas por año por complicaciones producidas por abortos clandestinos, aún con la extensión del uso de métodos más seguros como el misoprostol.

El Estado que abre paso a la creciente precarización laboral es un Estado que impulsa a las mujeres que deben caer en ese vínculo laboral a tener que recurrir al aborto clandestino para no perder un empleo, el que no se está dispuesto a proteger la maternidad. El avance de la violencia doméstica, sobre la que no se actúa más que para agravar el cuadro actual, es otro factor de impulso al aborto en la clandestinidad, porque en amplias franjas sociales la maternidad también es una decisión que sólo el cónyuge varón habilita.

Frente a la pretensión de avanzar en un “Pacto Social”, que fomenta el inmovilismo de las masas, mientras se toman decisiones que afectan su vida y sus intereses, la Iglesia aparece como un actor fundamental para garantizar este proceso político. El ministro de Desarrollo

Social, el ex renovador Daniel Arroyo, prometió que el sistema de asistencia social será pactado con “curas y pastores”.

La burocracia sindical, que actuó en alianza con el clero durante 2018, formará parte de este entramado de contención, que busca que los sectores populares paguen en silencio una crisis que no provocaron.

No sólo en las filas del próximo oficialismo se refuerzan los clericales sino también en las filas de los macristas derrotados, que llevarán a militantes evangélicos al Congreso para que ocupen sus bancas junto a representantes del culto católico, que llevan años allí.

La rebelión de las pibas

Varios logros han sido patrimonio del año de la Ola Verde. El reciente fallo de la Suprema Corte cordobesa contra el Portal de Belén, después de que esta ONG católica cogobernara la provincia y decidiera sus políticas durante 20 años; la derogación del protocolo restrictivo y clerical de Salta para el abordaje del aborto no punible, y el fallo de la Corte Suprema derogando la ley de Urtubey, que instauró la educación religiosa obligatoria en la escuela pública, son decisiones tomadas al calor de la gran lucha callejera de 2018, de su peso político y de la necesidad del régimen de no chocar con una determinación, que si se desenvuelve en toda su potencialidad, sería motivo de enormes desequilibrios políticos en medio de una crisis económica y social brutal.

También son patrimonio de esta enorme lucha el protagonismo de la juventud, la creación de colectivos, como el de Actrices Argentinas, y otros reagrupamientos de mujeres trabajadoras, que ponen de relieve sus padecimientos como tales dentro de los colectivos laborales. La Ola Verde no se limitó a tomar contacto con la problemática del aborto, sino que avanzó en mirar de forma crítica el mercado laboral y la discriminación que en él se desarrolla contra las mujeres.

La iniciativa de profesionales de la salud, organizándose desde hace años para dar cumplimiento a las prácticas de abortos legales que ya existen en una Red Nacional de Profesionales por el Aborto Legal, le dio un marco de organización y lucha que, durante la pelea de 2018, se extendió en los centros de salud, logrando incluso en distritos como la Ciudad de Buenos Aires, combatir las restricciones legales que impuso Macri en su momento y que Larreta continuó. Decenas de profesionales de la Ciudad y en todo el país se enfrentan a la amenaza política día a día, atendiendo casos de abortos no punibles y dándoles un curso sin interferencias judiciales ni de ningún tipo.

En algunas provincias cuesta mucho más que este esquema militante se abra paso, y la discriminación que sufren las mujeres y los profesionales dispuestos a hacer cumplir la ley es aún más profunda. En Tucumán, días antes del rechazo a la ley de aborto en el Senado, la Legislatura declaró próvida a la provincia e instó a los senadores Mirkin, Alperovich y Elías de Pérez a votar en contra, acción que le alcanzó a José Alperovich, que estaba indeciso, para votar en contra del aborto legal.

El caso “Lucía”, que se conoció a principios de 2019, fue otra muestra de la orientación reaccionaria con la que se dirige la provincia y del grado de asimilación que la Iglesia tiene con el Estado y sus funciones más elementales. Desde el secretario Ejecutivo Médico del Sistema Provincial de Salud, Gustavo Vigliocco, hasta curas, llevaron adelante amenazas y extorsiones de todo tipo contra la madre y la niña para forzar la continuación de la gestación, fruto del abuso del abuelastro. La judicialización de los médicos que practicaron una cesárea corrió por cuenta de abogados y médicos organizados para bloquear abortos no punibles, bajo el amparo de una organización llamada “Médicos por la Vida” -una verdadera banda fascista en todos sus términos, amparada y fomentada por el propio Estado, que le aportó jueces y fiscales designados por el gobierno de Alperovich y de Manzur durante los últimos 15 años de gobierno peronista. Tal como reseña la abogada Soledad Deza en su libro *Jaque a la Reina*, fueron abiertas más de 600 causas por aborto en la Justicia provincial durante 20 años hasta 2013.

Las listas electorales no son una sumatoria de candidatos verdes o celestes que querríamos ver en tal o cual puesto del Estado, porque tal realidad no existe. Las listas representan bloques políticos con orientaciones claras. Alberto Fernández proclama que debe postergarse el tratamiento del aborto legal, distrae con la despenalización, y elige como principal aliado a José Luis Manzur, un agente clerical torturador de niñas sin atenuantes.

Mientras tanto, en los pasillos del poder...

El poder clerical dentro del Estado ha puesto en marcha su fuerza para contrarrestar el avance verde, obteniendo resonantes favores de los principales bloques políticos gobernantes.

En todo el país se han tejido acuerdos con el reagrupamiento evangélico patronal Aciera. Durante el debate aborto, la exgobernadora de

la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, fue oradora en una reunión de pastores de Aciera, que se realizó en Mar del Plata, presidida por quien fuera una referencia en la lucha contra el aborto legal, el pastor Rubén Proietti. En las listas de Juntos por el Cambio se afianzaron los militantes evangélicos. Miguel Pereda, pastor de la Iglesia “Centro Familiar Cristiano”, es el encargado de la distribución de alimentos en la provincia, como fruto de un acuerdo con el gobierno de Vidal.

La vicegovernadora Verónica Magario viene de coronar el apoyo político a los evangélicos designando como subsecretario de Culto de la intendencia de La Matanza al pastor Gabriel Ciulla, el representante de Aciera en ese distrito. Magario pasó de pugnar por subirse al escenario del 8 de Marzo de 2017, en el día de la Mujer trabajadora, a reforzar a los enemigos de las mujeres con la única mira puesta en el oportunismo electoral que traerá terribles consecuencias sociales. Como antecedente político en América Latina debemos recordar a la expresidenta desplazada con un golpe parlamentario de sus ex aliados, Dilma Rousseff, la que hizo campaña con evangélicos proclamando “Feliz la nación cuyo Dios es el Señor” y luego designó a un ministro neo-pentecostal. Bolsonaro y su fuerza evangélica son el fruto de las políticas del propio PT en beneficio de esas facciones religiosas durante sus presidencias.

En Chaco, por su parte, el actual gobernador Jorge Capitanich y Oscar Peppo, representantes de la contienda interna del PJ en la provincia, incorporaron en sus campañas los compromisos con grupos evangélicos, como el del pastor Jorge Ledesma, también de la rancia y bolsonarista Aciera, y formaron parte de grandes actos en estadios locales en los que Capitanich se dirigió a los presentes como un predicador más. Estos son los líderes políticos que el feminismo peronista del país pretendía vendernos como “aliados” en momentos en que se desarrolló el Encuentro Nacional de Mujeres del Chaco, que culminó con una feroz golpiza de punteros fascistas y represión contra las participantes del evento, sostenidos por el Estado.

Muchas más acciones se tejieron a niveles nacional, provincial y municipal en gobiernos de todos los signos políticos, que refuerzan de manera abierta o en las sombras a estos bloques reaccionarios.

Argentina año verde, verde #AbortoLegal

En febrero de 2018 se produjo una reunión del llamado “cabildo” de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto en el anexo del Congreso de Diputados de la Nación. Por entonces, cuando aún no se

había conocido la iniciativa gubernamental de habilitar el debate parlamentario, el Plenario de Trabajadoras -que participó de la reunión con la presencia de Romina Del Plá, diputada nacional, y de Juliana Cabrera y Vanina Biasi, dirigentes también del Partido Obrero y del PdT- intervino caracterizando que había condiciones políticas para el tratamiento del tema aborto en el Congreso. Dicha intervención se basó en una caracterización que incluía la participación del Vaticano en el armado del frente peyotista para desplazar a Macri y en el lugar que ocupaba por entonces los efectos de la crisis abierta por las jornadas del 14 y del 18 de diciembre de 2017.

“El macrismo, por el contrario, ha salido a levantar polvareda sobre el aborto en el contexto de ajuste que viven los trabajadores en general y las mujeres en particular”, decíamos en *Prensa Obrera*, el 1° de marzo. Junto a la caracterización sobre la puja con la Iglesia católica, planteamos también que el gobierno abría, con el polémico tratamiento de este tema, una agenda positiva para una importante parte de la población femenina, satisfaciendo el abordaje de un punto relevante de la agenda del movimiento de mujeres, centro de la movilización política en nuestro país desde 2015.

En aquella reunión se tomó la iniciativa de impulsar la nueva presentación del proyecto, el 6 de marzo, y una sesión especial el 8, que aunque no alcanzara las presencias necesarias para funcionar, hubiera colocado en el centro de la agenda el reclamo del tratamiento del tema, cajoneado sistemáticamente en el Congreso. Esta iniciativa, resistida por los diputados de los bloques mayoritarios, fue desarmada rápidamente cuando, un par de días antes, el gobierno anunció el tratamiento parlamentario.

El 19 de febrero concurríamos a la convocatoria del primer pañuelazo masivo en el Congreso de la Nación, donde se puso de manifiesto la voluntad de lucha que existía y la mayoritaria composición juvenil que adhería al movimiento.

Curas villeros contra las más pobres

El aparato clerical se puso en marcha con toda su fuerza luego de la media sanción en Diputados, concretada en la madrugada del 14 de junio de 2018. Con 129 votos a favor, 125 en contra y una abstención se aprobó una modificación del proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto, con un Congreso literalmente sitiado por miles de personas. A partir de aquel hecho, la Iglesia puso a todo su aparato

en acción, no sólo de la mano de sus alas más fascistas sino también, y particularmente, de la mano de aquellos que buscan aparecer como una Iglesia ligada a los pobres, cuyo liderazgo directo ejerce Jorge Bergoglio. Entre los más de 700 expositores que pasaron por el Congreso, tenemos a dos referentes de los curas villeros, Gustavo Carrara, excura de la Villa 1-11-14, devenido en obispo y el más mediático, Pepe Di Paola, que presentaron una carta junto a otros curas en la que expusieron sus ofensivas tesis sobre el aborto en las audiencias. Las que luchamos por el aborto legal fuimos comparadas con “genocidas”, aunque como se trata de la mano derecha del Papa, la selectiva crítica del feminismo institucionalizado y ligado al peronismo, poco tuvo para decir sobre el tema. También afirmaron que “las pobres no abortan”, expropiando la voz de las mujeres que mueren y quedan mutiladas y⁷, usándolas para un fin político ajeno a nuestra realidad y nuestras necesidades. La beligerancia verbal usada nunca había sido puesta al servicio de ninguna causa justa por parte de estos sectores. Empezando por el silencio brutal que hacen ante la epidemia de casos de abuso sexual de niños al interior de la Iglesia y del monumental encubrimiento que llevan adelante.

La Iglesia católica tiene una puja interna entre su ala “neoliberal” y su ala considerada “populista”. Donde no hay brecha entre estos dos sectores es en la condena al aborto legal y en el encubrimiento a los abusadores, así como tampoco en recoger los beneficios materiales de su alianza con el Estado.

La campaña de la Iglesia católica está financiada desde el propio Estado, que paga los “sueldos” de obispos, monseñores y curas, subsidia sus escuelas y universidades, que los exime de pago de impuestos para sus emprendimientos comerciales y les obsequia predios e inmuebles costosísimos. Son el Estado y todos los gobiernos que sucedieron a la dictadura los responsables de esta situación. La Ola Verde reclama la separación de la Iglesia del Estado y esta premisa programática resulta altamente nociva para los defensores de los ajustes y los intereses de la burguesía.

Contención sindical

Un capítulo especial merece una recorrida por los pronunciamientos y las acciones de las direcciones de la CGT y de la CTA. El alineamiento sindical con el PJ y el clero no tuvo como únicos protagonistas a la mayoría masculina de los sindicatos, entre los que se destacaron el judicial Julio Piumato y el telefónico Osvaldo Iadarola, dos hombres de la

Iglesia sin atenuantes. Las representantes sindicales de ambas centrales accedieron a firmar pronunciamientos en los que no figuraba el reclamo de aborto legal. Frente al avance de la organización de las mujeres dispusieron, con la ayuda del triunvirato San Cayetano, un cerco en la gran movilización del 8 de Marzo, tratando de impedir el avance de las representantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Para completar, la CGT se pronunció contra la ley. Esta declaración generó una movilización a las puertas de la CGT, protagonizada por la izquierda y el sindicalismo antiburocrático, que fue recibida por la única integrante de la mujer de la mesa chica de la Confederación, la secretaria general del gremio de las Modelos, Noé Ruiz.

A su turno, el triunvirato de los movimientos sociales, cuya conducción política es el propio Bergoglio, y las centrales sindicales protagonizaron actos coronados por la virgen de Luján y marcharon a la Basílica un día antes de la gran convocatoria del 8A, realizando un acto junto a la cúpula de la curia, en el que tomaron la palabra, entre otras, la secretaria general del gremio paralelo de los judiciales y diputada de FpV, Vanesa Siley, de la Corriente Federal, quien rápidamente con el avance de la presión del aparato sindical y del PJ, abandonó los espacios de organización de las luchas de las mujeres. La lucha por los derechos de las mujeres puso de relieve una acción sindical que entregó los derechos de las mujeres trabajadoras durante años, que pretendió usar las luchas de las mujeres y disidencias para un carerismo personal de dirigentes sindicales que dejan pasar los ajustes, las paritarias a la baja, la caída de los espacios de contención y el cuidado de los hijos de las trabajadoras, los trabajos en blanco y un sinfín de conquistas y demandas.

En la actualidad, respetando la férrea alianza política que las une al gobierno, han desaparecido de los espacios de organización de las jornadas del 8M, luego de haber hecho peligrar el último acto del 8M de 2019, retirando su parte del aporte financiero para el escenario cuando la concurrencia ya estaba en la Plaza de Mayo. El boicot fue convertido en una gran gesta de colaboración económica por parte de las presentes, que permitió cubrir la parte que las conducciones burocráticas no quisieron aportar.

Lo cierto es que la lucha por los derechos de las mujeres comienza por desplegar un gran programa en favor de las trabajadoras, salario, cobertura en salud, jardines para los hijos de todos los trabajadores y las trabajadoras, lactarios, licencias especiales, blanqueo salarial y una

salida sin atenuantes para el millón de mujeres que trabaja en el empleo doméstico, con una de las paritarias más bajas del país. Nada de esto está, lógicamente, en la agenda de una burocracia postrada frente a los gobiernos y la Iglesia.

Los votos celestes

El golpe final contra el aborto legal en el Senado apareció de la mano de una dirigente que votó en favor del proyecto, Cristina Fernández de Kirchner. Una integrante de su bloque, que había anunciado que votaría a favor, fue el voto número 37 que se dio vuelta y con esta decisión, anunciada el domingo 5 de agosto por radio Mitre, el espacio colocó el último clavo al ataúd de la ley. Silvia García Larraburu fue premiada por este espacio político con el segundo lugar en la lista de diputados por Río Negro. Mientras que el kirchnerismo intenta desligarse de los votos en contra que aportaron, lo cierto es que doce senadores del PJ que votaron en contra ingresaron a esa Cámara de la mano de las listas peronistas que impulsaba esa fuerza con la candidatura presidencial de Scioli. Entre la multitud movilizada se jugaba una partida de peso y un movimiento en falso podía hacer perder al kirchnerismo un apoyo con el que contaba en esa base social. En medio de tantas presiones, aunque CFK ha sido una clerical consecuente, no podía ser ella misma la que se diera vuelta, y esto fue convenido con el propio clero.

Durante la noche del domingo 5 de agosto y luego de que García Larraburu anunciara su nueva posición, Juan Grabois aparecía por primera vez en los medios afirmando que creía en Cristina Kirchner y que ella no debía ser juzgada por los datos que aparecían en la causa de los cuadernos de Centeno. El marco del comienzo de su raid mediático fue el programa de Luis Majul esa misma noche. Luego, Juan Grabois aparecería junto a Eduardo Valdés, exembajador ante el Vaticano, acompañando a Cristina a los tribunales, una ofrenda bergoglista sin vueltas. Como le hemos señalado en varias oportunidades a quienes quieren exculparse de esto, planteando que el bloque kirchnerista aportó muchos votos al aborto legal, volvemos a recordarles que para dar vuelta una ley o para sepultar sus chances, sólo hace falta un voto.

El radicalismo aportó nueve votos en contra de 12 senadores, y aunque la Franja Morada realizó un acting tomando el Comité Radical por unas horas, lo cierto es que el partido centenario se ha conver-

tido en un reservorio de dinosaurios aún no extintos. El PRO aportó en ambas cámaras una mayoría de votos en contra (cinco sobre nueve senadores), pero logró distraer la atención con las intervenciones de la diputada Silvia Lospenatto, devenida por un rato en defensora de los derechos de las mujeres. Sólo por un rato, porque antes y después levantó la mano para todas y cada una de las leyes ajustadoras que su gobierno impulsó, afectando de manera notoria la vida de las mujeres trabajadoras de todo el país.

El kirchnerismo y el Vaticano comprendieron que necesitan recurrir a artilugios para desviar y para postergar la demanda del aborto legal, pero que no pueden recurrir sin más a las viejas recetas clericales, porque irían a un choque abierto con un sector que, aun habiendo votado a Alberto Fernández, no está dispuesto a bajarse de la demanda y que, por el contrario, fija sus esperanzas en que se concrete bajo su gobierno.

Antes CFK había boicoteado el tratamiento abiertamente en el Congreso durante doce años, en dos oportunidades, en 2011 y en 2014. Con mayorías propias en las Comisiones, los diputados (incluso varios de los que votaron a favor en 2018) se negaron a bajar a sesionar. En 2014 partió de un acuerdo entre la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Patricia Bullrich (votada para ese cargo por los propios K) y la vice de la Comisión, Diana Conti.

Este dato ayuda también a reflexionar sobre otras polémicas entre la izquierda y el kirchnerismo, tales como analizar seriamente quiénes han empoderado a personajes reaccionarios como Patricia Bullrich, quien sin la anuencia del bloque K jamás hubiera llegado a presidir la Comisión de Legislación Penal, en la que se pactó la inviabilidad de la aquella sesión y desde donde preparó su llegada al Ministerio de Seguridad de la mano del macrismo.

La lucha por el derecho al aborto y la consulta popular

Muchos de los derechos de las personas no se otorgan bajo este régimen social. Si así fuera, no estaríamos aún reclamando que se legalice un derecho fundamental, como el del aborto. Los países llamados “avanzados” tienen derecho al aborto, en todos los casos arrancados con grandes luchas y movilizaciones populares, y en la mayoría mediante plebiscitos en los que las poblaciones torcieron el rumbo reaccionario del Estado capitalista. Cuando fracasó el aborto en el Congreso, desde el PdT-PO dijimos que había que impulsar una consulta popular vinculante, algo que hoy ya no está vigente porque estamos en vísperas

de la conformación de un nuevo parlamento y corresponde retomar el camino de la movilización popular para forzarlos a que aprueben el proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. La Consulta Popular siempre la concebimos como una herramienta para reforzar esa movilización y agotar todas las instancias disponibles para enfrentar a la reacción clerical y conquistar nuestro derecho.

Esta iniciativa que tomamos luego del 8A, contrastaba con la idea de esperar hasta 2020, que impulsó la Campaña Nacional, retirando al movimiento de las calles durante el año electoral. Hubo quienes plantearon que no correspondía la consigna porque “los derechos no se plebiscitan”.

Bajo este régimen social, los derechos han sido sometidos a múltiples formas de plebiscito, e incluso han sido completamente denegados -como el derecho al aborto. Cuando ocurren semejantes actos de rechazo a elementales causas democráticas, el pueblo no puede privarse de ningún recurso para avanzar y no lo ha hecho a través de la historia.

¿Por qué estamos discutiendo que el aborto se legalice? Porque no hemos tenido ningún gobierno representativo de las mujeres y de los trabajadores, que pusiera en práctica la adecuada atención del aborto sin requerir para ello de leyes de ningún tipo. El único gobierno que ejecutó el derecho al aborto sin someterlo a ningún plebiscito fue el de la URSS en 1920. Las revolucionarias rusas detectaron el problema, recogiendo la inquietud de las mujeres y redactaron un decreto que autorizó la práctica en el sistema de salud del joven gobierno obrero.

Los derechos bajo el capitalismo se niegan o se plebiscitan; no se otorgan, se arrancan. Hace cien años que penalizan el aborto en nuestro país, con excepción de causales que no se respetan. En otros puntos de América Latina, la prohibición ha sido siempre total.

La votación por parte de 329 diputados y senadores, por otorgar o no un derecho, es la forma más restringida de plebiscitar un derecho. La votación de un puñado de personas condicionadas directamente por intereses poderosos, como los económicos y los del clero, han dado muestra de estar supeditados a estos más que a “sus representados”.

Cuando un derecho no se puede arrancar a pesar de haber obtenido una mayoría social en favor del movimiento que puja por él, es porque la resistencia del régimen es brutal, como ocurre en este caso. Vamos a luchar por arrancarlo lo antes posible, peleando para que esta lucha, como tantas otras, abran paso a la conciencia socialista de que este régimen social es de clase, bajo el dominio de una minoría social,

que está agotado en sus capacidades y que debe ser superado por un régimen superior, aquel que busca que la humanidad pase del reino de la necesidad al de la libertad.

Ellos no se privan de ningún recurso para cercenar nuestras vidas, nosotras no podemos privarnos del recurso que les dio el triunfo a las mujeres en varias partes del mundo. Es más importante conquistar el aborto legal, evitar más muertes y mutilaciones, que preservar un principio abstracto que no existe bajo el capitalismo, ni puede existir porque es un régimen de clase que niega derechos a las mayorías populares en pos de preservar la propiedad privada y los intereses del capital y de sus instituciones.

Hoy, con la modificación del Parlamento, y la mayoría que ha obtenido en él, el gobierno de Alberto Fernández urge exigir que aprueben el proyecto de ley. Importa aquí volver sobre esta cuestión, para madurar en toda su dimensión todos los aspectos de nuestra lucha y los recursos que tenemos a mano.

El plebiscito o consulta popular -impulsado por la militancia, arrebatando de las manos del poder clerical a miles de personas y niños- resulta ser un recurso resistido por el régimen, porque puede abrir paso a una conciencia social todavía mayor respecto del rol reaccionario de las iglesias y de sus vínculos con los partidos políticos del régimen. Puede abrir la conciencia sobre el carácter antidemocrático del pretendido sistema democrático y muchas otras oportunidades que, claro, erosionan a este régimen social.

Toda iniciativa que implique la movilización de un frente único contra la Iglesia y en defensa de un derecho es fundamental que la apoyemos para reforzar nuestra lucha, porque de lo contrario avanzará la reacción clerical. En política no hay vacíos, el lugar que no ocupan unas, lo ocuparán otros.

Antecedentes de la Ola verde

En la Ciudad de Buenos Aires, 2017 fue el año de lucha del movimiento secundario contra “la secundaria del Futuro”, una reforma educativa precarizadora de jóvenes, así bautizada por el gobierno de Rodríguez Larreta. En aquella lucha, que incluyó tomas de una veintena de colegios en simultáneo, la gran protagonista fue la demanda de educación sexual integral. También en la encuesta “Aprender” de aquel año quedó claro que el 80% de los estudiantes que la hicieron reclamaban educación sexual. Sin embargo, en pos de conformar a

evangélicos y católicos, Rodríguez Larreta no avanzó en nada en la materia. El único postítulo que existe y que refiere a la temática, tiene una larga lista de espera para el ingreso y el ahogo presupuestario al que es sometido, junto con la reforma Unicaba, amenazan con su extinción.

Por entonces, sólo la juventud del Partido Obrero, la UJS, hacía eje en la necesidad de modificar el artículo 5° de la ley ESI, que habilita a no impartir contenidos alejados de la religión y la superstición a directivos y colegios que así lo quisieran, ya fuera por su ideología o por su ideario institucional, una denuncia que hicimos cuando se aprobó la ley en 2006. La Ola Verde permitió que masivamente se conocieran los términos de leyes que, presentadas como avances legislativos, fueron instrumento de variantes reaccionarias. Fue justamente en este período cuando Juan Manuel Urtubey, aliado bajo los gobiernos kirchneristas, impuso, por ley, la educación religiosa obligatoria en toda Salta, con la complicidad de sus referentes nacionales. Sumando a que en los hechos, en las escuelas públicas de provincias como Formosa, Chaco, Catamarca, Jujuy y Tucumán se fomenta la educación religiosa de facto a través de diferentes recursos.

La ley salteña fue derogada por la Corte Suprema en diciembre de 2017, también en el marco del ascenso de la lucha de las mujeres y luego de nueve años de la primera demanda iniciada por padres de chicos escolarizados. En la audiencia pública convocada por la Corte, para recoger las opiniones a favor y en contra de la educación religiosa obligatoria en la escuela pública de la provincia de Salta, el único partido que se presentó y reclamó su derogación fue el Partido Obrero, con Gabriela Cerrano y Pablo López como representantes.

En el plano parlamentario, el FIT-PO presentó proyectos para adecuar la ley ESI en todo el país, una de ellas tiene media sanción de la Cámara de Diputados bonaerense y duerme en un cajón del Senado. La propuesta de adecuamiento nacional en el Congreso de la Nación tiene dictamen de comisiones, pero los bloques mayoritarios de Cambiemos y del PJ se negaron a tratarlo.

En septiembre de 2017, cuando se reunió un plenario de comisiones para tratar la paridad de género, la diputada nacional y trabajadora judicial Soledad Sosa, del Frente de Izquierda-PO de Mendoza, había planteado que se colocara en tratamiento el proyecto de aborto legal y los relativos a las extensiones de licencias por maternidad y paternidad, para que el tratamiento de la paridad de género, que se hacía en nom-

bre de derechos de “las mujeres”, representara una mejora real para ese colectivo y no terminara siendo solo un lobby del carrerismo de unas pocas mujeres de los partidos mayoritarios, impedidas de escalar al interior de sus partidos, como declaraban por entonces las propias diputadas radicales. Las y los diputados se negaron por entonces a tratar los reclamos urgentes de las mujeres con años de cajoneo en el Congreso. La paridad no era asociada en la práctica a la defensa concreta de los derechos de las mujeres, aunque su promoción se hacía en su nombre. Las consecuencias de estas políticas están a la vista, el cupo de género debe ser asociado al avance concreto de las mujeres; de lo contrario, se transforma en un caballo de Troya a través del cual se oculta el carácter misógino y de clase de las políticas que esas mujeres van a defender en los organismos parlamentarios. Los reiterados ajustes a las mayorías populares, los sucesivos recortes a las más vulnerables, las mujeres en edad jubilatoria, y la precariedad laboral son una muestra.

Si la paridad de género es un recurso que se proclama en nombre de los derechos de las mujeres, entonces es lícito plantear que esas mujeres, que estarían representadas a través del incremento de personas del sexo femenino en los poderes del Estado, reclamen para sí la aprobación de aquellas normas que redundan en una mejora real de sus condiciones de vida.

Las mujeres del Parlamento no dejan de ser, en su inmensa mayoría, por ahora, aquellas que están dispuestas a legislar contra la mayoría de las mujeres, o sea que prima una orientación de clase capitalista y patronal que, por definición, es misógina. Es así que no encuentran obstáculo de género cuando la pertenencia a un bloque las incluye entre las impulsoras de iniciativas patronales como la “ley ómnibus” de 2016, mediante la cual muchas feministas parlamentarias levantaron la mano para aprobar la extensión de la edad jubilatoria para las mujeres y la disolución del régimen de jubilación de las amas de casa. O como cuando lo hicieron en las jornadas del 18 de diciembre de 2017 para votar la reducción de los ingresos de 17 millones de personas beneficiarias de asignaciones o de jubilaciones, la gran mayoría de ellas mujeres, de las más pobres del país. La sororidad no trasciende las clases sociales cuando se trata de hambrear mujeres en beneficio del capital.

Caso Belén

El antecedente político inmediato más importante de la Ola Verde se dio entre 2016 y 2017, cuando se conoció que una joven que había llegado al Hospital Avellaneda de Tucumán con una hemorragia y ha-

bía sido detenida acusada de causarse un aborto. Cuando Belén tomó contacto con la abogada militante de la causa del aborto legal, Soledad Deza, la joven tucumana ya hacía dos años que estaba detenida en la Unidad Penitenciaria N° 4 de la Banda del Río Salí.

En 2014 gobernaba Cristina Fernández de Kirchner el país y en la provincia José Alperovich. Belén ingresó con una hemorragia al hospital, acompañada de su madre. La situación se volvió una locura cuando, de un diagnóstico de un aborto espontáneo, pasó a ser acusada de haber matado a un bebé, con declaraciones que aseguraban que había aparecido un feto en un baño. Desde el hospital pasó directamente a la cárcel y en un juicio exprés, en el que no se le dio derecho a defensa, fue condenada a 8 años de prisión, acusada de “homicidio agravado por el vínculo”. Ese mismo año detuvieron a otras mujeres en diferentes puntos del país y, otra vez, quienes hoy se muestran entusiastas seguidoras de un planteo que antes boicoteaban o rechazaban desde el poder del Estado fueron cómplices políticas y silenciosas de estos atropellos. Río Negro, Jujuy y Santiago del Estero fueron algunas de las provincias que mantuvieron detenidas a mujeres bajo la carátula de “homicidio agravado por el vínculo” o cómplices del delito de abortar.

En 2016, la abogada Soledad Deza y sus colegas defensoras de los derechos de las mujeres tomaron contacto con la causa y con el movimiento de mujeres, para poner en acción la movilización popular por su libertad. Luego de numerosas movilizaciones, charlas, acciones internacionales, expresiones de solidaridad de mujeres, periodistas y personalidades de la cultura de todo el país -a las que el Plenario de Trabajadoras aportó fuertemente-, el Tribunal Superior de Justicia anuló la condena y Belén pudo salir en libertad cuando estaba por cumplir tres años presa.

Belén fue acosada por elementos clericales que dirigen la vida de los hospitales públicos de la provincia y por una Justicia totalmente digitada por la Iglesia católica tucumana. Igual que ocurrió cinco años después con Lucía. Esta influencia es el fruto de designaciones de funcionarios políticos que proceden del peronismo que gobierna la provincia desde hace 15 años y que ahora ve reforzado su poder de la mano de la alianza estrecha entre Juan Manzur y Alberto Fernández.

La despenalización es la devaluación del reclamo de aborto legal

La legalización del aborto y su reconocimiento como práctica propia del sistema de salud resultan elementos fundamentales para recorrer

el camino de poner fin a la clandestinidad, aunque esa es solo una parte del proceso. Con legalización, la clandestinidad no estará asegurada mientras el sistema de salud y el judicial estén inficionados por la penetración clerical, mientras esta influencia llegue a las barriadas, lugares de trabajo y estudio en forma de condena social a la práctica, mientras prime el control material de los recursos por parte de estos sectores y el ascendente ideológico del clero, mientras ocultar un embarazo y un aborto sean una necesidad para no morir molidas a golpes por una pareja con la cual se continúa estando por imposición social, por miedo a la soledad, por la asociación de eso con el amor, que son el manto ideológico de una imposición material ante la dificultad cada vez más profunda de gozar de independencia económica.

Mediante la “objeción de conciencia”, admitida por el poder político como un recurso para negar el acceso a la práctica del aborto, se bloquea la atención en hospitales que, en algunos casos, no cuentan con ningún profesional dispuesto a hacer la práctica. La organización Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir ayudó a extender esta presencia, pero allí donde prima la dirección ejercida directamente por los elementos clericales que han sido colocados por el poder político al frente de los servicios, como los de obstetricia, un no objetor es impensable. El médico recientemente condenado por obstaculizar la práctica del aborto, Rodríguez Lastra, jefe de Obstetricia del hospital público de Cipoletti, es un ejemplo de esto. En Uruguay hay departamentos enteros en los cuales no existe un profesional que realice la práctica y el Estado no se ha hecho cargo de designar a aquellos que sí lo practiquen, condenando a las mujeres a tener que trasladarse a Montevideo. Un cuadro similar ocurre en España o en Italia. Este es un recurso con el que la Iglesia pretende avanzar, frente a Estados que protegen a estos elementos en detrimento de la atención adecuada de las mujeres y niñas.

Durante 2018, varias veces apareció en escena la cuestión de la despenalización como alternativa a la legalización. El referente del PJ Santa Fe en el Senado, ahora gobernador, Omar Perotti, sostuvo que hubiera apoyado una despenalización y colaboró así con su abstención a que naufragara la ley. La defensa de la despenalización como peldaño previo a la legalización, tal como declaró en campaña Alberto Fernández, es una maniobra. Exploró primero esa declaración y se encontró con un fuerte rechazo, luego dijo que estaba por la legalización en el sector público, y el freno no fue tan grande. Es que en muchos

casos no se visualiza el nivel de presencia y gravitación que tiene el sector privado de salud, comenzando por la constelación de prestadores de obras sociales, que deben atender a millones de mujeres afiliadas directas o a través de los grupos familiares.

“No quiero que se muera ni una mujer más. Hay que despenalizarlo inmediatamente. Tengo la decisión política de despenalizar y legalizar el aborto porque no quiero que se muera ninguna mujer más. Lo primero debería ser despenalizar para terminar con la clandestinidad. No podemos hacer caso omiso de lo que está pasando. Es un problema de salud pública”, dijo Alberto Fernández en agosto de 2019.

En Argentina, el aborto está despenalizado por tres causales desde 1921, hace casi cien años. Aquella despenalización no tuvo como contrapartida la eliminación de la clandestinidad como afirma AF, ni evitó las muertes. ¿Por qué otra despenalización 100 años después sí tendría ese efecto, cuando la experiencia jurídica argentina muestra otra cosa?

De acuerdo con el Código Penal argentino, desde 1921 a las mujeres que abortan se las penaliza hasta con cuatro años de prisión de acuerdo con el artículo 88, que señala: “Será reprimida con prisión de uno a cuatro años, la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare. La tentativa de la mujer no es punible”. Este artículo prácticamente no se usa, su eliminación resulta inocua a los fines de frenar las persecuciones judiciales existentes. Las mujeres que abortan y van presas son imputadas, en la gran mayoría de los casos, por el artículo 80 del Código Penal, que dice: “Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare: 1°) a su ascendiente, descendiente, cónyuge, excónyuge o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediar o no convivencia”, y el artículo continúa enumerando hasta doce situaciones en las que se encuadran los agravantes por vínculos. En el caso de que se le aplique algún atenuante a la situación, las penas se encuadran entre los 8 y los 25 años de prisión. A Belén le habían aplicado esta figura. También a Patricia, que murió atada a una cama en un hospital penitenciario de José León Suárez.

Si la vida de la persona comienza desde la concepción (como fija el Código Civil reelaborado y aprobado por el kirchnerismo y por la oposición en octubre de 2014), entonces eliminar embriones es un asesinato. Toda la actuación de la Iglesia y sus representantes políticos en el campo legal se concentró en esta orientación, particularmente

desde la modificación de la Constitución de 1994 y la introducción del Pacto de San José de Costa Rica en el plexo jurídico local.

Aún después de la maravillosa acción de la Ola Verde, sufrimos el impacto de conocer la muerte de Patricia Solorza, presa por abortar, acusada de “homicidio agravado por el vínculo” y fallecida por no ser atendida adecuadamente dentro del Servicio Penitenciario Bonaerense. Patricia no podía decir que estaba embarazada, porque su padre era un violento. Todas las formas de complicidad del Estado con la violencia hacia la mujer se concentraron en su caso. Si la Ola Verde hubiera sabido de su caso, sin dudas hubiéramos podido liberarla, como ocurrió con Belén, pero con la fuerza de muchas más mujeres movilizadas.

En 2014 también se llevaron presa a Melisa, del Alto Bariloche (la zona más pobre), cuando acababa de parir en una letrina. Melisa, de 23 años, fue detenida por el juez Ricardo Calcagno, un reaccionario amigo del poder político de Río Negro, empoderado por los Pichetto y los Wereltineck. También Melisa fue liberada por la acción del movimiento de mujeres de Bariloche. Ese mismo año conocimos otro caso, el de Soledad, en Jujuy, detenida junto a dos amigas a las que acusaron de complicidad. Santiago del Estero acumula causas escandalosas también contra las mujeres integrantes de una familia por la muerte de quien llamamos por entonces “María”, detenciones que se produjeron luego de que conquistamos la libertad para Belén.

La despenalización planteada no pondría freno al uso jurídico del “homicidio agravado”. Y tampoco a la clandestinidad como único recurso para realizarse la práctica. El gobierno de AF viene de la mano de los gobernadores responsables de colocar en las instituciones de salud y en la Justicia a los elementos clericales que conspiran contra las mujeres pobres, quienes designan a los jueces y fiscales militantes de esta causa, que luego demandarán a los médicos que intenten mitigar el daño de una violación contra una niña, como en el caso de “Lucía”, en Tucumán, iniciando causas contra los profesionales Ousset y Gigena, quienes practicaron una cesárea a la menor embarazada por su abuelastro.

Separar a la Iglesia del Estado, la tarea central

La penetración clerical es constitutiva del Estado argentino, por lo tanto, la pretensión de llevar adelante esta separación conlleva a un choque con el régimen, totalmente dependiente del poder clerical, de

su rol de contención y de su absoluta gravitación en el terreno económico. Junto a esta realidad se produce un fuerte ascenso de otras ramas del cristianismo, fogueado por el poder económico imperialista y con fuerte presencia en gobiernos como el de Brasil.

La Iglesia ocupa un status jurídico privilegiado en el ordenamiento local. Desde la Constitución, pasando por el Código Civil y terminando en leyes y decretos que los benefician. Los curas de la curia y los que ocupan parroquias en zonas desfavorables o de frontera cobran ingresos que el Estado paga por orden de “leyes” emanadas de la dictadura militar. Aunque es un monto menor dentro de los grandes beneficios económicos que recibe la Iglesia, ni siquiera estos decretos de Videla fueron anulados. Si los obispos reciben el 80% del salario de un juez ordinario, como dicta el decreto, los contribuyentes por igual estamos pagando ingresos mensuales de alrededor de 300 mil pesos al valor de hoy. El texto del Código Civil y Comercial es el fruto de un trabajo de juristas, que luego fue modificado por el clero en lo relativo al capítulo del comienzo de la vida y eliminando también un artículo sobre la subrogancia altruista de vientres. Leyes como la de educación sexual también contaron con la mirada final de la Iglesia para garantizar su seguridad jurídica a la hora de impartir una educación alejada de la ciencia y del respeto a la diversidad de géneros.

Para observar el profundo alcance que el clero tiene en el entramado de la sociedad, sólo hay que echar un vistazo al listado de integrantes de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (Acde), cuyo staff está integrado, a modo de ejemplo, por Federico Quintana de D'Accord SA, empresa de Sanitarios; Juan Manuel Vaquer, de la secta metodista y durante 30 años gerente de Dupont o Luis Alejandro Bameule, gerente de múltiples empresas como Accenture o Freddo.

Manejar los hilos de la economía le da a la Iglesia un poder de lobby muy superior. Cuando se concretó la media sanción en Diputados, un conglomerado de prestadoras de salud privadas salió a pronunciarse en rebeldía con el Congreso, un hecho que fue ocultado por los representantes del régimen. En sus pronunciamientos, empresas como el grupo Basterrica, San Jerónimo, Sagrada Familia, y muchos más prestadores privados que tienen mayoritariamente el monopolio de la salud mediante el sistema prepago o el sistema de obras sociales, desafiaban no solo a una futura norma, sino que confesaban que no cumplían con las actuales, en algunos casos, negándose incluso a practicar fertilización asistida, no solo abortos legales.

Las empresas de la curia y la propia Iglesia gozan de beneficios económicos millonarios. Exenciones impositivas no solo de sus negocios educativos, sino también de otros como el negocio de estacionamientos en la Ciudad de Buenos Aires y tantos otros en todo el país, que en la campaña electoral de la Ciudad sólo fueron denunciados por Gabriel Solano, legislador del Frente de Izquierda, quien también tiene proyectos legislativos para derogar estos privilegios. También reciben subsidios millonarios para una función educativa que asciende, solo en la Ciudad, a 4.000 millones anuales, o a través de la tercerización paga de la asistencia social de mujeres que sufren violencia de género o de niñas y niños judicializados.

Este es el marco en el que en el ámbito de la Iglesia se producen miles de abusos a menores. El Estado es totalmente responsable de dar continuidad a esta relación de poder de una institución que tiene a más de 70 curas presos (casi todos siguen detentando estatus sacerdotal), representando esto una minoría absoluta dentro de lo que es el engranaje de denuncias que existen. El novel arzobispo de La Plata, Víctor Manuel Fernández, alias “Tucho”, cuenta en su haber con ser un férreo defensor del cura Eduardo Lorenzo, confesor del cura abusador Grassi, cura de la parroquia de Gonnet y denunciado por al menos cinco casos de abusos. Ante el avance de la lucha por su procesamiento, el protegido de las dos alas del Vaticano, tanto de monseñor Aguer como de “Tucho” Fernández, se suicidó. El Estado dejó en manos de una congregación, que ya contaba con denuncias en Italia (Próvolo), el cuidado de niños hipoacúsicos en Mendoza y en La Plata, y éstos fueron violados sistemáticamente. Esta congregación llegó a nuestro país con el aval del Episcopado, que recurre a la política de traslados de curas abusadores para protegerlos de condenas judiciales o sociales. El Vaticano está repleto de estos violadores. El papa Jorge Bergoglio, cómplice activo de Julio César Grassi, responsable de traslados de abusadores en nuestro país, cómplice de la protección de Justo Ilarraz, abusador de seminaristas en Paraná, protegido durante años en Tucumán, no tiene autoridad moral ni de ningún tipo para inspirar políticas progresivas.

La lucha por la separación de la Iglesia del Estado es una pelea fundamental para luchar por los derechos de las mujeres y, como se puede ver, lo es también para pelear por los derechos de las mayorías populares y para golpear a una institución que cumple un rol central en la contención social que el régimen necesita para avanzar con las

políticas ajustadoras y los pactos sociales, que no tienen otro objetivo que amordazar a los trabajadores para que la burguesía recupere su tasa de beneficio.

Misoprostol en Precios Cuidados y el lobby de los laboratorios

Cuando se denuncia que Cristina Fernández bloqueó el tratamiento del aborto legal en el Parlamento durante sus mandatos, militantes pejetistas y kirchneristas responden que bajo el kirchnerismo había “misoprostol en Precios Cuidados”.

Sin embargo, la realidad es muy diferente. Bajo el kirchnerismo estaba prohibida la producción y comercialización de misoprostol para uso abortivo, por resolución de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). El Ministerio de Salud proveía a los hospitales de oxaprost, una mezcla de diclo y miso para enfermos reumáticos, producido por el Laboratorio Beta, al cual el Estado accedía a pagarle sumas millonarias, muy por encima del costo de producción y comercialización de dichas drogas.

La producción y comercialización de Miso 200 mg recién se autorizó para el laboratorio Domínguez en 2018. En medio de la gran Ola Verde, también el gobierno de la provincia de Santa Fe prometió que a fin de 2018 iba a lanzar una producción propia de misoprostol de 200 mg, algo que finalmente se puso en práctica para la distribución en los hospitales provinciales, pero no aún para su comercialización.

El Laboratorio Beta, una empresa especializada en la fabricación de productos relacionados con el reuma, ha sido una de las empresas más beneficiadas con la clandestinidad del aborto que promueve el Estado.

A raíz de que se habilitó, por parte del gobierno kirchnerista, el monopolio del uso de misoprostol en manos del laboratorio Beta, esta empresa incrementó a niveles insultantes el precio de este medicamento, que está hoy en más de 6.000 pesos (un plan social para un desocupado es de 8.000 pesos). La venta ilegal de pastillas “genéricas” que, particularmente en los barrios y villas, significaron y significan un enorme negocio, y un factor de grandes riesgos para las mujeres que gastan sumas muy importantes de dinero en productos de dudosa procedencia. La ausencia de producción nacional de medicamentos habilita todos estos atropellos.

Entonces, ¿qué hay que agradecer a CFK? Los únicos que deben agradecer a la expresidenta son los dueños del Laboratorio Beta (de

Gregorio Zidar, exdirectivo de Boca Juniors bajo la conducción de Mauricio Macri), al cual se le permitió elevar los precios sin techo, luego se les pidió congelar por un tiempo, cuando ya tenía el precio recontrainflado, y se les ofreció, también, un medio de propaganda gratuita, publicitándolo dentro de los “precios cuidados”: un analgésico (de precio promedio de 200 pesos, los 16 comprimidos) y un cobertor gástrico (120 pesos, los 14 comprimidos) a 3.000 pesos (costo aproximado en 2014). Mucho menos cuando esa administración mantuvo prohibida la comercialización del misoprostol a través del ANMAT durante todo el tiempo que duró su gobierno.

La producción estatal de medicamentos (de todo tipo) es una necesidad fundamental para reducir los costos de los monopolios de los laboratorios y de las patentes, que *encarecen sin techo el precio de los medicamentos*.

#AbortoLegal2020 y más

El gobierno de Alberto Fernández se encuentra en medio de una crisis de pago de deuda de alcance muy peligroso. Apenas inauguradas las sesiones ordinarias, deberá pagar la deuda con el Club de París, renegociada por Axel Kiciloff cuando era ministro, a tasas altísimas. De igual manera busca llegar a acuerdos de reperfilamiento con bonistas y con el FMI, que hasta ahora no han dado ningún tipo de resultado. Lo cierto es que acaban de producir un “ahorro” de 60 mil millones de pesos con una rebaja jubilatoria feroz, como antes lo habían hecho los macristas. No repusieron la jubilación del ama de casa (deberían modificar la fecha tope que quedó congelada por la ley de 2016, llamada Omnibus, que votaron muchos de los que hoy están en el gobierno), frenaron las paritarias, dicen que buscan desindexar el salario mientras le mantienen la indexación a subsidios patronales y a los usureros internacionales. Este cuadro de situación requiere poder obtener por parte del gobierno una “agenda positiva”. Su base social reclama aborto legal y las grandes movilizaciones hicieron que el exembajador en el Vaticano y actual diputado, Eduardo Valdés, un hombre del clero, contrario a la legalización del aborto, declarara antes de fin de año que la legalización es un hecho irreversible en la Argentina. A pesar de esta realidad, el papa Francisco dio continuidad al apoyo de las negociaciones argentinas con el Fondo, tal como corresponde a uno de los artífices del frente peronista que ganó las elecciones en 2019. No obstante, la Iglesia no baja los brazos y ha montado un escenario

de confrontación el propio 8 de Marzo, porque si no puede frenar la ley, al menos intentará arrancar la mayor cantidad de beneficios en el camino. La movilización callejera para enfrentar estas presiones y para arrancar la mejor ley requiere que prime la independencia del movimiento en relación con el gobierno.

La marea verde que lucha por el aborto legal fue la máxima exponente de lucha contra el macrismo durante sus cuatro años de gobierno y es el movimiento que enfrenta con mayor conciencia y decisión el ascenso evangélico junto a instrumentos fascistas, como el combate a una “ideología de género” en ascenso, que es como nominan a las mujeres que luchan y al feminismo, la presentación de los hijos como una propiedad de sus padres, acción que colabora con flagelos tales como el abuso intrafamiliar y el silencio de las víctimas, entre otras cuestiones.

El feminismo institucionalizado -incorporado al Estado, que opone al estado actual de situación “políticas públicas” que ese Estado de clase y, por lo tanto, misógino y discriminador, que extiende la pobreza y los ataques a los sectores populares, no puede cumplir- lo único que hace es debilitar y construir un espejismo reaccionario. El feminismo de la burguesía, el que gobierna, el que busca la igualdad en términos capitalistas, o sea igualdad para explotar, igualdad para representar a explotadores, igualdad para bajar jubilaciones o para pagar la deuda, no puede dar respuestas a las demandas de nuestro movimiento, aunque sí puede distraerlo y confundirlo. El feminismo que marchó el 12 de febrero ante la presencia del FMI al Congreso -bajo la consigna de “La deuda es con el pueblo”, mientras apoyaban negociaciones de un gobierno que conducirá sin atenuantes a más hambre de la que hay hoy- antepone sus intereses de sector y de clase al programa de defensa de las mujeres y de las diversidades. Esta delimitación tajante tiene, sencillamente, un contenido de clase. La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta, no pasó la primera prueba, llamándose a silencio en la conferencia de la Copal en Chile, compartiendo un evento sin objetivos prácticos concretos, con golpistas bolivianas, con representantes del asesino y violador de mujeres gobierno de Chile y con bolsonaristas, sin levantar la voz ni mencionar el aborto legal en América Latina y el Caribe y en apoyo a las luchadoras de todos los pueblos. El Estado capitalista lo único que puede ofrecer es funcionarias mediocres, atornilladas a protocolos de clase y cómplices de las políticas fondomonetaristas, sin vueltas.

Las consecuencias de esta complicidad son muy agudas. A 25 años de uno de los eventos más paradigmáticos de esta cooptación femenina a nivel internacional por parte de los Estados, la Conferencia de Beijing, las mujeres de América Latina son más pobres que antes o ascendieron un peldaño dentro del quintil de la pobreza extrema sobre la base de una redistribución de ingresos de hambre al interior del conjunto de la clase trabajadora del continente. Los derechos políticos obtenidos en el plano jurídico no redundaron en un mejoramiento de la situación material de las mujeres y, lejos de esto, la capitulación de la centroizquierda en América Latina habilitó el ascenso reaccionario de evangélicos y católicos en el continente.

Las calles son de las y los que luchan

Las grandes enseñanzas de 2018 están grabadas en la memoria colectiva de nuestro movimiento. Sin miles de personas en las calles no teníamos un 13J ni tampoco hubiéramos conquistado tantos votos en el Senado, empezando por el de la propia expresidenta, cuyo espacio político se negó durante doce años a tratar el tema en el Parlamento, a incluir mínimas modificaciones en el Código Penal y hasta otorgó al clero el derecho a veto sobre leyes específicas. La recuperación de la movilización callejera, el estado asambleario, y todo aquello que nos permita defender nuestra organización y programa y crecer más, será el eje de nuestro triunfo. Porque con ella y sólo con esa movilización, yendo a los barrios, lugares de estudio y de trabajo, reuniendo asambleas, vamos a conquistar nuestros derechos.

Junto a la del cambio climático, las luchas de las mujeres están en el epicentro de la agenda política a nivel mundial. Sin embargo, no debemos olvidar que estamos volviendo sobre temas que fueron eje de la segunda ola del feminismo, que el avance nunca es lineal, y que el capitalismo no podrá despojarse de aquello que forma parte de su esencia, porque en su etapa de descomposición, no puede obtener un incremento de su tasa de beneficio sin destruir las legislaciones obreras, sin precarizar el trabajo y sin rebajar los costos capitalistas de inversión, que provocan la destrucción más acelerada del medio ambiente. Esta perspectiva afecta particularmente a las mujeres trabajadoras.

Conquistar el aborto legal sería un progreso en la lucha y eso siempre es inspirador para que triunfen otras peleas, no sólo en el terreno de las demandas de mujeres y disidencias.

Golpear al poder clerical es colaborar con debilitar a un cómplice fundamental del hambre en nuestro país y en el mundo.

Nuestras demandas no se agotan con una ley de aborto. Queremos todo lo que nos corresponde.

Nuestro movimiento, que tiene un amplio programa, debe conquistar su ley en las calles, no contraer deudas con nada ni nadie, avanzar en todas sus demandas y en garantizar este y todos los derechos.

Para hacer converger estas aspiraciones debemos debatir *la necesidad y la urgencia del socialismo como estrategia política que debe guiar el conjunto de nuestras luchas. Desde el Plenario de Trabajadora intervenimos con fuerza en este y en todos los movimientos de lucha, con la perspectiva de transformar este régimen social de raíz.*

¡Viva el gran movimiento de mujeres! ¡Viva la Ola Verde! ¡Vivan las luchas de la clase obrera!

Deuda externa latinoamericana: radiografía de una dinámica perversa

Guido Lapa

La imagen que recorre el país es la de la “unión nacional” para renegociar la deuda, luego de una votación donde solo el frente de izquierda planteó que estamos en presencia no de una reestructuración para darle sustentabilidad, como llamaron cínicamente a esta ley, sino de un claro rescate a la clase capitalista. Este contexto parece ser el adecuado para profundizar sobre la actualidad de unos de los temas que desnuda la descomposición de todo un régimen social como ningún otro.

Las rebeliones populares que sacudieron la región en los últimos meses cuestionan seriamente los planes del imperialismo y las políticas de ajuste diseñadas por el FMI. El propio Jair Bolsonaro tuvo que recular en una serie de medidas por temor al efecto contagio, mientras el gobierno argentino no termina de diseñar la política adecuada para garantizar el pago de la deuda sin que se desate en Argentina un nuevo Ecuador o Chile. Nuestro país y Venezuela presentan las situaciones más precarias en cuanto a la posibilidad de no ser capaces de afrontar los vencimientos y entrar en un default sin atenuantes.

Un informe reciente del Fondo Monetario Internacional (octubre 2019) señala con justificada preocupación que el endeudamiento mundial se encuentra en sus máximos históricos, llegando a la escalofriante cantidad de más de cinco dólares en los mercados financieros

por cada dólar de producción real. El mismo informe enmarca la etapa actual como parte de la abierta por la crisis financiera internacional, mientras que buena parte de los analistas y apologistas del capital pretenden dar por superada la crisis capitalista que estalló en 2008. El endeudamiento al que se hace referencia puede adoptar formas diversas, usualmente se las clasifica de acuerdo con quién las contrae: por un lado, se encuentran las deudas corporativas (emitidas por distintas empresas); por otro, las deudas personales o familiares (las más populares son las hipotecas o los créditos al consumo) y, finalmente, también existen las deudas públicas, tanto internas como externas, que son las que concentraron la atención de este artículo.

Buscamos centrarnos especialmente en la situación latinoamericana, pero no podemos empezar a digerir el tema sin un planteo, tan obvio como negado: el crecimiento exponencial de las deudas es un fenómeno mundial y no propiedad exclusiva de los países periféricos. Esta verdad de Perogrullo desmiente a toda una corriente política y económica que, de forma interesada -no se lo creen ni ellos-, busca presentar las deudas crecientes de los Estados subdesarrollados como una consecuencia de déficits producto de malas administraciones en el terreno fiscal. Es la excusa para proponer una y otra vez grandes ajustes que signifiquen un avasallamiento sobre derechos adquiridos por los trabajadores. La desmentida es sencilla cuando son los países desarrollados los que tienen los índices de deuda más altos, a pesar de tener una mayor capacidad de refinanciamiento y a tasas más bajas. El ejemplo más claro es Estados Unidos, el país más endeudado del mundo, que ha sufrido reiteradamente en los últimos años crisis políticas de magnitud por una falta de autorización en la cámara de representantes sobre el aumento del límite de endeudamiento, que se va agrandando año a año.

¿Cómo es, entonces, que son siempre los países atrasados los que se declaran en bancarrota y están constantemente sometidos a colonialismo financiero de los países desarrollados? Ocurre que la deuda externa se ha convertido en una operación de confiscación y saqueo a una escala inédita en la historia del capitalismo. Al igual que ocurre con la explotación del trabajador por parte del capitalista en el ámbito laboral, este mecanismo de apropiación de valor por parte de quien no lo crea, convierte a la deuda externa en una maniobra absolutamente parasitaria, donde los países centrales manejan a su antojo la política económica de los periféricos, con el aval y la complicidad de las

burguesías nativas. Al igual que ocurre con el ejemplo de la plusvalía extraída por el capitalista, estas operaciones gozan de un marco legal en el capitalismo y cuentan con el aval de los sectores más poderosos del planeta, jugando un rol importante, en ambos casos, el carácter velado del proceso expropiatorio.

A pesar de estas similitudes, la diferencia entre la extracción de plusvalía y el mecanismo confiscatorio del endeudamiento es la diferencia entre un proceso donde efectivamente existe la creación de nuevo valor (dado por el trabajo, pero creación al fin) y un fenómeno de saqueo por parte de países opresores a países oprimidos, sin ninguna creación de valor. Es eso lo que le da las características parasitarias, que no se genera nuevo valor y, sin embargo, el capital financiero reclama apropiarse de una parte de la plusvalía producida.

Los ciclos de endeudamiento en los países atrasados no responden tanto a las necesidades de estos, a la política que esté llevando adelante un determinado gobierno o al manejo del presupuesto nacional, como sí a la situación económica de los países prestamistas, a la liquidez internacional y a la tasa de ganancia en un determinado período, entre otros factores. No es el déficit el que genera la deuda, sino la deuda la que genera el déficit. En nuestra región, al igual que ocurre con África, Europa del este y la mayoría de los países oprimidos del mundo, la deuda significa la extracción de un torrente de dólares mucho mayor a los que se introdujeron inicialmente que, en la medida en que esos dólares no significaron ningún desarrollo para quien contrajo la deuda, se ven cada vez más empobrecidos, mientras que el prestamista hace negociados millonarios a costa de los sectores explotados de esos países.

El mundillo financiero le ha colocado el mote del “pecado original” a la emisión de deuda en dólares o en moneda extranjera por parte de los países atrasados que, obviamente, solo pueden emitir y recaudar en moneda doméstica. Latinoamérica toda se encuentra indigestada de deuda en dólares, mientras los gobiernos hacen lo imposible por pagar una deuda impagable y son un engranaje necesario para un saqueo intolerable. El círculo vicioso es: deuda, fuga, déficit, devaluación y más deuda para pagar los intereses de la deuda anterior y cada vez más costosa, producto de la propia devaluación. Esto no exime de riesgo a la deuda nominada en moneda local, que rápidamente puede jugar un papel desestabilizante, ya sea a través de la demanda de dólares como a través de algún mecanismo de fuga de capitales. El “reperfilamiento”

de títulos en pesos es un claro ejemplo de cómo un pago de deuda en pesos puede hacer volar por los aires el actual esquema cambiario del gobierno, y los “rulos” y los “bucles” que marcaron el final del gobierno macrista son la prueba de que con deuda en moneda local los capitalistas pueden encontrar enormes mecanismos de fuga.

El fenómeno parasitario del endeudamiento se resume, entonces, en la incapacidad de una enorme masa de capital ficticio para valorizarse en el terreno productivo -es decir para extraer la plusvalía suficiente para obtener una determinada ganancia-, que es la base para el desarrollo del capital financiero a la escala actual. Que un activo esté inscripto en los libros contables a un valor mayor del que puede convertirse en el mercado encubre que esa circulación de capital no tiene contrapartida real. El proceso de reproducción de capital se torna cada vez más inestable, promoviéndose la formación de burbujas financieras y sus posteriores quebrantos. Pocos fenómenos contemporáneos permiten caracterizar al capitalismo del último medio siglo mejor que éste.

Una dinámica siniestra

El papel que juegan las burguesías nacionales frente a esta problemática es esencial para comprender el verdadero carácter de ellas como clase social y de la deuda externa en los países oprimidos en general. Existe una variedad de economistas, analistas y militantes que abordan el problema de la deuda externa limitándose a la defensa nacional contra “los buitres” extranjeros, obviando consciente o inconscientemente la complicidad de toda una clase social parasitaria que se beneficia de estos mecanismos al interior de los países endeudados. Solamente en el caso argentino, sabemos que la burguesía nacional es acreedora de una parte de la deuda externa argentina y que tiene fugado en el exterior más de 300.000 millones de dólares, prácticamente un PBI y casualmente equivalente a la totalidad de la deuda externa.

Ocurre que el negociado estaría incompleto si la política de los acreedores se limitase a prestar y luego cobrar lo prestado más un interés, por más alto que este sea. Una parte fundamental de toda una dinámica por demás perversa es la fuga de capitales, donde los prestamistas garantizan que, luego de haber sobreendeudado a un país, van a contar con los medios para retirar su dinero antes de que todo explote, que la moneda se devalúe, que el país defaultee, que sus jugosos negocios tengan un mayor riesgo.

El saqueo no se detiene ni con el paciente ya muerto. Se conoce como fondos buitres a los que compran las deudas en su peor momen-

to, por chirolas, para luego demandar en los tribunales internacionales el cobro del valor nominal de los bonos más todos los intereses y los resarcimientos habidos y por haber. Lo nefasto del asunto es que estos chupasangres suelen salir victoriosos y los países endeudados -sin importar si estamos en presencia de un gobierno “neoliberal” o “antineoliberal”- terminan pagando, sometiendo a los trabajadores y los sectores populares a ajustes inhumanos.

Importa aclarar aquí que no se trata de ninguna manera de una coordinación entre distintos sectores del capital, sino que en general esta diversidad de funciones y sectores del capital transcurre de forma violenta, atravesada por peleas de fondo entre Estados y entre distintos capitales. No hay una división del trabajo donde todos tiran para el mismo lado, ni una homogeneidad en la clase capitalista. Lo que hay es una pelea de rapiña entre distintos sectores de la clase capitalista para ver quién puede hacerse de la parte más jugosa de la torta, evitar la propia quiebra y salir airoso de otro proceso expropiatorio.

La oposición entre los gobiernos nacionalistas y los gobiernos “neoliberales” es una farsa. Unos y otros son dos caras de una misma moneda, se complementan para sostener el sometimiento de sus países a toda clase de ajustes, a costa de garantizar el pago de la deuda externa. Por supuesto que eso no exime a ninguno de los gobiernos de choques parciales con el capital financiero, pero un rasgo saliente del nacionalismo burgués de este siglo ha sido el de ser pagadores seriales, como dijo la propia CFK. El ejemplo más claro de esto es el del gobierno más radicalizado de la región, el de Hugo Chávez, que por más expropiaciones y “socialismo del siglo XXI”, nunca dejó vencer un pago y acató cada uno de los compromisos concernientes a la deuda externa.

León Trotsky planteaba que la burguesía nacional de los países atrasados es un enano entre dos gigantes: de un lado, el imperialismo y, del otro, la clase obrera. El nacionalismo busca abroquelar a la clase obrera detrás de un planteo de unidad nacional contra el enemigo foráneo, pero, como sabemos, la opresión nacional no afecta del mismo modo a todas las clases sociales, por eso es que también Trotsky introdujo que la idea de que del patriotismo es una idea reaccionaria, porque busca unir detrás de una misma bandera a clases sociales con intereses antagónicos. En el caso de la deuda -pero no sólo en él-, se ve con claridad cómo los capitalistas locales buscan compromisos con el capital internacional y se someten a él en busca de beneficios propios.

En el caso de Argentina sería imposible comprender la naturaleza de las políticas más polémicas del gobierno kirchnerista sin el horizonte del pago de la deuda: desde la 125 hasta la nacionalización de las AFJP tuvieron como fundamento principal que el Estado pudiese hacerse de dólares frescos para evitar incumplir con sus vencimientos y viabilizar grandes negociados para el capital financiero.

En palabras de Pablo Rieznik: “Argentina y los países atrasados se adaptan a esas manifestaciones cambiantes del ciclo capitalista en el mercado internacional con políticas igualmente cambiantes, que deben ser apreciadas de conjunto en relación con los espasmos de la economía global. Es en este sentido que neoliberalismo y antineoliberalismo se articulan e incluso se complementan de un modo que sería incomprensible fuera de la apreciación del proceso económico como un todo (...) Bajo la apariencia de políticas económicas opuestas se oculta la función común de planteamientos que deben ser integrados en una comprensión integral de los vaivenes de la economía capitalista nacional e internacional” (Rieznik, *EDM* N° 38).

Un poco de historia

Si bien tanto el surgimiento del capital financiero como el relativo, reemplazo de la exportación de mercancías por exportación de capital, son analizados por Lenin en *El imperialismo, fase superior del capitalismo*, el endeudamiento a escala mundial ha tenido un desarrollo particularmente importante en cuanto a su velocidad y magnitud a partir de la década del '70 del siglo pasado.

Ahondar en las razones de este salto exponencial implicaría un artículo aparte, pero de forma muy sucinta, podemos colocar, una caída de la rentabilidad del capital en la esfera productiva como consecuencia del agotamiento de la recuperación de la postguerra, lo cual aumentó enormemente el capital disponible para el desarrollo de la especulación financiera. Este es, entre otros, el factor que da lugar a que a comienzos de la década del '70 se anularan los acuerdos económicos de Bretton Woods, que marcaron todo un período económico y financiero global, imponiendo restricciones muy importantes a las emisiones monetarias y movimientos de tasa de interés y consolidando el dominio norteamericano a una escala inédita hasta entonces. Finalmente, también es el momento en que se da la internacionalización de la actividad bancaria, cuyos datos son verdaderamente estremecedores: “Los beneficios por operaciones internacionales de

los siete bancos líderes de Estados Unidos pasaron de ser el 22% de sus ganancias totales en 1970, al 60% en 1982 y produjeron el 95% del incremento de las ganancias totales de los trece bancos líderes de Estados Unidos entre 1970 y 1976” (Calcagno, Alfredo y Martínez, Amalia: *La evolución de la estrategia de los bancos acreedores*, Centro de Economía Internacional, Buenos Aires, diciembre de 1988).

En el caso latinoamericano, durante la década del '70 y principios de la década del '80 gobernaban mayormente dictaduras militares, que tuvieron de conjunto una política criminal en cuanto al manejo de la deuda externa. La política del imperialismo estuvo marcada por la abundante liquidez producida por los petrodólares, es decir porque contó con la venia de los gobiernos de facto para dejar una pesada herencia, que jamás fue cuestionada o revisada por ninguno de los gobiernos democráticos de la región. De todas maneras, el caso mexicano -donde no hubo dictadura y hasta recibían exiliados de todos los países latinoamericanos- es la prueba más cabal de que el signo e incluso el régimen político que tengan los gobiernos es secundario al lado del ciclo económico más general impuesto por el imperialismo.

Observando Latinoamérica de conjunto, vemos cómo fue una política que trascendió cualquier frontera nacional: su deuda externa, que era de 75 mil millones de dólares en 1975, se fue a más de 315 mil millones de dólares en 1983. El servicio de la deuda (pago de intereses y de la devolución del principal) creció aún más rápido, alcanzando 66 mil millones de dólares en 1982, frente a los 12 mil millones de dólares en 1975.

El ejemplo argentino es particularmente ilustrativo al respecto: según el Banco Mundial, la deuda argentina se multiplicó durante la dictadura por seis, de 7,8 mil millones de dólares a 46,5 mil millones, entre las cuales el aumento de la deuda externa pública fue de 7,4 veces y el de la deuda externa privada fue de 3,7 veces, una cifra claramente tergiversada por la estatización de la deuda privada a cargo de Domingo Cavallo en 1982. También sirve de ejemplo para ver el papel relevante que jugaron los organismos crediticios en los gobiernos militares, dado que el FMI no esperó ni 48 horas después del golpe para aportar su primer préstamo y desarrollar una línea de financiamiento desde el 26 de marzo de 1976.

El regreso de la democracia vino acompañado de una crisis de deuda que afectó no solo a nuestro país, sino que conmocionó al mundo entero y tuvo especial aflicción en el subcontinente latinoamericano.

La llegada de Ronald Reagan al poder implicó una profundización de las transformaciones que en la economía norteamericana ya había comenzado su antecesor Jimmy Carter. A partir de la suba de la tasa de interés a su máximo histórico, la fuga de capitales fue arrolladora, sumado a una caída de los precios de las materias primas a partir de 1981, expusieron la fragilidad de todo el negociado anterior, dejando a distintos países en las vísperas del default o, como en el caso mexicano, ante una explícita declaración de bancarrota.

La década del '80 estuvo marcada por el default mexicano y posteriormente las crisis de deuda en Perú y en Brasil. Mientras que hasta el año 1983 ingresaron más dólares a los países latinos en concepto de deuda que los que salieron (cuenta capital superavitaria), desde el año 1983, los pagos por intereses y servicios de la deuda fueron mucho mayores a los ingresos y también mayores a los que habían ingresado inicialmente, dejando a los países más empobrecidos que antes de que les impusiesen la toma de deuda externa.

La historia de la confiscación de los países semicoloniales se repite, mientras ocupan un lugar de mera marioneta, movida por los ritmos y las necesidades del imperialismo. Así como el sobreendeudamiento latino fue consecuencia de la liquidez mundial y la política de los bancos comerciales, de entrar en "modo prestamista", fueron también las políticas del "primer mundo" las que determinaron una salida inmensa de capitales, exponiendo la bancarrota que ellos mismos habían generado, de la cual se habían beneficiado y de la que se seguirían beneficiando hasta el día de hoy.

Todavía, durante la década de los '80 y principios de los '90, había una diferencia sustancial con la actualidad: los tenedores de las deudas soberanas se concentraban principalmente en los bancos, cuando en la actualidad los bancos son meros comisionistas y la mayor parte de los bonos están en manos de fondos de inversión. Sin dudas, una de las razones para semejante cambio fueron las crisis financieras que se sucedieron en esos años y el riesgo al contagio que sufrían los bancos como principales acreedores de países quebrados.

Un hito insoslayable en la economía latinoamericana de fines de la época fue el Plan Brady, que consistió en un enorme salvataje a los bancos. A cambio de una pequeña reducción de la deuda (las famosas quitas de la actualidad), se les reconocía valores extremadamente más altos que los del mercado y se canjearon esos bonos basura que tenían en su poder por nuevos bonos que cotizaban a un precio superior y

que, además, se convertían en títulos de libre negociación, permitiendo que los bancos los coloquen en cualquier lugar del planeta. Los bancos ganaban por todos lados, ya sea a través de la revalorización artificial de los créditos, como a través de nuevos y más jugosos intereses y, fundamentalmente, a partir de colocar fuertes condicionamientos a los Estados para garantizar el pago de la deuda en su poder.

Igual que ocurriese con etapas anteriores, Argentina y la dinámica de la deuda externa en el país sirven para graficar lo que sucedía en todo el continente. El Consenso de Washington marcó a fuego a los distintos gobiernos de la región y no fue Argentina el único país donde se privatizaron empresas públicas como una política para tener dólares frescos y afrontar los pagos de la misma deuda de siempre, recientemente reeditada por el Brady. Un hecho insoslayable en lo que significó un nuevo desfalco nacional fue el reconocimiento de los bonos a valor nominal para la compra de las empresas del Estado, valiéndose de las privatizaciones como una forma de revalorizar la deuda.

A pesar de las privatizaciones, la década de gobierno menemista duplicó la deuda, permitiendo que los intereses de la deuda lleguen a casi un cuarto del Presupuesto nacional. Argentina terminaba el siglo con 10 mil millones de dólares de déficit fiscal y un 52% de un PBI que medía la producción nacional con un 1 a 1 completamente ficticio, como se demostrara al poco tiempo. Todo el “Plan Cavallo” sirvió como un seguro de cambio para que el capital financiero pudiese implementar una bicicleta financiera fenomenal, que duró hasta que explotara todo por los aires y que, no casualmente, tuvo en el gobierno de la Alianza al propio Cavallo como garante -de la mano del blindaje y el megacanje- de que los capitales pudieran retirarse antes de que el negocio diera pérdidas.

Luego de la “crisis del tequila”, la crisis brasilera y el default argentino, el peso de la deuda externa pública de los países empieza a decrecer, para ser reemplazada por la deuda interna. Aquí entran en juego las distintas definiciones sobre una y otra, ya que están quienes consideran deuda externa a la denominada en moneda extranjera y quienes consideran que es la que está en manos de acreedores extranjeros. En este caso se emite deuda en dólares a acreedores locales. Según Alejandra Corti, en 1998 en Latinoamérica, la deuda interna era equivalente a la externa, mientras que en 2006 la primera triplicaba a la segunda. El endeudamiento tomó esta nueva forma a una magnitud enorme, creciendo 337% en los siete países más importantes de la región entre

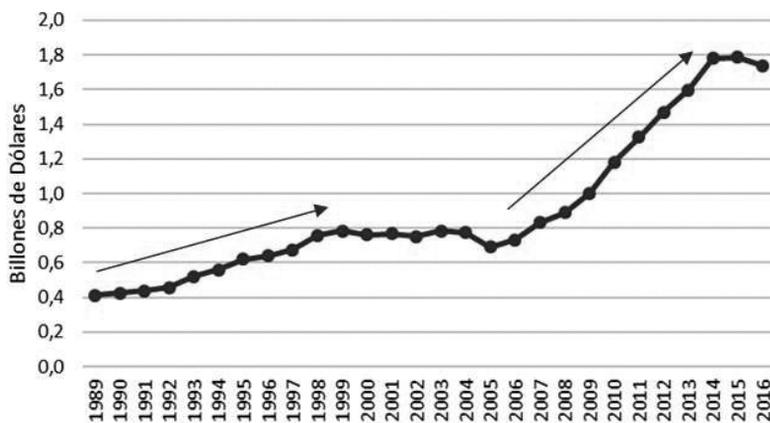
1995 y 2005. En cambio, el endeudamiento en el mercado de deuda internacional creció un 65% en el mismo período (Corti, 2010).

La importancia de este dato radica en que es de gran utilidad para desenmascarar el mito del “desendeudamiento” con el que el kirchnerismo ha hecho demagogia a gran escala, tomando como dato la reducción de la deuda externa sobre el PBI, pero buscando desconocer que la deuda que ya no se tenía con algunos acreedores del extranjero se tiene ahora con el banco central o con la Anses, como si esa deuda sí se pudiese defaultear, no pagar o entregar nuevos bonos o, como en el caso de BCRA, el invento de las letras intransferibles. Nuevamente vale remitirse a las definiciones, porque el kirchnerismo consideraba deuda externa no a la que estaba nominada en moneda extranjera, sino a la que estaba en manos de acreedores extranjeros, de ahí la reducción. Al mismo tiempo, consideraba el PBI a un tipo de cambio oficial que en épocas de cepo tenía una brecha muy grande con el paralelo; de haberlo tomado al tipo de cambio que se utilizaba en el mercado en ese momento, entonces el PBI hubiese sido mucho menor a las mediciones gubernamentales.

El ratio deuda externa/PBI es siempre frágil, porque la deuda es un stock en dólares y el PBI es un flujo en pesos. Una devaluación reduce el PBI que se mide en dólares y aumenta rápidamente el peso de la deuda, como ocurrió de forma singularmente rápida entre 2018 y 2019.

En el gráfico 1 se puede observar cómo a partir de 2003 hay un aumento significativo en el endeudamiento externo de América Latina,

Gráfico 1



Fuentes: Elaboración propia en base a CEPAL

pero, al mismo tiempo, 2003 fue el año donde se alcanzó el máximo relativo en la relación deuda externa sobre PBI. Esto se explica principalmente por el aumento de las materias primas que implican más del 85% de las exportaciones latinas, que llevaron a un crecimiento de prácticamente la totalidad de los productos brutos. A su vez, este aumento fue una respuesta al inmenso crecimiento de la demanda, que significó el ingreso de China a la OMC el año anterior, que la colocó como la principal compradora de productos de la región. Lo dicho: pretender comprender los ciclos de endeudamiento latinoamericanos por fuera de la economía mundial es una utopía ingenua.

En este marco se dio el canje de la deuda argentina de 2005, que luego se reabriría en 2010. El canje que fuera presentado por el gobierno de turno como un rotundo éxito escondía que, en realidad, Argentina pagaba una tasa de interés de entre 10 y 11 por ciento, más del doble de las tasas internacionales en ese entonces. Para colmo, a cambio de una quita menor a la que el gobierno había anunciado inicialmente, se compensaba a los bonistas con nuevos títulos que los premiaban en caso de que el país creciera a una tasa mayor de un determinado porcentaje del PBI. Con el correr del gobierno de los Kirchner se terminaría comprobando esta estafa, al mismo tiempo que el gobierno desplegaba un verdadero arsenal mediático para esconder su verdadero carácter. El incremento de la deuda, luego de haber pagado más que cualquier otro gobierno en la historia, describe su verdadera política mejor que ningún otro dato. Apenas tres años después del canje, un nuevo cimbronazo internacional pondría contra las cuerdas el precario armado de los santacruceños.

De Lehman a la actualidad

La quiebra de Lehman Brother, en 2008, marcó un antes y un después en la historia del capitalismo, dando paso a una crisis que ha superado cualquier tipo de comparación histórica y que se diferencia de las anteriores, entre otras cosas, porque afecta a la totalidad del globo, jugando un papel especialmente importante en los países donde se había expropiado el capital, particularmente China.

Este sacudón de la economía mundial fue todavía mayor, en términos financieros, debido a la política llevada adelante por la Reserva Federal, que tomó la determinación de ofrecer los dólares más baratos de la historia con el objetivo de evitar o aminorar la recesión que de seguro produciría la quiebra del cuarto banco de inversión en Estados

Unidos y el efecto contagio que éste generó como la quiebra de Fannie Mae y Freddie Mac. El resultado de esta política estuvo muy lejos de ser el buscado por la FED, en lugar de generar inversiones productivas en Estados Unidos y evitar la recesión, inundaron el mundo de dólares y fueron incapaces de evitar una depresión con pocos antecedentes en la edad moderna.

Esa tormenta de liquidez, que también fue compartida por el Banco Central Europeo, vino acompañada por ambas instituciones por la compra de activos tóxicos, la baja de la tasa de interés al mínimo histórico y el relajamiento cuantitativo. La razón fundamental para semejante emisión fue la pretensión, por parte de la FED, de salvar a los bancos, que habían desarrollado a gran escala la “contabilidad creativa”, poniendo en sus balances valores de activos que se habían desplomado drásticamente en el mercado. Es decir, que la política llevada adelante por los bancos centrales estuvo marcada por una política de clase: el salvataje a los bancos, al capital financiero llevando a la bancarrota a los Estados que se valieron de esa quiebra para imponer más flexibilización y atacar distintas reivindicaciones obreras.

América Latina fue impactada principalmente de dos maneras. En primer lugar, esa liquidez, que no fue a parar a producir en los países emisores, ingresó a algunos países “emergentes” en forma de capital especulativo, permitiéndoles a los capitalistas negocios enormes basados en distintos tipos de interés y grandes “oportunidades” en países como Brasil y Colombia. Vale recordar a todos los apologistas del capital que, frente a esta moda pasajera y, como veremos, efímera, teorizaron sobre nuevos órdenes del capitalismo mundial y pregonaron un equilibrio donde los emergentes vendrían a ser los nuevos sostenes del capital internacional y no meros receptores de flujos pasajeros y grandes plazas para enriquecimiento de los de siempre. En segundo lugar, esa emisión impactó indirectamente en un alza del precio de las materias primas que, como se dijo antes, es la principal exportación de la región. Ahora bien, el crecimiento de las reservas internacionales en los bancos centrales de América Latina no fue para desarrollar a los países, transformar sus estructuras productivas o industrializar absolutamente nada, sino que fue una inmovilización de miles de millones de dólares que sirvieron de reaseguro para el pago de la deuda y para garantizar tipos de cambio que permiten grandes beneficios al capital financiero.

En plena guerra comercial, Latinoamérica se ha convertido en un terreno de disputa entre Estados Unidos y China. Lo que parecía una

relación inquebrantable, como la de la fascinación que le profesa Bolsonaro a Trump, se vio empañada por algunos acuerdos estratégicos que podrían darse entre Brasil y China. Pero el país donde el enfrentamiento entre estas dos potencias se ve con mayor crudeza es Venezuela, donde tanto la China de Xi Jinping como la Rusia de Vladimir Putin son fundamentales para sostener el régimen de Nicolás Maduro, tremendamente resistida y atacada por el imperialismo yanqui. Por supuesto que quienes apoyan a Maduro lo hacen en función de la apropiación de las cuencas del Orinoco y se vienen convirtiendo en acreedores mayoritarios de la resquebrajada Venezuela.

Vivimos, entonces, años de altos ingresos de dólares a los países latinoamericanos y especialmente sudamericanos, que fueron utilizados por los gobiernos (en su mayoría nacionalistas) para desarrollar -en el mejor de los casos- una política meramente asistencial, sin jamás revisar las estructuras económicas atrasadas y dependientes de la totalidad de los países. Este desarrollo desigual y combinado, la propia inserción de los países latinoamericanos en el mercado mundial como meros productores de materias primas, desarrolló una clase social latifundista, que se vale de ganancias monopólicas a partir de su relación con el capital internacional. Esto tuvo su correlato en términos de deuda externa, que si bien creció a un ritmo menor al de la deuda interna, fue de una magnitud que generó enormes desequilibrios al cambiar la corriente. Al mirar los números se registra que entre 2003 y 2013 Sudamérica se había expandido un 57,3%, y las importaciones lo hicieron en 410,3%. En los años subsiguientes, Sudamérica se retrajo un 2,3% y las compras al exterior, un 35,9%.

No se puede soslayar el rol que juega China en todo este asunto. El gigante asiático interviene de forma directa y creciente en todo el territorio y principalmente en Sudamérica. Por un lado, ha encontrado una plaza donde sus dólares pueden tomar forma de inversión sin las restricciones que les imponen los países imperialistas. Al mismo tiempo, es el principal comprador de materias primas de la región, lo que le otorga una autoridad fundamental frente a la mayor parte de los gobiernos y le permite (a través de políticas como el swap con Argentina) internacionalizar parcialmente su moneda.

A partir de 2013 se inicia una nueva etapa en el endeudamiento externo de la región. La misma se caracteriza por un incremento generalizado y a un mayor ritmo del endeudamiento externo. El ratio deuda/PBI creció más de 25% hasta 2016. Este aumento descomunal

responde a un cambio de tendencia a nivel internacional, marcado por el aumento de la tasa de interés norteamericana, que aceleró una fuga de capitales proporcional al ingreso del período anterior, y por una fuerte caída de los precios de las materias primas, que desnudaron toda la primarización y dependencia que profundizaron los gobiernos “nacionales y populares”.

Según Pablo Wahren: “En 2014, Sudamérica registró el superávit comercial más bajo desde 1999 y, en 2015, el primer déficit desde 1998 (16.840 millones de dólares). Si bien en 2016 se recobró el superávit comercial (40.005 millones de dólares), principalmente por la recesión en Brasil, que retrajo las importaciones de este país, éste fue prácticamente la mitad del promedio registrado entre 2005 y 2013 (74.113 millones de dólares)”.

En el caso de Argentina, se suma a la caída de los precios relativos, el reconocimiento de la deuda con el Club de París y con el Ciadi, lo cual produjo, junto con el canje de 2005 y 2010, que la política de desendeudamiento sea tan realista como un cuento de hadas. Durante los mandatos de los Kirchner, Argentina pagó cerca de 200.000 millones de dólares para entregar el poder con un país quebrado y una deuda pública total cercana a los 300.000 millones de dólares. El país solo podía contraer nueva deuda a tasas de default, duplicando la tasa de interés de países mucho menos desarrollados, como es el caso de Bolivia o Perú.

La llegada del macrismo al poder fue el elemento restante para abonar el terreno hacia la tormenta perfecta. El Partido Obrero caracterizó el acuerdo con los fondos buitres, en 2016, como la piedra angular de un gobierno que se jactaba de “volver al mundo”, sin tener en cuenta que volvía a un mundo atravesado por la bancarrota capitalista, una guerra comercial en curso y una disputa entre países imperialistas, inédito desde la Segunda Guerra Mundial.

Nuestro país, entonces, fue a contramano de una tendencia internacional, siendo en 2016 y 2017 el país que más deuda contrajo en todo el mundo. El festival de endeudamiento tuvo como protagonista a la deuda soberana y subsoberana (provincias y municipios), pero fue saludada y acompañada por buena parte de la burguesía que contrajo deuda en el exterior, giró todos los dividendos que tenía retenidos por el cepo kirchnerista y participó de una bicicleta financiera sin atenuantes (la más rentable del mundo), que le permitió fugar más de 50.000 millones de dólares y condenó al macrismo a volver a las garras del FMI.

El resto es historia conocida, de la mano del Fondo, el macrismo tocó fondo, dejó a la Argentina en un default que busca ahora ser amortiguado por una renegociación, que tiene como principal objetivo el rescate a los acreedores. La historia se repite como farsa y el Estado argentino se vuelve a someter ante el capital financiero, defaulteando salarios, paritarias y jubilaciones para pagar el pago de esta deuda infame.

Conclusión

El breve recorrido que traza el artículo acerca de la deuda externa latinoamericana muestra que la política llevada adelante en la región tuvo en general una tendencia de conjunto y que esta tendencia respondió a los vaivenes y políticas del mercado mundial. La inminente nueva crisis de deuda, que comenzó por Argentina, tiene un futuro incierto, en tanto será la lucha de clases la que determine si el gobierno podrá imponer sus planes de ajuste o, por el contrario, serán las masas las que barran con el gobierno ajustador.

Las rebeliones populares que recorren la región tienen un fuerte componente de rechazo a las políticas ajustadoras que proponen el FMI y los acreedores. Desde los tarifazos ecuatorianos hasta la enorme opresión del pueblo chileno, el imperialismo corrobora que su autoridad está desafiada por un despertar popular contra los planes coloniales de los Trump, los Piñera y los Bolsonaro.

Lo cierto es que esta crisis es la demostración de que, desde hace por lo menos 50 años, las burguesías de los países en cuestión no han jugado ningún rol progresivo, con independencia de la demagogia que quieran ejercer, condenando a cada uno de ellos a continuar con una estructura de atraso y dependencia, y dejan atada la economía doméstica a factores que no controlan como los precios de las materias primas o las tasas de interés internacionales. Ha quedado demostrado que no hay desarrollo posible de la mano del colonialismo y el vasallaje de los usureros.

La crisis muestra también que se está pagando desde hace décadas una deuda reciclada, ilegal e ilegítima, que no ha traído ningún beneficio para los pueblos de la región y que de ninguna manera debe ser la clase obrera la que pague por ella. Al contrario, la deuda externa explica buena parte de los desequilibrios económicos internos, un ancla con el que cargan los países oprimidos y que se acrecienta gobierno tras gobierno. El constante destino de divisas al pago de la deuda, su-

mado al mecanismo de la fuga de capitales por parte de la burguesía, tanto nacional como extranjera, condena a la economía a la permanente insolvencia. El Estado está constantemente tomando créditos para hacer frente a los vencimientos de deuda y la escasez de dólares lleva regularmente a nuevas devaluaciones que, en el caso argentino, más que en ningún otro, tiene un efecto inmediato en la inflación, la carestía y la pérdida del poder adquisitivo del salario.

Finalmente, también tira por la borda la pretensión del nacionalismo por mostrarse como lo opuesto al neoliberalismo y se ha mostrado falaz. Rieznik planteaba de manera brillante para el ciclo anterior lo mismo que vale para el que vivimos en la actualidad:

“Dicho de manera más simple: los liberales crearon una enorme hipoteca en los noventa como agentes del gran capital y el FMI; los antineoliberales pagaron la factura, sin alterar, por supuesto, la lógica general de la gestión social del metabolismo productivo por el capital, que es la cuestión esencial.”

Ahora bien, no nos bañamos en el mismo río, y hoy el capital cuenta con menos recursos que en el pasado para afrontar su crisis, para evitar una recesión o un choque a gran escala entre las potencias. La crisis de deuda es el punto más visible de una crisis de todo un régimen social caduco. Por eso, los socialistas planteamos el rechazo absoluto al pago a estos usureros, desconociendo la deuda por su contenido social y político, no como una medida aislada, sino como parte de un programa integral que está asociado a la nacionalización de la banca, con el fin de evitar la fuga de capitales y mantener el ahorro interno en el país; a la nacionalización del comercio exterior, para valernos de unos y otros recursos para desarrollar el país, industrializarlo, y que Argentina sea un puntal en la lucha por la unidad socialista de América Latina al calor de la Cuarta Internacional.

Manifiesto Socialista de Bhaskar Sunkara: ¿Cuáles son las tareas de los revolucionarios en Estados Unidos?

Guillermo Kane

En abril de 2019, Bhaskar Sunkara, editor de la revista “Jacobin”, publicó un Manifiesto Socialista, de su autoría. La revista, lanzada en 2011, ha estado en el centro de los debates políticos que se han dado en el contexto del resurgir izquierdista en Estados Unidos de los últimos años. A través del manifiesto, el autor, militante de Demócratas Socialistas de América (DSA), quiere establecer un programa y una organización para la nueva generación militante que ha surgido.

La idea de un manifiesto, remitiendo expresamente al *Manifiesto Comunista* de Marx y Engels, es ambiciosa y poco habitual en estos tiempos. Quiere darle una épica fundacional y una base ideológica al crecimiento de su organización, que *Jacobin* considera una “nueva” DSA.

La obra, sin embargo, no se condice con los requerimientos de un manifiesto, que exponga sistemáticamente un cuerpo de ideas. La primera parte, de las tres en las que está dividida el libro, delinea su visión de un futuro socialista, logrado por un crecimiento electoral progresista desde la visión del trabajador de una fábrica de salsa de tomates. La sección es antojadiza, sin una base teórica o argumental sólida, y repleta de referencias culturales simpáticas. La fábrica es propiedad de la familia del rockero Bon Jovi y el movimiento progresista que da lugar a una nueva sociedad está liderado por su colega Bruce Springsteen. Los cam-

bios sociales en este hipotético futuro de Estados Unidos tienen como referencia una versión, que el autor admite es idealizada, de las reformas instituidas por el gobierno socialdemócrata de Suecia de los años '70. El grueso del libro, más de la mitad de sus 230 páginas, están dedicadas a hacer una historia del movimiento socialista, partiendo de Marx y Engels. Finalmente, desarrolla el programa político con el que pretende construir su organización en Estados Unidos.

El manifiesto adolece de un desarrollo sistemático del funcionamiento de la sociedad actual y sus propuestas de cambio. El grueso del esfuerzo está colocado en tratar de compatibilizar la realidad de la DSA como parte del ala izquierda del Partido Demócrata de Estados Unidos, uno de los pilares del régimen político de la principal potencia imperialista del mundo, con su pretensión de ser una fuerza marxista, revolucionaria, partidaria de la independencia de la clase obrera. Esta es la causa del gran esfuerzo en ubicar a la DSA como parte de una corriente que arranca en Marx y Engels y que es crítica de la adaptación de la socialdemocracia a los mandatos del gran capital.

La trayectoria de DSA

El desarrollo de los Demócratas Socialistas de América bajo el gobierno de Donald Trump se ha vuelto un fenómeno político verdaderamente significativo. Por sus características expresa la existencia de un proceso de radicalización y un fenómeno de militancia masiva que no se había visto en Estados Unidos en medio siglo.

Demócratas Socialistas de América no es, sin embargo, una organización nueva. La organización fue fundada en 1982 por sectores provenientes de los viejos partidos socialistas, comunista y el movimiento de la nueva izquierda de los sesenta. Su figura dirigente central de los primeros años, Michael Harrington, provenía de la International Socialist League, que lideraba Max Schachtman, y que había roto con León Trotsky y el SWP de Estados Unidos a principios de la Segunda Guerra Mundial. La polémica en el SWP entre la mayoría de la dirección nacional, liderado por James Cannon y la minoría nucleada alrededor de Schachtman y James Burnham, tuvo diversos ejes, que han constituido una verdadera escuela para generaciones de revolucionarios que leyeron la polémica magistral encarada por León Trotsky en una serie de cartas y artículos recopiladas en su *En defensa del marxismo*. En esas páginas se discute la necesidad del método filosófico del marxismo, el materialismo dialéctico, como base para una política revolucionaria. Se hace una

defensa del carácter proletario, militante del partido y del régimen del centralismo democrático. El lugar central del debate lo ocupa la defensa de la caracterización de Trotsky de la Unión Soviética como un Estado obrero burocratizado, contra la posición de Schachtman de que esta se había constituido en una nueva potencia imperialista. Esta equiparación del estalinismo con el imperialismo capitalista fue el santo y seña de un pasaje de la organización de Schachtman, primero, a la socialdemocracia amarilla y, por esa vía, directamente al Partido Demócrata.

La International Socialist League ingresó al Partido Socialista en 1957 y desarrolló ahí la política de apoyar candidatos del Partido Demócrata, rehusándose a presentar candidatos independientes. Esta impronta predominó en la naciente DSA, constituida luego de una ruptura en varios sectores del viejo Partido Socialista, donde solo una minoría decidió seguir existiendo como organización fuera del Partido Demócrata.

Desde su fundación hasta 2017, la DSA fue la principal sección en Estados Unidos de la Internacional Socialista que vio en esos años en el poder a gobiernos profundamente antiobreros, como Tony Blair en el Reino Unido, Felipe González en España o François Hollande en Francia. En esos años, la DSA ha sido un elemento absolutamente integrado al establishment de los demócratas, apoyando a figuras “responsables” frente a las políticas del Estado imperialista como Barack Obama o John Kerry. El establishment demócrata los incorporó como miembro pleno. El funeral de Harrington, en 1989, tuvo como orador de fondo al senador Ted Kennedy, típico representante del ala “liberal”, insospechado como subversivo y aliado de la DSA, que lo recordó diciendo “Michael Harrington nunca creyó que no podíamos mejorar y nunca dejó de impulsarnos a esforzarnos más¹”.

Han sido una parte, aunque marginal, del partido de gobierno de innumerables ofensivas imperialistas en los Balcanes, Medio Oriente, Latinoamérica y otros puntos del mundo.

Para 2016, DSA venía languideciendo como organización desde hacía varios años, con alrededor de 6 mil miembros y 40 organizaciones locales. Ese año, la campaña de Bernie Sanders para lograr la nominación presidencial demócrata tuvo un enorme impacto. Sanders se ha definido políticamente como demócrata socialista, aunque no es miembro de la DSA. Demócratas Socialistas de América fue parte de la coalición

1. *The Socialist Manifesto: The case for radical politics in an era of extreme inequality*, Bhaskar Sunkara, Verso, 2019, pág. 172.

que lo apoyó en 2016 en la interna que, con fuertes maniobras de la dirigencia tradicional del Partido Demócrata, consagró como candidata a Hillary Clinton, la representante del establishment millonario y guerrillista que perdió frente a Donald Trump.

Esa campaña fue el comienzo del crecimiento vertiginoso de la DSA. Para la convención nacional de 2019 estaban llegando a los 60 mil miembros, con la salvedad de que se calcula que la mayoría de estos miembros solo acompañan de manera pasiva, y sólo entre un 10 o un 20% pueden considerarse militantes activos². Han cosechado una parte significativa del activismo que despuntó en el país con el movimiento Occupy Wall Street, contra el rescate a los bancos a costa de las condiciones de vida de los trabajadores, y parcialmente también del movimiento Black Lives Matters, que se desarrolló bajo el gobierno de Barack Obama contra los asesinatos de la población negra en manos de la fuerza policial. Para gran parte de esos jóvenes, a quienes está dirigido centralmente este manifiesto, es su primera experiencia militante.

Un resurgir militante en las entrañas de la bestia

En las elecciones parlamentarias de medio término de 2018, la DSA y otros grupos de la izquierda que apoyaron a Sanders, como Justice Democrats y Working Families Party, desafiaron a legisladores demócratas que iban por la renovación de sus mandatos y tuvieron un importante éxito. De los diputados nacionales que ingresaron para componer la mayoría demócrata de la cámara baja, 37 de 57 eran considerados del campo progresista³.

Para 2019, casi un centenar de miembros de la DSA ocupan cargos electivos, desde Alexandria Ocasio-Cortez (conocida por sus iniciales AOC) y Rashida Tlaib en el Congreso, que junto a otras dos diputadas progresistas y de color fueron conocidas mediáticamente como “el escuadrón”, en las legislaturas estatales, concejos municipales y educativos. Estas diputadas nacionales han sido objeto de ataques racistas y macartistas de parte de Trump, los republicanos e incluso del establishment demócrata. Sus posiciones contrarias a la persecución a inmigrantes o por las causas ambientales las han hecho muy populares, en particular a Ocasio-Cortez. Sin embargo, no han convocado a movilizarse ni se han salido de la estrategia de la dirección demócrata en ningún punto esencial. Recordemos que el *impeachment* a Trump promovido por

2. “DSA Convention 2019”, *New Politics*, Dan La Botz, 5/8/2019.

3. *The Atlantic*, 13/11/2018.

la bancada demócrata, solo ha avanzado en relación con la defensa de la agenda de colonización a escala internacional y la necesidad de una ofensiva contra Rusia, no por las incontables razones que los oprimidos de Estados Unidos y el mundo tienen para avanzar contra el magnate derechista⁴.

En octubre de 2019, AOC presentó un paquete de leyes colectivamente denominadas “por una Sociedad Justa”. Son reformas parlamentarias tímidas, mucho más limitadas que el New Deal de Roosevelt que se rememora en su presentación, e incluso más limitadas que las medidas asistencialistas de los gobiernos nacionalistas o centroizquierdistas latinoamericanos. El contenido de las leyes se limita a modificar los criterios para recibir subsidios o beneficios estatales existentes en cuatro de los proyectos y en el quinto plantea que el estado federal privilegie la contratación de empresas que no violen la legislación laboral existente⁵. El paquete de leyes, que oficiaría como una declaración programática de la diputada, es de una tibieza que ni siquiera podría considerarse reformista.

Demócratas Socialistas de América se ha transformado en una maquinaria electoral que puede lograr una movilización militante de voluntarios para hacer campaña electoral. Esto les da un potencial disruptivo ya que en las peleas de primarias enfrentan a políticos demócratas tradicionales que dependen estrictamente de las donaciones capitalistas y de planteles de colaboradores pagos para montar sus campañas. También han logrado una movilización de votantes importante en muchos distritos, lo cual logró asegurar victorias en un sistema electoral que está apoyado en gran medida en la bajísima proporción de electores respecto de la población. Su trabajo en una zona incluye la recorrida puerta a puerta con diversas campañas, la formación de extensos listados de contactos para enviar mails de propaganda y el seguimiento de datos de interacción por redes⁶. La DSA ofrece este apoyo electoral militante a candidatos que estén dispuestos a reivindicarse como “socialistas” y declararse a favor de un programa de reformas que promueven, como la extensión universal de la cobertura de salud estatal (“Medicare for all”) o el reemplazo de los hidrocarburos por energías renovables (“Green New Deal”).

4. “Crisis política en Estados Unidos: avanza el pedido del juicio político a Trump”, Guillermo Kane, *Prensa Obrera*, 3/10/2019.

5. WSWW, 11/10/2019.

6. *In these times*, 9/8/2018.

El carácter militante, plebeyo e incluso obrero de la izquierda del Partido Demócrata es un revulsivo en la situación política de Estados Unidos. Expresa evidentemente tendencias profundas de radicalización y disconformidad con el régimen imperante, aunque estas estén canalizadas hacia uno de los partidos sostenes de ese régimen. En enero se anunció que la recaudación de la campaña de Sanders, en el último trimestre de 2019, batió los record de donaciones a cualquier campaña presidencial, 34,5 millones de dólares. Sin embargo, esto no se logró con las grandes sumas de corporaciones capitalistas que respaldan a los otros candidatos demócratas y republicanos, sino mediante casi dos millones de donaciones, que tienen como promedio de valor 18,53 dólares⁷. Desde que la campaña fue lanzada, Sanders declara haber recibido 5 millones de donaciones individuales. Los datos estadísticos arrojan que los principales empleadores de los donantes son los ultraprecarizadores Starbucks, Walmart y Amazon. La ocupación más común entre ellos es docente. Sanders ha sido el candidato más apoyado en aportes por enfermeras, estudiantes, camioneros, empleados de comercio, electricistas, granjeros, programadores y albañiles⁸.

Aunque este trabajo electoral dentro del Partido Demócrata es el eje del trabajo político de la DSA, a diferencia de las otras organizaciones dedicadas a dirigir las fuerzas del activismo hacia la maquinaria electoral, se declara como el núcleo de un futuro partido independiente y pretende tener un alcance más consistente en términos ideológicos y de disciplina militante.

La Convención de Demócratas Socialistas de América, que se reunió el 2 de agosto de 2019 en Atlanta, debió resolver una lucha interna de tendencias respecto de ese carácter más partidario de su formación. No se realizó un debate político sobre la situación política nacional, su relación con los demócratas y otros puntos. La convención mostró un dominio del bloque “Pan y Rosas”, vinculado con *Jacobin*, defensor de la política electoral detrás de Sanders y los demócratas, así como de la construcción de una organización centralizada. Fueron derrotados sectores que proponían un eje en peleas locales y restaban importancia a las campañas centralizadas. Junto a la dedicación exclusiva a la campaña electoral demócrata se votó el objetivo, para un futuro incierto, de romper con el Partido Demócrata cuando se pueda lograr una “ruptura sucia” (*dirty break*) –o sea, una ruptura que sea significativa

7. *National Review*, 2/1/2020.

8. *Jacobin*, 16/10/2019.

a nivel de masas, arrastrando una parte importante de la base y los recursos demócratas.

Al mismo tiempo votaron dedicar fuerzas de la DSA a desarrollar un trabajo en el movimiento obrero y una serie de planteos muy izquierdistas contra la acción colonial de Estados Unidos, contra el Estado de Israel.

Las políticas que vienen desarrollando junto a los demócratas, sin embargo, están lejos de reflejar estas posiciones. Las diputadas de la DSA votaron, junto a toda la bancada demócrata, el Presupuesto de Trump, que incluyó un enorme aumento al Pentágono, que llega a manejar para todo el complejo militar yanqui 1,5 billones de dólares, lo cual supera todo el presupuesto federal de Estados Unidos para el resto de los rubros, sumados. La DSA acompañó esta votación incluso frente a un presupuesto en crisis, donde la mayoría de la bancada republicana se opuso al acuerdo Trump-Pelosi, por el aumento en el endeudamiento nacional que acompañaba la ampliación del gasto interior y exterior⁹.

Sanders, el candidato de la DSA, ha votado reiteradamente por el refuerzo de la “seguridad” en la frontera contra los inmigrantes, diciendo que el ingreso de estos recorta la posibilidad de atender las necesidades de los estadounidenses pobres y desocupados, un planteo tomado directamente del libreto xenófobo de Trump¹⁰. En el debate de candidatos demócratas de julio se volvió a pronunciar por “fronteras fuertes” -o sea, sostener la frontera amurallada y militarizada.

Un informe señala que una gran cantidad de los oradores en los paneles internacionales de la conferencia *Socialism*, tradicionalmente convocada por la desaparecida Organización Socialista Internacional (ISO por sus siglas en inglés) y hoy convocada en el marco de la DSA, son parte de ONGs u otros grupos financiados por la National Endowment for Democracy (Fondo Nacional por la Democracia). Este fondo, promovido en su momento por el presidente derechista Ronald Reagan, tiene una composición bipartidaria demócrata-republicana y se encarga de financiar organizaciones que promueven la agenda del imperialismo de Estados Unidos en los países en los que promueve un cambio de régimen¹¹. Ocasio-Cortez ha declarado, al ser consultada sobre Venezuela, que “sobre ese punto se refiere a la posición establecida

9. *Left Voice*, 31/7/2019.

10. *Left Voice*, 20/2/2019.

11. *Black Agenda Report*, 10/7/2019.

por la bancada” demócrata¹², que no es otra que el reconocimiento del gobierno fantasma de Juan Guaidó, nombrado por el Pentágono para intentar armar un golpe fallido. En febrero, Sanders había tuiteado en apoyo a la campaña que quería forzar el ingreso de una intervención imperialista con la excusa de “ayuda humanitaria”.

El seguidismo al Partido Demócrata también incide en el carácter de la actividad de la DSA en el movimiento sindical. En la huelga docente de West Virginia, de 2018, donde hubo una amplia acción por encima de los sindicatos, la DSA y *Jacobin* reivindicaron a las direcciones burocráticas y dieron por levantada la huelga cuando el gobierno anunció un 2% de aumento, que fue repudiado por la base manteniendo un paro salvaje, desafiando la orden del sindicato. El balance de *Jacobin* fue que el proceso “hacía más democrático el funcionamiento de los sindicatos”, cuando lo que sucedía era una rebelión contra su dirección, vinculada con el Partido Demócrata. Frente al levantamiento apresurado de la huelga de docentes de Los Angeles, en enero de 2019, por parte del sindicato influido por la ISO, la DSA declaró que, “de todas maneras es muy caro garantizar aulas con menos de 39 alumnos”, como le reclamaron los huelguistas al gobernador demócrata de California Gavin-Newson, que recibió el apoyo electoral de la DSA¹³. Los militantes de la DSA en las huelgas docentes se declaran “orgánicos” de las direcciones actuantes, a diferencia de los miles que organizaron acciones por encima de estas.

De conjunto, la DSA no caracteriza que exista una burocracia sindical que deba ser enfrentada para dotar de una nueva dirección al movimiento obrero. La pretensión declarada de querer llevar más democracia y activismo a los sindicatos sin partir de la expulsión de esta burocracia es una receta para la derrota o la cooptación. La tendencia a la estatización de los sindicatos, que Trotsky caracterizó como una característica general de la época imperialista¹⁴, es particularmente fuerte en la principal potencia, donde la existencia de una corriente independiente dentro del movimiento obrero ha sido episódica y discontinua.

Una reivindicación derechista de la Segunda Internacional

Este carácter contradictorio de la vida política de la DSA explica los

12. Telesur, 4/5/2019.

13. WSWS, 8/8/2019.

14. “Los sindicatos en la época del imperialismo”, León Trotsky, <https://www.marxists.org/espanol/trotsky/1940s/sindicat.htm>

objetivos del raro texto de Sunkara. La “nueva” DSA, surgida de la canalización de una radicalización juvenil y obrera hacia el ala progresista de los demócratas, quiere mostrar sus credenciales de organización marxista y revolucionaria, así como su linaje en un movimiento socialista de más de un siglo y medio de desarrollo.

El relato de Sunkara trata de mostrar a quienes han quedado divididos por opciones estratégicas como respuestas o intentos dentro de un mismo movimiento socialista. Aunque Sunkara de ninguna manera rescata a Lenin o Trotsky, no se quiere abstener de recibir el apoyo de quienes reivindiquen su legado revolucionario. Entonces, va armando una amplia galería de luminarias socialistas, a las que va incorporando más o menos críticamente.

Marx y Engels son falsamente presentados en este relato como un ala moderada y democrática del movimiento socialista de la época. “Marx y Engels permanentemente abogaron por políticas democráticas, que fueran conducidas por la masa de los mismos trabajadores, al punto que los insurreccionalistas de la época podían llamarlos moderados¹⁵”, dice Sunkara.

Los que el autor quiere vender como moderados fueron justamente los que propusieron que la Liga de los Justos se transforme en la Liga de los Comunistas, una denominación que marcaba el extremo revolucionario de las fuerzas existentes. Fueron los autores del concepto de dictadura del proletariado y de la revolución permanente, no de la promoción de una democracia abstracta y sin clase. La verdadera democracia se conquistará, para Marx y Engels, con la supresión revolucionaria del Estado burgués pretendidamente democrático.

Lejos de un concepto basista sobre la organización revolucionaria, los autores del *Manifiesto Comunista* defendieron siempre la necesidad de la existencia de un partido propio de la clase obrera con un programa claramente definido. Las durísimas luchas políticas con los anarquistas dentro de la Primera Internacional, representados por Proudhon o Bakunin, llevaron a una escisión durísima. Para evitar que la Internacional fuese capturada por quienes pretendían disolver la responsabilidad de una dirección revolucionaria, Marx promovió que la sede de la Internacional se mudara a Nueva York y finalmente se disolviera.

Eso no quiere decir que Marx y Engels no fueran partidarios de una plena democracia hacia el interior de las organizaciones obreras. Concebían que el ejercicio de la dictadura revolucionaria contra la bur-

15. *Socialist Manifesto*, pág. 47.

guesía tiene el objeto final de la supresión del Estado y de toda opresión social. Un ideal profundamente democrático, desde ya. Todo esto no tiene nada que ver con el rescate de dos socialistas moderados y basistas que relata Sunkara.

Reivindica una línea que va trazando de Karl Kautsky dentro de la socialdemocracia alemana y al menchevique Martov entre los rusos, y también los socialdemócratas suecos y la dirección mayoritaria (reformista y electoralista) del Partido Socialista de Estados Unidos de principio del siglo XX, nucleada alrededor de Eugene Debs y Morris Hilquist. De esa manera, Sunkara quiere establecer un camino intermedio entre los revisionistas que promovieron la integración de la socialdemocracia al régimen burgués sin atenuantes, apoyando a sus respectivas burguesías en la Primera Guerra Mundial, los Bernstein, Ebert y Scheidemann, los Plejanov y los Dan; y quienes llamaron a levantar a los trabajadores contra el régimen que llevó (y lleva) a millones a morir en las guerras, los Lenin, Trotsky, Liebknecht o Rosa Luxemburgo.

Sin embargo, la historia no es un menú a la carta de la cual uno puede tomar las piezas que le interesan y disponerlas en una vitrina de una forma que resulte atractiva. Martov y Kautsky dieron la espalda a los trabajadores cuando fueron por la toma del poder. No fueron las figuras que tuvieron la colaboración directa con la reacción armada de la burguesía. Pero sí dirigieron sus plumas a la condena de la osadía de que la clase obrera tome el poder. La Segunda Internacional, con la que se mantuvieron agrupados, se transformó en una organización de la reacción. Una clave esencial de la historia de las revoluciones en el siglo XX es la sucesión permanente de traiciones de las direcciones socialdemócratas y estalinistas.

Por otra parte, todos estos dirigentes socialdemócratas, reformistas, partidarios del seguidismo de la clase obrera a la burguesía liberal (entre quienes podríamos ubicar perfectamente, por ejemplo, a Juan B. Justo, fundador del Partido Socialista Argentino) tenían sin embargo, un rasgo político profundamente progresivo, que Sunkara no puede adjudicarse a sí mismo ni a su organización. En un momento donde la política burguesa todavía tenía un componente popular o lo había tenido en un pasado cercano, esta generación organizó a miles de trabajadores bajo las banderas de su propio partido, nacional e internacional. Ese paso fue enormemente progresivo. Fue con la guerra y el ciclo de revoluciones y ascensos obreros que arranca con el Octubre ruso, que los reformistas mostraron que eran incapaces de pelear por el poder para la clase obrera.

Sunkara recuerda la sentencia de Trotsky respecto de Martov y los mencheviques, condenándolos al “basurero de la historia” por oponerse a la toma del poder por parte de los trabajadores. Efectivamente, Sunkara se ha dedicado a una operación de reciclaje de desechos históricos, para lograr hacer atractiva a la socialdemocracia reformista para las nuevas generaciones, luego de que largos años de servicio al imperialismo y al capital la han transformado en una serie de aparatos desprestigiados, alejados del interés de los trabajadores y la juventud.

Sunkara y la DSA se adjudican la continuidad de la corriente socialista que aportó a la organización política independiente de multitudes de trabajadores, pero su intervención tiene un signo contrario. Trump pudo aprovechar, para hacerse de la presidencia, una profunda crisis política de todo el establishment político yanqui, y en particular del “liberal-progresista” Partido Demócrata y sus voceros como Hillary Clinton. Cuando una parte importante de los trabajadores repudian a los demócratas por llevar a un retroceso a sus condiciones de vida, la DSA y otros grupos de izquierda y activistas están llamando a sumarse a sus filas porque la crisis puede ser aprovechada para conquistar espacios y obtener cargos parlamentarios.

La reivindicación de los Kautsky y Martov pretende dar una base teórica socialista y marxista a la adaptación política a la democracia burguesa. Con la misma tesis de Sunkara de que el socialismo sólo puede encararse en los países que culminaron su desarrollo capitalista, so pena de un fracaso o una deformación totalitaria, Kautsky y Martov defendieron la opresión del capital contra la revolución proletaria en los primeros años de la etapa imperialista del capitalismo.

Sunkara vuelve, cien años después, a querer revivir esa fe en la democracia burguesa como vía al socialismo, abandonada por los viejos partidos socialdemócratas, que han dejado hace mucho tiempo de pretender representar una transformación social de cualquier tipo. En este siglo, los Estados burgueses “democráticos”, en especial los imperialistas, se han vuelto el eje de los sistemas de persecución policial, exterminio físico, espionaje y encarcelamiento más complejos de la historia de la humanidad. Las crisis y la descomposición de las repúblicas de recambio democrático y de sus partidos políticos han llevado, en forma creciente, al pasaje de los gobiernos de la burguesía a formas autoritarias, personalistas, bonapartistas.

Al calor de los choques comerciales y militares acicateados por la crisis capitalista, los regímenes políticos de excepción van dominando

el panorama, de Rusia a Turquía, de Brasil a Estados Unidos. Pretender que la burguesía en su etapa de descomposición pueda volver a las características de su primera etapa histórica al frente del Estado es tan absurdo como pensar que el capital va a dejar de lado su concentración monopólica y volver a regirse por el libre mercado. Ni en la historia ni en la vida se puede volver a meter al huevo en la cáscara. Y menos, con el omelette ya cocinado.

Aunque Sunkara reivindica a Marx en su manifiesto, se escuda en las “particularidades nacionales” de Estados Unidos para ignorar la principal conclusión que este teórico revolucionario sacó del ciclo de revoluciones en Europa de 1848 y 1849: la necesidad de que los obreros promuevan una organización política completamente separada de las de la burguesía y pequeño burguesía en todos los niveles prácticos¹⁶. La pretensión de Sunkara de compatibilizar al marxismo con el parlamentarismo más anodino no logra ser fundamentada en el propio texto.

El imperialismo y el reformismo socialdemócrata

Una constante en todo el libro de Sunkara es la nula reflexión sobre el fenómeno de la explotación imperialista, que marca nuestra época histórica y domina todos los problemas políticos, históricos o cotidianos que el libro pretende abordar.

La explicación de la claudicación de la socialdemocracia frente a la Primera Guerra Mundial sin explicar la nueva etapa del capitalismo, la mayor vinculación de los Estados con los grupos monopólicos y la disputa por los mercados del mundo en la que intervienen los Estados nacionales, que estudiaron Lenin y otros socialistas a principios del siglo XX, peca de una superficialidad total. Explica el alineamiento por la generación de una burocracia conservadora de rentados del partido y los sindicatos, por la acumulación de privilegios entre los obreros que no estaban dispuestos a perder¹⁷.

Aunque estas observaciones en sí mismas puedan ser ciertas, carecen de alcance como explicación si no se relacionan el lugar de explotación económica y colonial que logran las potencias capitalistas en esta etapa, con la capacidad de dar mayores concesiones a una capa de los trabajadores. Lenin desarrolló la caracterización de una aristocracia obrera

16. Circular del Comité Central a la Liga de los Comunistas, Karl Marx, https://www.marxists.org/espanol/m-e/1850s/50_circ.htm

17. *Socialist Manifesto*, pág. 79.

en los países imperialistas y lo relacionó directamente con los intereses materiales que pasó a defender la socialdemocracia, dominada por la corriente revisionista y reformista¹⁸.

La adhesión de Sunkara al evolucionismo de la socialdemocracia amarilla lo lleva a considerar que el “mundo subdesarrollado no puede hacer la revolución¹⁹”. Esto no solo constituye un paternalismo absurdo hacia los países que sufren la explotación imperial, reservando el asunto del socialismo para los pueblos imperiales. Constituye, sobre todo, una apología de la propia opresión imperial, considerando que lo que deben lograr los pueblos subdesarrollados es un mejor desarrollo capitalista. Como si la acción del endeudamiento usurero permanente, de la dominación mediante los organismos internacionales, del saqueo de los recursos naturales y el comercio desigual no fuese justamente la herramienta para mantener a dos tercios del planeta en el atraso.

Sunkara, a pesar de las revoluciones de China y Cuba, sostiene que en los países atrasados “impulsar el desarrollo capitalista, mientras se mitigan sus peores efectos y se redistribuyen sus ganancias -como han hecho recientemente el Partido de Trabajadores de Brasil y otros gobiernos de la marea rosa latinoamericana- es lo mejor que podemos esperar para el mundo en vías de desarrollo”. Los habitantes del sur global tendríamos que resignarnos al saqueo imperialista con algún atenuante asistencial.

A pesar de que hace ya más de 170 años Marx y Engels mostraron en el *Manifiesto Comunista* que el capitalismo había constituido un mundo a su imagen y semejanza que llevaba a los oprimidos de nuestra sociedad

18. “La burguesía de una ‘gran’ potencia imperialista puede económicamente sobornar a las capas superiores de ‘sus’ obreros, dedicando a ello alguno que otro centenar de millones de francos al año, ya que sus superganancias se elevan probablemente a cerca de mil millones. Y la cuestión de cómo se reparte esa pequeña migaja entre los ministros obreros, los ‘diputados obreros’ (recordad el espléndido análisis que de este concepto hace Engels), los obreros que forman parte de los comités de la industria armamentista, los funcionarios obreros, los obreros organizados en sindicatos de carácter estrechamente gremial, los empleados, etc., etc., es ya una cuestión secundaria.(...) Sobre la indicada base económica, las instituciones políticas del capitalismo moderno -prensa, parlamento, sindicatos, congresos, etc.- han creado privilegios y dádivas políticos, correspondientes a los económicos, para los empleados y obreros respetuosos, mansos, reformistas y patriotas. La burguesía imperialista atrae y premia a los representantes y partidarios de los ‘partidos obreros burgueses’ con lucrativos y tranquilos cargos en el gobierno o en el comité de industrias de guerra, en el parlamento y en diversas comisiones, en las redacciones de periódicos legales ‘serios’ o en la dirección de sindicatos obreros no menos serios y ‘obedientes a la burguesía’”. V.I. Lenin: “El imperialismo y la escisión del socialismo”, <https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1910s/10-1916.htm>

19. *Socialist Manifesto*, pág. 147.

a buscar una salida internacional a nuestra opresión, Sunkara analiza los problemas del Estado y la revolución bajo fronteras estrechamente nacionales. La supuesta falta de condiciones para la revolución en Rusia o en los países “en desarrollo”. El supuesto carácter socialista del estado de bienestar en países europeos de la posguerra. Todo es juzgado por Sunkara fuera del tablero internacional de la lucha de clases, la revolución y la contrarrevolución. El desarrollo de una burocracia desclasada en la Unión Soviética no es para Sunkara un accidente histórico, fruto del aislamiento que impusieron los avatares de la revolución en Occidente, sino un destino totalitario que está impuesto a quienes osan saltar las reglas de la evolución histórica precipitándose al socialismo.

La realidad es que en nuestra época histórica, las relaciones sociales capitalistas son las que dominan en todo el planeta. Los países dominados solo podrán avanzar en su desarrollo industrial y de infraestructura rompiendo con la dominación imperial e invirtiendo la riqueza nacional libremente en sus tierras. Con todas sus deformaciones burocráticas, heredadas del estalinismo, los innegables avances económicos y sociales en China y Cuba responden a esta realidad. Las tareas democráticas y de desarrollo nacional en el mundo semicolonial dependen de la revolución socialista, no de los créditos del BID.

El deber de los revolucionarios en los países imperialistas es el derrotismo revolucionario, como lo desarrolló brillantemente Lenin -o sea, trabajar por la derrota militar de la propia nación como base para un avance de los explotados contra el Estado. Es la estrategia que llevó a la victoria de la Revolución Rusa. Sunkara le contrapone la posibilidad de que gobiernos progresistas de los países centrales sean “solidarios”, realizando una especie de caridad internacional, condonando deudas y apoyando el desarrollo. La historia muestra que ninguna clase dominante, como lo es la burguesía imperialista, que está al frente de un sistema de dominación mundial, renuncia a sus privilegios sin pelear. Sunkara, de una organización socialista de Estados Unidos, menciona al pasar la guerra de Vietnam para referirse a los pronunciamientos pacifistas de la socialdemocracia sueca, que no jugaron ningún rol. El imperialismo yanqui sufrió una derrota decisiva en Vietnam por dos factores centrales: la movilización revolucionaria del pueblo vietnamita en armas y la enorme movilización derrotista de una parte significativa de la juventud, la clase obrera e incluso los soldados norteamericanos. Esa derrota colocó en crisis el sistema de conscripción militar, lo cual constituye un fuerte límite político y militar, del cual Estados Unidos no se han re-

puesto 45 años después, dependiendo exclusivamente para su intervención directa de ejércitos profesionales y mercenarios. Un revolucionario norteamericano tendría que poder sacar conclusiones valiosas de esto.

Sunkara podrá oponerse al concepto de imperialismo de Lenin y la forma en que éste vincula el problema a la quiebra de la socialdemocracia como fuerza revolucionaria. Pero ni siquiera considera el problema, lo cual es muy grave en lo que pretende ser un manifiesto de una organización revolucionaria que milita en la principal potencia imperialista de nuestra época.

Kautsky justamente no calificaba al imperialismo como una época del desarrollo capitalista sino como una política que podían adoptar o no los distintos gobiernos capitalistas. O sea que se podría abogar por la posibilidad de que Alemania o Estados Unidos tengan un gobierno más progresista para que abandonen la explotación de otras naciones, como si esto no fuera un rasgo estructural del desarrollo de su nación y sus clases dominantes. Kautsky, por otra parte, planteó la posibilidad de que se desarrollara un “ultraimperialismo”, en el cual la concentración capitalista abriera la posibilidad de la superación de los enfrentamientos nacionales, dando lugar a una humanidad unificada bajo la propia sociedad burguesa.

Un siglo después, las guerras permanentes de rapiña imperialista, sean directas o mediante la acción de fuerzas tercerizadas; el fracaso de los procesos de integración capitalista, como la Unión Europea o la Otan, e incluso las avanzadas tendencias a la disolución nacional en el Reino Unido, España e Italia, bajo el impacto de la crisis capitalista, han desmentido todo el análisis de Kautsky. Sunkara reivindica a Kautsky sin sacar las conclusiones elementales de sus planteos centrales.

Anticomunismo de manual

Las críticas de Sunkara al devenir de la revolución rusa repiten todos los lugares comunes del discurso anticomunista yanqui. En dos generaciones de representantes intelectuales que se pasaron del socialismo al establishment político norteamericano, han ido absorbiendo todas las mañas de la propaganda de guerra fría. Dicen que los bolcheviques fueron autoritarios porque mantuvieron la “formación militar” que debieron adoptar en la clandestinidad contra el zarismo, igualando los rasgos del estalinismo con los del bolchevismo revolucionario contra toda evidencia política. A esto Sunkara agrega de su cosecha que “no previeron” cómo sería el ejercicio del poder; o sea, que les faltó una previsión de la

necesidad de órganos democráticos, tal como lo prevé su manifiesto²⁰. Se limita a una típica denuncia del “totalitarismo”, como ha repetido la academia occidental y la socialdemocracia amarilla, sin tratar de analizar el contenido de clase concreto del Estado obrero burocratizado, tal como Trotsky y la Oposición de Izquierda lo denunciaron, en tiempo real, en la Unión Soviética. No se trata de “falta de previsiones” sino de una casta que pudo desarrollarse en el Estado obrero cuando se limitó la revolución a un país atrasado y el desarrollo de intereses materiales en cuya defensa colocó toda la fuerza del Estado. Sin embargo, los antecesores ideológicos de Sunkara tomaron partido por el imperialismo yanqui, que trabajó para la recolonización capitalista de los Estados obreros, no por la revolución política contra la burocracia.

Tampoco Sunkara trata de entender cuál es la dinámica de la restauración capitalista desenvuelta las últimas décadas en China y Rusia. Se limita a concluir que no hay socialismo, por la falta de democracia, y que en China hay una expansión capitalista con intervención del Estado. No puede relacionar el fracaso del pronóstico de fin de la historia de Fukuyama, que cita, con las contradicciones que ha acumulado la restauración capitalista en curso en los Estados obreros burocratizados en el sistema capitalista mundial, agravando la sobreproducción y las rivalidades capitalistas. El marxismo no es un cuadro para incluir en una serie de próceres partidarios, es una clave para entender el mundo donde debemos actuar.

El “socialismo” escandinavo

El “modelo” sueco de estado de bienestar que Sunkara quiere pasar por una aproximación al socialismo merece ser revisado. Sunkara hace dos afirmaciones que no tenemos por qué aceptar en bloque. Por un lado, dice que a mediados de los ’70 Suecia logró los mejores indicadores de condiciones sociales de su población. Por otro, que es donde más se limitó el alcance del dominio del capital sobre la producción y la sociedad²¹.

Suecia pudo explotar particularmente bien el boom económico de la segunda posguerra, que duró hasta principios de los setenta. Al no haber participado en ninguna de las dos grandes guerras, tenía sus recursos y su desarrollo industrial intactos, y pudo aprovechar la enorme demanda que fue empujada por la reconstrucción del continente.

El estado de bienestar fue una tendencia internacional muy mar-

20. *Socialist Manifesto*, pág. 97.

21. *Socialist Manifesto*, pág. 104.

cada en la posguerra en todos los países imperialistas. Tenía una razón histórica central: impedir la extensión de la revolución socialista. A la supervivencia de la Unión Soviética a sucesivas invasiones y ataques del mundo capitalista se sumó, en la inmediata posguerra, un nuevo ciclo revolucionario, que donde rompió el libreto estalinista, como en Yugoslavia y China, redundó en triunfos. El método de análisis estrictamente nacional que emplea Sunkara le impide reconocer que las medidas de los estados de bienestar eran, en importante medida, fruto de la lucha revolucionaria, que él considera condenada al fracaso, y a la simpatía y apoyo que esta despertaba en todo el mundo.

Cuando el fin del ciclo económico y el recrudescimiento de la lucha de clases a nivel internacional promovieron una radicalización de la lucha de clases en Suecia y una enorme preocupación en las patronales y el gobierno socialdemócrata, un ascenso huelguístico por fuera de las direcciones tradicionales de los sindicatos logró imponer condiciones excepcionales de pleno empleo y subsidios estatales²².

Como relata Sunkara, los grandes empresarios lograron desenvolver una resistencia que llevó a archivar el plan de los sindicatos reformistas para instituir un mecanismo de reparto de ganancias entre los empresarios con sus empleados, que dista mucho de un cambio del control de los medios de producción. El “comité Meidner” (el comité socialdemócrata de procedencia sindical que impulsó este proyecto) anticipó una fuerte resistencia empresarial y destacó que no se estaba expropiando a los patrones. No perdían nada de su riqueza, solo tenían que renunciar a una parte de sus ganancias futuras. Y esa parte de la ganancia no tendría que pagar impuestos, así que el Estado mismo estaba subsidiando los fondos (de reparto de ganancia)²³.

Sunkara cita a un diputado comunista de la época, C.H. Hermansson, quien destacó que luego de casi 40 años de gobierno socialdemócrata ininterrumpido en Suecia, quince familias dominaban la mayoría de la industria en Suecia²⁴. Importantes capitales automotrices, farmacéuticos, de armamentos, entre otros rubros, se desarrollaron en el país destinados al mercado europeo e internacional. Resumiendo, para el gobierno socialdemócrata, “lo que era bueno para Volvo era bueno para Suecia²⁵”.

22. “Sweden’s welfare state; myths and realities: a Marxist analysis of the ‘Nordic Model’”, Madeleine Johansson, *Irish Marxist Review* N° 3, 9/2012.

23. *Socialist Manifesto*, pág. 117.

24. *Socialist Manifesto*, pág. 116.

25. *Socialist Manifesto*, pág. 113.

Los años posteriores dieron lugar a un desmantelamiento progresivo del estado de bienestar, que tuvo un salto con la crisis bancaria y la recesión del país en los '90, que culminó con un gran rescate de los bancos por el Estado. La integración a la Unión Europea reforzó las políticas de austeridad. El 1% de la población controla el 40% de la riqueza²⁶. La desocupación en Suecia oscila entre un 6 y un 7%²⁷, aunque entre los jóvenes llega al 20%²⁸. La economía ha tenido como uno de sus motores a la industria armamentística, convirtiendo al país de 10 millones de habitantes en el tercer exportador de armas per cápita del mundo, luego de Israel y Rusia. Este lugar ha sido conquistado con una progresiva integración militar a la Otan y abasteciendo a países satélites de Estados Unidos profundamente antidemocráticos y represivos, como Arabia Saudita y los Emiratos Arabes Unidos. Un estudioso de la industria de armas sueca comentó que “Nuestra participación en la campaña de Libia (de la Otan en 2011) fue muy beneficiosa para el Gripen (avión caza de la empresa Saab). Es algo que ningún político aceptaría pero es cierto. La gente lo vio participando en campañas aéreas. Es bueno para los negocios”.²⁹ Esta participación de carne y hueso en el aparato militar imperialista mundial no es compensada por los pronunciamientos o gestiones que algunos mandatarios suecos han hecho contra el *apartheid* sudafricano y que Sunkara cita con entusiasmo. Un político capitalista puede darse el lujo de ser progresista, incluso puede sacarle un rédito importante, siempre y cuando no afecte los negocios de la clase que representa.

En fin, ignorar el rol internacional del imperialismo efectivamente equivale a romper la brújula que permite juzgar qué rol juega un Estado o un partido desde el punto de vista de la emancipación de los pueblos.

¿Entrismo guerrillero?

Sobre el tema de qué partido corresponde construir al planteo “socialista” que promueve el manifiesto, Sunkara nuevamente abre un cuadro de ambigüedad. Aunque reivindica el ascenso del ala izquierda dirigida por Jeremy Corbyn al frente del Partido Laborista, dice que “en general se debe descartar trabajar dentro de los desacreditados partidos socialdemócratas para privilegiar los partidos de izquierda que han surgido en

26. “Sweden’s welfare state...”.

27. <https://tradingeconomics.com/sweden/unemployment-rate>

28. <https://tradingeconomics.com/sweden/youth-unemployment-rate>

29. *Business Insider*, 20/5/2014.

años recientes”, como Podemos, Die Linke o el Bloco de Esquerda³⁰.

El manifiesto se abstiene de fijar una posición sobre la actuación política de estas formaciones, por las que indica un apoyo de tipo general y vago. El Bloco ha presidido en Portugal, junto al viejo Partido Socialista, con el resultado de un deterioro en las condiciones de vida de los trabajadores, manteniendo la reducción salarial de entre un 20 y 25% que se había instalado bajo el gobierno anterior, así como la brutal reforma laboral precarizadora³¹. Uno puede dar por hecho que si Sunkara hubiese escrito su manifiesto unos años antes, Syriza estaría en la misma lista, aunque el nivel de penurias que infligió a su pueblo lo lleva ahora a considerarlo negativamente (“empezó a recular inmediatamente luego de asumir”, dice Sunkara³²).

Corbyn es considerado por Sunkara en su libro como un impulsor de la “lucha de clases mediante las elecciones”, incluso superior a Sanders. Sunkara, sin embargo, no arroja posición alguna sobre el Brexit y la Unión Europea, el problema político estratégico que debía enfrentar Corbyn en Gran Bretaña. Con el diario del lunes, luego de la reciente derrota laborista, *Jacobin* descubrió que la ausencia de una posición clara sobre el Brexit significó un retroceso y una división del electorado laborista³³. Habría que decir con todas las letras que la versión más izquierdista del Partido Laborista regaló el repudio de amplios sectores de los trabajadores y las masas a la austeridad impuesta por la Unión Europea a los demagogos de derecha. La superficialidad y el desinterés por los problemas estratégicos llevan a este tipo de relación política oportunista, que ve los defectos con claridad cuando se enfrentan las dificultades. Los escribas de *Jacobin* tampoco sacan conclusiones del sabotaje sistemático de la derecha laborista a las presentaciones electorales de su propio partido bajo la dirección de Corbyn. Conclusiones como esas les permitirían anticiparse a lo que le espera a Sanders de lograr imponerse en el Partido Demócrata.

La participación en organizaciones de izquierda “amplias”, que valdría como regla general, sin embargo, estaría contraindicado para el país en el cual *Jacobin* y la DSA tienen un peso político significativo. Las particularidades de Estados Unidos explicarían la necesidad de actuar allí, no ya en un partido socialdemócrata, sino en un partido del régimen

30. *Socialist Manifesto*, pág. 209.

31. “Portugal: el reino de la precariedad laboral”, Pablo Heller, *Prensa Obrera*, 25/4/2019.

32. *Socialist Manifesto*, pág. 203.

33. “Bernie’s revolution needs to transform America’s political institutions”, Chris Mairano, *Jacobin*, 9/1/2020.

imperialista con casi doscientos años de servicio a la opresión capitalista, con incontables atrocidades en su haber, desde múltiples invasiones militares a la defensa del esclavismo.

Sunkara cita brevemente un artículo de su colega de *Jacobin*, Seth Ackerman, donde se desarrolla su justificación para presentarse en el marco del Partido Demócrata³⁴. La denuncia de la democracia electoral yanqui como una estafa autoritaria a la voluntad popular para preservar a los dos grandes partidos del capital como resguardo del sistema es usada... para justificar la rendición contra la trampa.

Sunkara cita las condiciones leoninas para que puedan legalizarse terceros partidos y para que presenten candidatos. (Los demócratas y republicanos están por ley ya inscriptos.) También cita que la representación legislativa en Estados Unidos no es proporcional sino que sólo entra el ganador de cada circunscripción.

Se da por hecho que el camino a constituir un partido independiente lleva a la militancia dedicación casi permanente a mantener vigente su legalidad. Esto llevaría automáticamente a la conformación de un grupo político marginal. (Ackerman incluso explica que, por cuestiones psicológicas, tales grupos acercan a gente que se contentaría con la marginalidad, mientras los verdaderos organizadores y líderes políticos de masas solo se interesan por organizaciones “viables”. Por suerte, los socialistas, que desarrollaron sus organizaciones militando contra el régimen de Bismark, la dinastía de los Romanov o las dictaduras latinoamericanas no le pidieron consejos a Ackerman y *Jacobin* para medir la “viabilidad” de sus esfuerzos o si interesarían a individuos psicológicamente inclinados al éxito.)

Las otras dificultades que plantean, muestran su profunda adaptación al régimen político y a la lógica del mal menor. Se explica que, por la falta de representación proporcional, la presentación de cualquier tercer candidato arruina las posibilidades del candidato demócrata contra el republicano y que eso lleva a que sea repudiado. Esta presión a la elección del mal menor pesa en cualquier elección burguesa. El fenómeno de la polarización política que se produce en cualquier elección ejecutiva, bajo esta lógica, impediría la presentación de candidatos independientes. En esto se ve que, a pesar de todo lo que el manifiesto dice sobre la utilización de las campañas electorales para favorecer la organización de los trabajadores, rechaza de hecho una intervención electoral que se reduzca a la agitación y no se centre en la captura de cargos posibles.

34. “The blueprint for a new party”, Seth Ackerman, *Jacobin*, 11/8/2016.

La otra condición, deducida del fracaso de un intento de Partido Laborista en los '90 es que para lanzar un partido independiente hace falta tener el apoyo de sindicatos nacionales, cuyas direcciones burocráticas están, en regla general, integradas al Partido Demócrata. Como sentenció León Trotsky, “quien se arrodilla frente al hecho consumado es incapaz de enfrentar el porvenir”. Quien opina que no existe nada fuera de las estructuras de los partidos y las direcciones sindicales existentes, se prepara para atarse a ellas. La necesidad de hacer un trabajo revolucionario en el movimiento obrero, entre trabajadores sindicalizados y no sindicalizados es una obligación para constituir una organización independiente. El fracaso del Partido Laborista lo único que muestra son los límites insalvables del ala progresista de la burocracia sindical que la impulsó, que no tenía en agenda ni por asomo romper con el Estado norteamericano y sus partidos, apoyándose en la organización masiva de los trabajadores y su movilización contra las patronales y sus políticos. Nació muerto porque era un engendro limitado a pelear un espacio político bajo el sol para algunos dirigentes marginados por los partidos burgueses existentes.

Sunkara y Ackerman presentan al Partido Demócrata como una especie de partido-Estado, sin programa, sin organismos que funcionen a nivel de la base y sin miembros en el sentido de que puedan pretender incidir sobre la actividad de la organización. Esto, que es relativamente cierto, en el sentido de que estos partidos existen en la relación entre quienes ya son funcionarios de Estado y los sectores capitalistas cuyos intereses representan, sin instancias intermedias de relación orgánica con quienes los apoyan, sin embargo, disfraza una impostura.

Los partidos burgueses tienen programas. Se puede asistir a luchas políticas entre distintas fracciones para modificar esos programas. Pero quienes ocupan los cargos decisivos en el poder Ejecutivo y Legislativo determinan en gran medida un programa político efectivo. Trump le ha impuesto un programa político proteccionista al Partido Republicano, que bajo Bush representaba otra línea, de intervencionismo militar activo para promover la influencia económica yanqui. Hay innegablemente un programa de continuidad de los gobiernos de Clinton a Obama, a la bancada parlamentaria que conduce Nancy Pelosi. Tanto es así que la crisis política con que lleva al *impeachment* de Trump está íntimamente ligada a la defensa de posiciones coloniales instaladas por el Partido Demócrata durante sus gestiones en Medio Oriente y en Ucrania, ligadas al programa de restauración capitalista de Rusia y China.

Sunkara se escuda en que es un “crítico” de los Clinton, Obama y Biden, y que el estatuto demócrata no permite que expulsen ni disciplinen a críticos como él para justificar su estrategia de entrismo. Sin embargo, se exime de hacer en este manifiesto una crítica real de la política de su partido a nivel doméstico e internacional.

Sunkara cita la presuntuosa definición de esta política hecha por Ackerman que significa “montar el equivalente electoral de una insurgencia guerrillera”.³⁵ Esta definición los muestra obnubilados porque el derecho electoral yanqui no permite al centro del Partido Demócrata impedir que se presenten candidatos de izquierda a desafiar a quienes hoy dominan la organización. Pero este mismo “agujero legal” es un enorme canal de cooptación de la izquierda, el movimiento obrero, los movimientos de lucha contra la opresión racial, a las mujeres y demás sectores del activismo que actúan hace décadas neutralizando el surgimiento de cualquier formación que le pueda disputar. Sunkara, que reconoce esto, dice que si la DSA forma una organización centralizada, con un programa y una militancia disciplinada, este entrismo será cualitativamente distinto y evitaría la dominación política de esta encarnación de la izquierda demócrata. Sin embargo, la presión sobre los parlamentarios de izquierda a acomodarse a una agenda política de reformas “realistas” es enorme. La posibilidad de conseguir que otros diputados acompañen estas propuestas, incluso las más moderadas, está subordinada a que “jueguen con el equipo” demócrata en sus definiciones políticas. Para la inmensa masa, Ocasio-Cortez, militante orgánica de la DSA, es una figura del Partido Demócrata y se mueve en ese sentido en los medios y en el Parlamento. Su organización no se presenta con sus banderas y su programa de cara a las masas.

El desarrollo de alas izquierdas de los partidos del régimen es defendido por Sunkara con el argumento de que campañas como las de Sanders o Corbyn promueven la lucha de clases y la organización de los trabajadores, realizando una enorme agitación. Pero una agitación sólo puede avanzar con la condición de trabajar sobre una tendencia que exista con fuerza en la realidad y en las masas. La agitación, sea reformista o revolucionaria, no genera la radicalización. Esta surge por las frustraciones de las masas por sus condiciones de vida, por las políticas llevadas desde el Estado. Los choques de masas surgen por las consecuencias de la crisis capitalista. La generación que está tomando un camino militante es la que vive un agravamiento de las condicio-

35. *Socialist Manifesto*, pág. 212.

nes de vida y la precarización laboral, luego de ver cómo un gobierno “progresista” del Partido Demócrata, como se esperaba que lo fuera el de Barack Obama, rescató a los bancos con fondos del Estado y reforzó las fuerzas represivas y el complejo carcelario, que son una condena para los jóvenes de color. La agitación política puede ligar la bronca y las acciones de las masas al desarrollo de una organización y a desenvolver un programa. En la famosa analogía de Trotsky, la acción de las masas es el vapor y la organización es la caldera que puede dirigir esa energía para lograr una acción política definida. La agitación no crea la acción de las masas, sino que la dirige a un objetivo.

Si el ascenso de las masas es aprovechado por una agitación “combativa”, que refuerza sus relaciones con el parlamentarismo y los partidos que defienden al Estado imperialista, lejos de mejorar las condiciones para un desarrollo revolucionario, se ha estado haciendo un fino trabajo para socavar el choque con los desprestigiados partidos del régimen. Esta función no se contradice con la mayor radicalización verbal que va tomando la campaña de Sanders, Ocasio-Cortez y la DSA cuanto mayor es la crisis política en Estados Unidos. Sanders habla de extender la lucha de clases, de la necesidad de una revolución política en la cual los trabajadores jueguen un rol crucial. Demócratas Socialistas de América dice, frente a los choques con Irán, que no quiere “ninguna guerra que no sea la guerra de clases”. Pero de las palabras a los hechos, los únicos avances contra Trump son jugadas parlamentarias. El *impeachment* difícilmente tenga otro resultado que el de un intento de incidir en el resultado electoral de 2020. Las calles, mientras tanto, están vacías y sin convocatorias a movilizarse de los “guerreros de clase” dedicados a las primarias demócratas.

La claudicación de la izquierda norteamericana

El movimiento de Sanders, la elección de parlamentarios progresistas y el desarrollo de la DSA efectivamente fueron la señal para ganar a gran parte de la izquierda norteamericana a ingresar al Partido Demócrata o a girar en torno de sus campañas.

La Organización Socialista Internacional era, hasta 2019, la organización más grande que se reivindicara leninista o trotskista en Estados Unidos. Tenía un desarrollo importante entre estudiantes universitarios y en varios sindicatos docentes. Tenía secciones en los cincuenta estados. Provenía de la misma corriente del SWP británica, dirigida por Tony Cliff y Alex Callinicos. La Organización Socialista Internacional y el

SWP británico compartían las caracterizaciones de la Unión Soviética, China y Cuba como países donde existe un “capitalismo de Estado”. Al igual que el SWP británico, la ISO tuvo en años recientes una grave crisis partidaria que, ostensiblemente, tenía por eje el encubrimiento de casos de abuso sexual denunciados y la falta de democracia interna, que se había evidenciado frente a estos casos. Luego de una convención en marzo de 2019, que cambió drásticamente la composición de su dirección nacional, en abril la nueva dirección llegó a la conclusión de disolver la ISO y sus órganos partidarios. El problema de la relación con el Partido Demócrata, la campaña de Sanders, la DSA y la relación de dirigentes sindicales de ISO, por ejemplo en el sindicato docente de Chicago, estaban presentes en los debates previos a su convención nacional, pero aparentemente como elementos secundarios. Pocos meses luego de la disolución, parte de su dirección y su Editorial Haymarket son parte orgánica de la DSA y del bloque liderado por *Jacobin*. Solidarity, una organización de izquierda “amplia”, fundada en los ’80 entre escisiones de varios partidos, también ingresó a la DSA.

Socialist Alternative, una organización trotskista que proviene de la tendencia del Militant inglés y su grupo internacional CWI, se ha mantenido formalmente independiente del Partido Demócrata, aunque han apoyado las campañas de Sanders en 2016 y 2020. Tienen, desde 2013, una concejal municipal en Seattle, Kshama Sawant, que fue elegida con boleta de su propio partido. Socialist Alternative apoya a Sanders en la interna demócrata, pero reclama que Sanders, AOC y la DSA proclamen un nuevo partido, separado de los demócratas, al que se integrarían³⁶. Hacen campaña por las consignas de la izquierda demócrata, constituyendo un movimiento por el Green New Deal -o sea, una manera de hacer campaña orgánica por Sanders y AOC sin sumarse formalmente al Partido Demócrata. En la elección de 2019 recibió el apoyo del Partido Demócrata local, que se abstuvo de presentar candidatos contra Sawant³⁷. Ella logró ser reelecta en sus circunscripción contra un oponente republicano con un apoyo económico récord del gigante Amazon, interesado en dominar el concejo municipal.

Los avances que estas corrientes han hecho, sin embargo, no están acumulando hacia una salida independiente sino volviendo a canalizar-

36. “To win Bernie’s platform and defeat the right we need a new party”, Socialist Alternative, 11/7/2019.

37. “Seattle democrats endorse Sawant, resisting corporate pressure”, Socialist Alternative, 4/10/2019.

se en la expectativa de que se despegue un ala progresista del Partido Demócrata. ¿Saldría de un partido de Sanders y AOC una respuesta a los problemas de los trabajadores en Estados Unidos?

Un programa revolucionario para el “particularismo americano”

La elaboración de un programa revolucionario para la acción en Norteamérica es una tarea todavía pendiente, luego de la edición del “Manifiesto Socialista” de Sunkara. Esta tarea deberá partir de hacer un estudio de las condiciones de explotación de los trabajadores en Estados Unidos. De cómo inciden en esas condiciones el uso de mano de obra precarizada y desvalorizada mediante el desplazamiento de fuerza de trabajo en migraciones y también del desplazamiento de la industria a países con una fuerza de trabajo más desvalorizada. Las Tesis de la CRCI, aprobadas en 2004, parten de las consecuencias de la competencia internacional entre los trabajadores, que ha sido profundizada luego del comienzo del proceso de restauración capitalista de la URSS y su bloque de influencia³⁸.

La construcción de la riqueza imperialista e incluso de la población de la metrópolis, tanto a nivel de la clase obrera como de la administración del Estado, es un metabolismo de escala mundial, no un fenómeno estrictamente nacional. Los problemas raciales internos, derivados del desarrollo del esclavismo y de posteriores olas de trabajo migrante, deben ser estudiados para desarrollar una política revolucionaria que ubique a la organización actuando profundamente junto a los oprimidos.

Las mejores tradiciones de luchadores durante el ascenso de fines de los sesenta, en el movimiento contra la guerra y en el movimiento por los derechos negros, partían de oponerse a la opresión del Estado militarista norteamericano en el país y en el exterior. La radicalización de la época incluso llevó al ala más pacifista e integrada al régimen del movimiento, como el Reverendo Martin Luther King, a afirmar una relación entre levantamientos urbanos de los negros, como el de Watts en 1968, y la invasión de Vietnam. La vanguardia del movimiento contra la guerra cantaba que “Ho Chi Minh va a ganar”, expresando una forma de derrotismo revolucionario. Un movimiento revolucionario en Estados Unidos debe tomar este legado como punto de partida.

Estados Unidos es la sede y el principal impulsor del FMI, del Banco Mundial y el eje central del movimiento financiero. El saqueo del mun-

38. Tesis programáticas para la Cuarta internacional, *En defensa del marxismo* N° 33, abril de 2004.

do tiene un vértice en Washington y en Nueva York. Su vida económica no puede ser analizada ni comprendida separada de este rol.

Estados Unidos está embarcado en la época Trump en complicados choques económicos, comerciales y geopolíticos con la Unión Europea, China y Rusia. La crisis mundial capitalista y la caída de la tasa de ganancia son el acicate de esta pelea. No se puede entender la realidad política local norteamericana sin desarrollar este análisis. Del desarrollo de esta crisis y estos choques depende la tendencia a guerras más prolongadas y graves, que tendrían consecuencias políticas profundas en el país.

Sunkara no tiene nada para decir sobre todo esto. Subestima sistemáticamente el peso imperialista del Estado norteamericano. El aparato militar, policial y de inteligencia montado por el Estado, dominado a medias entre demócratas y republicanos, es el más monstruoso en la historia de la humanidad. Sin embargo, Sunkara piensa que Estados Unidos tiene más fácil el camino al socialismo por no tener que “vérsela con organizaciones supranacionales antidemocráticas como la eurozona.³⁹” ¡Como si el peso de las imposiciones domésticas e internacionales de la burguesía yanqui fuesen menores al de las francoalemanas!

La posibilidad en Estados Unidos de que la radicalización en curso, en este contexto de crisis y choques internacionales, lleve a una victoria decisiva no depende en sí mismo de resultados electorales para los progresistas ni de tasas de sindicalización. Depende de que los oprimidos norteamericanos puedan golpear en el mismo sentido que quienes enfrentan el imperio en todos los rincones del mundo. Entonces se podrán dar golpes al poder, que afecten la capacidad de dominación del Estado imperialista.

Los miles y miles de jóvenes y obreros norteamericanos que desean el socialismo merecen un verdadero programa revolucionario.

39. *Socialist Manifesto*, pág. 202.